

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

REVISTA Núm. 6

Sexta Época

Año I Junio 2008

Derechos Reservados ©
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
INSURGENTES SUR 881 TORRE 'O' PISO 12
COL. NÁPOLES. DELEG. BENITO JUÁREZ
C.P. 03810. MÉXICO, D.F.

Certificado No. 04-2001-012517410700-102

FIDEICOMISO PARA PROMOVER LA INVESTIGACIÓN DEL DERECHO FISCAL Y ADMINISTRATIVO

- **2008**
  Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta publicación, por medios electrónicos o mecánicos, incluyendo fotocopia, grabación magnetofónica y cualquier sistema de almacenamiento de información, sin la autorización expresa.

- El contenido de los artículos publicados son de la exclusiva responsabilidad de los autores.

- ISSN 1665-0085 50090

- Página Internet del T.F.J.F.A: www.tfjfa.gob.mx
  Correo Electrónico de la Revista: publicaciones@mail.tfjfa.gob.mx

REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
JUNIO DE 2008. No. 6

CONTENIDO:

- **Primera Parte:**
  Jurisprudencia de Sala Superior 5

- **Segunda Parte:**
  Precedentes de Sala Superior 11

- **Tercera Parte:**
  Criterios Aislados de Sala Superior y Salas Regionales . 313

- **Cuarta Parte:**
  Criterios Aislados de Salas Regionales aprobados durante la Quinta Época 339

- **Quinta Parte:**
  Resoluciones y Votos Particulares 351

- **Sexta Parte:**
  Acuerdos Generales 413

- **Séptima Parte:**
  Jurisprudencias y Tesis del Poder Judicial Federal 449

- **Octava Parte:**
  Índices Generales 475

PRIMERA PARTE

JURISPRUDENCIA DE SALA SUPERIOR

PRIMERA SECCIÓN

JURISPRUDENCIA NÚM. VI-J-1aS-1

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

FACULTAD ESTABLECIDA EN LA REGLA 27 DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA, DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995. NO ES POTESTATIVA, SINO OBLIGATORIA.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en la tesis 2a. LXXXVI/97, que: "En el ámbito legislativo el verbo 'poder' no necesariamente tiene el significado de discrecionalidad, sino que en ocasiones se utiliza en el sentido de 'obligatoriedad', (...), por lo que para descubrir la verdadera intención del creador de la ley, los principios filosóficos de derecho y de la hermenéutica jurídica aconsejan que es necesario armonizar o concordar todos los artículos relativos a la cuestión que se trate de resolver, (...) para llegar a la conclusión de que la disposición normativa en que se halla inserto, otorga una facultad potestativa o discrecional a la autoridad administrativa". Ahora bien, partiendo del hecho de que una de las finalidades del Tratado de Libre Comercio de América del Norte consiste, de acuerdo a lo dispuesto por su artículo 102 (1) (a) y (e), en la eliminación de obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de las Partes, así como crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del Tratado, para su administración conjunta, y para la solución de controversias; y que conforme al artículo 502 (1) (c) del citado Tratado, el importador sólo está obligado a proporcionar una copia del certificado, cuando se lo solicite la autoridad aduanera; a juicio de esta Juzgadora, el hecho de que en la regla 27 de la Resolución por la que se establecen las reglas de

carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 1995, se establezca que "para los efectos de lo dispuesto en el artículo 502 (1) (c) del Tratado, y la fracción IV de la regla 25 de la presente Resolución, cuando el certificado de origen presentado sea ilegible, defectuoso, o no se haya llenado de conformidad con lo dispuesto en la Sección II de este Título, la autoridad podrá requerir al importador a fin de que en un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, presente una copia del certificado de origen en que se subsanen las irregularidades mencionadas", no debe interpretarse como una facultad discrecional por la utilización del verbo poder, sino obligatoria, en virtud de que la regla señala los requisitos para su aplicación (cuando el certificado de origen se presente ilegible, defectuoso, o no se haya llenado de conformidad con lo dispuesto en la Sección II del Título III de la citada Resolución), por lo que tal situación obliga a la autoridad a dar la oportunidad al importador de presentar un certificado de origen corregido. Interpretar lo contrario equivaldría a dejar al arbitrio de la autoridad el otorgar o no la oportunidad a los importadores de demostrar el origen de las mercancías, creando con ello una desigualdad procedimental al otorgar a unos y no a otros dicha oportunidad; más aún carecería de sentido la regla en cuestión, si su trámite dependiera únicamente de la voluntad de la autoridad. (1)

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-2/2008)

PRECEDENTES:

V-P-1aS-94
Juicio No. 470/00-07-03-4/184/01-S1-04-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de octubre de 2001, por unanimidad de cuatro votos a favor.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de enero de 2002)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año II. No. 20. Agosto 2002. p. 105

V-P-1aS-229

Juicio No. 1088/03-06-01-9/55/04-S1-05-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de mayo de 2004, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: Lic. María Esther Méndez Serrato.

(Tesis aprobada en sesión de 4 de mayo de 2004)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 45. Septiembre 2004. p. 203

V-P-1aS-297

Juicio No. 828/05-06-02-2/642/05-S1-03-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de febrero de 2005, por unanimidad de 5 votos.- Magistrada Ponente: Alma Gianina Isabel Peralta De Gregorio.- Secretario: Lic. Porfirio Alarcón Islas.

(Tesis aprobada en sesión de 14 de febrero de 2006)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VI. No. 66. Junio 2006. p. 118

V-P-1aS-298

Juicio No. 30821/04-17-08-6/652/05-S1-05-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de febrero de 2005, por unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretario: Lic. Andrés E. Sánchez y Albuerne.

(Tesis aprobada en sesión de 14 de febrero de 2006)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VI. No. 66. Junio 2006. p. 118

V-P-1aS-304

Juicio No. 29175/04-17-09-1/694/05-S1-02-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de abril de 2006, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretaria: Lic. Esmeralda Reyes Durán.

(Tesis aprobada en sesión de 18 de abril de 2006)

R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VI. No. 68. Agosto 2006. p. 17

Así lo acordó la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión celebrada el veintidós de abril de dos mil ocho.- Firman el Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Virginia Pétriz Herrera, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe.

SEGUNDA PARTE

PRECEDENTES DE SALA SUPERIOR

PLENO

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-P-SS-26

CONSULTA FISCAL.- ES PROCEDENTE SU ANÁLISIS CUANDO NO SE INVOCAN CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD.- El artículo 34 del Código Fiscal de la Federación vigente en el año de 2004 obliga a las autoridades a resolver las consultas que les sean formuladas respecto a situaciones individuales, reales y concretas, con excepción de aquellas que impliquen cuestiones de constitucionalidad. De tal suerte, que si la autoridad al dar respuesta a dicha consulta sustenta su improcedencia aduciendo que esta implica la interpretación o aplicación directa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no obstante que el planteamiento versa respecto a la existencia o no de la obligación del pago de contribuciones, y por ende no constituye un tema de constitucionalidad, es evidente que dicha resolución es ilegal, pues se emitió sin atender el planteamiento formal y de fondo de la consulta, cuando la autoridad se encontraba facultada para pronunciarse sobre el particular, y en esta tesitura la declaratoria de nulidad de la resolución impugnada debe ser para el efecto de que se emita una nueva resolución en la que se analicen todos y cada uno de los puntos planteados. (1)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 32435/05-17-02-3/930/06-PL-08-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 23 de mayo de 2007, por mayoría de 7 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 31 de marzo de 2008)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

QUINTO.- (...)

De la lectura a las transcripciones que anteceden, se desprende que la **actora** afirma esencialmente que debe declararse la nulidad de la resolución impugnada, por las consideraciones jurídicas siguientes:

Que la autoridad violó el principio de congruencia que deben contener los actos administrativos, por los cuales se dé respuesta a las consultas planteadas ante la autoridad administrativa.

Que la autoridad estaba obligada a atender y pronunciarse sobre todos los puntos planteados en la consulta de mérito, fundando y motivando su resolución, cuestión que en la especie no aconteció.

Que los argumentos emitidos por la autoridad para negar el criterio solicitado, carecen de la debida fundamentación y motivación legal que al efecto establece el artículo 16 Constitucional, y que para materia tributaria prevé el artículo 38 fracción III del Código Fiscal de la Federación.

Que la autoridad apreció en forma equivocada los hechos que se expusieron en el escrito de consulta de fecha 06 de abril de 2005, pues en ninguna parte se somete a consideración de la autoridad cuestiones de constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley Federal de Derechos.

Que lo anterior es así en virtud de que se plantea la confirmación del criterio relativo a que no debía pagar derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales en términos de la Ley Federal de Derechos vigente en el año de 2000, pues del referido ordenamiento legal no se desprende la obligación de pago de la mencionada contribución.

Que por tanto, resulta evidente que en la consulta no se sometieron a consideración de la autoridad temas de constitucionalidad de leyes, sino la existencia o no de la obligación de pago de derecho por concepto de agua en el ejercicio de 2000, de conformidad con lo previsto en el artículo 231 de la Ley Federal de Derechos, así como del artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el referido ordenamiento legal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1999.

En cambio, la autoridad sostiene medularmente que debe reconocerse la validez y legalidad de la resolución impugnada, por las consideraciones siguientes:

Que los argumentos de la demandante devienen en ineficaces e inoperantes por infundados, ya que no desvirtúa los razonamientos expuestos por la autoridad emisora en el acto impugnado.

Que el correcto análisis de los argumentos formulados por la actora, se circunscribe a si la resolución impugnada resulta o no incongruente respecto a la consulta fiscal planteada.

Que la consulta planteada implica cuestiones relacionadas con la aplicación e interpretación de principios constitucionales, ya que la actora consultó si tenía la obligación de pago de los derechos por uso y aprovechamiento de aguas nacionales, porque a su juicio no se encuentran integrados la totalidad de la obligación tributaria.

Que para poder resolver el planteamiento formulado por la actora, es necesario el estudio del principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual no está permitido a la autoridad emisora de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación.

A juicio del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los conceptos de impugnación en estudio, son **FUNDADOS**, por las consideraciones jurídicas siguientes:

En principio, es de precisarse que de la lectura integral de los argumentos de las partes se desprende, que no existe controversia entre éstas respecto de lo siguiente:

a).- Que la autoridad demandada (C. Jefe de la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal de la Comisión Nacional del Agua de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), de conformidad con lo previsto en los artículos 45 fracción XI y 55 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es la facultada para atender consultas de carácter fiscal presentadas por escrito por los usuarios y los contribuyentes, siendo los numerales en comento, del tenor siguiente:

> "Artículo 45**.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Comisión Nacional del Agua contará** con el Consejo Técnico a que se refiere la Ley de Aguas Nacionales, y **con las unidades administrativas siguientes**:
> "(...)
> "XI. **Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal**;
> "(...)"
>
> "Artículo 55.- **La Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal estará a cargo de un Jefe de Unidad y tendrá las atribuciones siguientes**:
> "(...)
> "VII. **Atender las consultas de carácter fiscal presentadas por escrito por los usuarios y contribuyentes**, así como las solicitudes de devolución, avisos de compensación y solicitudes de autorizaciones de pago de contribuciones a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, respecto al cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, y asesorarlos para el debido cumplimiento de sus obligaciones;
> "(...)"
>
> *(Énfasis añadido)*

b).- Que la consulta planteada por la ahora demandante es de carácter fiscal, pues en ella se consultó sobre cuestiones que tienen que ver con la determinación, liquidación y pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales establecidos en la Ley Federal de Derechos; y

c).- Que a la consulta planteada por la ahora enjuiciante, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación.

Precisado lo anterior y tomando en cuenta los argumentos de las partes, queda evidenciado que los puntos en controversia y por tanto la litis a dilucidar en el caso que nos ocupa se constriñe a:

1.- Determinar si de conformidad con lo que dispone el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales a las que se les plantean consultas sobre situaciones reales y concretas están obligadas a dar contestación a las mismas en todos los casos, o si cuando en éstas se plantean cuestiones de constitucionalidad, las referidas autoridades no están obligadas a dar respuesta a la consulta de que se trate.

2.- Suponiendo que las autoridades fiscales no estuvieran obligadas a dar respuesta a las consultas en las que se plantearan cuestiones de constitucionalidad; determinar si en la consulta formulada por la ahora actora, se hizo o no algún planteamiento que implicara una cuestión de constitucionalidad y, en consecuencia, si resulta legal que la autoridad demandada haya determinado no pronunciarse en relación a la misma.

A este respecto y para resolver debidamente el punto **1** que antecede, se estima necesario transcribir el contenido del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre del 2003, el cual era del tenor siguiente:

"**Artículo 34.-** Las autoridades fiscales sólo están obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados

> individualmente; de su resolución favorable se derivan derechos para el particular, en los casos en que la consulta se haya referido a circunstancias reales y concretas y la resolución se haya emitido por escrito por autoridad competente para ello.
> "La validez de las resoluciones que recaigan sobre las consultas aplicables a residentes en el extranjero podrán estar condicionadas al cumplimiento de requisitos de información que se soliciten por las autoridades fiscales en las citadas resoluciones.
> "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará anualmente las principales resoluciones favorables a los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, debiendo cumplir con lo dispuesto en el artículo 69 de este código."

De la lectura del artículo apenas transcrito, se desprende que este establecía la obligación de las autoridades fiscales de contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hicieran los interesados, estableciendo que de su resolución favorable se derivarían derechos para estos, siempre que constaran por escrito y hubiesen sido emitidas por autoridad competente.

En relación con dicho artículo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 7/2002-PL, en la ejecutoria correspondiente, estableció que las consultas fiscales constituyen una modalidad del derecho de petición establecido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero se distinguen del simple derecho a pedir, pues cuando versan sobre una situación real y concreta, la autoridad fiscal tiene la obligación de resolver y queda vinculada a la decisión o criterio que adopte, del que no podrá luego separarse, sino a través del juicio de lesividad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Con base en lo anterior, se puede afirmar que el requisito consistente en que las consultas fiscales versen sobre situaciones reales y concretas resulta indispensable para que la autoridad resuelva sobre el fondo del criterio planteado, y emita una contestación por escrito.

Esto es así, porque la obligación de dar respuesta a las peticiones que de manera pacífica y respetuosa formulen los particulares deriva directamente del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone:

> "**Artículo 8º.-** Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.
> "A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario."

El precepto constitucional transcrito establece como garantía individual el llamado "*derecho de petición*" el cual supone una obligación positiva de parte de los órganos estatales, consistente en dar contestación por escrito y en breve término al autor de la petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa.

Dicha obligación de las autoridades debe ser acatada tratándose de las consultas fiscales, precisamente porque estas constituyen una modalidad del derecho de petición, y se distinguen de este porque, cuando cumplen con los requisitos a que se refiere el propio artículo 34 del Código Fiscal de la Federación (versar sobre situaciones reales y concretas), pueden llegar a generar derechos para el particular.

Así, las autoridades fiscales solamente están obligadas a pronunciarse sobre el fondo de la consulta que se les hace cuando esta verse sobre situaciones reales y concretas, **pero sin perjuicio de dar respuesta a todas las peticiones** que, con fundamento en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, les eleven los particulares.

Una vez establecido lo anterior tenemos que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de enero de 2004, se agregó un segundo párrafo al artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, para quedar el texto de dicho numeral, como a continuación se transcribe:

> "**Artículo 34.-** Las autoridades fiscales sólo están obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente; de su resolución favorable se derivan derechos para el particular, en los casos en que la consulta se haya referido a circunstancias reales y concretas y la resolución se haya emitido por escrito por autoridad competente para ello.
> "**Las autoridades fiscales no resolverán las consultas efectuadas por los particulares cuando las mismas versen sobre la interpretación o aplicación directa de la Constitución. En estos casos, no procederá la negativa ficta a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de este Código.**
> "La validez de las resoluciones que recaigan sobre las consultas aplicables a residentes en el extranjero podrán estar condicionadas al cumplimiento de requisitos de información que se soliciten por las autoridades fiscales en las citadas resoluciones.
> "El Servicio de Administración Tributaria publicará mensualmente un extracto de las principales resoluciones favorables a los contribuyentes a que se refiere este artículo, debiendo cumplir con lo dispuesto en el artículo 69 de este Código."
>
> (Se resalta con negritas el párrafo que fue añadido al texto del artículo.)

Conforme a lo dispuesto en el párrafo resaltado con negritas, las autoridades fiscales **NO RESOLVERÁN** las consultas que versen sobre la interpretación o aplicación directa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en estos casos no procederá la negativa ficta a que se refiere el artículo 37 del propio Código Fiscal de la Federación.

De una interpretación literal del segundo párrafo del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 1º de enero del 2004, se advierte que en él de ninguna manera se autoriza a las autoridades fiscales a que omitan dar contestación a las consultas que versen sobre la interpretación o aplicación directa de la Constitución, sino que les prohíbe **RESOLVER** ese tipo de consultas, lo que atendiendo al significado de dicho verbo, según el Diccionario de la Lengua Española, significa: "(...) *tomar una decisión fija y decisiva, hallar la solución de un problema,* (...)" lo cual debe entenderse referido al fondo de la cuestión planteada en la consulta, y no al simple hecho de emitir un acuerdo por escrito.

Así, para este Cuerpo Colegiado queda claro que el citado artículo 34, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 1º de enero del 2004, en cuanto establece que no se resolverán las consultas en los casos indicados, debe interpretarse en el sentido de que las autoridades hacendarias no podrán emitir pronunciamientos de fondo que impliquen la interpretación o aplicación directa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **pero sin que ello las autorice a abstenerse de dar respuesta por escrito y en breve término a las consultas** que con fundamento en el propio artículo 34 del Código Fiscal de la Federación se les planteen.

En este sentido, de conformidad con el texto vigente del artículo en comento, para obtener una resolución de fondo que en caso de ser favorable genere derechos al particular, la consulta debe cumplir con los siguientes requisitos de fondo:

o Versar sobre una situación real y concreta del interesado en lo individual.

o No versar sobre la interpretación o aplicación directa de la Constitución.

En cambio, para obtener una contestación por escrito de la autoridad fiscal, **aunque sea en el sentido de que la consulta no cumple con los requisitos necesarios para ser resuelta en cuanto al fondo**, bastará con que tal consulta se haya presentado por escrito, de manera pacífica y respetuosa, como lo exige el artículo 8º

Constitucional, lo que será suficiente para vincular a la autoridad a contestar, sin que el artículo 34, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, constituya un impedimento para ello.

Cabe señalar que lo razonado hasta este punto no implica de manera alguna, que la respuesta que las autoridades fiscales den a las consultas en las que se planteen cuestiones de constitucionalidad puedan ser consideradas incongruentes, en la medida en que, en todo caso, las mismas no estarían resolviendo el fondo del asunto, y la respuesta dada por las autoridades no tendría relación con dicho planteamiento de fondo; ya que **si bien es cierto** el derecho de petición obliga a las autoridades a responder las peticiones que les hagan los gobernados, **también resulta cierto que** eso no implica que la autoridad a la que se haya formulado la petición, necesariamente, tenga que resolver en sentido afirmativo o favorablemente a los intereses del solicitante.

En efecto, el derecho de petición constriñe a las autoridades a dar una respuesta, pero no les impone la carga de responder en determinado sentido. Dicho criterio ha sido puntualizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis que se transcriben e identifican enseguida:

> "Sexta Época.
> "Segunda Sala.
> "Semanario Judicial de la Federación.
> "Tomo XX Tercera Parte.
> "Página 83.
>
> "**PETICIÓN. DERECHO DE.-** Las garantías del artículo 8o. constitucional, tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido."

> "Octava Época.
> "Tercera Sala.

"Semanario Judicial de la Federación.
"Tomo IX, abril de 1992.
"Tesis 3a. XXXIV/92.
"Página 81.

"**PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO.-** El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten."

Entonces tenemos que así como el derecho de petición sólo obliga a contestar en breve término y por escrito las promociones que se presenten y no a que se resuelvan en determinado sentido, de igual modo, debe decirse que el derecho de petición no constriñe a las autoridades a pronunciarse sobre cuestiones para las cuales no tengan competencia o respecto de las cuales exista un impedimento legal para resolver, pues conforme al principio de legalidad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades únicamente pueden resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia y sólo pueden actuar dentro del marco constitucional y legal que les sea aplicable.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. CXXXIII/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, octubre de 2000, página 357, que a la letra señala:

"**PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE**

COMPETENCIA.- Conforme a la interpretación jurisprudencial de lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responder por escrito y en forma congruente a lo solicitado, haciendo del conocimiento de aquellos el acuerdo respectivo en breve plazo, sin que la autoridad esté vinculada a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que conforme al principio de legalidad garantizado en el artículo 16 de la propia Norma Fundamental, las autoridades únicamente pueden resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia, en los términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, para resolver sobre lo que se pide, el servidor público ante el que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido."

En este orden de ideas, si el control directo de la constitucionalidad constituye una facultad que se encuentra reservada a los órganos del Poder Judicial de la Federación, como reiteradamente lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que el artículo 34, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, al establecer que las autoridades fiscales no resolverán las consultas que versen sobre la interpretación o aplicación directa de la Constitución, **no impide que las autoridades fiscales den una contestación congruente con lo solicitado**, sino que únicamente reitera la falta de atribuciones de dichas autoridades para ejercer un control directo de la Constitución, de modo que **la respuesta congruente, en tales casos consistirá precisamente en la manifestación de la imposibilidad para pronunciarse sobre estos tópicos**.

De lo hasta aquí expresado, los CC. Magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **respecto**

del punto 1 de este considerando, en el que se delimita la litis del juicio contencioso administrativo que nos ocupa, concluyen **que si bien es cierto** el artículo 34, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 1º de enero del 2004, impide que las autoridades fiscales resuelvan sobre el fondo de las consultas fiscales que versen sobre la interpretación o aplicación directa de la Constitución Federal, **también resulta cierto que** el numeral en comento no exime a dichas autoridades de la obligación de emitir una respuesta, y en la hipótesis en estudio, **dicha obligación se cumple con la emisión de un acuerdo o resolución en el que se exprese la imposibilidad jurídica para resolver el fondo de la petición**.

Es decir, de conformidad con lo que dispone el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, cuando a una autoridad fiscal se le formula una consulta en la que se plantean cuestiones de constitucionalidad, dicha autoridad no se encuentra obligada a responder en relación al fondo del asunto, pero sí se encuentra obligada a dar respuesta a la consulta emitiendo un acuerdo o resolución en el que se exprese la imposibilidad jurídica para resolver el fondo de la petición.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 107/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 311, que a la letra señala:

> "**CONSULTAS FISCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 34, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2004.-** El citado precepto establece que 'Las autoridades fiscales no resolverán las consultas efectuadas por los particulares cuando las mismas versen sobre la interpretación o aplicación directa de la Constitución.', lo que debe interpretarse en el sentido de que aquéllas no están facultadas para ejercer un control de la constitucionalidad de actos o leyes a propósito de la resolución de consultas fiscales, sin que ello implique que no se encuentren obligadas directamente por

el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni que estén impedidas para resolver el fondo de las consultas que versen sobre la aplicación de jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. Este criterio respeta la intención del legislador, así como el monopolio del referido Poder en el ejercicio del control de la constitucionalidad de la actuación pública, al mismo tiempo que deja a salvo la eficacia normativa y la supremacía de la Ley Fundamental.

"Amparo en revisión 219/2005. Distribuidora Lozano Hermanos, S.A. de C.V. 30 de marzo de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Fabiana Estrada Tena.

"Amparo en revisión 716/2005. Felipe Canales Tijerina. 27 de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: David Rodríguez Matha.

"Amparo en revisión 1096/2005. Remberto Sánchez Velasco. 12 de agosto de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Fernando Silva García.

"Amparo en revisión 1123/2005. Compañía de Papel Lozano Hermanos, S.A. de C.V. 19 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

"Amparo en revisión 1037/2005. Salvador Oropeza Cuevas. 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez.

"Tesis de jurisprudencia 107/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de agosto de dos mil cinco."

De igual manera sirve de apoyo, **por cuanto a su razonamiento sustancial se refiere**, la tesis 2a. LX/2005, dictada por la Segunda Sala, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, página 236; cuyo rubro y texto son los siguientes:

> "**CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2004, NO VIOLA EL DERECHO DE PETICIÓN.-** El citado precepto legal, en cuanto establece que las autoridades fiscales no resolverán las consultas fiscales que versen sobre la interpretación o aplicación directa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe interpretarse en el sentido de que las autoridades hacendarias no están facultadas para emitir pronunciamientos de fondo que impliquen una interpretación constitucional, lo cual no resulta violatorio del derecho de petición que consagra el artículo 8o. de la Ley Fundamental, porque no quedan relevadas de su obligación de dar respuesta por escrito y en breve término al particular, manifestando, en su caso, la imposibilidad jurídica para resolver el fondo de la consulta planteada.
>
> "Amparo en revisión 219/2005. Distribuidora Lozano Hermanos, S.A. de C.V. 30 de marzo de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Fabiana Estrada Tena.
>
> "Amparo en revisión 86/2005. José Rodolfo Sánchez Díaz. 4 de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez."

Atendiendo a lo establecido con antelación, y a efecto de determinar si en el caso concreto es legal la resolución que se impugna, se hace necesario transcribir el contenido de esta, la cual es del tenor siguiente:

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | SEMARNAT

COMISION NACIONAL DEL AGUA

UNIDAD DE REVISIÓN Y LIQUIDACIÓN FISCAL
SUBGERENCIA DE COORDINACIÓN HACENDARIA Y PROCEDIMIENTOS FISCALES

OFICIO No. BOO.00.03/05/05/ 1232

México, D.F., a 23 de mayo de 2005.

ASUNTO: Se da respuesta a su escrito de fecha 6 de abril de 2005.

REPRESENTANTE LEGAL DE
GALVAK, S.A. DE C.V.
CALLE DE VASCONCELOS No. 316 ORIENTE, LOCAL No. 1
COL. SIERRA MADRE
C.P. 66250
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN

En respuesta a su escrito de fecha 6 de abril de 2005, recibido en esta área central el día 29 del mismo mes y año; a través del cual solicita le sea confirmado el criterio respecto a que la obligación tributaria derivada del uso y aprovechamiento de aguas nacionales, consistente en el pago de los derechos como contribución federal por el ejercicio fiscal de 2000, no se puede materializar ya que se carece de uno de los elementos formales de la obligación como lo es la cuota o la tarifa, misma que debe estar determinada en la disposición legal vigente al momento de su causación; pues atendiendo a lo previsto en el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga a la Ley Federal de Derechos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 1999, en vigor a partir del 01 de enero de 2000, se desprende que no se prevé al municipio de San Nicolás de los Garza (lugar en el que esa empresa extrajo agua durante el año 2000) dentro de ninguna de las zonas de disponibilidad; esta Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal de la Comisión Nacional del Agua, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, fracciones XXIX, LIV, y SEGUNDO TRANSITORIO de la Ley de Aguas Nacionales, vigente; 9º, fracción IV de su Reglamento; 192-E fracción IV de la Ley Federal de Derechos; 34 del Código Fiscal de la Federación; y 45, fracción XI, y 55, fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; procede a informarle lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal está facultada para atender las consultas de carácter fiscal presentadas por escrito por los usuarios y los contribuyentes; sin embargo no puede pronunciarse en cuanto a cuestiones de constitucionalidad sobre la integración de los elementos de la contribución, respecto de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales establecidos en la Ley Federal de Derechos, ya que las atribuciones de esta autoridad fiscal se limitan a la aplicación de lo dispuesto en la legislación y no en determinar si los elementos del tributo establecidos por el poder legislativo son satisfechos o no, por lo que no es dable acceder a su petición.

ATENTAMENTE
EL JEFE DE LA UNIDAD

LIC. JOSÉ GUILLERMO RIVERA SOSA

c.c.p.- Lic. Jorge Luis Martínez Díaz.- Subgerente de Coordinación Hacendaria y Procedimientos Fiscales.- Presente.- Para su conocimiento.
LMD
Elaboró: Lic. Susana Vargas Zempoaltecatl Revisó: Lic. Andrés Montaño Caporal

FO-CHPF-02

Av. Insurgentes Sur No. 2416, 9º Piso, Ala Pte, Col. Copilco, C.P. 04340, Delegación Coyoacán, México, D.F., Tel. 51 74 40 52

De la transcripción que antecede se observa que la autoridad demandada, en la resolución que se impugna y en relación a la consulta planteada por la ahora actora, determinó que de conformidad con lo dispuesto, entre otros, en los artículos 34 del Código Fiscal de la Federación, y 55 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no se encontraba facultada para atender la misma, con el argumento de que en ésta se estaban planteando cuestiones de constitucionalidad sobre la integración de los elementos de la contribución, respecto de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales establecidos en la Ley Federal de Derechos, por lo que no resultaba dable acceder a la "petición" de la ahora demandante.

Es evidente entonces que la enjuiciada dejó de resolver en cuanto al fondo la consulta planteada por la ahora actora, al estimar que en la misma se estaba haciendo un planteamiento de constitucionalidad, concretándose por tanto a emitir una resolución en la que, únicamente, expresó la imposibilidad jurídica para resolver el fondo de la consulta.

Atendiendo a lo indicado en el párrafo anterior, y considerando que, como ya se ha señalado con antelación, cuando a una autoridad fiscal se le formula una consulta en la que se plantean cuestiones de constitucionalidad, dicha autoridad no se encuentra obligada a responder en relación al fondo del asunto, pero sí se encuentra obligada a dar respuesta a la consulta emitiendo un acuerdo o resolución en el que se exprese la imposibilidad jurídica para resolver el fondo de la petición; a efecto de resolver el punto de litis resumido en el punto **2** de este considerando, se estima necesario transcribir el contenido íntegro del escrito de consulta de la ahora demandante, el cual es del tenor siguiente:

(Foja 36 de autos)

"(...) **COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.**
PRESENTE.

"**FRANCISCO JAVIER SAUCEDO RANGEL** (RFC SARF550625F55), en nombre y representación de **GALVAK, S.A. DE C.V. (RFC GAL800101PNO**),

según lo acredito con copia certificada del poder que consta en el instrumento notarial número 7232, de fecha 24 de mayo de 2000, otorgado ante la fe del Notario Público número 115 de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la cual acompaño al presente escrito y señalando que el domicilio fiscal de mi representada está ubicado en Ave. De la Juventud No. 340, Col. Cuauhtémoc, San **Nicolás de los Garza Nuevo León,** Código Postal 66450 y designando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle de Vasconcelos Número 316 Oriente, Local Número 1, Colonia Sierra Madre, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, Código Postal 66250 Tel. (81)8100-96-65, y autorizando para estos efectos, en los términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, a los señores Oscar Rogelio Torres Betancourt (RFC TOBO 660713 T409), Marcelo Alanís Lambretón (RFC AALM 690221 UT6), Mauricio Villarreal de la Fuente (RFC VIFM 781010SS8) y Ricardo Gutiérrez Pier (RFC GUPR-760830-HX2), quienes señalan el mismo domicilio convencional y teléfono arriba mencionados, con el debido respeto, comparezco para exponer que:

"Por medio de este escrito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18, 18-A y 34 del Código Fiscal de la Federación, vengo a plantear la siguiente:

"**CONSULTA**

"Por medio del presente escrito solicito se confirme el criterio consistente en que mi representada no debió pagar derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales en términos de la Ley Federal de Derechos de agua durante el ejercicio correspondiente al año 2000, puesto que su obligación no estaba consignada en ley, y por tanto, procede la devolución de las cantidades que pagó por dicho concepto durante ese año.

"**PROCEDENCIA**

"Procede esta instancia ante esa H. Comisión Nacional del Agua, en virtud de que la consulta que mi poderdante plantea por medio del presente escrito, versa sobre situaciones reales y concretas, tal como lo ordena el artículo 34

del Código Fiscal de la Federación, cuyos primeros dos párrafos a continuación se transcriben:

" '**Artículo 34.- Las autoridades fiscales sólo están obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente; de su resolución favorable se derivan derechos para el particular, en los casos en que la consulta se haya referido a circunstancias reales y concretas y la resolución se haya emitido por escrito por autoridad competente para ello.**
" '**Las autoridades fiscales no resolverán las consultas efectuadas por los particulares cuando las mismas versen sobre la interpretación o aplicación directa de la Constitución. En estos casos, no procederá la negativa ficta a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de este Código.**
" '(...)'

"Conforme a lo anterior, dicha H. Autoridad tiene obligación de contestar la consulta planteada, puesto que la misma se plantea sobre situaciones reales y concretas, y no cae en el supuesto del párrafo segundo del artículo antes mencionado, es decir, no versa sobre la interpretación o aplicación directa de la Constitución.

"Se motiva esta instancia en los siguientes:

"HECHOS

"1.- GALVAK, S.A. de C.V. es una sociedad anónima de capital variable, constituida de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles, según consta en escritura pública número 147, de fecha 23 de noviembre de 1936, otorgada ante la fe del Notario Público licenciado Diódoro de los Santos con ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, cuya principal actividad es la producción y venta de productos de acero.

"2.- GALVAK, S.A. DE C.V., para la realización de las actividades industriales que realiza, usa y aprovecha aguas nacionales, por lo cual es sujeto del pago del derecho que al efecto se causa, por lo que invariablemente ha dado cumplimiento al pago y presentación de las declaraciones correspondientes y con ello a lo previsto en las disposiciones fiscales aplicables.

"3.- GALVAK, S.A. DE C.V. pagó derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales durante el ejercicio correspondiente al año 2000, por la cantidad de $3'092,255.00

"4.- En este contexto, el caso que se plantea se sustenta entre otros, tanto en los presupuestos legales, previstos en el artículo 5°, del Código Fiscal de la Federación, donde se dispone que la obligación fiscal a cargo de los particulares, se integra en aquellas normas legales donde se refiera al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, y así como en lo que al efecto también se señala en el artículo 6°, del Código Fiscal citado, donde se prevé que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.

"5.- Es el caso, que con el objeto de pagar oportunamente los derechos federales correspondientes al uso o aprovechamiento de las aguas nacionales del subsuelo, por lo que corresponde al ejercicio fiscal del 2000, la empresa que represento, ha presentado las declaraciones trimestrales y anual, con lo cual se acredita el cumplimiento de la obligación a su cargo en el periodo citado.

"6.- Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto por el artículo 18-A del Código Fiscal de la Federación, manifiesto que:

"a) Se cumple lo ordenado por las fracciones I y II de dicho artículo, con los datos proporcionados en el proemio del presente escrito.

“b) Se cumple con lo ordenado por la fracción III de dicho artículo, en el HECHO número uno del presente escrito.

“c) Se cumple con lo ordenado por la fracción IV de dicho artículo, en el HECHO número tres del presente escrito.

“d) Se cumple con lo ordenado por la fracción y de dicho artículo, en el capítulo de HECHOS y PRUEBAS del presente escrito.

“e) Para efectos de cumplir con lo dispuesto por la fracción VI del artículo 18-A mencionado, expreso que la razón de negocios que motiva la presente consulta, es obtener la devolución de las cantidades pagadas por concepto de derechos por uso y explotación de aguas nacionales, en virtud de que, al no estar consignada en ley la obligación de pagar dichas cantidades, mi representada no debió enterar dichas contribuciones por el año 2000.

“f) Para efectos de cumplir con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 18-A mencionado, informo que los hechos o circunstancias sobre los que versa la promoción, no han sido planteados por mi mandante ante una autoridad fiscal distinta a la que recibió la promoción o ante autoridades administrativas o judiciales.

“g) Para efectos de cumplir con lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 18-A mencionado manifiesto que mi representada no se encuentra sujeta al ejercicio de las facultades de comprobación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las Entidades Federativas coordinadas en ingresos federales.

“Fundo esta instancia en las siguientes:

"CONSIDERACIONES LEGALES

"**PRIMERA.-** Atendiendo a lo previsto en el artículo Quinto Transitorio, del Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga a la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 1999, en vigor a partir del 01 de enero de 2000, se puede apreciar que la obligación fiscal a cargo de la empresa que represento, referente al pago de derechos por uso y aprovechamiento de aguas nacionales, correspondiente al periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2000, carece de los elementos legales necesarios para su cumplimiento, según lo contemplado en los ya aludidos artículos 5° y 6° del Código Fiscal de la Federación, mismos que en lo conducente señalan lo siguiente:

" '**Artículo 5o**.- (Se transcribe)'

" '**Artículo 6o**.- (Se transcribe)'

" '**SEGUNDA.-** De conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Derechos de Agua vigente en el año 2000 (la 'Ley'), en su artículo 222, primer párrafo, se establece que: 'las personas físicas o morales, están obligadas al pago del derecho sobre agua por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por el volumen total consignado en el título de asignación, concesión, autorización o permiso, otorgado por el Gobierno Federal, o por la que exploten, usen o aprovechen de hecho, de acuerdo a la zona de disponibilidad de agua en que se efectúe su extracción de conformidad con la división territorial contenida en el artículo 231 de esta Ley.'

" '**Artículo 222.-** Están obligadas al pago del derecho sobre agua, las personas físicas y las morales que usen, exploten o aprovechen aguas nacionales, bien sea de hecho o al amparo de títulos de asignación, concesión, autorización o permiso, otorgados por el Gobierno Federal, de acuerdo con la zona de

disponibilidad de agua en que se efectúe su extracción de conformidad a la división territorial contenida en el artículo 231 de esta ley.'

"**TERCERA.-** Como se puede observar de su lectura, el párrafo del artículo 222 arriba transcrito, era, en el año 2000, el fundamento de la obligación de pagar derechos por el uso, explotación y aprovechamiento de aguas, en el cual consta el sujeto, objeto y base gravable de dicha contribución. La tarifa de dicha contribución se obtenía de los artículos 223 y 231 de la misma Ley, según se observa a continuación.

"El artículo 223 de la Ley establece que:

" 'por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales (...) se pagará el derecho sobre agua, de conformidad con la zona de disponibilidad de agua en que se efectúe su extracción y de acuerdo con las siguientes cuotas:

" 'A. - Por las aguas provenientes de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo, a excepción de las del mar, por cada metro cúbico:'

"**CUARTA.-** El inciso A del artículo 223, que se reprodujo arriba, contiene nueve fracciones, cada fracción hace referencia a una zona, y cada zona contiene un precio específico para cada metro cúbico de consumo; así, tenemos 9 zonas de disponibilidad en el territorio mexicano, cada una con un precio distinto por metro cúbico de consumo.

"A. Por las aguas provenientes de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo, a excepción de las del mar, por cada metro cúbico:

"I. Zona de disponibilidad 1. $11.4960

"II. Zona de disponibilidad 2. $9.1966

“III. Zona de disponibilidad 3. $7.6638

“IV. Zona de disponibilidad 4. $6.3228

“V. Zona de disponibilidad 5. $4.9815

“VI. Zona de disponibilidad 6. $4.5022

“VII. Zona de disponibilidad 7. $3.3890

“VIII. Zona de disponibilidad 8. $1.2043

“IX. Zona de disponibilidad 9. $0.9026

“Las empresas públicas y privadas que tengan asignación o concesión para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales y suministren volúmenes de agua para consumo doméstico a centros o núcleos de población, cubrirán el derecho respecto de los volúmenes de agua suministrada, con las cuotas establecidas en el apartado B, fracción I, de este artículo; para tales efectos, deberán contar con medidor que contabilice exclusivamente el volumen de agua que proporcionen para el citado uso.

“**QUINTA.-** El artículo 231 de la Ley, por su parte, establece cuáles son los municipios del territorio mexicano que integran cada una de esas zonas, de la 1 a la 9, y de ésta forma, los contribuyentes pueden calcular, cuál es el costo de cada metro cúbico de agua que consumen, dependiendo del lugar en que se ubiquen, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 223 citado anteriormente, y por ende, cuál es la cantidad que deben pagar periódicamente por dicho consumo.

“ ‘**Artículo 231.-** (Se transcribe)’

"**SEXTA.-** El viernes 31 de diciembre de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de reforma a la Ley, que entró en vigor a partir del 1° de enero de 2000, en el cual se incluyó un Artículo Quinto Transitorio que establecía lo siguiente:

" '**Artículo Quinto**.- (Se transcribe)'

"**SÉPTIMA.-** Se establece, en dicho **Artículo Quinto Transitorio**, vigente durante todo el año 2000, que los municipios del territorio mexicano pagarán conforme al catálogo que se establece en esa disposición, **en sustitución de lo dispuesto por el artículo 231 de la Ley**, de tal manera que se estableció transitoriamente, en esa disposición, que los municipios del **territorio mexicano**, deberían atender a lo dispuesto en el catálogo del Artículo Quinto Transitorio, y no al catálogo del artículo 231 de la Ley.

"**OCTAVA**.- Sin embargo, el municipio donde mi representada tiene ubicada su planta, no se encuentra contemplado en ninguna de las nueve zonas de disponibilidad previstas en el Artículo Quinto Transitorio.

"**Como consecuencia de esto, se debe concluir que mi representada, al tener una planta ubicada en un municipio que no estaba incluido en alguna de esas nueve zonas de disponibilidad previstas en el Artículo Quinto Transitorio vigente en el 2000, el cual establecía la tarifa necesaria para calcular el monto de los derechos por uso o aprovechamiento de agua, resulta imposible sostener que existía obligación de pagar la contribución.**

"**Adicionalmente, de una interpretación a contrario sensu del artículo 222, podemos concluir que mi representada no se encuentra obligada al pago de derechos por el uso, explotación y aprovechamiento de aguas, dentro de ese municipio, en virtud de que:**

" 'las personas físicas o morales, están obligadas al pago del derecho sobre agua por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por el volumen total consignado en el título de asignación, concesión, autorización o permiso, otorgado por el Gobierno Federal, o por la que exploten, usen o aprovechen de hecho, **de acuerdo a la zona de disponibilidad de agua en que se efectúe su extracción de conformidad con la división territorial contenida en el artículo 231 de esta Ley.**'

"En consecuencia, al existir un artículo de la Ley (el Quinto Transitorio) que establece, en sustitución de lo dispuesto en el artículo 231, el catálogo de municipios en donde la extracción de agua causará un pago de derechos para el año 2000, y el **municipio en donde mi representada extrajo agua durante el año 2000, NO ESTÁ CONTEMPLADO EN ZONA DE DISPONIBILIDAD ALGUNA** en el artículo que resulta aplicable, necesariamente deberemos concluir que no hay obligación de pagar derechos conforme a lo dispuesto por el artículo 222 de la Ley. Y no es admisible pretender una aplicación supletoria del 231 de la Ley a este caso concreto, puesto que claramente el Artículo Quinto Transitorio EXCLUYE la aplicación del catálogo de municipios del artículo 231 durante el año 2000.

"**NOVENA**.- En este contexto, se tiene que la obligación tributaria derivada del uso y aprovechamiento de aguas nacionales, consistente en el pago de los Derechos como contribución Federal causada por tal situación jurídica, en el presente caso, no se puede materializar, ya que carece de uno de los elementos formales de la obligación como lo es la cuota o tarifa, misma que debe estar determinada en la disposición legal vigente al momento de su causación, y es el caso, que al no estar previsto el municipio donde se encuentra mi representada, dentro de ninguna de las zonas de disponibilidad contempladas en el artículo Quinto Transitorio anteriormente transcrito, esto redunda en la inexistencia de la obligación fiscal en comento, y por ello el pago que bajo este concepto realizó mi representada adquiere el carácter de pago de lo indebido.

"En esta tesitura, retomando las anteriores manifestaciones, se puede concluir que como ya se ha dicho, para el cumplimiento de la obligación fiscal consistente en el Derecho Federal, generado por el uso y aprovechamiento de aguas nacionales, durante el ejercicio fiscal comprendido del l°. de enero al 31 de diciembre de 2000, la empresa que represento no cuenta con la totalidad de los elementos que integran la obligación tributaria correspondiente, ya que existe incertidumbre en cuanto a la determinación de la cuota a pagar según lo contenido en las disposiciones vigentes en el momento de la causación, toda vez que no se encuentra previsto el municipio donde esta empresa realiza el uso y aprovechamiento de aguas nacionales, en las zonas de disponibilidad señaladas en el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga a la Ley Federal de Derechos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 1999, en vigor a partir del lO de enero de 2000, precepto en donde se señala que para los efectos de lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, el pago del derecho por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales utilizadas en los municipios del territorio mexicano, durante los años 2000 a 2004, se efectuará de conformidad con las zonas de disponibilidad de agua a que se refiere el artículo 231, de la Ley Federal de Derechos, como se indican en el artículo Transitorio en comento, lo que no deja lugar a duda que los pagos realizados por el periodo en comento adquieren el carácter de pago de lo indebido, y por ello deben ser así reconocidos por la autoridad.

"**DÉCIMA**.- En virtud de que mi representada no se encontraba obligada a efectuar el pago de derechos por el uso, explotación y aprovechamiento de aguas, dentro de ese municipio, toda vez que no se ubicó en las hipótesis señaladas en la Ley; se solicita de esa autoridad confirme el criterio consistente en que mi mandante no debió pagar dichos derechos en términos de la Ley Federal de Derechos de agua durante el ejercicio correspondiente al año 2000, puesto que su obligación no estaba consignada en Ley, y por tanto, procede la devolución de las cantidades que pagó por dicho concepto durante ese año (...)"

De la transcripción que antecede se desprende que en la consulta planteada ante la autoridad demandada, la ahora actora realizó los siguientes planteamientos:

1).- Que durante el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2000, no se encontraba obligada a realizar el pago de derechos generados por el uso y aprovechamiento de aguas nacionales, atendiendo a que en las disposiciones vigentes y aplicables para la determinación de estos, no se contaba con la totalidad de los elementos que integran la obligación tributaria correspondiente, y que por ello los pagos por ella efectuados deben ser reconocidos como un pago de lo indebido.

2).- Que lo anterior es así, atendiendo a lo previsto en el artículo Quinto Transitorio, del Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga a la Ley Federal de Derechos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 1999, en vigor a partir del 01 de enero del 2000, numeral del que se puede apreciar que la obligación referente al pago de derechos por uso y aprovechamiento de aguas nacionales, correspondiente al periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2000, carece de los elementos legales necesarios para su cumplimiento.

3).- Que en el numeral citado en el punto anterior no se alude al Municipio de San Nicolás de Los Garza, al no estar comprendido dentro de ninguna zona de disponibilidad de aguas citadas en el mismo, y que por ello no se está en aptitud de determinar la cuota a pagar en términos de lo contenido en los artículos 222 y 223 de la Ley Federal de Derechos, vigente en el año 2000.

4).- Que entonces, la obligación tributaria derivada del uso y de aguas nacionales, consistente en el pago de los derechos como contribución federal causada por tal situación jurídica, no se puede materializar, ya que se carece de uno de los elementos formales de la obligación como lo es la cuota o tarifa, misma que debe estar determinada en la disposición legal vigente al momento de su causación.

5).- Que si bien es cierto que en el apartado A, del artículo 223, de la Ley Federal de Derechos, vigente en el año 2000, se dispone que por la explotación, uso

y aprovechamiento de aguas nacionales, se pagará el derecho sobre agua, por cada metro cúbico extraídas del subsuelo, de conformidad con las cuotas previstas para cada una de las nueve zonas de disponibilidad de agua en que se efectúe su extracción, y que en principio el artículo 231 de la citada Ley, señale cuáles son las zonas de disponibilidad a que se refiere el artículo 223, en donde se clasifican en nueve zonas de disponibilidad y que el Municipio de San Nicolás de Los Garza, donde su representada tiene su planta no se encuentra comprendida dentro de ninguna de las zonas de disponibilidad referidas en el citado artículo Quinto Transitorio.

Se hace evidente entonces que, contrario a lo sostenido por la autoridad demandada en la resolución impugnada, la ahora demandante, en su escrito de consulta, no formuló planteamiento alguno relativo a la constitucionalidad de algún artículo o de alguna Ley, sino que solamente consultó sobre una situación real y concreta, a saber: si por el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del 2000, se encontraba o no obligada a realizar el pago de derechos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales, establecidos en la Ley Federal de Derechos, atendiendo a que por el citado período no contaba con la totalidad de los elementos que integran la obligación tributaria a fin de determinar la cuota a pagar, conforme a las disposiciones vigentes al momento de su causación, debido a que no se encuentra previsto el Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en las zonas de disponibilidad señaladas en el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el se reforma, adiciona y deroga a la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1999, en vigor a partir del 1º de enero del 2000 y, por ello, los pagos realizados por dicho período adquieren el carácter de pago de lo indebido.

En este sentido, si la autoridad demandada únicamente resolvió que no tenía competencia para pronunciarse sobre la integración de los elementos de contribución, respecto a los derechos por uso o aprovechamiento de aguas nacionales establecidos en la Ley Federal de Derechos, argumentando que esto representaba un planteamiento de constitucionalidad; no puede entenderse esta como una respuesta jurídicamente válida a la consulta planteada por la empresa demandante, pues efecti-

vamente, a pesar de que no se formuló planteamiento alguno sobre una cuestión de constitucionalidad, de manera ilegal no hubo, de parte de la enjuiciada, un pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos formulados en dicha consulta.

En esta virtud, la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo que nos ocupa no cumple con el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que como requisito de todo acto de autoridad, se encuentra contemplado en el artículo 38 fracción III del Código Fiscal de la Federación; máxime si se toma en cuenta que, como ya se ha dicho, del análisis del escrito mediante el cual se planteó la consulta que dio origen a la emisión de dicha resolución, no se advierte que se hayan planteado cuestiones de constitucionalidad, ni cuestiones sobre la integración de los elementos de la contribución respecto a los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales; y menos, como lo sostiene la autoridad en el oficio de contestación a la demanda, que el planteamiento de la ahora demandante se encontrara dirigido al estudio del principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31 fracción IV de la Constitución.

En las relatadas condiciones, si como ya ha quedado precisado anteriormente, el artículo 34, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 1º de enero del 2004, impide que las autoridades fiscales resuelvan sobre el fondo de las consultas fiscales **ÚNICAMENTE** cuando estas versan sobre la interpretación o aplicación directa de la Constitución Federal, y que en ese sentido, si en dichas consultas se formulara un planteamiento de constitucionalidad, las citadas autoridades sólo se encontrarían obligadas a emitir una resolución en la que se expresaran la imposibilidad jurídica para resolver el fondo de la petición; considerando que en la especie, la ahora actora, en su escrito de consulta, no ha planteado argumento alguno de constitucionalidad, ni ha pretendido que la enjuiciada lleve a cabo la interpretación o aplicación directa de la Constitución Federal, entonces es evidente que esta última, es decir la demandada, **SÍ** se encontraba obligada a emitir resolución sobre el fondo de la consulta planteada.

Queda evidenciado entonces que la resolución impugnada es ilegal, pues se emitió omitiendo cumplir con los requisitos formales que debe contener todo acto de autoridad, actualizándose por tanto la causal de anulación prevista en la fracción II, del artículo 238, del Código Fiscal de la Federación, circunstancia que jurídicamente originaría que se declarara la nulidad lisa y llana de la misma.

(...)

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 236, 237, 238 fracción II, 239 fracción III y último párrafo, 239-A fracciones I inciso b) y II del Código Fiscal de la Federación; y 16 fracción V de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I.- Han resultado **infundadas** las causales de improcedencia planteadas por el C. Director General Adjunto de lo Contencioso Administrativo y Judicial, en suplencia por ausencia del C. Coordinador General Jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en representación del C. Titular de dicha Secretaría de Estado, en el oficio a través del cual formuló alegatos por escrito; en consecuencia,

II.- No es de sobreseerse y no se sobresee el juicio contencioso administrativo que nos ocupa.

III.- La parte actora **probó** su acción; en consecuencia,

IV.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, descrita en el resultando **1º** del presente fallo, por las razones señaladas a lo largo del considerando **QUINTO** del mismo, y para los efectos precisados en la parte final de esta sentencia.

V.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de esta resolución devuélvanse los autos del juicio contencioso administrativo a la Sala Regional que corresponda,

una vez que haya quedado firme o en su caso se resuelva en definitiva el presente asunto y, en su oportunidad archívese este expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sesión de 23 de mayo de 2007, por mayoría de siete votos a favor de los CC. Magistrados Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Jorge Alberto García Cáceres, Francisco Cuevas Godínez, Silvia Eugenia Díaz Vega, Olga Hernández Espíndola, Luis Carballo Balvanera y Luis Malpica y de Lamadrid, un voto con los puntos resolutivos de la C. Magistrada Ma. del Consuelo Villalobos Ortíz y dos votos en contra de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez y Guillermo Domínguez Belloc.

Fue Ponente en el presente asunto la C. Magistrada Olga Hernández Espíndola, cuya ponencia se aprobó con ajustes.

Se formuló el presente engrose el día 14 de junio de 2007, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción VI y 37, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Firman el C. Magistrado Luis Malpica y de Lamadrid, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

PRIMERA SECCIÓN

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-1aS-27

CERTIFICADO DE ORIGEN. CUANDO EN EL JUICIO ES EXHIBIDO EN IDIOMA EXTRANJERO DEBE REABRIRSE LA INSTRUCCIÓN PARA ORDENAR SU TRADUCCIÓN.- Conforme lo dispuesto por el artículo 22, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con los artículos 41, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, este Tribunal está facultado, para decretar en todo tiempo, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre la cuestión efectivamente planteada; por ende, la Sección de la Sala Superior que vaya a resolver el juicio, se encuentra en plena aptitud de reabrir la instrucción en el mismo, cuando el certificado de origen sea exhibido por la demandante en idioma distinto al castellano, para el efecto de ordenar su traducción, con el fin de estar en posibilidad de valorarlo y por consiguiente realizar el pronunciamiento de fondo, en lo atinente al acreditamiento del origen de las mercancías con el objeto de obtener trato arancelario preferencial, o bien, para desvirtuar la obligación del pago de las cuotas compensatorias. (2)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1104/06-20-01-6/595/07-S1-02-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de octubre de 2007, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretaria: Lic. Esmeralda Reyes Durán.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de enero de 2008)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

En virtud de lo anterior, atendiendo a los términos en que la actora expuso su cuarto concepto de impugnación, se evidencia que relacionó en forma directa sus argumentos, entre otros, con el certificado de origen ofrecido como prueba de su parte en el punto 7, del capítulo respectivo del escrito inicial de demanda, el cual también fue exhibido, y mediante el auto de 09 de noviembre de 2006, fue admitido por la Magistrada Instructora, **por lo que dicha prueba deberá analizarse al pronunciarse la sentencia en el presente juicio**.

Sin embargo, **de la revisión realizada a las constancias que integran el expediente del presente juicio, se observa que el mencionado certificado de origen (visible a fojas 57 de autos), se encuentra redactado en idioma distinto al castellano y no está traducido, razón por la cual, esta Juzgadora no está en aptitud de analizarlo y valorarlo, pues resulta necesaria su correspondiente traducción**.

Lo anterior se apoya en el hecho de que la acción ejercida en el juicio contencioso administrativo, conlleva el derecho a la **prueba** como garantía tutelada por el artículo 14 Constitucional, desde el momento en que prevé que nadie puede ser juzgado sin otorgársele una razonable oportunidad para ser oído y para valerse de los medios probatorios previstos por el ordenamiento legal correspondiente, que en el caso lo es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que en su artículo 40, párrafo segundo, señala:

"**ARTÍCULO 40.-** En los juicios que se tramiten ante este Tribunal, el actor que pretende se reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá

probar los hechos de los que deriva su derecho y la violación del mismo, cuando ésta consista en hechos positivos y el demandado sus excepciones.
"**En los juicios que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones y la petición de informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades.**
"(...)"

Como se advierte del numeral transcrito, las partes en el juicio contencioso administrativo tienen derecho a que se les admitan toda clase de pruebas con excepción de la confesional de las autoridades mediante absolución de posiciones y la petición de informes.

Así, el demandante en el juicio contencioso administrativo para acreditar su acción puede ofrecer y aportar las pruebas conducentes y **la Sala respectiva en su caso debe admitirlas y valorarlas una vez desahogadas, pues sostener lo contrario atentaría contra el derecho que tiene todo gobernado a probar los hechos constitutivos de su acción en el procedimiento del juicio, es decir, el derecho del demandante a que el juzgador admita las pruebas que éste ofrezca y sean pertinentes e idóneas para acreditar los hechos en que sus argumentos de impugnación se apoyen, a que dichas pruebas se desahoguen y a que sean valoradas conforme a derecho**.

Lo anterior en razón de que la garantía de audiencia tiene como parte medular el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, las que han sido definidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquéllas etapas o trámites que garantizan una adecuada defensa. De esta manera, **las formalidades esenciales del procedimiento se traducen en una serie de reglas** que permiten a las partes probar los hechos constitutivos de su acción o de sus excepciones y defensas, entre las que se comprenden la oportunidad de ofrecer y exhibir las pruebas en que se

finque la defensa, para los efectos ulteriores procesales como son su desahogo y **valoración**.

Sin que sea óbice para lo anterior el que el certificado de origen ofrecido y exhibido como prueba por la actora en el capítulo correspondiente de su escrito de demanda se hubiera presentado en idioma distinto al castellano, toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 22 fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con los artículos 41, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, aplicable al caso, vigente a partir del 1º de enero de 2006, 79 y 80, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, este Tribunal está facultado para decretar, en todo tiempo la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos, por ende, esta Primera Sección se encuentra en plena aptitud de reabrir la instrucción en el presente juicio, para el efecto de ordenar la traducción al castellano de tal documento y así poder valorarlo y en consecuencia, realizar el pronunciamiento de fondo, ello con el fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, que en el caso es el acreditamiento del origen de las mercancías, con el objeto de obtener trato arancelario preferencial, así como para desvirtuar la obligación del pago de las cuotas compensatorias.

En tal virtud, es procedente reabrir la instrucción en el presente juicio, para el efecto de que se ordene la traducción del citado certificado de origen, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 41, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 79 y 80, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, mismos que establecen, respectivamente, lo siguiente:

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

"**ARTÍCULO 41.-** El Magistrado Instructor, hasta antes de que se cierre la instrucción, para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, podrá

acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos, ordenar la práctica de cualquier diligencia o proveer la preparación y desahogo de la prueba pericial cuando se planteen cuestiones de carácter técnico y no hubiere sido ofrecida por las partes.
"**El magistrado ponente podrá proponer al Pleno o a la Sección, se reabra la instrucción para los efectos señalados anteriormente**."

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

"**ARTÍCULO 79.-** Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos.
"Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes."

"**ARTÍCULO 80.-** Los tribunales podrán decretar, en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos. En la práctica de esas diligencias, obrarán como lo estimen procedente, para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes, y procurando en todo su igualdad."

Resulta aplicable en la especie la jurisprudencia V-J-2aS-13, de la Segunda Sección de esta Sala Superior, publicada en la Revista que publica este Cuerpo Colegiado, Quinta Época, Año V, No. 50., Febrero 2005, página 47, misma que es del tenor literal siguiente:

"**CERTIFICADOS DE ORIGEN EN IDIOMA EXTRANJERO. EFECTO DE LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE SU TRADUCCIÓN.-** El artículo 132 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que todos los documentos exhibidos en idioma distinto al español deberán presentarse con su respectiva traducción. Esa es la regla general; sin embargo, el artículo cuarto, fracción II, último párrafo del Acuerdo por el que se establecen las Normas para la Determinación del País de Origen de Mercancías Importadas y las Disposiciones para su Certificación, en materia de Cuotas Compensatorias, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 30 de agosto de 1994, en relación con el artículo 66 de la Ley de Comercio Exterior dispone, entre otras cosas, que se podrá presentar el certificado de país de origen en inglés, sin necesidad de acompañar una traducción. En tal virtud, con el objeto de no crear inseguridad jurídica colocando trampas procesales que afectan los medios de defensa de los particulares, las normas adjetivas deben interpretarse armonizándolas con las normas sustantivas aplicables al caso. La norma sustantiva permite que el certificado de origen se presente ante la aduana en idioma inglés y la disposición adjetiva obliga al oferente de la documental a exhibirla con su traducción. Por tal motivo, este Tribunal de conformidad con el artículo 230 del Código Fiscal de la Federación puede hacer uso de sus facultades y ordenar la traducción por un perito del Tribunal para auxiliarse en la valoración de la prueba, con el objeto de armonizar ambas disposiciones y lograr así que la norma adjetiva sea acorde a la sustantiva. (8)

"(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/4/2004)"

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 41 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los diversos 79 y 80, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, es de resolverse y se resuelve:

I.- Se decreta la reapertura de la instrucción en el presente juicio contencioso administrativo, para el efecto de que se ordene traducir al español el certificado de

origen que ofreció y exhibió la actora como prueba de su parte, visible a fojas 57 de autos.

II.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de octubre de 2007, por mayoría de cuatro votos a favor de la ponencia, de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, María del Consuelo Villalobos Ortíz, Alejandro Sánchez Hernández y Manuel Luciano Hallivis Pelayo; y un voto en contra del Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, quien se reserva su derecho para formular voto particular.

Fue Ponente en el presente asunto la C. Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz.

Se formuló el presente engrose el 12 de octubre de 2007 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, fracción III, y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el C. Magistrado MANUEL LUCIANO HALLIVIS PELAYO, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. LIC. K'ANTUNIL ALCYONE ARRIOLA SALINAS, Secretaria Adjunta de Acuerdos, que da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1104/06-20-01-6/595/07-S1-02-03.

El Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, se reservó su derecho para formular voto particular en el presente asunto, el cual respetuosamente se manifiesta en los siguientes términos:

V O T O P A R T I C U L A R

En el caso la mayoría decide reabrir la instrucción, con el propósito de traducir el certificado de origen ofrecido por la parte actora como prueba 7 de su intención, pero sin su traducción al español; aplicando para ello la jurisprudencia de la Segunda Sección V-J-2aS-13 de rubro: "**CERTIFICADO DE ORIGEN EN IDIOMA EXTRANJERO. EFECTO DE LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE SU TRADUCCIÓN**" (página 19)

Mi desacuerdo con el fallo mayoritario es porque con esta decisión se pasa por alto lo siguiente:

En primer lugar, en el juicio contencioso administrativo debe existir un equilibrio procesal, lo que significa que la carga de la prueba corresponde a quien afirma conforme a lo dispuesto por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que señala: "*El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones*".

Entonces, si la actora en el juicio contencioso administrativo, manifestó exhibir el certificado de origen con el que, según afirmó, demostraba el origen de la mercancía que importó, resulta que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el diverso 271 debió exhibir el certificado de origen citado con su correspondiente traducción al español, y al no cumplirse con este deber el juzgador debió darle la consecuencia que indica la tesis del Poder Judicial que a continuación se transcribe:

"Registro No. 196779
"Localización:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"VII, Febrero de 1998

"Página: 492
"Tesis: II.A.23 A
"Tesis Aislada
"Materia(s): Administrativa

"**DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO. MEDIO DE PRUEBA EN MATERIA ADMINISTRATIVA.-** En todo documento que se encuentre redactado en **idioma extranjero** y pretenda utilizarse como medio de prueba en materia administrativa, el interesado que lo ofrezca estará obligado a presentar la traducción al castellano, en caso contrario, carece de valor probatorio.

"TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

"Amparo directo 223/97. Camerino Ledezma Ledezma. 27 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Darío Carlos Contreras Reyes. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez.

"Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 97-102, Cuarta Parte, página 89, tesis de rubro: 'DOCUMENTOS REDACTADOS EN IDIOMA EXTRANJERO. DEBEN EXHIBIRSE CON LA TRADUCCIÓN RESPECTIVA.' "

De igual manera sirve de apoyo, por analogía, la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 97-102, Cuarta Parte, página 89, cuyo rubro y texto son los siguientes:

"**DOCUMENTOS REDACTADOS EN IDIOMA EXTRANJERO. DEBEN EXHIBIRSE CON LA TRADUCCIÓN RESPECTIVA.-** La autoridad responsable no puede darle valor probatorio a documentos exhibidos

como pruebas que se encuentran redactados en idioma extranjero, si la oferente no cumple procesalmente con los requisitos que señalan los artículos 56, 329 y 330 del Código de Procedimientos Civiles. Para que la autoridad responsable otorgue algún valor probatorio a un documento proveniente de tercero, no objetado por la contraparte y redactado en idioma extranjero, es necesario que previamente la oferente acompañe la traducción respectiva del mismo, para que su contraparte no quede en estado de indefensión; si no es así, la Sala responsable no viola en perjuicio de dicha oferente los artículos 335 y 340 del Código de Procedimientos Civiles, al no concederle valor probatorio alguno al referido instrumento probatorio.

"Amparo directo 4021/76. Teresa Zaga Rayek de Micha. 25 de abril de 1977. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Raúl Cuevas Mantecón. Secretario: Salvador Castro Zavaleta."

Asimismo, sirve de apoyo la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Tomo CIX, Cuarta Parte, página 50, que expresamente indica:

"**DOCUMENTOS SIMPLES REDACTADOS EN IDIOMA EXTRANJERO, CUANDO NO SE PRESENTAN CON SU TRADUCCIÓN AL CASTELLANO.-** Aun cuando los documentos simples no objetados se consideran tácitamente reconocidos, cuando están redactados en idioma extranjero, se perjudican si no se presenta su traducción al español, pues de otro modo los interesados no están en aptitud de adquirir un conocimiento preciso e indubitable acerca de su contenido, y del acto jurídico que consignan, para poder objetarlos; de lo contrario no se surte el presupuesto de la tesis jurisprudencial número 171, página 523, Cuarta Parte del Apéndice de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, que a la falta de objeción por la parte a quien perjudican enlaza la consecuencia del reconocimiento tácito de los documentos privados provenientes de terceros.

"Amparo directo 3643/63. Industrial Algodonera del Fuerte, S. A. 20 de julio de 1966. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela."

De igual manera, sirve de apoyo la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXIV, página 203, que es del tenor siguiente:

"**DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO.-** Los documentos redactados en idioma extranjero, y presentados como prueba en el juicio de amparo, no deben ser tomados en consideración cuando carezcan de la traducción que ordena el artículo 265 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

"Amparo administrativo en revisión 2597/39. González Caballero Antonio. 3 de abril de 1940. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Agustín Gómez Campos. La publicación no menciona el nombre del ponente."

Igualmente sirve de apoyo la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXI, página 3133, que a la letra señala:

"**DOCUMENTOS PRIVADOS EN IDIOMA EXTRANJERO.-** Los documentos privados exhibidos como prueba en un juicio, no pueden merecer crédito alguno, si están redactados en idioma extranjero, y no se presenta traducción legal.

"Amparo civil en revisión 7698/38. Suárez Antonio. 21 de agosto de 1939. Unanimidad de cuatro votos. El Ministro Luis Bazdresch, no intervino en la discusión de este asunto, por las razones que constan en el acta del día. La publicación no menciona el nombre del ponente."

Finalmente, sirve también de apoyo la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, Octubre de 1992, página 324, y que expresamente señala lo siguiente:

> "**DOCUMENTAL EXHIBIDA EN IDIOMA EXTRANJERO. DEBE APORTARSE SU TRADUCCIÓN.-** La interpretación del artículo 132 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, conforme al artículo 2o. de la Ley de la Materia, permite sostener que es imprescindible que al exhibir un documento en idioma extranjero, se presente también su traducción al idioma oficial en nuestro país, que es el español, porque tal traducción requiere de conocimientos técnicos que la ley no exige al juzgador. De otra manera se impide a éste la adecuada apreciación de la documental.
>
> "TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
>
> "Amparo en revisión 210/92. Julián Marquina Betancourt. 12 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Torres Medina de González. Secretaria: Claudia Adriana Vega González."

En cambio, al resolver como lo hizo la mayoría, de ordenar reabrir la instrucción para que se realizara la traducción del certificado de origen que exhibió la actora en un idioma distinto al español, se sustituyó en la demandante respecto de la carga de la prueba que aquélla le correspondía, lo que rompe con el equilibrio procesal y con la imparcialidad del juzgador.

En segundo lugar, la decisión que tomó la mayoría de reabrir la instrucción la realizó aplicando la jurisprudencia V-J-2aS-13 de la Segunda Sección de la Sala Superior, jurisprudencia que si bien hace referencia al efecto de la falta de presentación de la traducción de un certificado de origen en idioma extranjero, también lo es que del contenido de la misma se advierte que se encuentra constreñida a la materia de

cuotas compensatorias, ya que señala que el Acuerdo por el que se establecen las Normas para la Determinación del País de Origen de Mercancías Importadas y las Disposiciones para su Certificación en Materia de cuotas compensatorias publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1994, permite que el certificado de origen se presente ante la aduana en idioma inglés y la disposición adjetiva como lo es el artículo 132 del Código Federal de Procedimientos Civiles, obliga al oferente de la documental a exhibirla con su traducción, por lo que la Segunda Sección razonó en dicha jurisprudencia que para armonizar ambas disposiciones y lograr así que la norma adjetiva fuera acorde a la sustantiva, el Tribunal tenía que hacer uso de la facultad conferida por el artículo 230 del Código Fiscal de la Federación, para ordenar la traducción por un perito del Tribunal para auxiliarse en la valoración de la prueba.

Lo anterior evidencia que la materia de cuotas compensatorias a que hace referencia la jurisprudencia que sustenta el fallo de la mayoría, no es la materia de que se trata el acto impugnado en el juicio, por lo que en todo caso, la aplicación de la misma debió realizarse por analogía, pero no en forma directa.

Por último, la mayoría no tomó en cuenta que la facultad que el artículo 230 del Código Fiscal de la Federación, ahora 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, otorga al Magistrado Instructor, de acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los hechos controvertidos, o de proveer sobre la preparación y desahogo de la prueba pericial, es cuando la prueba o el documento no haya sido exhibido, o cuando respecto de la prueba exhibida se planteen cuestiones de carácter técnico, lo que no sucedió en el caso, pues la pretensión de la actora fue demostrar con el certificado de origen exhibido, el origen de la mercancía y la autoridad, que no se tomara en cuenta el certificado de origen porque no fue exhibido en el procedimiento administrativo.

Por lo tanto, la mayoría debió calificar la prueba como fue exhibida y no mandarla a perfeccionar y si se requería la traducción del certificado de origen exhibido por la actora, se debió decretar la prueba pericial correspondiente a la traduc-

ción dando oportunidad a las partes que designaran a sus peritos y que sólo interviniera el perito de este Tribunal en su calidad de perito tercero en discordia, pues de no hacerlo de esta forma impidió a las partes en el juicio objetar el valor probatorio de la prueba dejándolas en estado de indefensión.

Además de que no debe perderse de vista que la autoridad sólo está facultada para actuar dentro de los límites que la propia ley le concede y no ir más allá, por lo que si el artículo 41 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo únicamente faculta al Magistrado Ponente el proponer al Pleno o a la Sección se reabra la instrucción para poder acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los hechos controvertidos en el juicio, ordenar la práctica de cualquier diligencia o proveer la preparación y desahogo de la prueba pericial cuando se planteen cuestiones de carácter técnico y no hubiese sido ofrecida por las partes, lo que no sucedió en el caso, resulta ser entonces que la juzgadora ejerció una facultad que no le ha sido conferida por la ley.

Es aplicable al caso la jurisprudencia número 100, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 65, que a la letra señala:

> "**AUTORIDADES.-** Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite"

Entonces, concluyo que la actuación de la mayoría en el fallo, rompe con el equilibrio procesal que debe existir entre las partes del juicio contencioso administrativo, además de que deja de existir la imparcialidad que como principio debe revestir la actuación del Juzgador.

MAG. JORGE ALBERTO GARCÍA CÁCERES

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-1aS-28

RECURSO DE RECLAMACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA RECAÍDA AL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CRÉDITO IMPUGNADO. QUEDA SIN MATERIA SI DURANTE SU TRAMITACIÓN SE RESUELVE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.- Del Título II, Capítulo III, "De las medidas Cautelares" de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, particularmente de los artículos 24, 25, 26, 27 y 28, se desprende que las medidas cautelares que se dictan en el juicio contencioso administrativo federal tienen la característica de ser incidentales, es decir, secundarias y accesorias al juicio principal, que éstas se tramitan por cuerda separada y que su finalidad cuando proceden es la de mantener las cosas en el estado en que se encontraban al momento de promoverlas, a fin de conservar la situación de hecho existente para proteger la materia del juicio, en tanto se dicte la sentencia correspondiente o se ponga fin al juicio por alguna otra causa, con objeto de evitar que con la ejecución del acto controvertido quede sin materia el proceso. En razón de lo anterior, es válido concluir que, la suspensión de la ejecución del acto impugnado prevista en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tiene la misma finalidad, ya que se trata de una especie de las referidas medidas cautelares que son de naturaleza accesoria al juicio principal del que dependen y consecuentemente seguirán la suerte de éste; es decir, si el juicio se extingue, las medidas cautelares también dejan de existir, pues por lógica jurídica, no sería aceptable que *per ser,* pudieran tener el alcance de anular la nueva situación creada con motivo de la sentencia pronunciada en el juicio correspondiente. En esa tesitura, si durante la tramitación del recurso de reclamación, interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria que haya decidido la suspensión definitiva solicitada en la demanda, es resuelto el juicio, incluso por sobreseimiento firme atendiendo al desistimiento expreso de la actora, el citado recurso deberá declararse sin materia, lo cual resulta inconcuso al carecer de objeto la

controversia, porque la cuestión de fondo ha sido resuelta, o bien, porque el juicio ha sido sobreseído. (3)

Recurso de Reclamación Núm. 187/07-03-01-6/1023/07/S1-02-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 28 de febrero de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretaria: Lic. María de Lourdes Vázquez Galicia.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de abril de 2008)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

Esta Primera Sección estima que si bien resulta procedente el recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia interlocutoria de 29 de enero de 2007, emitida por la Sala Regional del Noroeste III de este Tribunal, **debe declararse sin materia** en atención a las siguientes consideraciones de derecho:

En principio, se precisa que el 1° de diciembre de 2005, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuyo Capítulo III regula las medidas cautelares que pueden promoverse en los juicios que se interpongan ante este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente a partir del 1º de enero de 2006.

Asimismo, no debe perderse de vista que la normatividad para la tramitación y resolución de tales medidas cautelares, incluyendo el incidente de suspensión de la

ejecución del acto impugnado, se encuentran en el Título II, Capítulo III, "De las medidas Cautelares" de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, particularmente en los artículos 24, 25, 26, 27 y 28, que establecen:

"**Artículo 24.- Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, pueden decretarse todas las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente, que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor, salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.**

"**I. El escrito en donde se soliciten las medidas cautelares señaladas, deberá contener los siguientes requisitos:**

"**a)** Nombre y domicilio para oír notificaciones en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando el solicitante tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala Regional competente, en cuyo caso, el domicilio señalado para tal efecto deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala competente.

"**b)** Resolución que se pretende impugnar y fecha de notificación de la misma.

"**c)** Los hechos que se pretenden resguardar con la medida cautelar, y

"**d)** Expresión de los motivos por los cuales solicita la medida cautelar que se solicita.

"**II. Con el escrito de solicitud de medidas cautelares, se anexarán los siguientes comentarios:**

"**a)** El que pida la medida cautelar deberá acreditar el derecho que tiene para gestionar la necesidad de la medida que solicita, y

"**b)** Una copia del escrito mencionado por cada una de las partes que vayan a participar en el juicio, para correrles traslado.

"En caso de no cumplir con los requisitos de las fracciones I y II, se tendrá por no interpuesto el incidente.

"El Magistrado Instructor podrá ordenar una medida cautelar, cuando considere que los daños que puedan causarse sean inminentes. En los casos en que se pueda causar una afectación patrimonial, el Magistrado Instructor exigirá

una garantía para responder de los daños y perjuicios que se causen con la medida cautelar.

"En los demás casos que conozca la Sala Regional, ésta podrá dictar las medidas cautelares cuando las pida el actor pero deberá motivar cuidadosamente las medidas adoptadas; para ello, el particular justificará en su petición las razones por las cuales las medidas son indispensables."

"**Artículo 25.-** En el acuerdo que admita el incidente de petición de medidas cautelares, el Magistrado Instructor ordenará correr traslado a quien se impute el acto administrativo o los hechos objeto de la controversia, pidiéndole un informe que deberá rendir en un plazo de tres días. Si no se rinde el informe o si éste no se refiere específicamente a los hechos que le impute el promovente, dichos hechos se tendrán por ciertos. En el acuerdo a que se refiere este párrafo, el Magistrado Instructor resolverá sobre las medidas cautelares previas que se le hayan solicitado.

"**Dentro del plazo de cinco días contados a partir de que haya recibido el informe o de que haya vencido el término para presentarlo, la Sala Regional dictará resolución definitiva en la que decrete o niegue las medidas cautelares solicitadas, decida, en su caso, sobre la admisión de la garantía ofrecida, la cual deberá otorgarse dentro de un plazo de tres días. Cuando no se otorgare la garantía dentro del plazo señalado, las medidas cautelares dejarán de tener efecto.**

"**Mientras no se dicte sentencia definitiva, la Sala Regional que hubiere conocido del incidente, podrá modificar o revocar la resolución que haya decretado o negado las medidas cautelares, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique.**

"Si el obligado por las medidas cautelares no da cumplimiento a éstas o la autoridad no admite la garantía, la Sala declarará, en su caso, la nulidad de las actuaciones realizadas con violación a dichas medidas e impondrá al renuente una multa por el monto equivalente de uno a tres tantos del salario mínimo general del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, elevado al mes, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor pú-

blico de que se trate, su nivel jerárquico, así como las consecuencias que el no acatamiento de la suspensión hubiere ocasionado cuando el afectado lo señale. En este caso, el solicitante tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios, la que, en su caso, correrá a cargo de la unidad administrativa en la que preste sus servicios el servidor público."

"**Articulo 26.-** La Sala Regional podrá decretar medidas cautelares positivas, entre otros casos, cuando, tratándose de situaciones jurídicas duraderas, se produzcan daños substanciales al actor o una lesión importante del derecho que pretende, por el simple transcurso del tiempo."

"**Articulo 27.-** En los casos en los que las medidas cautelares puedan causar daños a terceros, la Sala Regional las ordenará siempre que el actor otorgue garantía bastante para reparar mediante indemnización el daño y los perjuicios que con aquéllas pudieran causarse si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Si no es cuantificable la indemnización respectiva, la Sala Regional fijará discrecionalmente el importe de la garantía.
"Las medidas cautelares podrán quedar sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para indemnizar los daños y perjuicios que pudieran causarse por subsistir las medidas cautelares previstas.
"Por su parte, la autoridad puede obligarse a resarcir los daños y perjuicios que se pudieran causar al particular; en cuyo caso, el Tribunal, considerando cuidadosamente las circunstancias del caso, puede no dictar las medidas cautelares. En este caso, si la sentencia definitiva es contraria a la autoridad, la Sala Regional, la Sección o el Pleno debe condenarla a pagar la indemnización administrativa correspondiente."

"**Articulo 28.- El demandante, podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, cumpliendo con los siguientes requisitos.**

"**I. Podrá solicitarla en la demanda o en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia, ante la Sala de conocimiento del juicio.**
"II. Acompañar copias de la promoción en la que solicite la suspensión y de las pruebas documentales que ofrezca, para correr traslado a cada una de las partes y una más para la carpeta de suspensión.
"III. Ofrecer, en su caso, las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de garantía, a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora y, si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución, únicas admisibles en la suspensión.
"IV. Ofrecer garantía suficiente mediante billete de depósito o póliza de fianza expedida por institución autorizada, para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que pudieran ocasionarse a la demandada o a terceros con la suspensión si no se obtiene sentencia favorable en el juicio contencioso administrativo.
"V. Los documentos referidos deberán expedirse a favor de la otra parte o de los terceros que pudieran tener derecho a la reparación del daño o a la indemnización citadas.
"**VI.** Tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, **procederá la suspensión del acto reclamado**, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal **ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables**.
"El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos:
"a) Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso, y
"b) Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito.
"**VII. Exponer en el escrito de solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, las razones por las cuáles considera que debe otorgar-**

se la medida y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite.

"VIII. La suspensión se tramitará por cuerda separada y con arreglo a las disposiciones previstas en este Capítulo.

"IX. El Magistrado Instructor, en el auto que acuerde la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, podrá decretar la suspensión provisional, siempre y cuando con ésta no se afecte al interés social, se contravenga disposiciones de orden público o quede sin materia el juicio, y se esté en cualquiera de los siguientes supuestos:

"a) Que no se trate de actos que se hayan consumado de manera irreparable.

"b) Que se le causen al demandante daños mayores de no decretarse la suspensión, y

"c) Que sin entrar al análisis del fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto administrativo impugnado.

"X. El auto que decrete o niegue la suspensión provisional, podrá ser impugnado por las autoridades demandadas mediante el recurso de reclamación previsto en el artículo 59 de esta Ley, dejando a salvo los derechos del demandante para que lo impugne en la vía que corresponda.

"XI. En el caso en que la ley que regule el acto administrativo cuya suspensión se solicite, no prevea la solicitud de suspensión ante la autoridad ejecutora, la suspensión tendrá el alcance que indique el Magistrado Instructor o la Sala y subsistirá en tanto no se modifique o revoque o hasta que exista sentencia firme.

"XII. Mientras no se dicte sentencia en el juicio, la Sala podrá modificar o revocar la sentencia interlocutoria que haya decretado o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique.

"XIII. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia firme favorable, la Sala ordenará la cancelación o liberación, según el caso, de la garantía otorgada.

"Asimismo, si la sentencia firme le es desfavorable, a petición de la contraparte o, en su caso, del tercero, y previo acreditamiento que se causaron perjui-

cios o se sufrieron daños, la Sala, ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante el Tribunal.
"XIV. Si la solicitud de suspensión de la ejecución es promovida por la Autoridad demandada por haberse concedido en forma indebida."

(Lo resaltado es de esta Juzgadora)

De los preceptos legales transcritos, se advierte que una vez iniciado el juicio pueden decretarse todas las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente, que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor, salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés social o se contravengan las disposiciones de orden público; y que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que se haya recibido el informe correspondiente o de que haya vencido el término para presentarlo, la Sala Regional dictará resolución definitiva en la que decrete o niegue las medidas cautelares solicitadas. Asimismo, que **mientras no se dicte sentencia en el juicio, la Sala podrá modificar o revocar la sentencia interlocutoria que haya decretado o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique**.

En el artículo 28 de la citada Ley, se establece en lo general que el demandante podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, cumpliendo diversos requisitos y, como caso de excepción, la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos al cobro de créditos de naturaleza fiscal, ante este Tribunal, misma que procederá y surtirá efectos si se ha constituido garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora.

En relación a lo anterior, se hace notar que en la carpeta relativa al recurso de reclamación que nos ocupa, corre agregada copia certificada de la sentencia interlocutoria de fecha 29 de enero de 2007, por lo que es conveniente conocer los

motivos y fundamentos expuestos por la Sala Instructora en el juicio para conceder la suspensión, que se reproducen en la parte considerativa que es de nuestro interés:

"(...)

"**CONSIDERANDO**

"**PRIMERO.-** Es competente esta Sala para conocer del presente juicio en términos de lo ordenado por los artículos 11, fracción I, 27, 28, fracción I, 29, 30, 31 y demás relativos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 23, fracción III y 24, fracción III del Reglamento Interior de este Tribunal.

"**A juicio de los suscritos Magistrados que integran este Órgano Jurisdiccional, la suspensión de la ejecución del acto impugnado que solicita la parte actora es procedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 del mencionado ordenamiento legal**, con base en las siguientes consideraciones:

"El artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece lo siguiente:

" '**ARTÍCULO 28.-** (Se transcribe)'

"**TERCERO.-** (sic) La suspensión de la ejecución de la resolución impugnada fue solicitada por el demandante en los siguientes términos:

" '(...) **EN BASE A LO EXPUESTO SOLICITO SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO DE COBRO RESPECTO DEL CRÉDITO DE REFERENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LO CUAL RESULTA PROCEDENTE TODA VEZ QUE SE ENCUENTRAN CUBIERTOS LOS EXTREMOS DE DICHO ARTÍCULO, YA QUE SE SOLICITA POR ESCRITO Y SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE**

GARANTIZADO EL INTERÉS FISCAL DEL CRÉDITO REQUERIDO A TRAVÉS DEL EMBARGO PRACTICADO A LAS CUENTAS BANCARIAS ABIERTAS A NOMBRE DE MI MANDANTE EN FECHA 09 DE ENERO DEL 2007, CON LO QUE SE GARANTIZA SUFICIENTEMENTE EL INTERÉS FISCAL. POR LO QUE DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN VII Y PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, TRATÁNDOSE DE LA SOLICITUD DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES, PROCEDERÁ LA SUSPENSIÓN PREVIO DEPÓSITO DE LA CANTIDAD QUE SE ADEUDE ANTE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN O DE LA ENTIDAD FEDERATIVA QUE CORRESPONDA, EXCEPTO, ENTRE OTROS SUPUESTOS, CUANDO PREVIAMENTE SE HAYA CONSTITUIDO LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA, Y EN EL CASO, COMO QUEDÓ DE MANIFIESTO, YA SE ENCUENTRA GARANTIZADO EL INTERÉS FISCAL, POR LO QUE **LA GARANTÍA HA QUEDADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 141 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN**, POR LO QUE RESULTA PROCEDENTE QUE SE DECRETE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN SOLICITADA (...)’

“A juicio de los suscritos Magistrados que integran este Órgano Jurisdiccional, **la suspensión de la ejecución de los actos impugnados que solicita la parte actora es procedente con base en lo siguiente**:

“Ahora bien, el artículo 2°, fracciones I, II, III y IV del Código Fiscal de la Federación, señala que son contribuciones las siguientes:

“ ‘**ARTÍCULO 2o**.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:

“ ‘**I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este artículo.**

“ ‘II. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

“ ‘III. Contribuciones de mejoras son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

“ ‘IV. Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

“ ‘Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad social a que hace mención la fracción II, las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de seguridad social.

“ ‘**Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este Código son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas. Siempre que en este Código se haga referencia únicamente a contribuciones no se entenderán incluidos los accesorios, con excepción de lo dispuesto en el artículo 1o.**’

“**(Lo resaltado es de esta Juzgadora)**

"A su vez, el artículo 4° del Código Fiscal de la Federación, establece que son créditos fiscales los siguientes:

" '**ARTÍCULO 4o.- Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado** o sus organismos descentralizados **que provengan** de contribuciones, **de aprovechamientos o de sus accesorios**, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena'.

"**(Lo resaltado es de esta Juzgadora)**

"El artículo 3° del Código Fiscal de la Federación, establece que son aprovechamientos los siguientes:

" '**ARTÍCULO 3o.- Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones**, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.
" 'Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este Código, que se apliquen en relación con aprovechamientos, son accesorios de éstos y participan de su naturaleza.
" 'Son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado.'

"**(Lo resaltado es de esta Juzgadora)**

"**De conformidad con los preceptos citados, tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fis-**

cal, procederá la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal.

"Ahora bien, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en contra del cobro de contribuciones o de créditos de naturaleza fiscal, procederá la suspensión, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal, ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, por lo que para que proceda la suspensión del acto impugnado se requiere cumplir con el requisito antes indicado, ya que el mismo es necesario cuando la suspensión se solicite respecto de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal.

"Con base en los planteamientos antes señalados y en virtud de haber realizado un estudio en lo referente a la suspensión de la ejecución del acto reclamado que solicita la hoy accionante, esta Juzgadora advierte a foja 28 de autos, el acto impugnado, del cual se desprende que se practicó embargo a cargo de la sociedad actora, llevado a cabo para hacer efectivo el crédito fiscal descrito en el resultando primero de esta resolución, donde se señaló lo siguiente:

" '**procedo a señalar para embargo en general, todas y cada una de las cuentas bancarias a favor del contribuyente que se encuentre en cualquier institución bancaria o de crédito, en esta ciudad, Estado o en el País, ya sean en moneda nacional y/o extranjera, hasta en tanto cubra el importe del crédito requerido, el 252770, designándose como depositario de las mismas a la persona a cuyo nombre se encuentren autorizadas, ya sea en carácter de apoderado o representante legal del cuentahabiente, hasta en tanto las mismas no sean congeladas o suspendidas, quedando en este acto formalmente embargadas. CONSTE.**'

"**De lo anterior, podemos deducir que en la especie el crédito fiscal que se pretende hacer efectivo en el acto impugnado ha quedado debidamente garantizado ante la autoridad exactora, que en este caso lo es la**

Administración Local de Recaudación de los Mochis, al haber sido embargadas diversas cuentas bancarias de la empresa actora, considerando esta Sala que con ello queda constituida la garantía del interés fiscal, en términos de la fracción VI, del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, situación por la cual, este Cuerpo Colegiado resuelve otorgar LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de la ejecución del acto impugnado antes mencionado.

"Resulta aplicable en la especie, la tesis aislada sustentada en la Quinta Época, por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual aparece publicada en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, número 23, Año II, del mes de noviembre de 2002, página 166, cuyo contenido es:

"'**SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. EL EMBARGO PRACTICADO POR LA AUTORIDAD EJECUTORA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN GARANTIZA EL INTERÉS FISCAL, SIEMPRE QUE LOS BIENES EMBARGADOS SEAN SUFICIENTES PARA CUBRIR EL TOTAL DEL ADEUDO.-** (Se transcribe)'

"Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

"**I.-** Es procedente la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio en que se actúa, en consecuencia;

"**II.- Se concede la suspensión definitiva de la ejecución de la resolución impugnada precisada en el Resultando Primero del presente fallo, en los términos precisados en el considerando Segundo del presente fallo.**

"**III.- NOTIFÍQUESE.**
"(...)"

(Lo resaltado es de esta Juzgadora)

Como se observa de lo transcrito, la Sala Regional del Noroeste III resolvió otorgar la suspensión definitiva de la ejecución respecto del crédito fiscal número 252770, cuyo cobro pretendió realizar a través de los actos del procedimiento administrativo económico coactivo, combatidos en juicio, ya que consideró que tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, procederá la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal, lo cual acontece en este caso; suspensión que es tan sólo una especie dentro de las medidas cautelares que proceden en el juicio contenciosos administrativo que prevé la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia V-J-1aS-15 de esta Primera Sección cuyo rubro y texto se transcriben a continuación**:**

"**V-J-1aS-15**

"**SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.- ES UNA ESPECIE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES REGULADAS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.-** La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo regula en su Capítulo III las medidas cautelares que pueden promoverse en los juicios que se interpongan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por su parte, el artículo 28 del invocado ordenamiento establece las reglas para la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, por lo que se puede concluir que dicha medida cautelar es tan sólo una de las que proceden en el juicio conten-

cioso administrativo; por ende, para interpretar el artículo 28 del ordenamiento en comento, debe partirse del hecho de que las medidas cautelares en el juicio contencioso administrativo federal, al tenor del primer párrafo del artículo 24 de la ley en cita, se dictan con la finalidad de mantener la situación de hecho existente a fin de evitar que con la ejecución del acto controvertido quede sin materia el proceso, motivo por el que se puede concluir que la suspensión de la ejecución del acto reclamado -que regula el numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo- tiene como finalidad mantener las cosas en el estado en que se encontraban al momento de promover la citada medida cautelar, para proteger la materia del juicio contencioso administrativo respectivo, en tanto se dicte la sentencia correspondiente. (2)

"(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-5/2007)
"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 77. Mayo 2007. p. 31"

En virtud de lo anterior se puede concluir que las medidas cautelares que se dictan en el juicio contencioso administrativo federal tienen la característica de ser incidentales, es decir, secundarias y accesorias al juicio principal, que se tramitan incluso por cuerda separada, cuya única razón de ser, cuando proceden, es la de mantener las cosas en el estado en que se encontraban al momento de promoverlas, a fin de conservar la situación de hecho existente para proteger la materia del juicio contencioso administrativo respectivo, **en tanto se dicte la sentencia correspondiente o se ponga fin al juicio**, a fin de evitar que con la ejecución del acto controvertido quede sin materia el proceso, motivo por el cual, es válido concluir que la suspensión de la ejecución del acto impugnado prevista en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tiene la misma finalidad, ya que se trata de una especie de las medidas cautelares que proceden en el juicio contencioso administrativo federal y éstas tienen naturaleza accesoria, que seguirán la suerte del juicio principal, es decir, si se extingue el juicio del que dependen, las medidas cautelares forzosamente tienen que dejar de existir también, ya que no sería aceptable que pudieran tener el alcance de anular la nueva situación creada con motivo de la sentencia pronunciada en el juicio del cual dependen, pues debemos recor-

dar que la única finalidad de las medidas cautelares, como en la especie lo es la suspensión de la ejecución del acto impugnado, es la de conservar la materia del juicio principal hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva o concluya ésta por alguna otra causa.

(...)

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 23, fracción VIII, de la Ley Orgánica de este Tribunal en vigor, 24, 25, 28, 59, 62, 67, 70, 74, fracciones I y II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y demás disposiciones aplicables, esta Primera Sección de la Sala Superior, resuelve:

R E S O L U T I V O S

I.- Es procedente el recurso de reclamación interpuesto por el Administrador Local Jurídico de Culiacán, en contra de la sentencia interlocutoria de 29 de enero de 2007, dictada por la Sala Regional del Noroeste III, que otorgó la suspensión definitiva de la ejecución de la resolución impugnada, precisada en el resultando primero de este fallo.

II.- Se declara sin materia el recurso de reclamación referido en el resolutivo anterior.

III.- Envíese copia autorizada de la presente a la Sala Regional del Noroeste III, para que sea integrada a la carpeta de suspensión correspondiente.

IV.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 28 de febrero de 2008, por unanimidad de cinco votos a favor de la ponencia de los CC. Magistrados Luis Humberto

Delgadillo Gutiérrez, María del Consuelo Villalobos Ortíz, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Alejandro Sánchez Hernández y Jorge Alberto García Cáceres.

Fue Ponente en este asunto la C. Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, cuya ponencia fue aprobada en sus términos.

Se elaboró el presente engrose el 5 de marzo de 2008, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente a partir del 7 de diciembre de 2007. Firma el C. Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Licenciada Virginia Pétriz Herrera, Secretaria Adjunta de Acuerdos de la Primera Sección, quien da fe.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI-P-1aS-29

MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE LA SOLICITADA PARA QUE NO SE PUBLIQUE EN LA GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA CUAL EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NEGÓ LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA.- Los artículos 125 y 126 de la Ley de la Propiedad Industrial establecen que concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título correspondiente, pero en caso de que se niegue el registro, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución, es decir, que sólo en el caso de autorizarse el registro de la marca se expide el título correspondiente, por ello, de acuerdo con el artículo 127 de la Ley de la Propiedad Industrial serán las resoluciones sobre registros de marcas y sus renovaciones las que deban publicarse en la Gaceta de la Propiedad Industrial, esto es, serán los títulos que amparan el registro mismo de las marcas y los que las renueven, los que deban publicarse en la Gaceta, pues ello es necesario a fin de que tales resoluciones surtan efectos frente a terceros; mientras que de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 125 referido, cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial niegue el registro de la marca, sólo está obligado a comunicarlo por escrito al solicitante, lo que permite advertir que la resolución que niega el registro culmina con una comunicación por escrito al solicitante, a diferencia de la resolución que lo autoriza, pues esta última concluye con la expedición del título que protege el signo distintivo, mismo que por ser constitutivo de derechos debe publicarse en la Gaceta de la Propiedad Industrial. La consideración que precede se robustece por lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial que ordena publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial además de los actos, documentos y signos que deban publicarse con arreglo a la Ley, las resoluciones que afecten o modifiquen los derechos de propiedad industrial tutelados por la Ley, pero en el caso la resolución impugnada no afecta ni modifica ningún derecho de propiedad indus-

trial, pues simplemente se decide negar el registro marcario solicitado por el actor, lo que para surtir efectos no requiere de publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, sino que bastan sus efectos declaratorios mediante comunicación por escrito notificada al interesado, consecuentemente, si el propósito de pedir la suspensión es que no se publique en la Gaceta de la Propiedad Industrial la resolución que negó la solicitud de registro de una marca, es improcedente otorgar la medida cautelar puesto que no existe el efecto por suspender. (4)

Recurso de Reclamación Núm. 26993/07-17-02-1/267/08-S1-04-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de abril de 2008, por mayoría de 3 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Tesis aprobada por unanimidad de votos.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretaria: Lic. Rossina Montandon Spinoso.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de abril de 2008)

PRECEDENTE:

VI-P-1aS-13
Recurso de Reclamación Núm. 15580/06-17-10-5/911/07-S1-04-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de febrero de 2008, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. Francisco Enrique Valdovinos Elizalde.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de febrero de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 4. Abril 2008. p. 62

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-1aS-30

COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, CONFORME A SU LEY ORGÁNICA VIGENTE A PARTIR DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2007.- En términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente a partir del 7 de diciembre de 2007, para determinar la Sala competente de este Tribunal, que deba conocer del juicio por razón de territorio, debe atenderse al domicilio fiscal del demandante, por lo que de contarse en autos con los elementos suficientes para determinar dónde se encuentra ese domicilio, será competente la Sala dentro de cuya jurisdicción se localice el domicilio fiscal del actor, conforme lo establece el primer párrafo del precepto legal en comento, luego entonces, sólo sería aplicable el último de los párrafos de dicho numeral, en aquellos casos en los que no se desprenda de autos los elementos necesarios para determinar el domicilio fiscal del demandante. (5)

Incidente de Incompetencia Núm. 100/08-13-02-4/1954/08-11-01-3/418/08-S1-0406.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de abril de 2008, por mayoría de 3 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Tesis aprobada por unanimidad de 4 votos.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. Jorge Carpio Solís.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de abril de 2008)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

Ahora bien, en los términos del artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en vigor a partir del 7 de diciembre de 2007, la competencia territorial de las Salas Regionales se determina atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, con las excepciones previstas en las fracciones I, II y III.

El artículo referido en el párrafo precedente es del tenor literal siguiente:

"**ARTÍCULO 34.-** Las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, excepto cuando:
"I. Se trate de personas morales que:
"a. Formen parte del sistema financiero, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o
"b. Tengan el carácter de controladoras o controladas, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, y determinen su resultado fiscal consolidado.
"II. El demandante resida en el extranjero y no tenga domicilio fiscal en el país, y
"III. Se impugnen resoluciones emitidas por la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria o por las unidades administrativas adscritas a dicha Administración General.
"En los casos señalados en estas fracciones, será competente la Sala Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad que haya dictado la resolución impugnada y, siendo varias las resoluciones impugnadas, la Sala Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad que pretenda ejecutarlas.
"Cuando el demandante resida en territorio nacional y no tenga domicilio fiscal, se atenderá a la ubicación de su domicilio particular.

> "Si el demandante es una autoridad que promueve la nulidad de alguna resolución administrativa favorable a un particular, será competente la Sala Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad actora.
> "Se presumirá que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal salvo que la parte demandada demuestre lo contrario."

Del numeral supratranscrito se desprende que, los casos de excepción previstos en las fracciones I, II y III, del precepto legal en comento, no son aplicables en el presente asunto, en tanto que las mismas se refieren a personas morales que formen parte del sistema financiero, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta (fracción I, punto a); tengan el carácter de controladoras o controladas, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, y determinen su resultado fiscal consolidado (fracción I, punto b); el demandante resida en el extranjero y no tenga domicilio fiscal en el país (fracción II); se impugnen resoluciones emitidas por la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria o por las unidades administrativas adscritas a dicha Administración General (fracción III), sin que se actualice alguno de dichos supuestos en el caso particular, pues del estudio integral de los autos que conforman el juicio en que se actúa, no se desprenden elementos para arribar a tal conclusión, pues la empresa actora no forma parte del sistema financiero, ni existe señalamiento alguno de que tenga el carácter de controladora o controlada, por lo que se dice que no le resultan aplicables los supuestos contenidos en las fracciones I, II y III.

Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 34 en comento, las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de territorio, **atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante**, por lo que en tales condiciones, esta Juzgadora estima **fundado** el incidente de incompetencia por territorio denunciada por la **Primera Sala Regional Hidalgo-México**, de conformidad con las siguientes consideraciones.

En efecto, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que entró en vigor a partir del 7 de diciembre de 2007, las Secciones del Pleno de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional, tienen facultades para resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las Salas Regionales, por virtud de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 23 de la citada Ley Orgánica, para lo cual, esta Primera Sección debe atender lo previsto en el artículo 30 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que a la letra señala lo siguiente:

> "**ARTÍCULO 30.-** Cuando ante una de las Salas Regionales se promueva juicio de la que otra deba conocer por razón de territorio, se declarará incompetente de plano y comunicará su resolución a la que en su concepto corresponderá ventilar el negocio, enviándole los autos.
> "Recibido el expediente por la Sala requerida, decidirá de plano dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto.
> "Si la Sala Regional requerida la acepta, comunicará su resolución a la requirente, a las partes y al Presidente del Tribunal. En caso de no aceptarlo, hará saber su resolución a la Sala requirente y a las partes, y remitirá los autos al Presidente del Tribunal.
> "Recibidos los autos, el Presidente del Tribunal los someterá a consideración del Pleno para que éste determine a cual Sala Regional corresponde conocer el juicio, pudiendo señalar a alguna de las contendientes o a Sala diversa, ordenando que el Presidente del Tribunal comunique la decisión adoptada a las Salas y a las partes y remita los autos a la que sea declarada competente.
> "Cuando una Sala esté conociendo de algún juicio que sea de la competencia de otra, cualquiera de las partes podrá acudir ante el Presidente del Tribunal, exhibiendo copia certificada de la demanda y de las constancias que estime pertinentes, a fin de que se someta el asunto al conocimiento del Pleno del Tribunal. Si las constancias no fueran suficientes, el Presidente del Tribunal podrá pedir informe a la Sala Regional cuya competencia se denuncie, a fin de integrar debidamente las constancias que deba someterse al Pleno."

En las relatadas condiciones, si en el caso que nos ocupa, la Segunda Sala Regional del Golfo dictó auto de fecha 14 de enero de 2008, mediante el cual se declaró incompetente por territorio para conocer del juicio que le fue presentado, atendiendo principalmente para ello a la presunción contenida en el último párrafo del artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, relativa a que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal, por lo que al haber señalado la enjuiciante el **domicilio para oír y recibir notificaciones** ubicado en la **Calle Cristóbal Colón número 82, Colonia Lomas Verdes, Naucalpan, Estado de México, Código Postal 54312**, ordenó se remitieran los autos originales del juicio a la Oficialía de Partes Común a las Salas Regionales Hidalgo México, a fin de que se turnara a la Sala Regional Hidalgo México que por turno correspondiera conocer del asunto, para que decidiera de plano si aceptaba el conocimiento del juicio.

Pues bien, una vez recibidos los autos del presente juicio y turnados a la Primera Sala Regional Hidalgo-México, la que por acuerdo dictado el 11 de marzo de 2008, no aceptó la competencia y se declaró incompetente por razón de territorio para conocer del asunto, sustentando su determinación en el hecho de que de las constancias que obran en los autos del juicio en que se actúa, se desprende que el domicilio fiscal de la actora se encuentra ubicado en **Avenida Sur 2, número 200, Colonia Ciudad Industrial, Celaya, Guanajuato, Código Postal 38010**, por lo que envió el expediente que contiene los autos del presente juicio a esta Sala Superior, para que se determine a qué Sala Regional de este Tribunal le corresponde conocer del asunto.

Conforme a las anteriores consideraciones, resulta cierto que en caso de contar con los elementos suficientes para determinar qué Sala Regional resulta competente para conocer del juicio por razón de territorio, debe atenderse al domicilio fiscal del demandante, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, puesto que por otro lado, el último de los párrafos de dicho numeral, resultaría aplicable solamente en aquellos casos en los que no se cuente con los elementos necesarios para

determinar cuál es el domicilio fiscal del demandante, en virtud de que el promovente no lo haya señalado, pero que por otro lado sí haya señalado uno diverso para oír y recibir notificaciones, a efecto de que sea ese domicilio donde se le practiquen las notificaciones relacionadas con el juicio interpuesto, pues este último constituye un requisito de procedencia de la demanda, contenido en la fracción I del artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; luego entonces, deberá tenerse como domicilio para determinar la Sala Regional que deba conocer del asunto, el domicilio fiscal del demandante cuando se conozca este, o bien, el domicilio señalado en la demanda, aun cuando el mismo no corresponda al fiscal, de conformidad con la presunción legal contenida en el ordenamiento primeramente mencionado.

Así las cosas, si en el presente asunto la accionante al promover la demanda de nulidad que nos ocupa, no señaló el domicilio fiscal de la persona moral que representa, sino que únicamente precisó un domicilio para que le fueran practicadas las notificaciones relativas al juicio, lo cierto es que existen elementos suficientes de los que se desprende que el domicilio fiscal de BEDACOM, S.A. de C.V., se encuentra localizado en **Avenida Sur 2, número 200, Colonia Ciudad Industrial, Celaya, Guanajuato, Código Postal 38010**, tal como se desprende del domicilio que la autoridad demandada señaló en su oficio determinante de crédito fiscal, identificado con el número 326-SAT-A37-II-A-2-IN-019768, de fecha 25 de septiembre de 2007, que constituye la resolución impugnada en el juicio, domicilio que coincide con aquél en el que la autoridad hacendaria llevó a cabo la notificación del citado oficio liquidatorio y, que por su parte, la entonces recurrente (hoy demandante) señaló como domicilio fiscal en su escrito con el que pretendió desvirtuar los hechos u omisiones que le fueron dados a conocer durante el procedimiento administrativo que derivó en la resolución determinante de crédito fiscal que se controvierte.

(...)

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 29, fracción I y 30 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 23 fracción VII, de la

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente, se resuelve:

I.- Resultó procedente y fundado el incidente de incompetencia en razón de territorio, promovido por la Primera Sala Regional Hidalgo México, en el presente juicio.

II.- Es competente por razón de territorio para conocer del presente juicio contencioso administrativo la Sala Regional del Centro III, a quien deberán enviarse los autos del juicio en que se actúa; en consecuencia, deberá continuar con la substanciación y resolución del mismo.

III.- Remítase copia autorizada de la presente resolución a la Segunda Sala Regional del Golfo y a la Primera Sala Regional Hidalgo México, para su conocimiento.

IV.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de abril de 2008, por mayoría de 3 votos a favor de los Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, María del Consuelo Villalobos Ortíz, Jorge Alberto García Cáceres y 1 voto con los puntos resolutivos del Magistrado Manuel Luciano Hallivis Pelayo. Estuvo ausente en la sesión el Magistrado Alejandro Sánchez Hernández.

Fue Ponente en este asunto el Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, cuya ponencia se aprobó.

Se elaboró el presente engrose el 24 de abril de 2008, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III y 48 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en vigor a partir del 7 de diciem-

bre de 2007, firman el Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Lic. Virginia Pétriz Herrera, Secretaria Adjunta de Acuerdos quien da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-1aS-31

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. NO ES REQUISITO DE PROCEDENCIA PARA OTORGAR LA MEDIDA CAUTELAR, EXPRESAR LAS RAZONES POR LAS CUALES ÉSTA ES INDISPENSABLE, TRATÁNDOSE DE LA EJECUCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES IMPUGNADOS.- Los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, consignan principios generales rectores de las medidas cautelares que deben ser ponderados en su real alcance, a fin de determinar en cada caso la procedencia de la medida solicitada y su consecuente otorgamiento. En ese tenor, para que procedan dichas medidas, se requiere que se cumpla con el extremo que se solicita para mantener una situación de hecho existente, que podría dar lugar a que el litigio quedara sin materia o se causara un daño irreparable al actor de no otorgarse, al tiempo que el solicitante justifique en su petición las razones por las cuales las medidas son indispensables. Ahora bien, tratándose del supuesto previsto en la fracción VI del artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, atinente a la procedencia de la petición de suspensión de la ejecución de créditos fiscales, tan solo prevé que procederá la suspensión del acto reclamado, y que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, por lo que el requisito establecido en la diversa fracción VII del aludido numeral, consistente en expresar, en el escrito de solicitud, las razones por las cuáles considera que debe otorgarse la suspensión y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite, no resulta aplicable a la señalada hipótesis, toda vez que por un lado tal señalamiento resulta ser genérico, frente a la citada fracción VI del artículo 28, que como se señala con antelación, se refiere específicamente al supuesto de procedencia de la suspensión de la ejecución de créditos fiscales que se solicite ante este órgano jurisdiccional, sin que de esta disposición se desprendan exigencias diversas, como lo es la formal expresión de razones o motivos que justifiquen la peti-

ción a que se refiere la diversa fracción VII aludida. De otra parte, la tutela jurisdiccional a cargo de este Tribunal, en su labor de aplicar e interpretar la ley, debe mirar ante todo a la finalidad que persiguen las medidas cautelares, de mantener las cosas en el estado en que se encontraban al momento de promoverlas, a fin de conservar la situación de hecho existente para proteger la materia del juicio. En ese orden de ideas, si bien la expresión de motivos para justificar el otorgamiento de una medida cautelar, se haría necesaria en ciertos casos, no debe soslayarse la máxima de que la justicia debe prevalecer frente a la letra de la ley, cuando aún previendo la satisfacción de ciertos formalismos, éstos fueren innecesarios, como en el caso que se analiza, dada la evidencia del daño irreparable que sufrirá el solicitante de la suspensión de la ejecución, al negársela por supuesto incumplimiento a un requisito meramente formal, desairando privilegiar lo sustancial, que constituye el derecho de solicitar la medida cautelar, dadas sus finalidades propias y con el objeto de preservar sus bienes. Estimar lo contrario coloca al particular frente a la inminente continuación del procedimiento administrativo de ejecución, en su perjuicio, lo que haría nugatorio el fin de la medida, de preservar la materia del juicio. En efecto, si la pretensión de la solicitante de la suspensión, no es otra que evitar que continúe el procedimiento en su contra, mismo que por su naturaleza constituye la ejecución forzosa de los créditos fiscales impugnados, ello de necesidad incide en los bienes de la actora hasta sus últimas consecuencias, como podría ser el remate de los mismos, tal cuestión no debe escapar al recto criterio de la juzgadora, dado que el daño material está implícito en el efecto jurídico que conlleva el ejercicio de las facultades de ejecución, y por ende son obvias las razones de lo indispensable de la medida, sin necesidad de señalamiento explícito; más aún cuando se demuestra que los créditos se encuentran garantizados con embargo coactivo realizado por la propia autoridad. (6)

Recurso de Reclamación Núm. 2062/07-07-01-9/193/08-S1-02-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de abril de 2008, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretaria: Lic. María de Lourdes Vázquez Galicia.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de abril de 2008)

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-1aS-32

LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES COMPARTE LA FINALIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES, POR SER UNA ESPECIE DE ÉSTAS, CONSECUENTEMENTE SU OTORGAMIENTO DEBE ATENDER A TAL CIRCUNSTANCIA.- Conforme lo dispuesto por los artículos 24, 25 y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, una vez iniciado el juicio, pueden decretarse todas las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente, que impidan que la resolución impugnada deje el litigio sin materia o provoque un daño irreparable al actor, salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. De lo anterior se sigue que, las medidas cautelares que se dictan en el juicio contencioso administrativo federal tienen la característica de ser incidentales, es decir, accesorias al juicio principal; que éstas se tramitan por cuerda separada y, que su finalidad, cuando proceden, es la de mantener las cosas en el estado en que se encontraban al momento de promoverlas, a fin de conservar la situación de hecho existente para proteger la materia del juicio, en tanto se dicte la sentencia correspondiente o se ponga fin al mismo por alguna otra causa, con objeto de evitar que con la ejecución del acto controvertido quede sin materia el proceso. Ahora bien, tratándose del otorgamiento de la suspensión de la ejecución de créditos fiscales, al ser ésta una especie de las medidas cautelares, debe estarse estrictamente a la finalidad de las mismas. (7)

Recurso de Reclamación Núm. 2062/07-07-01-9/193/08-S1-02-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de abril de 2008, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretaria: Lic. María de Lourdes Vázquez Galicia.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de abril de 2008)

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-1aS-33

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES IMPUGNADOS. SE DEBE OTORGAR CUANDO EXISTE EMBARGO COACTIVO.- Conforme a lo dispuesto por el articulo 28, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la garantía y suficiencia del interés fiscal no es un requisito de procedencia para que este órgano jurisdiccional conceda la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada, luego entonces, por mayoría de razón ésta se debe conceder cuando se encuentra garantizado el interés fiscal ante la autoridad ejecutora, mediante embargo trabado en la vía coactiva por parte de la autoridad ejecutora a satisfacción, a través del procedimiento administrativo de ejecución. Lo anterior es así, toda vez que se está ante un medio de aseguramiento del interés fiscal, cuya efectividad se encuentra reconocida por el artículo 144, séptimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que establece: "No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal". En tal orden de ideas, si el embargo coactivo constituye o es una de las medidas adecuadas para garantizar el interés fiscal, resulta innecesario condicionar la efectividad de la suspensión a que la solicitante constituya la garantía ante la autoridad ejecutora. (8)

Recurso de Reclamación Núm. 2062/07-07-01-9/193/08-S1-02-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de abril de 2008, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretaria: Lic. María de Lourdes Vázquez Galicia.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de abril de 2008)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

En ese contexto, no debe perderse de vista que las normas que regulan la tramitación y resolución del incidente de suspensión de la ejecución, se encuentran previstas en el Título II, Capítulo III, "De las medidas Cautelares", de manera genérica en el artículo 24 y en forma específica en el 28, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente a partir del 1º de enero de 2006, tratándose de la solicitud de suspensión de la ejecución de créditos fiscales ante este Órgano Juzgador.

Asimismo, cabe tener presente lo dispuesto por los artículos 24, 25, y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la ley especial que regula la medida cautelar de la suspensión, cuyo contenido es el siguiente:

"**Artículo 24.- Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, pueden decretarse todas las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente, que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor, salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.**

"**I.** El escrito en donde se soliciten las medidas cautelares señaladas, deberá contener los siguientes requisitos:

"**a)** Nombre y domicilio para oír notificaciones en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando el solicitante tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala Regional competente, en cuyo caso, el domicilio señalado para tal efecto deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala competente.

"**b)** Resolución que se pretende impugnar y fecha de notificación de la misma.

"**c)** Los hechos que se pretenden resguardar con la medida cautelar, y
"**d)** Expresión de los motivos por los cuales solicita la medida cautelar que se solicita.
"**II.** Con el escrito de solicitud de medidas cautelares, se anexarán los siguientes comentarios:
"**a)** El que pida la medida cautelar deberá acreditar el derecho que tiene para gestionar la necesidad de la medida que solicita, y
"**b)** Una copia del escrito mencionado por cada una de las partes que vayan a participar en el juicio, para correrles traslado.
"En caso de no cumplir con los requisitos de las fracciones I y II, se tendrá por no interpuesto el incidente.
"El Magistrado Instructor podrá ordenar una medida cautelar, cuando considere que los daños que puedan causarse sean inminentes. En los casos en que se pueda causar una afectación patrimonial, el Magistrado Instructor exigirá una garantía para responder de los daños y perjuicios que se causen con la medida cautelar.
"En los demás casos que conozca la Sala Regional, ésta podrá dictar las medidas cautelares cuando las pida el actor pero deberá motivar cuidadosamente las medidas adoptadas; para ello, el particular justificará en su petición las razones por las cuales las medidas son indispensables."

"**Artículo 25.- En el acuerdo que admita el incidente de petición de medidas cautelares, el Magistrado Instructor ordenará correr traslado a quien se impute el acto administrativo o los hechos objeto de la controversia, pidiéndole un informe que deberá rendir en un plazo de tres días**. Si no se rinde el informe o si éste no se refiere específicamente a los hechos que le impute el promovente, dichos hechos se tendrán por ciertos. En el acuerdo a que se refiere este párrafo, el Magistrado Instructor resolverá sobre las medidas cautelares previas que se le hayan solicitado.
"**Dentro del plazo de cinco días contados a partir de que haya recibido el informe o de que haya vencido el término para presentarlo, la Sala Regional dictará resolución definitiva en la que decrete o niegue las**

medidas cautelares solicitadas, decida, en su caso, sobre la admisión de la garantía ofrecida, la cual deberá otorgarse dentro de un plazo de tres días. Cuando no se otorgare la garantía dentro del plazo señalado, las medidas cautelares dejarán de tener efecto.

"Mientras no se dicte sentencia definitiva, la Sala Regional que hubiere conocido del incidente, podrá modificar o revocar la resolución que haya decretado o negado las medidas cautelares, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique.

"Si el obligado por las medidas cautelares no da cumplimiento a éstas o la autoridad no admite la garantía, la Sala declarará, en su caso, la nulidad de las actuaciones realizadas con violación a dichas medidas e impondrá al renuente una multa por el monto equivalente de uno a tres tantos del salario mínimo general del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, elevado al mes, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor público de que se trate, su nivel jerárquico, así como las consecuencias que el no acatamiento de la suspensión hubiere ocasionado cuando el afectado lo señale. En este caso, el solicitante tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios, la que, en su caso, correrá a cargo de la unidad administrativa en la que preste sus servicios al servidor público."

"**Artículo 28.- El demandante, podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, cumpliendo con los siguientes requisitos.**

"**I. Podrá solicitarla en la demanda o en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia, ante la Sala de conocimiento del juicio.**

"II. Acompañar copias de la promoción en la que solicite la suspensión y de las pruebas documentales que ofrezca, para correr traslado a cada una de las partes y una más para la carpeta de suspensión.

"III. Ofrecer, en su caso, las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de garantía, a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora y, si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el

rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución, únicas admisibles en la suspensión.

"IV. Ofrecer garantía suficiente mediante billete de depósito o póliza de fianza expedida por institución autorizada, para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que pudieran ocasionarse a la demandada o a terceros con la suspensión si no se obtiene sentencia favorable en el juicio contencioso administrativo.

"V. Los documentos referidos deberán expedirse a favor de la otra parte o de los terceros que pudieran tener derecho a la reparación del daño o a la indemnización citada.

"**VI.** Tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, **procederá la suspensión del acto reclamado**, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal **ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables**.

"**El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos:**

"**a) Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso, y**

"**b) Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito.**

"**VII. Exponer en el escrito de solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, las razones por las cuáles considera que debe otorgarse la medida y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite.**

"VIII. La suspensión se tramitará por cuerda separada y con arreglo a las disposiciones previstas en este Capítulo.

"**IX. El Magistrado Instructor, en el auto que acuerde la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, podrá decretar la suspensión provisional, siempre y cuando con ésta no se afecte al interés**

social, se contravenga disposiciones de orden público o quede sin materia el juicio, y se esté en cualquiera de los siguientes supuestos:

"a) Que no se trate de actos que se hayan consumado de manera irreparable.

"b) Que se le causen al demandante daños mayores de no decretarse la suspensión, y

"c) Que sin entrar al análisis del fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto administrativo impugnado.

"**X. El auto que decrete o niegue la suspensión provisional, podrá ser impugnado por las autoridades demandadas mediante el recurso de reclamación previsto en el artículo 59 de esta Ley, dejando a salvo los derechos del demandante para que lo impugne en la vía que corresponda.**

"XI. En el caso en que la ley que regule el acto administrativo cuya suspensión se solicite, no prevea la solicitud de suspensión ante la autoridad ejecutora, la suspensión tendrá el alcance que indique el Magistrado Instructor o la Sala y subsistirá en tanto no se modifique o revoque o hasta que exista sentencia firme.

"XII. Mientras no se dicte sentencia en el juicio, la Sala podrá modificar o revocar la sentencia interlocutoria que haya decretado o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique.

"XIII. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia firme favorable, la Sala ordenará la cancelación o liberación, según el caso, de la garantía otorgada.

"Asimismo, si la sentencia firme le es desfavorable, a petición de la contraparte o, en su caso, del tercero, y previo acreditamiento que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala, ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante el Tribunal.

"XIV. Si la solicitud de suspensión de la ejecución es promovida por la Autoridad demandada por haberse concedido en forma indebida."

(Lo resaltado es de esta Juzgadora)

Con relación a los preceptos legales transcritos, los artículos 141, 144, 145, 151, 152, 155 y 156 del Código Fiscal de la Federación, establecen:

"**Artículo 141.- Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal en alguna de las formas siguientes:**
"**I.** Depósito en dinero, carta de crédito u otras formas de garantía financiera equivalentes que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general que se efectúen en las cuentas de garantía del interés fiscal a que se refiere el artículo 141-A de este Código.
"**II.** Prenda o hipoteca.
"**III.** Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y excusión.
"Para los efectos fiscales, en el caso de que la póliza de fianza se exhiba en documento digital, deberá contener la firma electrónica avanzada o el sello digital de la afianzadora.
"**IV.** Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia.
"**V. Embargo en la vía administrativa.**
"**VI.** Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, en caso de que se demuestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante cualquiera de las fracciones anteriores, los cuales se aceptarán al valor que discrecionalmente fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
"**La garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas actualizadas, los accesorios causados, así como de los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este período y en tanto no se cubra el crédito, deberá actualizarse su importe cada año y ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los recargos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes.**
"**El Reglamento de este Código establecerá los requisitos que deberán reunir las garantías. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará que sean suficientes tanto en el momento de su aceptación como**

con posterioridad y, si no lo fueren, exigirá su ampliación o procederá al secuestro o embargo de otros bienes.

"En ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía.

"La garantía deberá constituirse dentro de los treinta días siguientes al en que surta efectos la notificación efectuada por la autoridad fiscal correspondiente de la resolución sobre la cual se deba garantizar el interés fiscal, salvo en los casos en que se indique un plazo diferente en otros preceptos de este Código.

"Conforme al artículo 135 de la Ley de Amparo, tratándose de los juicios de amparo que se pidan contra el cobro de las contribuciones y aprovechamientos, por los causantes obligados directamente a su pago, el interés fiscal se deberá asegurar mediante el depósito de las cantidades que correspondan ante la Tesorería de la Federación o la Entidad Federativa o Municipio que corresponda.

"**En los casos en que de acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se solicite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la suspensión contra el cobro de contribuciones o aprovechamientos, el interés fiscal se deberá asegurar mediante el depósito de las cantidades que se cobren ante la Tesorería de la Federación o la Entidad Federativa o Municipio que corresponda.**

"**Para los efectos del párrafo anterior, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no exigirá el depósito cuando se trate del cobro de sumas que, a juicio del Magistrado o Sala que deba conocer de la suspensión, excedan la posibilidad del solicitante de la misma, cuando previamente se haya constituido garantía ante la autoridad exactora, o cuando se trate de personas distintas de los causantes obligados directamente al pago; en este último caso, se asegurará el interés fiscal en los términos indicados en los primeros dos párrafos de este artículo.**"

"**Artículo 144.- No se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales**. Tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que venza el plazo de

cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación, o de quince días, tratándose de la determinación de cuotas obrero-patronales o de capitales constitutivos al seguro social. Si a más tardar al vencimiento de los citados plazos se acredita la impugnación que se hubiere intentado y se garantiza el interés fiscal satisfaciendo los requisitos legales, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución.

"Cuando el contribuyente hubiere interpuesto en tiempo y forma el recurso de revocación o, en su caso, **el procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación de los que México es parte, el plazo para garantizar el interés fiscal será de cinco meses siguientes a partir de la fecha en que se interponga cualquiera de los referidos medios de defensa, debiendo el interesado acreditar ante la autoridad fiscal que lo interpuso dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a esa fecha, a fin de suspender el procedimiento administrativo de ejecución**.

"Cuando en el medio de defensa se impugnen únicamente algunos de los créditos determinados por el acto administrativo, cuya ejecución fue suspendida, se pagarán los créditos fiscales no impugnados con los recargos correspondientes.

"**Cuando se garantice el interés fiscal el contribuyente tendrá obligación de comunicar por escrito la garantía, a la autoridad que le haya notificado el crédito fiscal.**

"Si se controvierten sólo determinados conceptos de la resolución administrativa que determinó el crédito fiscal, el particular pagará la parte consentida del crédito y los recargos correspondientes, mediante declaración complementaria y garantizará la parte controvertida y sus recargos.

"En el supuesto del párrafo anterior, si el particular no presenta declaración complementaria, la autoridad exigirá la cantidad que corresponda a la parte consentida, sin necesidad de emitir otra resolución. Si se confirma en forma definitiva la validez de la resolución impugnada, la autoridad procederá a exigir la diferencia no cubierta, con los recargos causados.

"**No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal o cuando el contribuyente declare bajo protesta de decir verdad que son los únicos que posee**. En el caso de que la autoridad compruebe por cualquier medio que esta declaración es falsa podrá exigir garantía adicional, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. En todo caso, se observará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 141 de este Código.

"También se suspenderá la ejecución del acto que determine un crédito fiscal cuando los tribunales competentes notifiquen a las autoridades fiscales sentencia de concurso mercantil dictada en términos de la ley de la materia y siempre que se hubiese notificado previamente a dichas autoridades la presentación de la demanda correspondiente.

"Las autoridades fiscales continuarán con el procedimiento administrativo de ejecución a fin de obtener el pago del crédito fiscal, cuando en el procedimiento judicial de concurso mercantil se hubiere celebrado convenio estableciendo el pago de los créditos fiscales y éstos no sean pagados dentro de los 30 días siguientes a la celebración de dicho convenio o cuando no se dé cumplimiento al pago con la prelación establecida en este Código. Asimismo, las autoridades fiscales podrán continuar con dicho procedimiento cuando se inicie la etapa de quiebra en el procedimiento de concurso mercantil en los términos de la ley correspondiente.

"En caso de negativa o violación a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, los interesados podrán promover el incidente de suspensión de la ejecución ante la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que conozca del juicio respectivo u ocurrir al superior jerárquico de la autoridad ejecutora, si se está tramitando recurso, acompañando los documentos en que conste el medio de defensa hecho valer y el ofrecimiento o, en su caso otorgamiento de la garantía del interés fiscal. El superior jerárquico aplicará en lo conducente las reglas establecidas por este Código para el citado incidente de suspensión de la ejecución."

"**Artículo 145.- Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la Ley, mediante procedimiento administrativo de ejecución.**

"Se podrá practicar embargo precautorio, sobre los bienes o la negociación del contribuyente, para asegurar el interés fiscal, cuando el crédito fiscal no sea exigible pero haya sido determinado por el contribuyente o por la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando a juicio de ésta exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento. En este caso, la autoridad trabará el embargo.

"La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta circunstanciada en la que precise las razones del embargo.

"La autoridad requerirá al obligado para que dentro del término de 10 días desvirtúe el monto por el que se realizó el embargo. El embargo quedará sin efecto cuando el contribuyente cumpla con el requerimiento. Transcurrido el plazo antes señalado, sin que el obligado hubiera desvirtuado el monto del embargo precautorio, éste quedará firme.

"El embargo precautorio practicado antes de la fecha en que el crédito fiscal sea exigible, se convertirá en definitivo al momento de la exigibilidad de dicho crédito fiscal y se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución.

"Si el particular garantiza el interés fiscal en los términos del artículo 141 de este Código, se levantará el embargo.

"Son aplicables al embargo precautorio a que se refiere este artículo y al previsto por el artículo 41, fracción II de este Código, las disposiciones establecidas para el embargo y para la intervención en el procedimiento administrativo de ejecución que, conforme a su naturaleza, le sean aplicables."

"**Artículo 151.- Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato como sigue:**

"I. A embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco.
"II. A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales.
"**El embargo de bienes raíces, de derechos reales o de negociaciones de cualquier género se inscribirá en el registro público que corresponda en atención a la naturaleza de los bienes o derechos de que se trate.**
"**Cuando los bienes raíces, derechos reales o negociaciones queden comprendidos en la jurisdicción de dos o más oficinas del registro público que corresponda, en todas ellas se inscribirá el embargo.**
"Si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga, o de la autorización para pagar en parcialidades, por error aritmético en las declaraciones o por situaciones previstas en la fracción I del artículo 41 de este Código, el deudor podrá efectuar el pago dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del requerimiento."

"**Artículo 152.- El ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora se constituirá en el domicilio del deudor y deberá identificarse ante la persona con quien se practicará la diligencia de requerimiento de pago y de embargo de bienes, con intervención de la negociación en su caso, cumpliendo las formalidades que se señalan para las notificaciones personales en el artículo 137 de este Código. De esta diligencia se levantará acta pormenorizada de la que se entregará copia a la persona con quien se entienda la misma. El acta deberá llenar los requisitos a que se refiere el artículo 38 de este ordenamiento.**
"Si la notificación del crédito fiscal adeudado o del requerimiento, en su caso, se hizo por edictos, la diligencia se entenderá con la autoridad municipal o local de la circunscripción de los bienes, salvo que en el momento de iniciarse la diligencia compareciere el deudor, en cuyo caso se entenderá con él.
"En el caso de actos de inspección y vigilancia, se procederá al aseguramiento de los bienes cuya importación debió ser manifestada a las autoridades fisca-

les o autorizadas por éstas, siempre que quien practique la inspección esté facultado para ello en la orden respectiva."

"**Artículo 155.- La persona con quien se entienda la diligencia de embargo, tendrá derecho a señalar los bienes en que éste se deba trabar, siempre que los mismos sean de fácil realización o venta, sujetándose al orden siguiente:**
"**I.** Dinero, metales preciosos y depósitos bancarios.
"**II.** Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la Federación, Estados y Municipios y de instituciones o empresas de reconocida solvencia.
"**III.** Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores.
"**IV. Bienes inmuebles. En este caso, el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia deberán manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, embargo anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal alguna.**
"La persona con quien se entienda la diligencia de embargo podrá designar dos testigos y, si no lo hiciere o al terminar la diligencia los testigos designados se negaren a firmar, así lo hará constar el ejecutor en el acta, sin que tales circunstancias afecten la legalidad del embargo."

"**Artículo 156.- El ejecutor podrá señalar bienes sin sujetarse al orden establecido en el Artículo anterior, cuando el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia:**
"**I.** No señale bienes suficientes a juicio del ejecutor o no haya seguido dicho orden al hacer el señalamiento.
"**II.** Cuando teniendo el deudor otros bienes susceptibles de embargo, señale:
"**a)** Bienes ubicados fuera de la circunscripción de la oficina ejecutora.
"**b)** Bienes que ya reporten cualquier gravamen real o algún embargo anterior.
"**c)** Bienes de fácil descomposición o deterioro o materias inflamables.

"**El ejecutor deberá señalar, invariablemente, bienes que sean de fácil realización o venta. En el caso de bienes inmuebles, el ejecutor solicitará al deudor o a la persona con quien se entienda la diligencia que manifieste bajo protesta de decir verdad si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, embargo anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal alguna. Para estos efectos, el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia deberá acreditar fehacientemente dichos hechos dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se inició la diligencia correspondiente, haciéndose constar esta situación en el acta que se levante o bien, su negativa.**"

(Lo resaltado es de esta Juzgadora)

De acuerdo a lo anterior, **a este Órgano Jurisdiccional** corresponde hacer las siguientes precisiones:

1a. Conforme a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, una vez iniciado el juicio contencioso administrativo pueden decretarse todas las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente, que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor, salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.

De lo que se sigue que **las medidas cautelares** que se dictan en el juicio contencioso administrativo federal tienen las características de ser incidentales, es decir, secundarias y accesorias al juicio principal, que éstas se tramitan por cuerda separada y **que su finalidad cuando proceden es la de mantener las cosas en el estado en que se encontraban al momento de promoverlas, a fin de conservar la situación de hecho existente para proteger la materia del juicio, en tanto se dicte la sentencia correspondiente o se ponga fin al juicio por alguna otra causa**, con objeto de evitar que con la ejecución del acto controvertido quede sin materia el proceso.

En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia V-J-1aS-15 de esta Primera Sección cuyo rubro y texto se transcriben a continuación**:**

"**V-J-1aS-15**

"**SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.- ES UNA ESPECIE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES REGULADAS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.-** La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo regula en su capítulo III las medidas cautelares que pueden promoverse en los juicios que se interpongan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por su parte, el artículo 28 del invocado ordenamiento establece las reglas para la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, por lo que se puede concluir que dicha medida cautelar es tan sólo una de las que proceden en el juicio contencioso administrativo; por ende, para interpretar el artículo 28 del ordenamiento en comento, debe partirse del hecho de que las medidas cautelares en el juicio contencioso administrativo federal, al tenor del primer párrafo del artículo 24 de la ley en cita, se dictan con la finalidad de mantener la situación de hecho existente a fin de evitar que con la ejecución del acto controvertido quede sin materia el proceso, motivo por el que se puede concluir que la suspensión de la ejecución del acto reclamado -que regula el numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo- tiene como finalidad mantener las cosas en el estado en que se encontraban al momento de promover la citada medida cautelar, para proteger la materia del juicio contencioso administrativo respectivo, en tanto se dicte la sentencia correspondiente. (2)

"(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-5/2007)
"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 77. Mayo 2007. p. 31"

Asimismo, se establece que en el acuerdo que admita el incidente de petición de medidas cautelares, el Magistrado Instructor ordenará correr traslado a quien se

impute el acto administrativo o los hechos objeto de la controversia, pidiéndole un informe y que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que se haya recibido el informe correspondiente o de que haya vencido el término para presentarlo, la Sala Regional dictará resolución definitiva en la que decrete o niegue las medidas cautelares solicitadas. Asimismo, que **mientras no se dicte sentencia en el juicio, la Sala podrá modificar o revocar la sentencia interlocutoria que haya decretado o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique**.

En razón de lo anterior, es válido concluir que **la suspensión de la ejecución del acto impugnado prevista en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tiene la misma finalidad**, ya que se trata de una especie de las referidas medidas cautelares que son de naturaleza accesoria al juicio principal del que dependen y consecuentemente seguirán la suerte de éste.

2a. Como caso de excepción, en relación con las hipótesis comprendidas en el párrafo primero del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, **la suspensión de la ejecución de los actos impugnados, prevista en su fracción VI**, que establece que cuando se solicite la suspensión de la ejecución en contra de **actos relativos al cobro de créditos de naturaleza fiscal**, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **procederá la suspensión y ésta surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora, por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables**; además, en forma expresa se prevé que **no se ejecutarán** los actos administrativos **cuando se garantice el interés fiscal y se satisfagan los requisitos legales**.

En efecto, en el artículo 28 de la citada Ley, se establece en lo general que el demandante podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, cumpliendo diversos requisitos **y, como caso de excepción, la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos al cobro**

de créditos de naturaleza fiscal, ante este Tribunal, misma que procederá y surtirá efectos si se ha constituido garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora.

De lo que se sigue que tratándose de la suspensión de la ejecución de créditos fiscales, el otorgamiento de la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora no es un requisito de procedencia de la suspensión, sino de eficacia, por tanto, la falta del acreditamiento del ofrecimiento de la garantía del interés fiscal o su constitución, no trae como consecuencia la negación de la suspensión, sino en todo caso la ulterior ineficacia de la misma.

3a. Que el procedimiento administrativo de ejecución se encuentra regulado en el Título Quinto, Capítulo III, del Código Fiscal de la Federación, es decir, en los artículos 145 al 196-B, de cuyo contenido sobresale lo siguiente:

- El procedimiento administrativo de ejecución es la actividad administrativa que desarrolla el Estado para hacer efectivos en vía de ejecución forzosa los créditos fiscales a su favor, no cubiertos por el contribuyente en los términos establecidos por la ley, actividad también conocida como facultad económica coactiva del Estado.

- Asimismo, que el procedimiento administrativo de ejecución se encuentra integrado por una serie concatenada de actos, los cuales tienen su inicio propiamente con el requerimiento de pago y su culminación con la resolución que aprueba o desaprueba el remate.

- Desde luego, debe decirse que dentro de tal procedimiento se encuentran reguladas otras etapas intermedias como son el embargo y su tramitación, la intervención, el remate, la adjudicación y la enajenación fuera del remate.

- Conforme a lo anterior, se puede establecer que **el procedimiento administrativo de ejecución se efectúa mediante una serie de actos que tienen su ini-**

cial orientación en lo que dispone el artículo 145, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a que las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

- Para lo anterior, a partir de la fecha de exigibilidad del crédito fiscal el ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora puede constituirse en el domicilio del deudor para practicar la diligencia de requerimiento de pago y, en el supuesto de no hacerlo en el acto, **se procederá al embargo de bienes suficientes para, en su caso, rematarlos o enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos a favor del fisco, o bien, al embargo de negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda**, a fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales.

- Los bienes o negociaciones embargados se dejarán bajo la guarda del o de los depositarios que sean necesarios, los que serán nombrados y removidos libremente, pero bajo su responsabilidad, por los jefes de las oficinas ejecutoras.

- También se establecen las formalidades a que debe sujetarse la diligencia de embargo, indicando cuáles son las facultades del ejecutor, los derechos del ejecutado, etcétera; de igual manera se señalan las formalidades que se deben seguir en cada una de las diligencias, consistentes en levantar acta pormenorizada al finalizar la diligencia y entregar copia de la misma a la persona con la que se entendió.

- Se indica que una vez trabado el embargo se procederá a la enajenación de los bienes, para lo cual se deben fijar las bases para su enajenación, mediante los avalúos tanto de la autoridad exactora como del obligado y, en ciertos casos, el valor que fijen de común acuerdo la autoridad y el contribuyente embargado en un plazo determinado.

- También se establece lo conducente a la convocatoria para el remate, la postura legal, las formalidades que deben observarse para realizar el remate, la venta fuera de subasta, la adjudicación al fisco, etcétera.

- Posteriormente, fincado el remate y pagado el precio, se lleva a cabo la adjudicación y entrega de los bienes rematados al adquirente y la aplicación del producto de los bienes rematados para cubrir el crédito fiscal y sus accesorios legales.

4a. Acorde con lo anterior, el procedimiento administrativo de ejecución es un conjunto concatenado de actos vinculados entre sí por medio de los cuales se pretende la obtención del pago, por vía coactiva, del crédito fiscal debido por el deudor.

5a. De la interpretación sistemática a los artículos 141, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, 66 y 68 de su Reglamento, se puede advertir que **el embargo en la vía administrativa reviste ciertas particularidades y su finalidad esencial es precisamente que no se haga efectivo el adeudo pues sirve como garantía del interés fiscal**.

- En términos generales, **el embargo en la vía administrativa, se rige bajo lo siguiente: se practica a solicitud del contribuyente, quien deberá acompañar los documentos relativos y señalar los bienes sobre los cuales debe trabarse el embargo, los que a la postre deben ser suficientes: posteriormente, la autoridad recaudadora lo calificará, verificando que se cumplan los requisitos legales, pudiendo incluso requerir al contribuyente para que cumpla los mismos, y según sea el caso, aceptará o negará la garantía**; en el supuesto de que acepte el embargo en la vía administrativa le dará el trámite correspondiente.

6a. En la especie, se advierte de las constancias que integran la carpeta del recurso de reclamación que se resuelve, que **la autoridad ejecutora, una vez que fueron confirmados los créditos al resolverse el recurso de revocación, consideró que la solicitante de la suspensión no había garantizado el interés fiscal**

ni había pagado los créditos; así, a fin de hacer efectivos los créditos adeudados, que ahora son controvertidos en juicio, inició el procedimiento administrativo de ejecución regulado en el Capítulo III, del Código Fiscal de la Federación.

En ese contexto, **de una interpretación armónica a las disposiciones legales transcritas y de las precisiones antes señaladas**, se concluye que cuando se solicite la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos al cobro de créditos de naturaleza fiscal, dentro del juicio contencioso administrativo federal, **procederá la suspensión y ésta surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora, por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables**.

Consecuentemente al ser la garantía del interés fiscal, un requisito de eficacia de la suspensión y no de procedencia de la misma, no sería legal que se negara dicha medida cautelar bajo el argumento de que el solicitante no garantizó el interés fiscal, ya que la finalidad de la suspensión es evitar que con la ejecución del acto controvertido, quede sin materia el proceso.

Aunado a lo anterior, el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación aplicable establece las formas a través de las cuales los contribuyentes pueden garantizar el interés fiscal, asimismo, **prevé que la garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas actualizadas**, los accesorios causados, **así como de los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento**.

Asimismo, dicho numeral dispone que el Reglamento del Código establecerá los requisitos que deberán reunir las garantías y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público **vigilará que sean suficientes tanto en el momento de su aceptación como con posterioridad**.

Por su parte, el artículo 144 del citado Código Federal, precisa que **no se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, sa-**

tisfaciendo los requisitos legales y que cuando se garantice el contribuyente tendrá obligación de comunicar por escrito la garantía, a la autoridad que le haya notificado el crédito fiscal.

Además, el aludido artículo 144 dispone que **en caso de negativa o violación a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, los interesados podrán promover el incidente de suspensión de la ejecución ante la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que conozca del juicio respectivo, acompañando los documentos en que conste el medio de defensa hecho valer y el ofrecimiento o, en su caso, otorgamiento de la garantía del interés fiscal**.

Igualmente, en los numerales transcritos se precisa que para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y sus accesorios legales, se requerirá de pago al deudor y, sólo en caso de que éste no pruebe haberlo efectuado, la autoridad fiscal procederá a embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos a favor del fisco. **También, determinan que cuando en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal, no se exigirá garantía adicional**.

En ese orden de ideas, esta Primera Sección de la Sala Superior reitera que para efectos de la procedencia del otorgamiento de la suspensión solicitada, no es requisito indispensable que se constituya o se haya constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora.

Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis V-P-1aS-376 de la Primera Sección de la Sala Superior, que sentó precedente y que a continuación se reproduce:

"**V-P-1aS-376**

"**SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS FISCALES.- EL OTORGAMIENTO DE GARANTÍA NO ES REQUISITO**

DE PROCEDENCIA SINO DE EFICACIA.- La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo regula en su Capítulo III las medidas cautelares que pueden promoverse en los juicios que se interpongan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En particular, las reglas para la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado se encuentran en el artículo 28 del invocado ordenamiento, cuya fracción VI establece que en el caso de que se impugne el cobro de un crédito fiscal en el juicio contencioso administrativo federal, deberá concederse la suspensión del crédito combatido siempre que se reúnan los requisitos de procedencia señalados por los artículos 24 y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pero condicionada su efectividad a que el solicitante garantice el interés fiscal ante la autoridad ejecutora o en todo caso acredite que ya lo hizo; de donde se puede concluir que el otorgamiento de garantía del interés fiscal no es requisito de procedencia de la suspensión sino de eficacia, por ende, no es legal que la Sala del conocimiento niegue la citada medida cautelar bajo el argumento de que el solicitante no garantizó el interés fiscal, ya que la finalidad de la suspensión en comento es evitar que con la ejecución del acto controvertido quede sin materia el proceso, motivo por el que se puede conceder la suspensión de la ejecución del crédito fiscal impugnado aunque no se haya garantizado el interés fiscal al momento de solicitar la invocada medida, pero dicha suspensión estará condicionada a que se otorgue garantía suficiente ante la autoridad ejecutora. (7)

“Recurso de Reclamación Núm. 646/06-04-01-7/675/06-S1-01-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 28 de noviembre de 2006, por unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. César Octavio Irigoyen Urdapilleta.

“(Tesis aprobada en sesión de 30 de enero de 2007)
“R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 76. Abril 2007. p. 130”

De acuerdo a la anterior determinación, cabe señalar que si bien la eficacia de la medida cautelar, que incluye a la garantía, corresponde a la autoridad ejecutora, pues es a ella a quien compete calificarla, aceptarla si procede o rechazarla, en su caso; también lo es que, por mayoría de razón, legalmente procede otorgar la suspensión de la ejecución, **cuando exista embargo en la vía coactiva ejecutado a satisfacción de la autoridad**, conforme al artículo 28, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su debido enlace con el diverso 144 del Código Fiscal de la Federación; pues en tal caso no se requiere de que la solicitante constituya garantía ante la autoridad ejecutora, dado que se encuentra garantizado a satisfacción de la autoridad el interés fiscal, en atención al embargo que realizó en la vía económica coactiva sobre bienes propiedad del actor, solicitante de la suspensión.

En ese contexto, como ya se apuntó, si la garantía y suficiencia del interés fiscal no es un requisito de procedencia para que este Órgano Jurisdiccional conceda la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada, con mayor razón se debe conceder cuando se encuentra garantizado el interés fiscal ante la autoridad ejecutora y se presenta el supuesto del artículo 28, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sin que se haga necesario condicionar la efectividad de la suspensión a que la solicitante constituya la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora, dado que existe embargo ejecutado en la vía coactiva practicado a satisfacción de la autoridad ejecutora, que se insiste es a la que corresponde en principio lo relativo a la eficacia y suficiencia de la garantía; por tanto, tampoco ha lugar a que se exija garantía adicional, toda vez que así lo dispone el séptimo párrafo del artículo 144, del Código Fiscal de la Federación.

Al respecto, cabe señalar que si la autoridad exactora traba embargo a través de procedimiento administrativo de ejecución, éste es un medio de aseguramiento del interés fiscal previsto en el Código Fiscal de la Federación, cuya efectividad para garantizarlo se encuentra claramente reconocida por su artículo 144, séptimo párrafo, que expresamente establece: “No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para

garantizar el interés fiscal", de lo que se desprende que la ley prevé al embargo coactivo como jurídicamente apto para garantizar el interés fiscal.

En efecto, en ese sentido el embargo por excelencia, es un medio de aseguramiento del interés fiscal, que tienen a su disposición las autoridades fiscales y, de conformidad con las fracciones III y IV del numeral 155, del Código Fiscal de la Federación, puede realizarse de manera coactiva sobre bienes raíces y bienes muebles.

Resulta aplicable al caso la jurisprudencia **V-J-1aS-16**, emitida por esta Primera Sección, publicada en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año VII, Mayo 2007, Número 77, Página 34, que literalmente dice:

> "**SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.- EL EMBARGO COACTIVO ES IDÓNEO PARA GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 151 Y 144, SÉPTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.-** De conformidad con lo establecido en la fracción VI del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: 'Tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, procederá la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables'. Por su parte, el artículo 151 del Código Fiscal de la Federación, regula el embargo practicado en la vía coactiva como un medio de aseguramiento del interés del fisco, pues autoriza a la autoridad a llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, a fin de hacer efectivo un crédito de naturaleza fiscal. En esas circunstancias, si la parte actora acredita en juicio que existe garantía suficiente ante la autoridad exactora, a través del embargo coactivo trabado en bienes de su propiedad, no es necesa-

rio que para efectos de la suspensión de la ejecución del acto impugnado, constituya garantía mediante billete de depósito o póliza de fianza expedida por institución autorizada, pues el séptimo párrafo, del artículo 144 del código en cita, establece que no se exigirá garantía adicional cuando en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal. De donde se sigue que, por disposición expresa, el embargo coactivo, es jurídicamente idóneo para considerar garantizado dicho interés."

Conforme a las anteriores consideraciones **esta Primera Sección de la Sala Superior adquiere convicción, no obstante que los argumentos de la autoridad reclamante son parcialmente fundados, de que sólo son suficientes para modificar la parte considerativa de la sentencia interlocutoria de 5 de septiembre de 2007 y confirmar su parte resolutiva, la cual decretó la suspensión definitiva de la ejecución solicitada**, atento a los siguientes razonamientos:

1) Previamente, respecto a la pretensión de la autoridad reclamante que en esta vía plantea, en cuanto a controvertir el otorgamiento de la suspensión provisional y solicitar su revocación, es de precisarle que en términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción X, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la autoridad demandada estuvo en posibilidad de impugnar vía recurso de reclamación previsto en el artículo 59, el auto que decretó la suspensión provisional de la ejecución del acto impugnado; por tanto deviene inoportuno su argumento de que no contaba con medio de defensa para impugnar el acuerdo del Magistrado Instructor que decretó la suspensión provisional en el auto de 24 de mayo de 2007.

2) En cuanto al argumento de la autoridad recurrente respecto que la Sala Regional en la sentencia interlocutoria reclamada transgrede lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los diversos numerales 141 y 144 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que otorga la suspensión definitiva de la ejecución de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, siendo que contrariamente a la conclusión alcanzada por

la Sala de origen a fojas 3 de la interlocutoria reclamada, en ningún momento la Administración Local de Recaudación de Ciudad Guzmán consideró que "se encontraba imposibilitada para refutar la suficiencia del embargo por no contar con el avalúo respectivo y por esa razón dicho medio es insuficiente para caucionar los créditos fiscales a cargo del actor"; **a juicio de esta Primera Sección el mismo resulta infundado atento al contenido del oficio 322-SAT-14-II-IV-8642 de 19 de junio de 2007, antes transcrito, y a través del cual el Administrador Local de Recaudación de Ciudad Guzmán, en razón del requerimiento de informe, expresamente afirmó lo que refuta la autoridad reclamante**.

3) Por lo que hace al argumento de la recurrente, en cuanto a que la autoridad demandada manifestó que al haberse resuelto el recurso de revocación y notificado legalmente a la actora, antes del término de 3 meses que estipula el artículo 131 del Código invocado, quedó extinguido automáticamente en el plazo para garantizar al momento en que le es notificada la resolución emanada al medio de defensa, pues no significa que el plazo de los 5 meses que establece el artículo 144 de dicho ordenamiento, se debe de agotar hasta el final del mismo, para el efecto de que se sigan teniendo como garantizados los créditos fiscales determinados a cargo de la demandante, ya que el único fin de dicho plazo es para que, mientras se resuelva el medio de defensa interpuesto por la actora (recurso de revocación), no se garantice el interés fiscal de los créditos recurridos y se mantenga suspendida la ejecución, no para que continúe suspendida cuando con motivo de la resolución recaída al recurso fueron confirmados los créditos, pues al resolverse el recurso y acudir a juicio de nulidad se está en la obligación de garantizarlos, en términos del propio artículo 144 mencionado; de donde resulta la improcedencia del incidente de suspensión.

Esta Juzgadora estima que le asiste la razón a la recurrente, habida cuenta que en el mismo sentido de que lo establece el propio criterio jurisprudencial que invoca la reclamante, a fojas 12 de su recurso (folio 82 de autos), la autoridad ejecutora está en posibilidad de iniciar el procedimiento administrativo de ejecución para cobrar los créditos recurridos, una vez resuelto el recurso y habiéndose confirmado su procedencia, no obstante no haber fenecido el plazo de 5 meses a que alude

el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación. **Sin embargo, no le asiste la razón a la autoridad reclamante en cuanto a que el embargo en la vía coactiva trabado a la actora es insuficiente para caucionar los créditos fiscales a cargo de la actora, dado que como ya se ha señalado es el medio idóneo para garantizar el interés fiscal de los créditos, originalmente recurridos, y ahora impugnados en el juicio contencioso administrativo federal**.

4) En relación al dicho de la reclamante de que al haberse resuelto el recurso de revocación, antes de que feneciera el plazo, en momento alguno se afecta en sus garantías al particular; máxime que no se está hablando del remate del bien inmueble que fue embargado por la autoridad recaudadora, en consecuencia tampoco se le está ocasionando un daño irreparable al actor, como erróneamente consideró la Sala Fiscal al haber otorgado la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio, **este Órgano Jurisdiccional estima que dicho argumento resulta ineficaz para revocar la sentencia reclamada, debido precisamente a que si bien es la propia recurrente la que afirma que la solicitante de la suspensión no cumplió con el requisito de dar las razones que justificaran la procedencia de la medida suspensiva otorgada, en la especie se evidencia el daño que pudiera ocasionarse al solicitante de la suspensión al negarle ésta, dado el embargo coactivo practicado en bienes de su propiedad, sobre lo cual se abundará más adelante**.

5) Por cuanto hace al argumento de la recurrente en el sentido de que la Sala de origen varió en su totalidad las manifestaciones planteadas por la actora en el incidente de cuenta, máxime que principalmente la peticionaria de la suspensión se limita a señalar que no ha transcurrido el plazo de 5 meses a que ésta tiene derecho para garantizar el interés fiscal; **esta Primera Sección de la Sala Superior considera que le asiste la razón, en virtud de que atento a lo manifestado por la solicitante de la medida cautelar, antes transcrita, se advierte que su argumento sustancial es el señalado por la autoridad y la Sala no se ocupó de ello**.

En consecuencia, el argumento de la autoridad reclamante resulta **parcialmente fundado porque la Sala Regional efectivamente varió el planteamiento de la recurrente, dado que no examinó en sus términos la solicitud de suspensión**; sin embargo, contrariamente a lo que sostiene la reclamante, la autoridad recaudadora sí adujo imposibilidad para reputar la suficiencia del embargo por no contar con el avalúo respectivo y que por esa razón dicho medio es insuficiente para caucionar los créditos fiscales a cargo del actor.

6) También aduce la recurrente que la Sala Regional concluyó a fojas 3 del fallo reclamado que: si la autoridad ejecutora al momento del embargo hubiera considerado que la garantía era insuficiente, se encontró facultada para a su vez, señalar diversos bienes susceptibles de embargo; **sin que de las actas de embargo se desprenda manifestación alguna del ejecutor al respecto; a más de que si afirma la insuficiencia del embargo, le correspondía la carga de la prueba para acreditar tal circunstancia**.

Al respecto, **esta Primera Sección de la Sala Superior precisa** que la suspensión definitiva que se resuelve en reclamación se interpuso ante esta Juzgadora, debido al inicio del procedimiento administrativo de ejecución, donde la autoridad ejecutora estuvo en aptitud legal de exigir a la contribuyente que garantizara suficientemente el interés fiscal respecto de los créditos adeudados, máxime que en las actas de embargo correspondientes el ejecutor declaró formalmente embargados los bienes descritos, quien fue designado por la autoridad ejecutora para llevar a cabo el embargo; por lo que ahora la autoridad reclamante no puede prevalerse de que la carga probatoria, en cuanto a la suficiencia de la garantía, corresponde a la solicitante de la suspensión y que el ejecutor no es perito en la materia de avalúos de bienes, por tanto no estaba en condiciones de señalar en el acta de requerimiento de pago y embargo de fecha 30 de abril de 2007, que el bien inmueble propiedad de la actora era un bien suficiente o insuficiente para garantizar el interés fiscal: máxime que es la propia autoridad ejecutora la que admite que no cuenta con el avalúo correspondiente, lo que constituye confesión expresa en términos de lo dispuesto por el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

7) En relación al argumento de la autoridad recurrente, de que conforme a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, **para que proceda la suspensión de medidas cautelares se requiere que se cumpla con el extremo de que en la solicitud de suspensión se exprese que ésta se solicita para mantener una situación de hecho existente, que podría dar lugar a que el litigio quedara sin materia o se causara un daño irreparable al actor, justificando en su petición las razones por las cuales las medidas son indispensables**; lo que no acontece en la especie, es decir, que no se dicen de parte de la solicitante las razones que justificaran el otorgamiento de la medida. **Este Órgano Juzgador, concluye lo siguiente**:

En la especie se actualiza el supuesto previsto en la fracción VI del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que se invoca en corrección, con las facultades previstas en el tercer párrafo del artículo 50 de la ley, y que si bien la accionante en su solicitud sólo expresó su petición de suspensión de la ejecución, manifestando que aún no se había cumplido el plazo para garantizar el interés fiscal, aspecto sobre el cual la Sala Regional no se pronunció en la sentencia interlocutoria reclamada, ello aunado a la existencia del embargo en la vía coactiva ejecutado por la autoridad exactora; **también es cierto que el requisito establecido de manera general en el artículo 24, fracción I, inciso d) y en la fracción VII del artículo 28, ambos de la Ley antes mencionada, consistentes en expresar en el escrito de solicitud de la medida cautelar los motivos por los cuales la solicita y las razones por las cuáles considera que debe otorgarse la suspensión y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite, respectivamente, en principio no resulta aplicable en el caso concreto, porque es genérico dado que se refiere a otros supuestos contenidos en el artículo 28, siendo que su fracción VI, se refiere específicamente a la suspensión de la ejecución de créditos fiscales que se solicite ante este Órgano Jurisdiccional y en dicha fracción se contienen los requisitos de procedencia de tal suspensión**.

Por otra parte, **suponiendo sin conceder que tal requisito fuera necesario, en el caso concreto, la pretendida formalidad no resulta indispensable pues de los antecedentes del caso, queda evidenciado el daño inminente que se provocaría al solicitante con una negativa de la suspensión de la ejecución, pues con ello la autoridad ejecutora podría llegar al extremo de legitimar el remate de sus bienes**, lo cual indudablemente determina lo indispensable de la medida, sin que formalmente se requiera para la procedencia de ésta que explícitamente se razone la necesidad de que se conceda.

Lo anterior es así, toda vez que en la especie resulta claro cuál es la pretensión de la solicitante de la suspensión, que no es otra más que evitar que continúe el procedimiento económico coactivo, el cual siendo por su propia naturaleza de ejecución forzosa va a incidir en los bienes de la actora, hasta sus últimas consecuencias como podría ser el remate de los mismos, así las cosas, tal cuestión no debe escapar al recto criterio de esta Juzgadora en su encomienda de tutela jurisdiccional que está obligada a otorgar y que debe ir más allá de formalismos innecesarios, cuando es claro que el daño material está implícito en el efecto jurídico que conlleva el ejercicio de la facultad económica coactiva, además de lo injusto que sería negar la suspensión so pretexto de la omisión de manifestaciones para el caso irrelevantes, máxime que el interés fiscal se encuentra garantizado mediante embargo coactivo trabado por la propia autoridad.

(...)

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 23, fracción VIII, de la Ley Orgánica de este Tribunal, 24, 25, 28, 59, 62, 67, 70, 74, fracciones I y II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su debido enlace con los diversos 144, 145, 151, 152 y 155 del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables, esta Primera Sección de la Sala Superior resuelve:

R E S O L U T I V O S

I.- Es procedente y parcialmente **fundado** el recurso de reclamación interpuesto por el Titular de la Administración Local Jurídica de Guadalajara, del Servicio de Administración Tributaria, pero insuficiente para revocar la sentencia interlocutoria recurrida.

II.- Se modifica la sentencia interlocutoria de 5 de septiembre de 2007, dictada por la Primera Sala Regional de Occidente, sólo en la parte considerativa y se confirma en su parte resolutiva que decreta la suspensión definitiva de la ejecución de los créditos fiscales confirmados en la resolución combatida en juicio, contenida en el oficio número 325-SAT-14-II-RA-0199 de 7 de marzo de 2007, precisada en el resultando 1º de este fallo, en términos de lo expuesto en el último considerando.

III.- Hágase del conocimiento de la Primera Sala Regional de Occidente, la presente resolución.

IV.- NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvió la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día 29 de abril de 2008, por mayoría de cuatro votos a favor de la ponencia de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, María del Consuelo Villalobos Ortíz, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Alejandro Sánchez Hernández y un voto en contra del C. Magistrado Jorge Alberto García Cáceres.

Fue Ponente en este asunto la C. Magistrada María del Consuelo Villalobos Ortíz, cuya ponencia fue aprobada en sus términos.

Se elaboró el presente engrose el 8 de mayo de 2008, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente a partir del 7 de diciembre

de 2007. Firma el C. Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la C. Licenciada Virginia Pétriz Herrera, Secretaria Adjunta de Acuerdos de la Primera Sección, quien da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-1aS-34

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. NO PROCEDE SU NEGATIVA CON APOYO EN LOS ARTÍCULOS 141 Y 142 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- El artículo 1°, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone: "Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los Tratados Internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravengan las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece esa Ley". Por su parte el artículo 28, fracción VI de la citada ley establece que cuando se solicite la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos al cobro de créditos de naturaleza fiscal, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, procederá la suspensión y esta surtirá efectos si se ha constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora, por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. De los textos anteriores se desprende: a) La legislación adjetiva especial de la materia contencioso administrativa, es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; b) La procedencia de la suspensión para la hipótesis arriba señalada, y la forma en que la misma surte efectos, que será cuando se ha constituido o se constituye garantía. Lo expuesto permite concluir que para el otorgamiento de la suspensión, no se requieren mayores exigencias, como son las contenidas en disposiciones de índole general, emitidas con posterioridad a la regulación especial consistente en reformas y adiciones a los artículos 141 y 142 del Código Fiscal de la Federación, publicadas el 26 de junio de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, que se refieren a los medios de constituir la garantía del interés fiscal, para los cobros de créditos fiscales, ante las autoridades ejecutoras y los alcances de estas para su eficacia. En ese orden de ideas, la pretensión de la autoridad recurrente de que se niegue la sus-

pensión de la ejecución de los créditos impugnados en juicio, bajo el argumento de que no se garantizó el interés fiscal conforme a las reformas citadas, es infundada, cuando ha mediado ofrecimiento de garantía consistente en embargo coactivo, o éste ya ha sido trabado, porque en primer término confunde requisitos de procedencia de la suspensión, que corresponde observar a este órgano jurisdiccional, con los de eficacia, que en su caso debe vigilar la autoridad en cuanto a la suficiencia de las garantías, y porque esencialmente tales reformas no son aplicables tratándose del juicio contencioso administrativo en lo general y de la medida cautelar de la suspensión en lo particular; dado que para esos efectos se tendría que haber reformado el Título II "De la Substanciación y Resolución del Juicio", Capítulo III, "De las Medidas Cautelares", de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que por mandato expreso es la ley especial, toda vez que la reforma al Código Fiscal de la Federación no puede modificar las reglas que rigen el procedimiento contencioso administrativo ni los términos y condiciones previstos por la ley especial, atento al principio *lex posteriori generalis, non derogat priori especial*, que despliega la prevalencia del criterio de especialidad de la ley, sobre el de generalidad. (9)

Recurso de Reclamación Núm. 10735/06-11-02-5/1264/07-S1-02-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de mayo de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretaria: Lic. Praxedis Alejandra Pastrana Flores.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de mayo de 2008)

PRECEDENTES:

V-P-1aS-448
Recurso de Reclamación Núm. 350/07-12-03-9/553/07-S1-02-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de octubre de 2007, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en

contra.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretaria: Lic. María de Lourdes Vázquez Galicia.
(Tesis aprobada en sesión de 18 de octubre de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 83. Noviembre 2007. p. 76

VI-P-1aS-22
Recurso de Reclamación Núm. 9303/06-11-01-1/1355/07-S1-02-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 6 de marzo de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretaria: Lic. Praxedis Alejandra Pastrana Flores.
(Tesis aprobada en sesión de 6 de marzo de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 5. Mayo 2008. p. 65

VI-P-1aS-23
Recurso de Reclamación Núm. 5252/07-11-03-3/1313/07-S1-02-05.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de abril de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretaria: Lic. Esmeralda Reyes Durán.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de Abril de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 5. Mayo 2008. p. 65

SEGUNDA SECCIÓN

COMERCIO EXTERIOR

VI-P-2aS-44

DECISIÓN 2/2000 DEL CONSEJO CONJUNTO DEL ACUERDO INTERINO SOBRE COMERCIO Y CUESTIONES RELACIONADAS CON EL COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD EUROPEA. FORMA EN LA QUE DEBE PROCEDER LA AUTORIDAD ADUANERA CUANDO DETECTA QUE EL CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN NO SE LLENÓ DEBIDAMENTE.- De acuerdo a lo que se indica en el artículo 17 del Acuerdo por el que se dan a conocer las notas explicativas a que se refiere el artículo 39 del anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto México-Comunidad Europea, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 04 de mayo del 2001, cuando la autoridad aduanera lleva a cabo el rechazo de un certificado de circulación por razones técnicas, se encuentra obligada a marcar el documento con la mención "Documento rechazado" en uno de los idiomas oficiales del Acuerdo, indicando la razón o razones ya sea en el certificado o en otro documento emitido por las autoridades aduaneras; debiendo devolver al importador el certificado de circulación y, cuando corresponda, el otro documento, con el fin de que este pueda obtener un nuevo certificado expedido a posteriori; y pudiendo conservar eventualmente una fotocopia del certificado rechazado para efectuar una verificación posterior al despacho o si tiene motivos para sospechar fraude. De lo anterior se observa, que al detectarse por parte de la autoridad aduanera que el certificado de circulación acompañado a un pedimento de importación, no se encuentra llenado de conformidad con el Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, se actualiza perfectamente una causa de rechazo del citado documento por "razones técnicas"; y por ello es que la citada autoridad se encuentra obligada a seguir el procedimiento regulado en el artículo en comento. (10)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6323/06-06-02-3/930/07-S2-08-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 20 de noviembre de 2007, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Francisco Javier Marín Sarabia.
(Tesis aprobada en sesión de 17 de abril de 2008)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

A).- Que la resolución originalmente recurrida es ilegal, pues en ella se señala que la Aduana de Monterrey, al efectuar el segundo reconocimiento de la operación amparada en el pedimento 06 52 3323-6008625, detectó que el certificado de circulación EUR.1 presentado para aplicar un trato arancelario preferencial al amparo del Acuerdo comercial celebrado entre la Unión Europea y México, se encontraba incorrectamente llenado, ya que en el campo 12 se señaló el lugar en donde fue llenado, Alessandria, Italy, pero se omitió señalar la fecha del cumplimiento; por lo que con base en esa incidencia, se emitió un requerimiento de conformidad con la regla 2.4.8 de la Resolución en Materia Aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Unión Europea y sus Anexos 1 y 2, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2002, para que en el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente a la notificación del Acta, el importador presentara un certificado en el que se subsanaran las irregularidades detectadas.

B).- Que atendiendo a lo anterior, y considerando que sin el original del certificado de circulación, el exportador europeo no puede corregir o emitir otro certifica-

do respecto de la misma mercancía; para encontrarse en posibilidades de dar cumplimiento al requerimiento en comento, exhibiendo un certificado en el que se subsanaran las irregularidades detectadas, el 16 de marzo del 2006, presentó un escrito solicitando a la Aduana de Monterrey que le devolviera el original del certificado de circulación EUR.1 No. 612993 expedido por el exportador "Casa Damiani" a favor del importador Carranza y Carranza Joyas Finas, S.A. de C.V., presentado junto al pedimento de importación 06 52 3323-6008625; solicitando incluso que la autoridad aduanera siguiera el procedimiento de rechazo por razones técnicas previsto por el artículo 17 del *Acuerdo por el que se dan a conocer las Notas Explicativas a que se refiere el artículo 39 del Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto México - Comunidad Europea*, publicado el 04 de mayo de 2001 en el Diario Oficial de la Federación, para poder presentar un certificado nuevo "a posteriori" y así poder continuar gozando con el trato arancelario preferencial, a lo que la citada Aduana no dio respuesta a dicha promoción.

C).- Que no obstante lo anterior, y a pesar del que el artículo 17, referido en el inciso anterior, prevé que cuando se rechace un certificado de circulación por razones técnicas, como lo es la omisión de llenado del campo 12, que es de carácter obligatorio, la autoridad aduanera deberá marcar el documento con la mención de rechazado, indicando la razón o razones, devolviendo dicho certificado al importador a fin de que pueda obtener uno nuevo expedido a posteriori; en el caso concreto, la autoridad demandada omitió llevar a cabo dicha devolución y procedió a emitir la resolución originalmente recurrida.

D).- Que en el presente juicio contencioso administrativo, se demuestra la veracidad de la falta de devolución del certificado de circulación EUR.1 Número 612993 original, con el oficio 326-SAT-16-859-V-5317 de fecha 28 de julio del 2006, en el que la Aduana de Monterrey señala que el pedimento original número 06 52 3323-6008625 de fecha 24 de febrero del 2006, y el original del citado certificado de circulación, fueron enviados a la Administración Central de Contabilidad y Glosa, dependiente de la Administración General de Aduanas; por lo que es evidente que es la propia Aduana de Monterrey, la que ha hecho imposible el cumplimiento del reque-

rimiento que le formuló, al no llevar a cabo la devolución del original del certificado de circulación citado, el que es indispensable para que el exportador europeo pueda corregir o emitir otro certificado respecto de la misma mercancía.

E).- Que de igual manera es ilegal la resolución impugnada en este juicio contencioso administrativo, atento a que al promover el recurso de revocación en contra de la resolución dictada por la Aduana de Monterrey, solicitó expresamente a la hoy autoridad demandada, en los términos del tercer y cuarto párrafos del artículo 123 del Código Fiscal de la Federación, que requiriera a la Aduana de Monterrey o a la Administración General de Aduanas, la presentación del original del certificado de circulación, y sin embargo, la demandada se limitó a confirmar la validez de la resolución recurrida, con base en una mera repetición de lo dicho por la Aduana, en el sentido de que no se presentó el certificado corregido, expedido a posteriori, lo que implica una flagrante violación al contenido del citado artículo 123 del Código Fiscal de la Federación.

En principio, se estima conveniente precisar, que **si bien es cierto que** la resolución impugnada en el presente juicio y por la que se admitió a trámite la demanda de nulidad, es la contenida en el oficio 325-SAT-19-III-R2-RA-5480 de fecha 31 de agosto del 2006, emitida por el C. Administrador Local Jurídico de San Pedro Garza García de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, a través de la cual se resolvieron infundados los agravios planteados en el recurso de revocación promovido por la ahora demandante y en consecuencia se confirmó la resolución controvertida en esa instancia; y que de la lectura integral de los argumentos de agravio que han sido resumidos en los incisos **A)**, **B)**, **C)** y **D)**, se puede observar que estos se encuentran encaminados a controvertir la legalidad de la resolución originalmente recurrida por el ahora enjuiciante, es decir, de la resolución contenida en el oficio identificado con el número 326-SAT-16-859-V-3629 de fecha 31 de mayo del 2006, emitida por el C. Subadministrador de la Aduana de Monterrey de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, a través de la cual, entre otras cosas, se determina un crédito fiscal en cantidad total de $43,351.00 (CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PE-

SOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de impuesto general de importación omitido actualizado, impuesto al valor agregado omitido actualizado, derecho de trámite aduanero omitido actualizado, recargos y multas; **también resulta cierto que** tal situación se encuentra perfectamente permitida por el artículo 1º, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, numeral que es del tenor siguiente:

> "ARTÍCULO 1º.- (...)
> "Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo, no satisfaga el interés jurídico del recurrente, y éste la controvierta en el juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.
> "(...)"

En este sentido, si la actora interpuso juicio contencioso administrativo en contra de la resolución recaída a un recurso administrativo, en virtud de que esta no satisfizo su interés jurídico y continúa afectándolo, se debe entender que en forma simultánea impugna, no sólo la resolución que recayó al recurso, sino también aquella que fue objeto de este, es decir la recurrida, razón por la cual, en estricto apego a lo dispuesto en el numeral transcrito, el enjuiciante se encuentra legalmente posibilitado para plantear agravios en contra de la resolución recurrida, es decir de la emitida por la Aduana de Monterrey, a través de la cual se le determinó el crédito fiscal a cargo, y esta Juzgadora se encuentra obligada a analizar dichos agravios (en cuanto a su fondo), e inclusive también lo está para pronunciarse sobre la legalidad de la resolución recurrida, conforme a lo que establece el penúltimo párrafo, del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; numeral que a la letra señala:

> "ARTÍCULO 50.- (...)
> "Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con los elementos suficien-

tes para ello, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante (...)"

Así, conforme a los numerales citados, en el juicio contencioso administrativo se atiende a un principio de "litis abierta", conforme al cual, en la sentencia que dicte este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuando se impugne la resolución recaída a un recurso administrativo, se deben resolver, no sólo los agravios encaminados a controvertir la legalidad de la resolución impugnada, sino que además se deberán resolver los que controviertan la recurrida, analizándose los nuevos argumentos que pueden incluir los razonamientos que se refieran a la resolución recurrida, y los dirigidos a impugnar la nueva resolución; así como aquellas razones o motivos que reproduzcan agravios esgrimidos en el recurso administrativo en contra de la resolución originaria.

Por tanto, todos estos argumentos, ya sean novedosos o reiterativos de la instancia administrativa, constituyen los conceptos de anulación propios de la demanda fiscal, lo cual implica que con ellos se combaten tanto la resolución impugnada como la recurrida en la parte que afecte el interés jurídico del actor, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está obligado a estudiarlos.

Una vez formulada la precisión que antecede, **este Cuerpo Colegiado**, habiendo analizado los argumentos de las partes y las constancias que integran los autos, **llega a la convicción de que los argumentos de agravio resumidos en los incisos A), B), C) y D) de este considerando resultan fundados** y suficientes para declarar la nulidad de la resolución impugnada, atento a lo que enseguida se expresa.

Del contenido íntegro de la resolución originalmente recurrida, la cual se encuentra agregada en autos a folios 20 al 29, se observa que en ésta la autoridad demandada, entre otras cosas, determinó a cargo de la ahora actora un crédito fiscal en cantidad total de $43,351.00 (CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de impuesto general de importación omitido actualizado, impuesto al valor agregado omitido

actualizado, derecho de trámite aduanero omitido actualizado, recargos y multas; atendiendo a lo siguiente:

i. Que con fecha 24 de febrero del 2006, mediante pedimento de importación número 06 52 3323-6008625, la ahora actora llevó a cabo la importación de la mercancía consistente en artículos de joyería, con fracción arancelaria 7113.19.99, sujetándola a un trato arancelario preferencial al tenor de lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.

ii. Que al efectuarse el segundo reconocimiento de la mercancía, el dictaminador detectó que el certificado de circulación EUR.1 Número 612994, presentado junto con el pedimento de importación señalado en el punto anterior, se encontraba incorrectamente llenado, ya que en el campo 12 del mismo, se señala el lugar en donde fue llenado (Alessandria, Italy), pero se omitió señalar la fecha del cumplimiento.

iii. Que ante tal circunstancia, mediante el acta circunstanciada de hechos 326-SAT-16-858-IV de fecha 01 de marzo del 2006, se hizo saber a la ahora actora de la irregularidad referida en el punto anterior; requiriéndole, con fundamento en la regla 2.4.8 de la Resolución en Materia Aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, para que dentro del plazo de 10 días presentara un certificado en el que se subsanara la irregularidad detectada.

iv. Que en atención al requerimiento referido en el punto anterior, la ahora actora presentó escrito ante la Aduana de Monterrey, el día 16 de marzo del 2006, solicitando la devolución del original del certificado de circulación EUR.1 Número 612994, que se acompañó al pedimento de importación 06 52 3323-6008625, a efecto de poder solicitar al exportador en el extranjero la emisión de un certificado corregido, atento a que este último no estaba dispuesto a corregir o a emitir un nuevo certificado si no se le

devolvía el original del que ya había expedido. En el mismo escrito, la ahora actora solicitó que, atento a que tendría que enviar el certificado original de vuelta a Europa, se le concediera una prórroga de 10 días, en términos del artículo 53 del Código Fiscal de la Federación.

v. Que respecto del escrito señalado en el punto anterior, la autoridad emisora de la resolución originalmente recurrida consideró que no era posible acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que de los anexos que conforman el expediente respectivo, se observó que en el mismo sólo obraban copias simples del pedimento de importación, de la factura y del certificado de circulación. Señalándose además que la ahora actora no exhibió el certificado de origen requerido y que no era posible conceder la prórroga solicitada, atento a que el artículo 152 de la Ley Aduanera no prevé más que un término de 10 días para ofrecer pruebas y formular alegatos dentro del procedimiento.

vi. En atención a lo anterior, la Aduana de Monterrey consideró que la mercancía importada por la ahora actora, no gozaba de un trato arancelario preferencial y en atención a ello determinó que el importador dejó de pagar contribuciones al comercio exterior y accesorios, por cantidad de $43,351.00 (CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de impuesto general de importación omitido actualizado, impuesto al valor agregado omitido actualizado, derecho de trámite aduanero omitido actualizado, recargos y multas.

Se observa entonces, que la autoridad emisora de la resolución originalmente recurrida determinó el crédito fiscal a cargo de la ahora actora al considerar, esencialmente, que esta última no dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló en el acta circunstanciada de hechos 326-SAT-16-858-IV de fecha 01 de marzo del 2006, en la que se le hizo saber de la irregularidad detectada en el certificado de circulación EUR.1 número 612993, acompañado al pedimento de importación número 06 52

3323-6008625, consistente en que en el campo 12 del mismo, se señala el lugar en donde fue llenado (Alessandria, Italy), pero se omitió señalar la fecha del cumplimiento; requerimiento que consistió en que, dentro del plazo de 10 días, se debía presentar un certificado en el que se subsanara la irregularidad detectada.

Se observa, además, que la autoridad aduanera, apoyó su requerimiento y fundó su resolución de determinar las contribuciones y accesorios a cargo de la ahora actora, en la regla 2.4.8 de la Resolución en Materia Aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea.

Ahora bien, la actora argumenta esencialmente que es la propia Aduana de Monterrey, la que ha hecho imposible el cumplimiento del requerimiento que le formuló, al no llevar a cabo la devolución del original del certificado de circulación citado, el que es indispensable para que el exportador europeo pueda corregir o emitir otro certificado respecto de la misma mercancía, lo que estima que es una contravención a lo dispuesto por el artículo 17 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Notas Explicativas a que se refiere el artículo 39 del Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto México - Comunidad Europea, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 4 de mayo de 2001.

En atención a lo anterior y a efecto de resolver debidamente los agravios que nos ocupan, se estima necesario llevar a cabo un análisis del contenido del apartado que, en la Resolución en Materia Aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre del 2002, se refiere a la forma de certificar el origen de las mercancías importadas al amparo del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el cual es del tenor siguiente:

"2. CERTIFICACIÓN DE ORIGEN

"2.1. Para los efectos del artículo 15 del Anexo III de la Decisión, los productos originarios de la Comunidad que se importen con trato preferencial deberán estar amparados por el Certificado a que se refiere el Apéndice III, del Anexo III de la Decisión o en su caso, por la Declaración en factura prevista en el Apéndice IV, del Anexo III de la Decisión.

"2.2. CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN EUR.1

"2.2.1. El Certificado que ampare la importación de los productos originarios a territorio nacional deberá estar llenado de conformidad con el Anexo III de la Decisión y el Anexo 1 de la presente Resolución, foliado y sellado por la autoridad aduanera del Estado Miembro de la Comunidad y firmado por el exportador o su representante autorizado.

"El Certificado podrá ser emitido en cualquiera de los siguientes idiomas: español, inglés, francés, alemán, danés, griego, italiano, portugués, finés, sueco y holandés. En caso de presentarse en un idioma diferente al español o inglés, deberá acompañarse de la traducción correspondiente al español o inglés.

"2.2.2. Para los efectos de la regla 2.2.1. de la presente Resolución, los sellos utilizados por las autoridades aduaneras de los Estados Miembros de la Comunidad Europea estarán a disposición de los importadores para su consulta, en la Administración General de Aduanas y en las aduanas del país.

"2.2.3. Para los efectos del artículo 17(3) del Anexo III de la Decisión, cuando se haya realizado la importación de los productos sin haber solicitado el trato preferencial, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de la importación, el interesado podrá solicitar la devolución de los aranceles pagados en exceso o efectuar la compensación contra los mismos aranceles que esté obligado a pagar en futuras importaciones.

"Para tales efectos, la solicitud de devolución o el aviso de compensación deberá presentarse ante las Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente o de Grandes Contribuyentes correspondientes al domicilio del contribuyente, o ante la aduana en la que se tramitó el pedimento, según sea el caso, en la Forma Fiscal 32, 'Solicitud de Devoluciones' y su Anexo 2 'Relación de Operaciones de Comercio Exterior', que forma parte del Anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002 o en el 'Aviso de compensación de contribuciones y aprovechamientos al comercio exterior', que forma parte del Anexo 1 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2002, anexando copia del pedimento de importación, de la rectificación o rectificaciones a dicho pedimento y el Certificado que ampare los productos importados, que indique en el campo 7, la leyenda 'Expedido a Posteriori' o 'Issued Retrospectively', establecidas en el artículo 17 del Anexo III de la Decisión.

"2.2.4. En caso de robo, pérdida o destrucción de un Certificado se podrá aplicar el trato preferencial al amparo de un duplicado del Certificado emitido de conformidad con el artículo 18 del Anexo III de la Decisión.

"2.2.5. No obstante lo dispuesto en la regla 2.2.1. de la presente Resolución, la autoridad aduanera aceptará el Certificado utilizado por la Comunidad en otros acuerdos preferenciales siempre y cuando en el campo 8 del Certificado se indique la clasificación arancelaria del producto por lo menos a nivel de partida (cuatro dígitos) conforme al Sistema Armonizado y cumpla con las demás disposiciones del Anexo III de la Decisión y de la presente Resolución.

"2.2.6. La autoridad aduanera podrá aceptar descargos parciales de Certificados cuando se efectúen operaciones amparadas con el 'Pedimento de Importación. Parte II. Embarque parcial de mercancías' o cuando un solo Certificado ampare productos descritos en una sola factura, orden de entrega o cualquier otro documento comercial, que se despachen al amparo de dos o más pedimentos.

"En estos casos, el original del Certificado deberá anexarse al primer pedimento anotando en el campo de observaciones de este último la leyenda 'descargo parcial' y a los demás pedimentos se deberá anexar copia simple del Certificado anotando en el campo de observaciones el número de pedimento al que se anexó el Certificado original y la leyenda 'descargo parcial'."

De las Reglas antes transcritas se desprende, entre otras cosas, lo siguiente:

a).- Que los productos originarios de la Comunidad Europea que se importen con trato preferencial deberán estar amparados:

- Por el certificado de circulación a que se refiere el Apéndice III, del Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, o

- En su caso, por la declaración en factura prevista en el Apéndice IV, del Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea.

b).- Que el certificado que ampare la importación de los productos originarios a territorio nacional deberá estar llenado de conformidad con el Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y el Anexo 1 de la Resolución en Materia Aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, foliado y sellado por la autoridad aduanera del Estado Miembro de la Comunidad y firmado por el exportador o su representante autorizado.

c).- Que el certificado de circulación podrá ser emitido en cualquiera de los siguientes idiomas: español, inglés, francés, alemán, danés, griego, italiano, portugués, finés, sueco y holandés; y que en caso de presentarse en un idioma diferente al español o inglés, deberá acompañarse de la traducción correspondiente al español o inglés.

Ahora bien, el apartado que en la Resolución en Materia Aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, se refiere a la validez de la certificación de origen, expresamente indica:

"2.4. VALIDEZ DE LA CERTIFICACIÓN DE ORIGEN

"2.4.1. El Certificado y la Declaración en factura tendrán una vigencia de diez meses a partir de la fecha de su expedición en el país de exportación.
"Cuando se trate de duplicados de Certificados expedidos en los términos del artículo 18 del Anexo III de la Decisión, que en el campo 7 contengan la leyenda 'Duplicado' en alguno de los idiomas oficiales de la Decisión, el plazo de vigencia correrá a partir de la fecha de expedición del Certificado original, la cual se deberá asentar en el campo 11 del duplicado del Certificado.

"2.4.2. Para los efectos del artículo 22(2) y (3) del Anexo III de la Decisión, se podrá aplicar el trato preferencial para los productos originarios amparados por un Certificado o una Declaración en factura aún cuando haya transcurrido el plazo a que se refiere la regla 2.4.1. de la presente Resolución, en los siguientes casos:
"A. En caso de pérdida, robo o destrucción del Certificado original, cuando se solicite un duplicado dentro del plazo de vigencia del Certificado original y éste no sea expedido dentro de dicho plazo, por causas imputables a la autoridad aduanera del Estado Miembro de la Comunidad de exportación.

"B. Cuando la importación de los productos originarios se haya efectuado dentro del plazo de vigencia del Certificado o de la Declaración en factura, y no se haya solicitado el trato preferencial al momento de la importación, siempre que se cumpla con lo dispuesto en las reglas 2.2.3. y 2.3.3. de la presente Resolución.

"2.4.3. No será admisible el Certificado y se negará el trato preferencial, cuando dicho Certificado no cumpla con cualquiera de los requisitos o condiciones previstos en el Anexo III de la Decisión, en la presente Resolución o su Anexo 1, salvo lo dispuesto en las reglas 2.4.6., 2.4.7. y 2.4.8. de la presente Resolución.

"2.4.4. No será admisible la Declaración en factura y se negará el trato preferencial, cuando no se cumpla con cualquiera de los requisitos previstos en el Anexo III de la Decisión o en la presente Resolución, salvo lo dispuesto en las reglas 2.4.6., 2.4.7. y 2.4.8. de la presente Resolución.

"2.4.5. Se negará el trato preferencial cuando el número asentado en la factura como número de exportador autorizado no corresponda a los otorgados por la autoridad aduanera del Estado Miembro de la Comunidad; cuando la autorización correspondiente haya sido revocada; o cuando no se haya asentado la firma del exportador autorizado de conformidad con el artículo 20(5) del Anexo III de la Decisión.

"2.4.6. Cuando existan discordancias menores entre la información asentada en el Certificado o la Declaración en factura y la asentada en el pedimento de importación o sus anexos, se podrá aceptar el Certificado o la Declaración en factura siempre que se compruebe debidamente que el Certificado o la Declaración en factura corresponden a las mercancías que se presenten al despacho y la descripción de las mercancías sea la misma.

"2.4.7. La existencia de errores de forma evidente, tales como errores de mecanografía en el Certificado o en la Declaración en factura, por sí solos, no darán lugar a que se niegue el trato preferencial aplicado, siempre que no se trate de errores que puedan generar dudas sobre la exactitud del Certificado o de la Declaración en factura.
"Los errores a que se refiere el párrafo anterior no incluyen, entre otros, los siguientes supuestos:
"A. Cuando el formato no corresponda al autorizado.
"B. Cuando los productos descritos no correspondan a los que se importen con el trato preferencial.
"C. Cuando los errores u omisiones modifiquen sustancialmente la información asentada.
"D. Cuando los errores u omisiones se refieran a la fecha de firma, a la clasificación arancelaria, la descripción de los bienes o el número de exportador autorizado, según sea el caso.

"2.4.8. Cuando el Certificado o la Declaración en factura que sean presentados ante la autoridad aduanera, sean ilegibles, defectuosos o no se hayan llenado de conformidad con lo dispuesto en el Anexo III de la Decisión la autoridad aduanera levantará acta circunstanciada en la que determine la retención de las mercancías en los términos del artículo 60 de la Ley y en la misma requerirá al importador para que en un plazo de 10 días contados a partir del día siguiente a la notificación del acta, presente el Certificado o la Declaración en factura en el que se subsanen las irregularidades mencionadas de tal forma que cumplan con los requisitos que establecen el Anexo III de la Decisión o la presente Resolución.
"Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable siempre que:
"A. La descripción de las mercancías anotada en el Certificado o en la Declaración en factura corresponda con las mercancías que se presenten para su importación, y

"B. Las mercancías que se importen no ostenten marcas, etiquetas o leyendas que las identifiquen como originarias de un país no Parte de la Decisión, aun y cuando se cuente con el Certificado o la Declaración en factura.
"Si transcurrido el plazo no se presenta la documentación en los términos requeridos, la autoridad aduanera procederá a determinar las contribuciones omitidas, actualizadas en los términos del artículo 17-A del Código, desde el momento en que se den los supuestos del artículo 56, fracción I de la Ley y hasta que se realice su pago, así como los recargos a que se refiere el artículo 21 del Código y a la aplicación de las multas que correspondan. En el caso de la omisión de pago de cuotas compensatorias, se dará inicio al procedimiento administrativo en materia aduanera."

De la transcripción que antecede se desprende, entre otras cosas, lo siguiente:

a).- Que el certificado de circulación y la declaración en factura tendrán una vigencia de diez meses a partir de la fecha de su expedición en el país de exportación, y que tratándose de duplicados de certificados, el plazo de vigencia correrá a partir de la fecha de expedición del certificado original, la cual se deberá asentar en el campo 11 del duplicado del certificado.

b).- Que no obstante lo anterior, se podrá aplicar el trato preferencial para los productos originarios amparados por un certificado de circulación o una declaración en factura aun cuando haya transcurrido el plazo de 10 meses, en caso de pérdida, robo o destrucción del certificado original, cuando se solicite un duplicado dentro del plazo de vigencia del certificado original y este no sea expedido dentro de dicho plazo, por causas imputables a la autoridad aduanera del Estado Miembro de la Comunidad de exportación, y cuando la importación de los productos originarios se haya efectuado dentro del plazo de vigencia del certificado o de la declaración en factura, y no se haya solicitado el trato preferencial al momento de la importación.

c).- Que no será admisible el certificado y se negará el trato preferencial, cuando este no cumpla con cualquiera de los requisitos o condiciones previstos en el

Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, en la Resolución en Materia Aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea o el Anexo 1 de dicha resolución, salvo:

- Cuando existan discordancias menores entre la información asentada en el certificado y la asentada en el pedimento de importación o sus anexos, siempre que se compruebe debidamente que el certificado corresponde a las mercancías que se presenten al despacho y la descripción de las mercancías sea la misma.

- Cuando en el certificado existan errores de forma evidente, tales como errores de mecanografía, que por sí solos no den lugar a que se niegue el trato preferencial aplicado, siempre que no se trate de errores que puedan generar dudas sobre la exactitud del certificado, entre los que no se incluyen los casos en los que el formato no corresponda al autorizado, cuando los productos descritos no correspondan a los que se importen con el trato preferencial, cuando los errores u omisiones modifiquen sustancialmente la información asentada, o cuando los errores u omisiones se refieran a la fecha de firma, a la clasificación arancelaria, la descripción de los bienes o el número de exportador autorizado, según sea el caso.

- Cuando el certificado que sea presentado ante la autoridad aduanera sea ilegible, defectuoso o no se hayan llenado de conformidad con lo dispuesto en el Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, y por ello la autoridad aduanera levante acta circunstanciada en la que determine la retención de las mercancías en los términos del artículo 60 de la Ley Aduanera y requiera al importador para que en un plazo de 10 días contados a

partir del día siguiente a la notificación del acta, presente el certificado en el que se subsanen las irregularidades mencionadas de tal forma que cumplan con los requisitos que establecen el Anexo III de la Decisión citada o la Resolución en Materia Aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, siempre que al efecto, la importadora, dentro del plazo antes señalado presente la documentación en los términos requeridos.

Adicionalmente, del contenido de la regla 2.4.8. de la Resolución en Materia Aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea (transcrita con antelación), se desprende, entre otras cosas, lo siguiente:

1ero.- Que cuando el certificado de circulación que sea presentado ante la autoridad aduanera, sea ilegible, defectuoso o no se haya llenado de conformidad con lo dispuesto en el Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, la autoridad aduanera:

- ✓ Levantará acta circunstanciada en la que determinará la retención de las mercancías en los términos del artículo 60 de la Ley Aduanera, y

- ✓ Requerirá al importador para que en un plazo de 10 días contados a partir del día siguiente a la notificación del acta, presente el certificado en el que se subsanen las irregularidades mencionadas de tal forma que cumplan con los requisitos que establecen el Anexo III de la citada Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea.

2do.- Que lo anterior será aplicable siempre que la descripción de las mercancías anotada en el certificado corresponda con las mercancías que se presenten para su importación, y dichas mercancías no ostenten marcas, etiquetas o leyendas que las identifiquen como originarias de un país no Parte de la Decisión, aun y cuando se cuente con el certificado o la declaración en factura.

3ero.- Que si transcurrido el plazo señalado en el punto 1ero. no se presenta el certificado de circulación en los términos requeridos, la autoridad aduanera procederá a determinar las contribuciones omitidas, actualizadas en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde el momento en que se den los supuestos del artículo 56, fracción I de la Ley Aduanera y hasta que se realice su pago, así como los recargos a que se refiere el artículo 21 del citado Código y a la aplicación de las multas que correspondan.

4to.- Que en el caso de la omisión de pago de cuotas compensatorias, se dará inicio al procedimiento administrativo en materia aduanera.

De lo expresado hasta este punto, podría pensarse que la actuación de la autoridad es válida y legal, al adecuarse a lo previsto en la regla 2.4.8. de la Resolución en Materia Aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea; atento a que, en el caso concreto, como se desprende del contenido de la resolución originalmente recurrida por la ahora demandante:

- La autoridad aduanera detectó que el certificado de circulación que fue presentado ante ella de manera conjunta con el pedimento de importación 06 52 3323-6008625, no había sido llenado de conformidad con lo dispuesto en el Anexo III de la citada Decisión;

- Ante tal circunstancia, levantó acta circunstanciada en la que hizo constar la irregularidad detectada en dicho certificado de circulación; requiriendo

al importador para que en un plazo de 10 días contados a partir del día siguiente a la notificación del acta, presentara el certificado en el que se subsanaran las irregularidades mencionadas, de tal forma que el documento citado cumpliera con los requisitos que establecen el Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea.

- Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior y ante el hecho de que la importadora no presentó el certificado de circulación en los términos requeridos, procedió a determinar las contribuciones omitidas actualizadas, así como los recargos y a la aplicación de las multas que corresponden.

Sin embargo, la demandante argumenta que en el caso concreto, la autoridad aduanera dejó de aplicar lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo por el que se dan a conocer las notas explicativas a que se refiere el artículo 39 del anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto México-Comunidad Europea, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 04 de mayo del 2001, el cual a la letra señala:

"Artículo 17.- Razones técnicas
"Podrá rechazarse un certificado de circulación EUR.1 por 'razones técnicas' cuando no se encuentre cumplimentado conforme a las disposiciones previstas. Se trata de los casos en los que pueda presentarse posteriormente un certificado expedido a posteriori. Dentro de esta categoría se incluyen, por ejemplo, las situaciones siguientes:
"- cuando los certificados de circulación EUR.1 se hayan expedido en formularios no reglamentarios (por ejemplo, que no lleven impreso fondo de garantía, presenten diferencias importantes de tamaño o color con el formato reglamentario, no lleven número de serie o no vayan impresos en uno de los idiomas oficiales del Acuerdo),

"- cuando no se haya llenado alguna de las casillas obligatorias del certificado de circulación EUR.1 (por ejemplo, la casilla 4),
"- cuando la clasificación arancelaria de la mercancía al menos al nivel de partida (4 dígitos) no vaya indicada en la casilla 8 o en la factura correspondiente para los casos contemplados en el apartado relativo a la 'Descripción de las mercancías en un certificado de circulación EUR.1',
"- cuando el certificado carezca de sello o firma (en la casilla 11 del EUR.1),
"- cuando el certificado de circulación EUR.1 haya sido expedido por una autoridad no habilitada,
"- cuando el sello utilizado no haya sido comunicado,
"- cuando se presente una fotocopia o una copia del certificado de circulación EUR.1 en lugar del original,
"- cuando la mención de las casillas 2 o 5 se refiera a un país que no sea parte del Acuerdo,
"- cuando la fecha indicada en la casilla 11 sea anterior a la fecha indicada en la casilla 12.
"Procedimiento que deberá seguirse
"Deberá marcarse el documento con la mención 'Documento rechazado' en uno de los idiomas oficiales del Acuerdo, indicando la razón o razones ya sea en el certificado o en otro documento emitido por las autoridades aduaneras. El certificado y, cuando corresponda, el otro documento será devuelto al importador con el fin de que pueda obtener un nuevo certificado expedido a posteriori. No obstante, la administración aduanera podrá conservar eventualmente una fotocopia del certificado rechazado para efectuar una verificación posterior al despacho o si tiene motivos para sospechar fraude."

Del contenido integral del artículo transcrito se desprende lo siguiente:

1º Que la autoridad aduanera podrá rechazar un certificado de circulación EUR.1 por "razones técnicas" cuando no se encuentre cumplimentado conforme a las disposiciones previstas (es decir, cuando no cumpla con cualquiera de los requisitos o condiciones previstos en el Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo

Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea; en la Resolución en Materia Aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea o el Anexo 1 de dicha Resolución;

2º Que se entiende rechazo del certificado de circulación por "razones técnicas", los casos en los que pueda presentarse posteriormente un certificado expedido a posteriori (es decir, los casos previstos en las reglas 2.4.6., 2.4.7. y 2.4.8. de la Resolución en Materia Aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea);

3º Que dentro de la categoría de rechazo por "razones técnicas" se incluyen, por ejemplo, entre otras, cuando no se haya llenado alguna de las casillas obligatorias del certificado de circulación EUR.1; y

4º Que cuando se lleve a cabo el rechazo de un certificado de circulación por razones técnicas, la autoridad aduanera:

- Deberá marcar el documento con la mención "Documento rechazado" en uno de los idiomas oficiales del Acuerdo, indicando la razón o razones ya sea en el certificado o en otro documento emitido por las autoridades aduaneras.

- Deberá devolver al importador el certificado de circulación y, cuando corresponda, el otro documento, con el fin de que éste pueda obtener un nuevo certificado expedido a posteriori.

- Podrá conservar eventualmente una fotocopia del certificado rechazado para efectuar una verificación posterior al despacho o si tiene motivos para sospechar fraude.

De lo anterior se observa que es correcta la aseveración de la demandante en el sentido de que en el caso concreto, al detectarse por parte de la autoridad aduanera que el certificado de circulación EUR.1 número 612993 (que en original se acompañó al pedimento de importación 06 52 3323-6008625), no se encontraba llenado de conformidad con el Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea (lo anterior atento a que en este se había omitido llenar el campo 12); se actualizaba perfectamente una causa de rechazo del certificado de circulación por "razones técnicas" (específicamente, el que en dicho documento no se había llenado alguna de las casillas obligatorias del certificado de circulación EUR.1); y por ello es que la citada autoridad se encontraba obligada a seguir el procedimiento regulado en el artículo en comento, a saber:

- ✓ Debía marcar el documento con la mención "Documento rechazado" en uno de los idiomas oficiales del Acuerdo, indicando la razón o razones ya sea en el certificado o en otro documento emitido por las autoridades aduaneras; y

- ✓ Debía devolver al importador el certificado de circulación y, cuando corresponda, el otro documento, con el fin de que éste pudiera obtener un nuevo certificado expedido a posteriori.

Lo que en el caso concreto no fue hecho de esta manera por la Aduana de Monterrey, lo que evidencia una flagrante contravención a lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo por el que se dan a conocer las notas explicativas a que se refiere el artículo 39 del anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto México-Comunidad Europea, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 04 de mayo del 2001, y por ende evidencia lo ilegal de su actuación, al pretender determinar un crédito fiscal a la demandante, como consecuencia del incumplimiento del requerimiento formulado en el acta circunstanciada de hechos 326-SAT-16-858-IV de fecha 01 de marzo del 2006, a pesar de que dicho incumplimiento fue originado por el hecho de que la ahora actora, al no habérsele devuelto el original del certificado de

circulación que acompañó a su pedimento de importación y que fue rechazado por la autoridad, no se encontró en posibilidades de enviarlo al exportador en el extranjero para que este último emitiera uno nuevo debidamente requisitado en el que se subsanaran las irregularidades detectadas por la autoridad; es decir, el incumplimiento al requerimiento en comento fue motivado por la propia autoridad aduanera.

Sólo a efecto de hacer evidente que el campo 12 del certificado de circulación EUR.1, es una casilla obligatoria de llenar en el mismo, se transcribe enseguida el Anexo 1 de la Resolución en Materia Aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, el cual es del tenor siguiente:

"ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN EN MATERIA ADUANERA DE LA DECISIÓN 2/2000 DEL CONSEJO CONJUNTO DEL ACUERDO INTERINO SOBRE COMERCIO Y CUESTIONES RELACIONADAS CON EL COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA COMUNIDAD EUROPEA

"Contenido
A. Notas al Certificado de circulación EUR.1

"Notas al Certificado de circulación EUR.1

"Con el propósito de aplicar el trato preferencial se deberá contar con un Certificado expedido por las autoridades aduaneras del país de exportación, de conformidad con lo siguiente:

"Campo 1. Deberá anotarse el nombre completo, denominación o razón social, domicilio completo del exportador y país de exportación.

"Campo 2. Deberá indicarse el país, grupo de países o territorio de exportación y de importación. En el caso de productos originarios de la Comunidad puede indicarse el país o la Comunidad Europea. Se podrá indicar las siglas CE (por Comunidad Europea), UE (por Unión Europea), CM (por Ceuta y Melilla) u otra que haga referencia al país, grupo de países o territorios de exportación.

"Campo 3. El llenado de este campo es opcional. En caso de llenarse deberá indicarse el nombre completo, denominación o razón social, domicilio completo del destinatario y país de destino.

"Campo 4. Deberá indicarse el país, grupo de países o territorio de la Parte exportadora de donde se consideran originarios los productos. En el caso de productos originarios de la Comunidad puede indicarse el país o la Comunidad Europea. Se podrá indicar las siglas CE (por Comunidad Europea), UE (por Unión Europea), CM (por Ceuta y Melilla) u otra que haga referencia al país, grupo de países o territorios de exportación.

"Campo 5. Deberá indicarse el país, grupo de países o territorio de la Parte importadora al que se destinan las mercancías.

"Campo 6. El llenado de este campo es opcional. En caso de llenarse podrá indicarse el medio de transporte en que se conduce la mercancía para su ingreso al territorio nacional, incluyendo el número de guía aérea o conocimiento de embarque, en caso de conocerse.

"Campo 7. Cuando el Certificado ampare productos de las partidas arancelarias 52.08 a 52.16, 54.07 a 54.08, 55.12 a 55.16, 58.01, 58.06 y 58.11 (textiles) o de las partidas arancelarias 64.02 a 64.04 (calzado), cuando dichas mercancías no hayan cumplido con la regla de origen aplicable a dichas partidas, pero cumplan con la regla de origen específica para el cupo textil o de calzado

establecido en el Apéndice II o II(a), del Anexo III de la Decisión, este campo deberá contener la siguiente leyenda:
"A. En el caso de textiles, 'Cumple la norma de origen específica establecida en el Apéndice II' o 'Meets the specific rule of origin as set out in Appendix II'.
"B. En el caso de calzado, 'Cumple la norma de origen específica establecida en la Nota 9 del Apéndice II(a)' o 'Meets the specific rule of origin as set out in Appendix II(a), Note 9'.
"Cuando se trate de un duplicado expedido de acuerdo con el artículo 18 del Anexo III de la Decisión, en este campo deberá indicarse la leyenda 'Duplicado' en alguno de los idiomas oficiales de la Decisión.
"Cuando se trate de un Certificado expedido con posterioridad a la exportación de las mercancías de acuerdo con el artículo 17 del Anexo III de la Decisión, en este campo deberá indicarse la leyenda 'Expedido a Posteriori' o 'Issued Retrospectively'.

"Campo 8. Deberá anotarse la descripción de los productos, incluyendo número de orden; marcas, numeración; número y naturaleza de los bultos; designación de las mercancías y su clasificación arancelaria por lo menos a nivel de partida (cuatro dígitos) conforme al Sistema Armonizado. Tratándose de productos que no se encuentren embalados, se deberá indicar la leyenda 'a granel'. Los productos deberán designarse de acuerdo con los usos comerciales y con el detalle suficiente para que puedan ser identificados y relacionados con la descripción contenida en la factura. También podrá utilizarse el procedimiento establecido en las Notas Explicativas para el caso de grandes envíos o descripción genérica de las mercancías, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en dichas Notas.
"En ningún caso deberán aparecer líneas o espacios en blanco y no deberán quedar espacios vacíos entre los distintos productos indicados en el Certificado. Cada producto deberá ir precedido por un número de orden. Después del último producto señalado en este campo, se deberá trazar una línea horizontal

y una línea cruzada en el espacio que quede en blanco o rayarse de tal forma que sea imposible cualquier añadido posterior.

"Campo 9. Deberá indicarse la masa bruta (Kg) u otra medida, que indique la cantidad de la mercancía amparada por el Certificado.

"Campo 10. El llenado de este campo es opcional. En caso de llenarse deberá indicarse el número de la factura o facturas que amparan las mercancías descritas en el campo 8 del Certificado.
"No obstante lo anterior, el llenado de este campo es obligatorio, cuando el exportador utilice en el campo 8 el procedimiento previsto en las Notas Explicativas referidas en la regla 7.1. de la presente Resolución para grandes envíos o para descripciones genéricas.

"Campo 11. Deberá indicarse el lugar y fecha de expedición, autoridad aduanera y el país de expedición; alguna de esta información puede aparecer en el sello mismo, siempre que aparezca claramente indicada. El número de documento de exportación solamente se indicará cuando la normatividad del país o territorio de exportación lo exija. Deberá presentarse firmado, fechado y sellado por la autoridad aduanera del país de exportación. Los sellos deberán corresponder a los que dicha autoridad notifiquen en los términos del artículo 30 del Anexo III de la Decisión.
"Tratándose de Certificados que contengan la leyenda 'Duplicado' en el campo 7, la fecha de expedición será la del Certificado original.
"La importación de los productos descritos en el campo 8 del Certificado deberá efectuarse dentro del plazo de 10 meses inmediatos siguientes a la fecha de expedición indicada en este campo.

"**Campo 12. Este campo deberá ser llenado en su totalidad, firmado y fechado por el exportador o su representante autorizado.**

"Campo 13. Este campo es de uso exclusivo de la autoridad aduanera.

"Campo 14. Este campo es de uso exclusivo de la autoridad aduanera o de la autoridad competente en el País de exportación.

"NOTAS GENERALES

"1. **El Certificado deberá llenarse en su totalidad, salvo indicación en contrario en el campo respectivo**, a máquina o a mano con tinta y en caracteres de imprenta. Es posible proporcionar información de algunos campos mediante un sello, siempre que toda la información requerida esté claramente indicada y que cualquier firma se asiente en forma autógrafa. Los campos que tienen carácter optativo, en el caso de ser llenados deberán contener la información requerida para cada uno de ellos de conformidad con las Notas al Certificado de Circulación EUR 1.

"2. El Certificado no deberá presentar raspaduras ni correcciones superpuestas. Cualquier modificación deberá hacerse tachando los datos erróneos y añadiendo, en su caso, los correctos. Tales rectificaciones deberán ser aprobadas por la persona que haya extendido el Certificado y ser visadas por la autoridad aduanera del Estado Miembro de la Comunidad en el que se haya expedido.

"3. El formato de Certificado medirá 210 x 297 mm.; no obstante se acepta en estas medidas un margen diferencial de 5 mm. mínimo y 8 mm. máximo. El papel deberá ser blanco, con un peso no menor de 25g/m2; y deberá contener un fondo de garantía color verde de protección que impida su falsificación. Podrá contener la referencia a la autorización otorgada a impresores autorizados. En este caso, además contendrá el nombre y el domicilio del impresor o una marca que lo identifique. Deberá llevar además un número de serie que permita identificarlo."

Atendiendo a lo anterior, los CC. Magistrados que integran la Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,

estiman que la Aduana de Monterrey, al dictar la resolución originalmente recurrida por la ahora demandante, lo hizo en contravención a lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Notas Explicativas a que se refiere el artículo 39 del Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto México-Comunidad Europea, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 4 de mayo de 2001, lo que se traduce en que dicha resolución sea ilegal.

No es óbice el que en la regla 2.4.8. de la Resolución en Materia Aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, en la que la demandada apoyó su actuación en el caso concreto, no señalé la obligación de la autoridad aduanera de marcar el certificado de circulación con la mención "Documento rechazado" en uno de los idiomas oficiales del Acuerdo, indicando la razón o razones ya sea en el certificado o en otro documento emitido por las autoridades aduaneras, y la de devolver al importador el certificado y, cuando corresponda, el otro documento, con el fin de que pueda obtener un nuevo certificado expedido a posteriori; atento a que en la regla 7.1 de la citada Resolución en Materia Aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, se señala que será aplicable lo dispuesto en las Notas Explicativas a que se refiere el artículo 39 del Anexo III de la Decisión, publicadas el 04 de mayo de 2001 en el Diario Oficial de la Federación o cualquier modificación posterior, precisándose que en caso de existir alguna discrepancia con lo dispuesto en la Resolución en comento, prevalecerá lo establecido en dichas Notas Explicativas, por lo que es evidente que debe prevalecer lo señalado en el artículo 17 del Acuerdo por el que se dan a conocer las notas explicativas a que se refiere el artículo 39 del anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto México-Comunidad Europea, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 04 de mayo del 2001, sobre lo que se indica en la citada regla 2.4.8 de la Resolución en Materia Aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea.

La regla 7.1. de la Resolución en Materia Aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, expresamente señala:

"7. NOTAS EXPLICATIVAS

"7.1. Se aplicará lo dispuesto en las Notas Explicativas a que se refiere el artículo 39 del Anexo III de la Decisión, publicadas el 4 de mayo de 2001 en el Diario Oficial de la Federación o cualquier modificación posterior. En caso de existir alguna discrepancia con lo dispuesto en la presente Resolución, prevalecerá lo establecido en dichas Notas Explicativas."

Tampoco es óbice el argumento de la autoridad demandada, en el sentido de que la ahora actora, en la fase oficiosa presentó únicamente copia simple del pedimento de importación, de la factura y del certificado de origen (sic), por lo que la Aduana de Monterrey no contaba con el original del citado certificado; atento a que del contenido de la resolución recurrida, específicamente de la hoja 03 de la misma, se desprende que la entonces importadora acompañó al pedimento de importación 06 52 3323-6008625, el original del certificado de circulación EUR.1 Número 612993, expedido por el exportador "Casa Damiani", con domicilio en Spa Viale Santuario 46 15048, Valenza (AL) Italy, P.IVA IT 01457570065, a favor del importador Carranza y Carranza, Joyas Finas, S.A. de C.V.; amén de que es evidente que la ahora actora presentó el citado original del certificado, ya que a ello se encontraba obligada en términos de lo dispuesto en la regla 3.1 de la Resolución en Materia Aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, y de no haberlo hecho así, la propia autoridad aduanera lo hubiera hecho constar de esa manera en su resolución.

En la regla 3.1 de la Resolución en Materia Aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas

con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, expresamente se indica lo siguiente:

"3. OBLIGACIONES DEL IMPORTADOR

"3.1. Para efectos del Anexo III de la Decisión, quienes importen productos a territorio nacional bajo trato preferencial deberán cumplir con lo siguiente:
"A. Declarar lo siguiente en el pedimento de importación:
"1. En el bloque de identificadores la clave correspondiente a las importaciones de mercancías originarias con trato preferencial; la clave que corresponda a las mercancías importadas con certificado de cupo; o la clave que corresponda a las importaciones de mercancías con certificado de importación (certificado de elegibilidad), según corresponda.
"2. En el encabezado de partidas la clave del país de origen de la mercancía.
"3. En el campo de observaciones del pedimento de importación, el número y fecha del Certificado o en su caso el número de exportador autorizado.
"B. **Anexar al pedimento de importación la siguiente documentación:**
"1. **El original del Certificado o del documento en que conste la Declaración en factura.**
"2. El certificado de cupo que ampare los productos importados con el trato preferencial, cuando corresponda de conformidad con lo dispuesto en el decreto que establece la tasa aplicable del impuesto general de importación para las mercancías originarias de la Comunidad.
"3. El certificado de importación (certificado de elegibilidad), cuando corresponda de conformidad con lo dispuesto en el decreto que establece la tasa aplicable del impuesto general de importación para las mercancías originarias de la Comunidad.
"4. Tratándose de productos originarios de conformidad con el artículo 4(1)(h), del Anexo III de la Decisión, deberá contarse con la autorización emitida por la autoridad aduanera.
"C. Entregar al agente o apoderado aduanal una copia del Certificado o del documento en que conste la Declaración en factura.

"D. Conservar copia del Certificado al momento de presentar el pedimento de importación para el despacho de los productos o del documento en el que conste la Declaración en factura y de los demás documentos que amparen la importación.
"E. Poner a disposición de la autoridad aduanera la copia del Certificado o del documento en el que conste la Declaración en factura en caso de ser requerido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Código.
"F. Presentar una rectificación al pedimento, pagando las contribuciones que se hubieran omitido, antes de que la autoridad aduanera inicie el ejercicio de sus facultades de comprobación."

A mayor abundamiento, tenemos que el hecho de que el original del certificado de circulación EUR.1 número 612993, se encuentra en poder de la autoridad aduanera, se corrobora con el contenido del oficio 326-SAT-16-859-V-5317 de fecha 28 de julio del 2006, visible a folio 40 de autos, en el que el C. Jefe de Departamento de la Aduana de Monterrey, en suplencia por ausencia del C. Administrador de dicha unidad administrativa, hace del conocimiento de la demandante, que el pedimento original 06 52 3323-6008625 de fecha 24 de febrero del 2006, el certificado de circulación en comento, y los demás anexos, fueron remitidos a la Administración Central de Contabilidad y Glosa, mediante el oficio número 1482 en fecha 09 de marzo del 2006.

Atendiendo a lo anterior, los CC. Magistrados que integran la Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa estiman que la Aduana de Monterrey, al dictar la resolución originalmente recurrida por la ahora demandante, lo hizo en contravención a lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Notas Explicativas a que se refiere el artículo 39 del Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto México-Comunidad Europea, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 04 de mayo del 2001, lo que se traduce en que dicha resolución sea ilegal.

En consecuencia, debe declararse la nulidad de la resolución originalmente recurrida, para el efecto de que la autoridad emisora de ésta (Aduana de Monterrey, dependiente de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria), siga el procedimiento de rechazo por razones técnicas, previsto en el artículo 17 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Notas Explicativas a que se refiere el artículo 39 del Anexo III de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto México-Comunidad Europea; y en consecuencia, efectúe la devolución al importador (Carranza y Carranza, Joyas Finas, S.A. de C.V.) del certificado de circulación EUR.1 Número 612993, expedido por el exportador "Casa Damiani", y que fue acompañado al pedimento de importación 06 52 3323-6008625, a efecto de que la ahora actora se encuentre en posibilidades de obtener un nuevo certificado expedido a posteriori, en el que se subsane la irregularidad detectada en el anterior (omisión en el llenado del campo 12 del mismo), y así se encuentre en condiciones legales de acreditar el origen de las mercancías importadas al amparo del citado pedimento y de someter a trato arancelario preferencial las mismas.

Ahora bien, al resultar ilegal la resolución originalmente recurrida, es procedente declarar también la nulidad de la resolución impugnada en el presente juicio, dado que en todo caso, en esta última, de manera ilegal se está confirmando la validez de una resolución que es contraria a derecho, aunado a que finalmente la impugnada es consecuencia de la que se recurrió, la que al tenor de los razonamientos expuestos a lo largo de este considerando, se está declarando nula.

Dadas las conclusiones alcanzadas con antelación, esta Juzgadora omite el estudio del argumento de agravio resumido en el inciso **E)** de este considerando; dado que su estudio y resolución en nada cambiaría el sentido del presente fallo.

(...)

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 49, 50, 51 fracción III y 52 fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; en

relación con el numeral 20 fracción I inciso b) de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es de resolverse y se resuelve:

I.- La parte actora probó su acción; en consecuencia,

II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, así como de la resolución recurrida para los efectos precisados en el presente fallo.

IV.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de esta resolución devuélvanse los autos del juicio contencioso administrativo a la Sala Regional que corresponda, una vez que haya quedado firme o en su caso se resuelva en definitiva el presente asunto y, en su oportunidad archívese este expediente.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en **sesión del 20 de noviembre del 2007**, por **unanimidad de cinco votos** de los CC. Magistrados Guillermo Domínguez Belloc, Silvia Eugenia Díaz Vega, Francisco Cuevas Godínez, Olga Hernández Espíndola, y Luis Carballo Balvanera.

Fue Ponente en el presente asunto la C. Magistrada **Olga Hernández Espíndola**, cuya ponencia fue aprobada con una modificación en los resolutivos.

Se formuló el presente engrose el día 26 de noviembre del 2007, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 fracción III y 37 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Firma el C. Magistrado Luis Carballo Balvanera, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-45

INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE. NO SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A OTORGAR GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN QUE SE LES CONCEDA CON APOYO EN EL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN VI DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Del contenido de los artículos 3º y 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, se desprende que las Instituciones de Banca Múltiple, son integrantes del Sistema Bancario Mexicano, y que por ello se consideran de acreditada solvencia y no estarán obligadas a constituir depósitos o fianzas legales, ni aun tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos, excepto cuando se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra. En atención a lo anterior, cuando una de las citadas instituciones, solicita la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a la ejecución o cobro de créditos fiscales, y no se encuentra en liquidación o en procedimiento de quiebra, en los términos expresamente señalados en la fracción VI, del artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, si se cumplen los requisitos de procedencia respectivos, se debe conceder la suspensión solicitada, la que surtirá efectos, sin que para ello sea necesario que se otorgue garantía del interés fiscal. (11)

Recurso de Reclamación Núm. 591/07-11-02-4/1098/07-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 5 de febrero de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Francisco Javier Marín Sarabia.
(Tesis aprobada en sesión de 17 de abril de 2008)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

De la lectura integral del oficio de recurso, cuya parte medular ha sido transcrita en la parte inicial de este considerando, se desprende que la autoridad que lo promueve, esencialmente, sostiene que es ilegal la determinación contenida en la sentencia interlocutoria del 16 de mayo del 2007, de conceder a la actora la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado, atento a:

A).- Que dicha determinación es contraria a lo que dispone el artículo 28 fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues en la especie, la solicitante de la suspensión jamás acreditó haber constituido ningún tipo de garantía del interés fiscal, y que la Sala Regional concedió la medida suspensiva bajo la errónea premisa de que la demandante es una institución integrante del sistema financiero mexicano al tratarse de una institución de banca múltiple, y que por ello, de acuerdo a lo que se regula en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, no se encuentra obligada a ofrecer garantía del interés fiscal.

B).- Que contrario a lo que resolvió la Sala Regional, lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, no es aplicable al caso concreto, al existir una regla procedimental específica que regula lo relativo a la suspensión solicitada, a saber, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y esa regla específica no establece excepciones, ni remite a la aplicación supletoria de diversa legislación, por lo que no se podía dejar exenta del otorgamiento de la garantía del interés fiscal a la demandante.

Los CC. Magistrados que integran la Segunda Sección de la Sala Superior, una vez analizados los argumentos resumidos con antelación, **estiman que los agra-**

vios identificados con los incisos A) y B) son infundados, atento a lo que enseguida se expresa:

En el caso concreto, como se desprende de las constancias que integran el expediente del recurso de reclamación en que se actúa, la actora, en el escrito presentado el día 10 de abril del 2007, en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Hidalgo-México de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (folios 80 al 83), solicitó la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado en el juicio contencioso administrativo 591/07-11-02-4, que en la especie, como se ha indicado en el resultando **1º** de este fallo, resulta ser la resolución contenida en el oficio 326-SAT-15-751-IV-7734, supuestamente emitida por la Aduana de Toluca, resolución que según señala, no le ha sido notificada por ninguna autoridad; impugnando de igual manera los actos inherentes a su notificación y el procedimiento administrativo del cual deriva.

Solicitud que apoyó en lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, refiriendo que de acuerdo a lo previsto en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, por tratarse de una institución que forma parte del Sistema Bancario Mexicano, no se encontraba obligada a garantizar el interés fiscal.

En relación con la solicitud de suspensión en comento, la Segunda Sala Regional Hidalgo-México, mediante sentencia interlocutoria del 16 de mayo del 2007, que obra a fojas 94 a 99 del expediente en que se actúa, de manera expresa resolvió:

"(...)

"**C O N S I D E R A N D O**

"**PRIMERO.-** Esta Sala es competente para conocer del presente incidente de solicitud de la medida cautelar consistente en la suspensión a la ejecución, de conformidad con lo establecido por los artículos 25 y 28, fracción I, de la Ley

Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los diversos 28, 30 y 31 de la Ley Orgánica de este Tribunal, así como 23, fracción XI, y 24, fracción XI, de su Reglamento Interior, ya que fue solicitada por el actor antes de dictar la sentencia definitiva, ante la Sala que conoce del juicio principal.

"**SEGUNDO.-** La medida cautelar, consistente en la suspensión a la ejecución hecha por la parte actora, cumple con los requisitos exigidos en las fracciones I y II del artículo 24, así como las fracciones I, II, VII y VIII del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al solicitarse en el escrito inicial de demanda, precisando la resolución impugnada, los hechos que se pretenden resguardar y los motivos por los que se solicita la medida cautelar, con copias suficientes para los traslados y en razón de que con ello se pretende preservar la materia del litigio y que de no considerarse se podrían causar daños irreparables al interesado, por lo que reconociendo el criterio de la apariencia del buen derecho esta Sala debe pronunciarse sobre el otorgamiento o negativa de la medida cautelar.

"**TERCERO.-** En la parte medular del escrito por el que se solicitó la suspensión de los créditos impugnados, el actor manifestó lo siguiente:

" '(...)

" 'Que por medio del presente escrito, venimos a solicitar a esa H. Sala se sirva conceder a la hoy actora, la suspensión provisional y definitiva de la ejecución de los actos impugnados en el presente juicio contencioso administrativo, ello en términos de lo establecido en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que se configuran los supuestos legales para su concesión.

" 'Habiendo quedado establecido lo anterior, resulta conveniente transcribir lo que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administra-

tivo establece como requisitos y formalidades que deben de cumplirse para el otorgamiento de la medida suspensional solicitada, por lo que el precepto legal en comento de manera textual dispone:

" '(...)

" 'Conforme a lo anteriormente transcrito, resulta procedente la petición, a cargo de la hoy actora de la medida suspensional aquí solicitada, ya que dicha petición puede hacerse en cualquier tiempo dentro de la tramitación del juicio, para lo cual resulta indispensable que la hoy actora exponga las razones por las cuales considera que resulta procedente el otorgamiento de la medida cautelar solicitada:

" 'En atención a lo anterior, cabe hacer del conocimiento de esa H. Sala que el pasado 01 de marzo de 2007, fue emitido mandamiento de ejecución por la L.C.P. Alicia Sandra Salas Venegas en su carácter de Subadministradora de Cobro Coactivo, de la Administración Ocal (sic) de Recaudación del Sur del Distrito Federal actuando en suplencia por ausencia, precisamente de la Administradora Local , por lo que el personal de esa Administración, se presentó en el domicilio de la institución bancaria que representamos el día 21 de marzo de 2007, a efecto de dar cumplimiento al mandamiento de ejecución en comento, levantándose acta circunstanciada de dicha actuación, en la que se hizo constar lo siguiente:

" '(...)

" 'A este respecto cabe señalar bajo protesta de decir verdad, que el personal del Servicio de Administración Tributaria y concretamente de la Administración Local del Sur del Distrito Federal que levantó el acta circunstanciada, no entregó copia alguna del mandamiento de ejecución en ella identificado (sic) a persona legalmente facultada para representar los intereses de la hoy actora, sin embargo la identificación del mismo fue realizada por el propio funcionario de la

Administración que levantó el acta circunstanciada, el C. José Eduardo Durán Bautista y de esa manera queda plenamente acreditada sus (sic) existencia, al contenerse dentro de la propia acta, los elementos de convicción necesarios.

" 'En razón de lo anterior, atendiendo precisamente a que una Institución de Banca Múltiple, perteneciente al Sistema Bancario Nacional no se encuentra obligada a garantizar el interés fiscal, por así establecerlo expresamente el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, al tratarse de instituciones de reconocida solvencia económica es que nuestra representada, acude a solicitar la suspensión en la ejecución del acto impugnado (determinación del crédito fiscal) a fin de que no sea ejecutado ningún otro acto dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) hasta en tanto no se resuelva en definitiva la legalidad de las resoluciones impugnadas.

" 'De no concederse la medida suspensional solicitada, se causaría un daño de difícil reparación, pues de continuar el procedimiento administrativo de ejecución, se estaría materializando una (sic) detrimento patrimonial a cargo de mi representada, -máxime si se considera que la determinación del crédito impugnado por dicha situación, carece de la naturaleza de crédito definitivo hasta en tanto no queden agotados los medios de impugnación que nuestra poderdante tiene a su alcance y se emita la resolución que en definitiva se resuelva los mismos, tal y como lo es, en el presente caso, el juicio contencioso administrativo que nos ocupa.

" '(...)'

"Por su parte, en el informe relativo a la solicitud de la medida cautelar, el representante de la demandada manifestó medularmente que es infundada la pretensión del actor en el incidente de medida cautelar y por tanto no es procedente su otorgamiento, pues si bien el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito disponga una excepción a favor de las instituciones pertenecientes al Sistema Financiero Mexicano, lo cierto es que dicha Ley no puede aplicarse

supletoriamente al presente juicio regido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"Por consiguiente, la autoridad oficiante indica que se debe aplicar lo dispuesto por la fracción VI del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece que tratándose de la medida cautelar de suspensión de la ejecución de contribuciones o créditos fiscales es necesario garantizar el interés fiscal.

"Previo a la resolución de la medida cautelar solicitada por la actora, es preciso considerar que el precepto que regula la suspensión de la ejecución, dispone:

" '**Artículo 28.** (Se transcribe)'

"De la interpretación al numeral transcrito se deduce que para solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado es necesario acreditar, entre otros supuestos, la promoción a través de la cual se solicitó ante la autoridad administrativa la suspensión y, en su caso, el documento en que la autoridad negó la suspensión, si le rechazó la garantía ofrecida o se reinició el procedimiento de ejecución. Supuestos que deben acreditarse para que la Sala esté en posibilidad de otorgar la suspensión definitiva. Sin embargo, se prevén dos casos de excepción a la regla general antes precisada, que son: *el primero,* en su fracción XI, cuando la ley que regula el acto administrativo impugnado cuya suspensión se solicite, no prevea la solicitud (sic) suspensión ante la autoridad ejecutora; y, *el segundo*, en su fracción VI, **cuando se trate de créditos de naturaleza fiscal,** supuesto en el cual surtirá efectos la suspensión **si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquier medio permitido en la ley fiscal.**

"En ese orden de ideas, en el caso en estudio, se advierte que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción VI del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como caso de excepción a la regla general

de la solicitud de la suspensión del acto impugnado, esto porque en el presente juicio se (sic) el crédito fiscal determinado en la resolución número 326-SAT-15-751-IV-7734, atribuido al Administrador de la Aduana de Toluca, del Servicio de Administración Tributaria, surtiendo efectos la misma si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.

"A juicio de los suscritos Magistrados es procedente conceder la medida cautelar consistente en la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada, por los motivos que a continuación se exponen:

"La parte actora, al ser una Institución de Banca Múltiple, pertenece al Sistema Bancario Mexicano, en términos de lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Instituciones de Crédito. Asimismo, el diverso numeral 86 de la misma Ley invocada establece que las instituciones integrantes del Sistema Financiero Mexicano estarán exentas de garantizar los créditos fiscales, este dispositivo textualmente indica:

" '**ARTÍCULO 86.** (Se transcribe)'

"De la interpretación del numeral transcrito se desprende que la solvencia de las Instituciones del Sistema Bancario Mexicano, que no se encuentren en procedimiento de quiebra o liquidación, está acreditada, por lo que se encuentran exentas de garantizar el interés fiscal en los procedimientos en que intervengan, incluyendo el procedimiento contencioso administrativo sustanciado ante este Tribunal.

"Por consiguiente, en la especie se debe conceder la medida cautelar de la suspensión de la ejecución del crédito fiscal determinado en la resolución impugnada, no obstante que la fracción VI del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo disponga que para su concesión se debe garantizar el interés fiscal por alguno de los medios establecidos por las

leyes fiscales aplicables, pues, se reitera, la parte actora es una institución de banca múltiple exenta de otorgar garantía por tener solvencia acreditada.

"No es obstáculo a lo considerado el hecho de que la autoridad demandada alegue que la Ley de Instituciones de Crédito no puede aplicarse supletoriamente a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ello es así toda vez que la supletoriedad implica que las disposiciones genéricas de una ley deberán aplicarse a los casos no regulados por la diversa que regule el caso en concreto, y en la especie la Ley de Instituciones de Crédito no se aplica supletoriamente a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sino establece el carácter excepcional de las Instituciones pertenecientes al Sistema Bancario Mexicano, exentándolas de otorgar depósitos o garantías, incluyendo el interés fiscal de los créditos controvertidos en el presente juicio, por considerarse de solvencia acreditada.

"Sirve de apoyo a lo anterior la tesis V-TASR-VII-1887, sustentada por (sic) Primera Sala Regional Noroeste (Cd. Obregón), visible en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Año V, No. 59, Noviembre de 2005, página 277.

" '**SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 208 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- PROCEDE OTORGARLA CUANDO LA PARTE ACTORA RESULTE INTEGRANTE DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO, SIN QUE SEA NECESARIO EL OTORGAMIENTO DE GARANTÍA PREVIA.** (Se transcribe)'

"En mérito de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 25, 27 y 28, fracciones IV y VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse:

"I.- Ha sido procedente y fundado el incidente de la medida cautelar interpuesto por la actora, en consecuencia;

"**II.- SE OTORGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL CRÉDITO DETERMINADO EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA,** descrita en el resultando 1°, en atención a los fundamentos y motivos vertidos en el último considerando del presente fallo."

Como se observa de la sentencia interlocutoria antes reproducida, en esta se resolvió conceder la suspensión definitiva del crédito determinado en la resolución impugnada, descrita en el resultando **1º** de esta sentencia, con fundamento en lo dispuesto, entre otros, en el artículo 28 fracciones IV y VI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al estimar que al ser la parte actora una Institución de Banca Múltiple, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Instituciones de Crédito, forma parte del Sistema Bancario Mexicano, y por ello, de acuerdo a lo que se indica en el artículo 86 de la Ley apenas citada, se encuentra exenta de garantizar los créditos fiscales; pues además, la demandante no se encuentra en procedimiento de quiebra o liquidación.

Estimó la Sala Regional que emitió la sentencia en comento, que no era obstáculo para conceder la suspensión, el argumento de la autoridad en el sentido de que la Ley de Instituciones de Crédito no puede aplicarse supletoriamente a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que la supletoriedad implica que las disposiciones genéricas de una ley deberán aplicarse a los casos no regulados por la diversa ley que regule el caso concreto, y en la especie la Ley de Instituciones de Crédito no se aplica de manera supletoria, sino en su carácter de ley especial que debe prevalecer sobre la ley general.

A juicio de los CC. Magistrados que integran la Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el criterio sostenido en la sentencia antes reproducida es correcto y por ello dicha interlocutoria resulta completamente legal al estar ajustada a derecho.

Así es, si como ha quedado señalado con antelación la enjuiciante, en su escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Hidalgo-México el día 10 de abril del 2007, solicitó la suspensión de la ejecución del acto impugnado de manera directa ante este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y considerando que a través de dicho acto **aparentemente** se trata de ejecutar y cobrar créditos de naturaleza fiscal (lo que afirma así la actora y no niega la autoridad demandada), resulta evidente que para determinar la procedencia del otorgamiento de la medida suspensiva en este caso, debe estarse a las reglas de procedencia y resolución aplicable a este tipo de solicitud de suspensión, que el legislador fiscal de manera específica reguló en la fracción VI del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que aun cuando con carencia de técnica legislativa lo dispuso en dicha fracción y no en una diversa.

Efectivamente, la actora solicitó la suspensión de la ejecución del cobro de los créditos fiscales de manera directa ante este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por lo que a juicio de este Órgano Jurisdiccional, la Segunda Sala Regional Hidalgo-México, para determinar si resultaba o no procedente conceder la suspensión definitiva, debía estar a lo previsto por la fracción VI del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; dispositivo legal que a la letra indica:

> "ARTÍCULO 28.- (...)
> "VI. Tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, procederá la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.
> "El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos:
> "a) Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso, y

"b) Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito.
"(...)"

Del numeral, cuya parte aplicable al caso concreto ha sido transcrita, se desprende:

- Que es posible para el demandante formular una solicitud de la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, y que en estos casos resultará procedente conceder la suspensión del acto reclamado;

- Que la suspensión otorgada en los casos referidos en el párrafo anterior surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; y

- Que la Sala Regional que resuelva la solicitud de suspensión en los casos señalados con antelación podrá reducir el monto de la garantía: cuando el monto de los créditos excediere la capacidad económica del demandante; o bien, si quien diera la garantía fuera un tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito (es decir, tratándose de la obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia, como forma de garantía prevista en la fracción IV, del artículo 141, del Código Fiscal de la Federación).

De lo antes señalado se desprende, que en los términos expresamente regulados en la fracción VI, del artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (antes transcrita); la Segunda Sala Regional Hidalgo-México estaba jurídicamente posibilitada para conceder la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o

créditos de naturaleza fiscal, y **ÚNICAMENTE** se precisa en el numeral últimamente citado, que dicha suspensión **SÓLO SURTIRÁ EFECTOS** si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.

Así, este Cuerpo Colegiado estima que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé requisitos de procedencia de la suspensión en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal; así como también prevé requisitos de efectividad de la misma, es decir, de la suspensión.

Por lo que se refiere a los requisitos de procedencia de la suspensión en comento, son aquellas condiciones que se deben reunir para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión y estos se prevén en las fracciones I, II, VII, e inclusive en la fracción IX del citado artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a saber:

- ✓ Que haya sido solicitada por el demandante en la demanda o en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia, ante la Sala de conocimiento del juicio;

- ✓ Que se haya acompañado a dicha solicitud, copias de esta y de las pruebas documentales que se hayan ofrecido, para correr traslado a cada una de las partes y una más para la carpeta de suspensión;

- ✓ Que en la solicitud se hayan expuesto las razones por las cuales se considera que debe otorgarse la medida y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite; y

- ✓ Que con el otorgamiento de la suspensión no se afecte al interés social, se contravengan disposiciones de orden público o quede sin materia el juicio, y además que no se trate de actos que se hayan consumado de manera

irreparable; que se le causen al demandante daños mayores de no decretarse la suspensión, y que sin entrar al análisis del fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto administrativo impugnado.

En cuanto a los requisitos de efectividad de la medida suspensiva en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, estos están contenidos en la fracción VI del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y se constituyen por aquellas condiciones que el demandante debe llenar para que surta sus efectos la suspensión concedida, esto es, para que opere la paralización o cesación del acto impugnado o de sus consecuencias, es decir, estos requisitos implican exigencias legales posteriores a la concesión de la suspensión.

Como se aprecia, a diferencia de los requisitos de procedencia de la suspensión, los requisitos de efectividad se refieren a la causación de los efectos de dicha medida, por lo que bien puede acontecer que la suspensión haya sido concedida por estar llenadas las condiciones de su procedencia y que, sin embargo, no opere la paralización o cesación del acto impugnado o de sus consecuencias, por no haberse aún cumplido los requisitos que la ley señala para su efectividad; por tanto, se puede afirmar que mientras las condiciones de procedencia atañen al otorgamiento de la suspensión, los requisitos de efectividad se contraen a su operatividad.

Atento a lo antes razonado, resulta evidente que en los términos expresamente señalados en la fracción VI, del artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Segunda Sala Regional Hidalgo-México estaba jurídicamente posibilitada para conceder la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a la ejecución o cobro de los créditos fiscales impugnados, bastando para ello que se hubiera cumplido con los requisitos de procedencia a los que se ha hecho referencia en párrafos anteriores, y **ÚNICAMENTE** se precisa en el numeral últimamente citado, que dicha suspensión **SÓLO SURTIRÁ EFECTOS** si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, es decir, la medida

suspensiva sólo surtirá efectos si se cumple con los requisitos de efectividad que, como se ha indicado con antelación, se contraen a la operatividad de la suspensión.

Sirve de apoyo, en la parte conducente y por cuanto a su razonamiento sustancial se refiere, la jurisprudencia 2a./J. 74/2006, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXIII, Mayo de 2006, Página 330, que a la letra señala:

> "**SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES. SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU EFECTIVIDAD ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL JUEZ (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 43/2001).-** El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo la jurisprudencia P./J. 43/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 268, con el rubro: 'SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.', criterio que también es aplicable respecto de la garantía prevista en el artículo 135 de la Ley de Amparo, que prevé la suspensión cuando se reclama el cobro de contribuciones, ya que, en primer lugar, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia de mérito, se señaló expresamente que los requisitos de procedencia de la suspensión (a petición de parte) son aquellas condiciones que se deben reunir para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión y que éstas se prevén en el artículo 124 de la Ley de Amparo, mientras que los requisitos de efectividad están contenidos en los artículos 125, 135, 136 y 139 de la misma Ley, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado, y se constituyen por las condiciones que el quejoso debe llenar para que surta efectos la suspensión concedida; y que a diferencia de los requisitos de procedencia de la suspensión, los de efectividad se refieren a la causación de los efectos de dicha medida, por lo que bien puede

acontecer que la suspensión haya sido concedida por estar colmadas las condiciones de su procedencia y que, sin embargo, no opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias, por no haberse aún cumplido los requisitos que la ley señala para su efectividad. En segundo lugar, porque la ratio legis de la garantía prevista en el artículo 135 de la Ley de Amparo tiende a satisfacer los fines relativos a salvaguardar, mediante la garantía, el interés fiscal de la Federación, Estado o Municipio; es decir, garantizar que el quejoso cubrirá el crédito fiscal que combate mediante el juicio de amparo, que esencialmente se asemejan a los perseguidos por los artículos 125, 130 y 139 de la Ley señalada, los cuales se examinan en la ejecutoria de mérito; por tanto, atendiendo al principio de derecho que establece 'donde existe la misma razón debe regir la misma disposición', ha de sostenerse válidamente que los argumentos contenidos en la tesis de jurisprudencia, encaminados a determinar que la suspensión provisional surte sus efectos de inmediato y durante el plazo de 5 días que establece el citado artículo 139, para dar oportunidad a que el quejoso exhiba la garantía fijada, a la que se encuentra sujeta su oportunidad, pueden ser aplicados respecto de la suspensión provisional en materia fiscal, cuando se reclama el cobro de contribuciones.

"Contradicción de tesis 50/2006-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 28 de abril de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Eduardo Delgado Durán.

"Tesis de jurisprudencia 74/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de mayo de dos mil seis."

Ahora bien, con la finalidad de llevar a cabo un análisis integral de la litis y atendiendo a un respeto al derecho subjetivo público que se contiene en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que

toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; y a efecto de dar cumplimiento a la obligación que el numeral en comento impone a los tribunales de emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; este Cuerpo Colegiado procede a determinar si en el caso concreto la medida suspensiva otorgada por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México puede estimarse que ha surtido sus efectos, al tenor de lo dispuesto por el artículo 28 fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y de lo razonado con antelación; para lo que se estima necesario llevar a cabo la transcripción del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, en su texto vigente a la fecha de solicitud de la medida suspensiva por parte de la demandante (10 de abril del 2007).

Al efecto, cabe señalar que mediante el DECRETO por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio del 2006, y en vigor a partir del día siguiente (es decir, 29 de junio del 2006), se reformó y adicionó, entre otros, el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, para entre otras cosas, adicionarle dos últimos párrafos, quedando entonces el dispositivo legal en comento, del tenor siguiente:

> "Artículo 141.- Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal en alguna de las formas siguientes:
> "I. Depósito en dinero, carta de crédito u otras formas de garantía financiera equivalentes que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general que se efectúen en las cuentas de garantía del interés fiscal a que se refiere el artículo 141-A de este Código.
> "II. Prenda o hipoteca.
> "III. Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y excusión.

"Para los efectos fiscales, en el caso de que la póliza de fianza se exhiba en documento digital, deberá contener la firma electrónica avanzada o el sello digital de la afianzadora.
"IV. Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia.
"V. Embargo en la vía administrativa.
"VI. Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, en caso de que se demuestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante cualquiera de las fracciones anteriores, los cuales se aceptarán al valor que discrecionalmente fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
"La garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas actualizadas, los accesorios causados, así como de los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este período y en tanto no se cubra el crédito, deberá actualizarse su importe cada año y ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los recargos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes.
"El Reglamento de este Código establecerá los requisitos que deberán reunir las garantías. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará que sean suficientes tanto en el momento de su aceptación como con posterioridad y, si no lo fueren, exigirá su ampliación o procederá al secuestro o embargo de otros bienes.
"En ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía.
"La garantía deberá constituirse dentro de los treinta días siguientes al en que surta efectos la notificación efectuada por la autoridad fiscal correspondiente de la resolución sobre la cual se deba garantizar el interés fiscal, salvo en los casos en que se indique un plazo diferente en otros preceptos de este Código.
"Conforme al artículo 135 de la Ley de Amparo, tratándose de los juicios de amparo que se pidan contra el cobro de las contribuciones y aprovechamientos, por los causantes obligados directamente a su pago, el interés fiscal se deberá asegurar mediante el depósito de las cantidades que correspondan ante

la Tesorería de la Federación o la Entidad Federativa o Municipio que corresponda.
"En los casos en que de acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se solicite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la suspensión contra el cobro de contribuciones o aprovechamientos, el interés fiscal se deberá asegurar mediante el depósito de las cantidades que se cobren ante la Tesorería de la Federación o la Entidad Federativa o Municipio que corresponda.
"Para los efectos del párrafo anterior, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no exigirá el depósito cuando se trate del cobro de sumas que, a juicio del Magistrado o Sala que deba conocer de la suspensión, excedan la posibilidad del solicitante de la misma, cuando previamente se haya constituido garantía ante la autoridad exactora, o cuando se trate de personas distintas de los causantes obligados directamente al pago; en este último caso, se asegurará el interés fiscal en los términos indicados en los primeros dos párrafos de este artículo."

Del numeral apenas transcrito, interpretado armónicamente con lo dispuesto en la fracción VI, del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se evidencia que, cuando el demandante solicita la suspensión contra el cobro de contribuciones (como ocurrió en la especie), el interés fiscal se debe garantizar ante la propia autoridad ejecutora, pudiendo "darse" los siguientes supuestos:

1.- Que a la fecha de interposición de la demanda y solicitud de la suspensión, el interés fiscal ya se encontrara garantizado ante la autoridad ejecutora **por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales**, caso en el cual, la suspensión definitiva deberá ser concedida por la Sala Regional respectiva, y esta surtirá sus efectos plenamente, atento a que se encuentran satisfechos los requisitos de procedencia y efectividad de la misma.

2.- Que a la fecha de interposición de la demanda y solicitud de la suspensión, el interés fiscal **NO** se encontrara garantizado ante la autoridad ejecutora, caso en el

cual la suspensión, en caso de satisfacerse los requisitos de procedencia previstos en las fracciones I, II, VII y IX del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, deberá ser concedida por la Sala Regional respectiva, pero esta **NO** surtirá sus efectos hasta en tanto el solicitante de la medida suspensiva garantice el interés fiscal ante la autoridad ejecutora; **lo que en este supuesto sólo podrá hacerse mediante el depósito de las cantidades que se le estén cobrando, ante la Tesorería de la Federación o la Entidad Federativa o Municipio que corresponda**; excepto:

- Cuando se trate del cobro de sumas que, a juicio de la Sala que deba conocer de la suspensión, excedan la posibilidad del solicitante de la misma, o

- Cuando quien vaya a otorgar la garantía sea una persona distinta de los causantes obligados directamente al pago (es decir, obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia –artículo 141 fracción IV del Código Fiscal de la Federación), caso en el que se podrá garantizar el interés fiscal en los términos indicados en los primeros dos párrafos del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, es decir, en cualquiera de las formas previstas en dicho numeral, a saber:

  - Mediante depósito en dinero, carta de crédito u otras formas de garantía financiera equivalentes que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general que se efectúen en las cuentas de garantía del interés fiscal a que se refiere el artículo 141-A de este Código.

  - Prenda o hipoteca.

  - Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y excusión.

- Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia.

- Embargo en la vía administrativa.

- Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, en caso de que se demuestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante cualquiera de las fracciones anteriores, los cuales se aceptarán al valor que discrecionalmente fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Cabe señalar que en este último supuesto, es decir, cuando quien vaya a otorgar la garantía sea una persona distinta de los causantes obligados directamente al pago, la citada garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas actualizadas, los accesorios causados, así como de los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento, y al terminar este período y en tanto no se cubra el crédito, se deberá actualizar su importe cada año y ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los recargos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes.

Entonces, en el caso concreto, desde el momento en que a la fecha de solicitud de la suspensión, el interés fiscal **NO** se encontraba garantizado ante la autoridad ejecutora, pues al efecto la propia solicitante de la medida suspensiva, argumentó no encontrarse obligada a otorgar garantía, es evidente que la suspensión concedida por la Sala Regional, para que surtiera efectos debería estimarse condicionada a que se garantizara el interés fiscal ante la autoridad ejecutora; **lo que en este supuesto sólo podría hacerse mediante el depósito de las cantidades que se le estén cobrando**, ante la Tesorería de la Federación o la Entidad Federativa o Municipio que corresponda.

Establecido lo anterior, se aborda la cuestión relativa a si la actora está obligada o no a garantizar el interés fiscal para la eficacia de la medida cautelar suspensiva concedida en la sentencia interlocutoria recurrida, para lo cual se procede al análisis de

los artículos 3º y 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, numerales que a la letra señalan:

> "ARTÍCULO 3º.- El Sistema Bancario Mexicano estará integrado por el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo, el Patronato del Ahorro Nacional y los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico, así como aquéllos que para el desempeño de las funciones que la ley encomienda al Banco de México, con tal carácter se constituyan."
>
> "ARTÍCULO 86.- Mientras los integrantes del Sistema Bancario Mexicano, no se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligados a constituir depósitos o fianzas legales, ni aún tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos."

De los numerales apenas transcritos se desprende en esencia:

- Que el Sistema Bancario Mexicano estará integrado por el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo, el Patronato del Ahorro Nacional y los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico;

- Que de igual manera formarán parte del Sistema Bancario Mexicano, los fideicomisos que se constituyan para el desempeño de las funciones que la ley encomienda al Banco de México.

- Que los integrantes del Sistema Bancario Mexicano, **por regla general**, se considerarán de acreditada solvencia y **NO** estarán obligados a constituir depósitos o fianzas legales, ni aun tratándose de obtener la suspensión de

los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos.

- Que **de manera excepcional**, los integrantes del Sistema Bancario Mexicano, **SÍ** se encontrarán obligados a constituir depósitos o fianzas legales, cuando se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra, inclusive tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos.

Esta Juzgadora, tomando en consideración lo regulado en los numerales de la Ley de Instituciones de Crédito antes transcritos, estima que la demandante, solicitante de la medida suspensiva, a efecto de que surtiera efectos la suspensión que se le concedió en la sentencia reclamada, no se encontraba obligada a otorgar garantía del interés fiscal (en específico a **depositar las cantidades que se le están cobrando**, ante la Tesorería de la Federación).

Efectivamente, si como lo manifiesta la actora, lo acepta la autoridad demandada, y se desprende de las escrituras públicas que obran en autos a folios 21 al 73 del expediente en que se actúa, la promovente del juicio contencioso administrativo y solicitante de la medida suspensiva tiene el carácter de Institución de Banca Múltiple, es evidente que debe estimarse a esta como integrante del Sistema Bancario Mexicano, por así señalarlo el artículo 3º de la Ley de Instituciones de Crédito.

Así, si la demandante forma parte integrante del Sistema Bancario Mexicano, y no se encuentra en liquidación o en procedimiento de quiebra (o por lo menos de autos no se desprende tal situación), entonces es completamente claro el hecho de que, de acuerdo a lo que se señala en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, esta se considera de acreditada solvencia **y por ello no está obligada a constituir depósitos** o fianzas legales, **ni aun tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos**; por lo que entonces, para que surtiera

efectos la suspensión que se le concedió en la sentencia reclamada, no se encontraba obligada a otorgar garantía del interés fiscal, resultando por tanto, completamente correcta y legal la determinación de la Segunda Sala Regional Hidalgo- México contenida en la referida sentencia.

No son óbice los argumentos de agravio de la autoridad recurrente, resumidos en los incisos **A)** y **B)** de este considerando, en el sentido de que en el caso concreto no es aplicable lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, al no resultar dicho ordenamiento jurídico de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; aunado a que al existir una regla procedimental específica que regula la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado en el juicio contencioso administrativo (es decir, el artículo 28 de la citada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), y no prever ésta excepciones a la obligación de garantizar el interés fiscal, entonces no se puede aplicar la excepción que se indica en el citado artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito.

En efecto, debe señalarse que la aplicación que esta Juzgadora lleva a cabo de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, no se realiza por estimar que dicha Ley es supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a la que debe decirse, únicamente le resulta aplicable supletoriamente, tal y como se desprende de su artículo 1º, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles; sino que, la aplicación en comento obedece al hecho de que al tratarse la actora, solicitante de la medida suspensiva, de una Institución de Crédito, es evidente que su naturaleza, organización, características legales, regulación, tratamiento jurídico, funcionamiento, actividades y operación, se encuentran regulados en la ley especial que la rige, a saber la Ley de Instituciones de Crédito, que en su artículo 1º, expresamente señala:

> "Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito; la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito; las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar; su sano y equilibra-

do desarrollo; la protección de los intereses del público; y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano."

Así entonces, al encontrarse las instituciones de crédito (como resulta ser la demandante y solicitante de la medida suspensiva), por disposición expresa de la Ley que las rige, relevadas de la obligación de constituir depósitos o fianzas legales, ni aun tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos; es evidente que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al resolver la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, debe otorgar esta, sin exigir que para que surta efectos la misma, el interés fiscal se encuentre garantizado o se garantice ante la autoridad ejecutora, ya que de requerirse tal garantía, se estaría contraviniendo una ley, lo que no sería permisible que fuera realizado por un tribunal que tiene como función, constitucionalmente asignada, la de controlar la legalidad de los actos de autoridades administrativas.

Atento a lo anterior, los CC. Magistrados que integran la Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa estiman, que conforme a lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, las instituciones de banca múltiple no están obligadas a otorgar, durante la tramitación del juicio contencioso administrativo en el que se controviertan créditos fiscales, garantía alguna para obtener la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución y para que dicha suspensión surta efectos; sin que en nada cambie esta situación la circunstancia de que, conforme al artículo 28 fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la suspensión otorgada sólo surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales, y que al efecto el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación establezca que la autoridad fiscal está imposibilitada para conceder la dispensa de este tipo de garantías, ya que esto último sólo es aplicable a los sujetos que legalmente deban garantizar un crédito fiscal, mas no a quienes, por disposición expresa de la ley, estén relevados de tal obligación.

No pasa desapercibido para esta Juzgadora, la existencia de la jurisprudencia P./J. 6/92, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1992, página 60, que a la letra señala:

"**INSTITUCIONES DE CRÉDITO. SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A OTORGAR GARANTÍA O CONTRAGARANTÍA EN MATERIA DE SUSPENSIÓN, TRATÁNDOSE DE AMPARO DIRECTO.-** El artículo 173 de la Ley de Amparo, establece que debe otorgarse fianza para que surta efectos la suspensión concedida o, en su caso, contrafianza para nulificar la medida cautelar y esta exigencia emana de la aplicación de un precepto constitucional como lo es el artículo 107, fracción X, de la Carta Magna; por tanto, es evidente que no obstante que el artículo 6o. de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito exime a las instituciones de crédito de constituir depósito o fianza legales, tales instituciones se encuentran obligadas a otorgar fianza para obtener la suspensión de sentencias definitivas que se reclamen en amparo directo y, en su caso, contragarantía para dejar sin efecto la medida suspensiva, porque partiendo de un principio de hermenéutica jurídica, no puede aceptarse que los preceptos relativos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, queden subordinados a una disposición también contenida en otra ley reglamentaria que se encuentra en contradicción con la Ley de Amparo, pues los mandatos de ésta, en relación con los preceptos constitucionales, son los que deben regir la interpretación y aplicación de cualquier otra ley en cuanto al juicio constitucional, para no hacer nugatorias las disposiciones del citado juicio de garantías.

"Contradicción de tesis 46/90. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 22 de octubre de 1991. Puesto a votación el proyecto modificado, se aprobó por unanimidad de quince votos de los señores Ministros presidente Schmill Ordóñez, de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Castañón León, Adato Green, Rodríguez Roldán, Cal y Mayor Gutiérrez,

González Martínez, Villagordoa Lozano, Gutiérrez Vidal, Moreno Flores, Lanz Cárdenas, Díaz Romero y Chapital Gutiérrez. Ausentes: Azuela Güitrón, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Gil de Lester y García Vázquez. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretaria: María Guadalupe Rivera González.

"Tesis de jurisprudencia 6/92 aprobada por el Tribunal en Pleno en Sesión Privada celebrada el martes siete de enero de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de dieciocho votos de los señores Ministros presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, José Trinidad Lanz Cárdenas, Samuel Alba Leyva, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Santiago Rodríguez Roldán, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Ausentes: Ignacio Magaña Cárdenas y Atanasio González Martínez. México, D. F.,a 9 de enero de 1992."

Así como la existencia de las tesis que la autoridad demandada invoca en su oficio de recurso de reclamación, cuyos rubros y textos se transcriben enseguida:

"**SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO DEBEN CONSTITUIR GARANTÍA PARA OBTENERLA.-** El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el juicio de amparo se sujetará a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley. Lo anterior implica que todas las reglas que rigen al juicio de garantías deben estar contenidas en un solo ordenamiento pues, de lo contrario, se llegaría al extremo de que cada ley pudiera establecer la forma en que su propio contenido y los actos de ella derivados se deben someter al control de constitucionalidad que representa el juicio de amparo. Por tanto, si bien es cierto que el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito señala que los integrantes del Sistema Bancario Mexi-

cano no están obligados a constituir garantía para obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo, dada su acreditada solvencia económica, también lo es que dicho precepto, por estar previsto en una ley diversa a la Ley de Amparo, no es susceptible de constituir una excepción a la regla general contenida en el artículo 125 de dicho ordenamiento, el cual establece que siempre que puedan ocasionarse daños y perjuicios a terceros, el quejoso deberá constituir garantía para obtener la suspensión del acto reclamado.

"DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

"Incidente de suspensión (revisión) 442/2001. Banco Santander Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexicano. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretaria: Fabiana Estrada Tena."

"**INSTITUCIONES DE CRÉDITO. TRATÁNDOSE DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE AMPARO, RESULTA INAPLICABLE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY QUE LAS RIGE.-** El artículo 125 de la Ley de Amparo establece que cuando sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, la medida cautelar se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaran si no se obtiene sentencia favorable; esta exigencia emana del artículo 107, fracción X, de la Carta Magna y no obstante que el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito exime a éstas de constituir depósito o fianza legales, aun tratándose de la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo, las instituciones de crédito sí se encuentran obligadas a otorgar garantía para que surta efectos la suspensión de tales actos cuando exista riesgo de que con tal medida se pueda causar daño o perjuicio a un tercero, porque conforme al principio de autonomía jurídica no puede aceptarse que los preceptos relativos de la Ley de Amparo, Reglamenta-

ria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, queden subordinados a una disposición también contenida en otra ley reglamentaria, pues los mandatos de aquélla son los que deben tomarse en cuenta para la interpretación y aplicación de cualquier otra ley en cuanto al juicio constitucional, para no hacer nugatorias las disposiciones que rigen el juicio de garantías.

"NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

"Incidente de suspensión (revisión) 3219/2001. Banco Santander Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexicano. 11 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Luciano Valadez Pérez."

Sin embargo, los CC. Magistrados que integran la Segunda Sección de la Sala Superior estiman que el criterio contenido en la jurisprudencia y tesis antes transcritas no resulta aplicable al caso concreto, dado que en ellas se resuelve respecto de la procedencia de la suspensión en el juicio de amparo y no así en el juicio contencioso administrativo; siendo conveniente señalar que ambas suspensiones se rigen por diversos ordenamientos jurídicos, a saber: la suspensión en el juicio de amparo, se rige por la Ley de Amparo, mientras que la suspensión en el juicio contencioso administrativo, se rige por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el juicio de amparo, se encuentra contemplado en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en los artículos 103 y 107, que a la letra señalan:

"Artículo 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:
"I.- Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales.
"II.- Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y

"III.- Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal."

"Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;
"II.- La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.
"En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución.
"Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.
"En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán el desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de ésta.
"III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

"a).- Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia;
"b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y
"c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio;
"IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo requiera como condición para decretar esa suspensión;
"V.- El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes:
"a).- En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares.
"b).- En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal;

"c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.
"En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y
"d).- En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado;
"La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
"VI.- En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución señalará el trámite y los términos a que deberán someterse los tribunales colegiados de circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, para dictar sus respectivas resoluciones;
"VII.- El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;
"VIII.- Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:
"a).- Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos directamente violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del Artículo 89 de esta Constitución y reglamentos

de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados o por el Jefe del Distrito Federal, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad;
"b).- Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta Constitución.
"La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
"En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los tribunales colegiados de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno;
"IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales;
"X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público.
"Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la interposición del amparo, y en materia civil, mediante fianza que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión ocasionare, la cual quedará sin efecto si la otra parte da contrafianza para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo, y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;
"XI.- La suspensión se pedirá ante la autoridad responsable cuando se trate de amparos directos promovidos ante los Tribunales Colegiados de Circuito y la

propia autoridad responsable decidirá al respecto. En todo caso, el agraviado deberá presentar la demanda de amparo ante la propia autoridad responsable, acompañando copias de la demanda para las demás partes en el juicio, incluyendo al Ministerio Público y una para el expediente. En los demás casos, conocerán y resolverán sobre la suspensión los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito;

"XII.- La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII.

"Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca;

"XIII.- Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados Tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el Procurador General de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.

"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de

las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción, y

"XIV.- Salvo lo dispuesto en el párrafo final de la fracción II de este artículo, se decretará el sobreseimiento del amparo o la caducidad de la instancia por inactividad del quejoso o del recurrente, respectivamente, cuando el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, en los casos y términos que señale la ley reglamentaria. La caducidad de la instancia dejará firme la sentencia recurrida.

"XV.- El Procurador General de la República o el Agente del Ministerio Público Federal que al efecto designare, será parte en todos los juicios de amparo; pero podrán abstenerse de intervenir en dichos juicios, cuando el caso de que se trate carezca a su juicio, de interés público.

"XVI.- Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda. Si fuere excusable, previa declaración de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte requerirá a la responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia. Si la autoridad no ejecuta la sentencia en el término concedido, la Suprema Corte de Justicia procederá en los términos primeramente señalados.

"Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Suprema Corte de Justicia, una vez que hubiera determinado el incumplimiento o repetición del acto reclamado, podrá disponer de oficio el cumplimiento substituto de las sentencias de amparo, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso. Igualmente, el quejoso podrá solicitar ante el órgano que corresponda, el cumplimiento substituto de la sentencia de amparo, siempre que la naturaleza del acto lo permita.

"La inactividad procesal o la falta de promoción de parte interesada, en los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo, producirá su caducidad en los términos de la ley reglamentaria.

"XVII.- La autoridad responsable será consignada a la autoridad correspondiente, cuando no suspenda el acto reclamado debiendo hacerlo, y cuando admita fianza que resulte ilusoria o insuficiente, siendo en estos dos últimos casos, solidaria la responsabilidad civil de la autoridad con el que ofreciere la fianza y el que la prestare.
"XVIII.- (DEROGADA, D.O.F. 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993)"

De los numerales transcritos y específicamente de la fracción X, del artículo 107 Constitucional, se observa que el Congreso Constituyente previó la posibilidad de que en el juicio de amparo se otorgue la suspensión de los actos reclamados, pero estableció **a nivel constitucional** la obligación de que para la obtención de dicha suspensión se otorguen las garantías que determine la ley; así, el citado artículo señala que el juicio de amparo se sujetará a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, lo que implica que todas las reglas que rigen al juicio de garantías deben estar contenidas en un solo ordenamiento, que sería la Ley Reglamentaria del dispositivo constitucional en comento (que se conoce como Ley de Amparo); por lo que queda claro que la exigencia de otorgar garantía para obtener la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, emana del referido artículo 107 fracción X de la Carta Magna, y por ello, sólo tratándose de la suspensión del acto reclamado en dicho juicio, una ley secundaria, diversa a la Ley de Amparo, no podría establecer condiciones diferentes a las previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, so pena de que pudiera, inclusive, estimarse que dicha ley es contraria a la Carta Magna.

Sin embargo, lo anterior no es aplicable tratándose del juicio contencioso administrativo, pues este último se encuentra regulado en una ley secundaria que lo regula (la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), y en la que se consigna como una posibilidad para los demandantes, la de obtener la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, sin que dicha suspensión se encuentre prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que entonces, válidamente para el otorgamiento de dicha medida suspensiva, se pueden armonizar disposiciones contenidas en diversos ordenamientos legales; lo que inclusi-

ve es acorde con la función del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de resolver cuestiones de legalidad.

Conforme a lo anterior, esta Juzgadora concluye que en el presente caso la actora no está obligada a garantizar el interés fiscal para la eficacia de la suspensión de la ejecución de los créditos fiscales originalmente recurridos y ahora impugnados, y por lo tanto, la misma surte todos sus efectos legales.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 23 fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente a partir del 07 de diciembre del 2007; en relación con el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I.- Es procedente pero infundado el recurso de reclamación promovido por el C. Administrador Local Jurídico de Naucalpan de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, en representación de la autoridad demandada, en contra de la sentencia interlocutoria del 16 de mayo de 2007, en consecuencia;

II.- Se confirma la sentencia interlocutoria referida en el resolutivo anterior, en la que se concedió a la actora la suspensión definitiva de la ejecución de los actos impugnados en el juicio contencioso administrativo 591/07-11-02-4.

III.- Envíese copia del presente fallo a la Segunda Sala Regional Hidalgo-México, para que esta sea integrada a la carpeta de suspensión correspondiente.

IV.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de la presente resolución a las partes, para su conocimiento.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en **sesión del 05 de febrero de 2008**, por **unanimidad de cinco votos** de los CC. Magistrados Guillermo Domínguez Belloc, Silvia

Eugenia Díaz Vega, Luis Malpica y de Lamadrid, Luis Carballo Balvanera, y Olga Hernández Espíndola.

Fue Ponente en el presente asunto la **C. Magistrada Olga Hernández Espíndola**, cuya ponencia fue aprobada en sus términos.

Se formuló el presente engrose el día 12 de febrero de 2008, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 fracción III y 48 fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente a partir del día 07 de diciembre de 2008. Firma la C. Magistrada Olga Hernández Espíndola, Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

VI-P-2aS-46

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL. CUANDO ES PLANTEADO POR LA AUTORIDAD, TIENE LA CARGA DE LA PRUEBA PARA DEMOSTRAR LA SEDE DE LA AUTORIDAD EMISORA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- El artículo 31 de la Ley Orgánica de este Tribunal, vigente hasta el 6 de diciembre del 2007, regulaba la competencia territorial que correspondía a cada una de sus Salas Regionales, señalando que para determinarla se debía atender al lugar donde se encontrara la sede de la autoridad demandada, y en el caso de que existieran varias, se estaría a la sede de la que hubiera emitido la resolución impugnada. Por su parte, el Pleno de la Sala Superior ha determinado que en el caso de que no exista disposición legal que determine la sede de la autoridad emisora del acto impugnado, se debe atender al lugar en el que ésta se encuentra ubicada, y si dicho acto sólo identifica a la autoridad emisora mediante una clave y no indica el lugar de emisión, es válido atender a la sede de la autoridad que notificó dicha resolución, al ser señalada también como autoridad demandada. Por lo que si la autoridad incidentista argumenta que la resolución combatida la emitió una autoridad que tiene su sede en una región que corresponda a una diversa Sala Regional de este Tribunal, tiene la carga probatoria para acreditar su pretensión, como lo señala el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, esto es, la documental en que conste de manera fehaciente que la resolución a debate la dictó la autoridad que señala la incidentista, de ahí que si no exhibe la prueba idónea para acreditar su afirmación, resulta infundado el incidente de incompetencia planteado; y al no consignar la resolución impugnada el lugar de su emisión, debe atenderse a la única sede identificada en el documento de notificación de dicha resolución. (12)

Incidente de Incompetencia Núm. 421/07-07-03-5/517/07-S2-08-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de febrero de 2008, por mayoría de 4 votos a favor y 1

voto en contra.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Francisco Javier Marín Sarabia.
(Tesis aprobada en sesión de 14 de febrero de 2008)

PRECEDENTE:

VI-P-2aS-19
Incidente de Incompetencia Núm. 2989/05-15-01-7/404/07-S2-09-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 29 de enero de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de enero de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 4. Abril 2008. p. 102

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-P-2aS-47

ALCANCE DE LA SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA CRÉDITOS FISCALES AL DELEGADO DE LA SINDICATURA DE QUIEBRAS. NO BENEFICIA AL ÓRGANO DE LA SINDICATURA POR SER ÉSTE EL RESPONSABLE SOLIDARIO.- Cuando el juicio contencioso administrativo se promueva ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por una persona física a nombre propio y derivado de la responsabilidad solidaria que se le pretenda atribuir en materia fiscal por su designación como delegado del síndico de la quiebra de una empresa contribuyente y se declare la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada que le determinó dicha responsabilidad solidaria, derivada de la indebida fundamentación de la resolución que contravino el artículo 26, fracción III del Código Fiscal de la Federación, el cual sólo considera al síndico y no a sus delegados como responsable solidario, pues la declaratoria de nulidad que se pronuncié sólo tendrá efectos para el delegado quien actúa a nombre propio y no para el síndico. Lo anterior en virtud de que precisamente la ilegalidad de la resolución determinante del crédito deriva por haber considerado al delegado como responsable solidario y no al síndico señalado por el Legislador Federal; razón por la cual, corresponderá al órgano de la sindicatura de la quiebra que hubiera aceptado dicho cargo formular su propia defensa, controvirtiendo la parte de la resolución determinante del crédito que le hubiere señalado como responsable solidario, con independencia de que para dicha defensa por tratarse de un ente jurídico y no de una persona física, actúe por conducto de sus delegados, mandatarios o representantes legales que hubiere designado para que actúen en su representación. (13)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6097/05-17-05-8/653/05-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 21 de febrero de 2008, por unanimidad de 5 votos a

favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de abril de 2008)

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-P-2aS-48

CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SU ESTUDIO DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PARA LOGRAR LA NULIDAD LISA Y LLANA, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL ACTOR.- En los términos del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, y su correlativo 50, segundo párrafo de la vigente Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, corresponderá al Órgano Jurisdiccional examinar primero aquellos conceptos de impugnación que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución o acto impugnado. De lo cual se desprende que queda al prudente arbitrio del Órgano Jurisdiccional de Control de Legalidad determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de impugnación atendiendo a la consecuencia que para el actor tuviera el que se declararan fundados, a fin de determinar si con dicha declaratoria procede o no la nulidad lisa y llana que mayor beneficio jurídico origine para el actor. Por lo anterior, al someterse el asunto ante este Órgano Jurisdiccional, le corresponderá dilucidar de manera preferente aquellas cuestiones que originen dicho mayor beneficio para el actor afectado con el acto administrativo, conforme al artículo 237 mencionado, que permite hacer posible la tutela judicial efectiva, esto es, el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia a que se refiere el artículo 17, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (14)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6097/05-17-05-8/653/05-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 21 de febrero de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de abril de 2008)

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-P-2aS-49

QUEJA QUE SE CONSIDERA IMPROCEDENTE Y SE ORDENA TRAMITAR COMO NUEVO JUICIO. LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN QUE SE PLANTEEN DEBEN ENCAMINARSE A ATACAR AQUELLA RESOLUCIÓN QUE SE CONSIDERÓ COMO NUEVO ACTO Y NO COMO REPETICIÓN DE ÉSTE.- Con fundamento en el artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 y su correlativo 58, fracción II, inciso a), puntos 1 y 3 de la vigente Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Legislador Federal estableció como medio de defensa para hacer valer el cumplimiento de una sentencia definitiva firme dictada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la instancia de queja, la cual de manera concreta se refiere a la resolución que repita indebidamente la resolución anulada o que incurra en exceso o en defecto cuando dicha resolución se dicte en cumplimiento de una sentencia y cuando la autoridad omita dar cumplimiento a ella. Por tanto, si en un juicio contencioso administrativo se pretende controvertir una nueva resolución o acto administrativo haciendo valer argumentos tendentes a demostrar que se trata de una resolución que repite indebidamente la resolución anulada en una sentencia firme, tales argumentos devienen inoperantes por no controvertir el nuevo acto por vicios propios o del procedimiento del que derivó dicho nuevo acto, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005. (15)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6097/05-17-05-8/653/05-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 21 de febrero de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 8 de abril de 2008)

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-P-2aS-50

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL SÍNDICO EN MATERIA FISCAL. LA ASUME EL ÓRGANO DE LA SINDICATURA Y NO SU DELEGADO CONFORME AL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- En los términos del artículo 26, fracción III del Código Fiscal de la Federación, los síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en quiebra, así como de aquellas que se causaron durante su gestión son responsables solidarios con los contribuyentes quebrados. De lo anterior, se desprende que corresponderá al órgano de la sindicatura designado con motivo de la declaratoria de quiebra de una empresa contribuyente responder del pago de contribuciones que debió pagar por la sociedad quebrada y de aquellas que se causaron durante su gestión, en virtud de que el Legislador Federal de manera expresa y sin lugar a dudas dispuso que corresponde a los síndicos responder frente al fisco federal en cuanto a las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en quiebra y por su gestión. Lo que se corrobora atendiendo a la naturaleza del síndico como auxiliar de la administración de justicia, a quien corresponde el cumplimiento de las obligaciones propias de dicho carácter de síndico para la buena conservación y administración ordinaria de los bienes de la quiebra. Además que conforme a lo dispuesto en los artículos 44, 46 y 57 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos vigente en 1991, el síndico responde frente a la masa de la quiebra y

ante el quebrado incluso por la gestión que realicen sus delegados que se hubieren designado en interés de la quiebra. También es de considerar que el nombramiento del síndico puede recaer en la Cámara de Comercio o en la de Industria a la cual pertenezca la empresa fallida o en la Sociedad Nacional de Crédito que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo dispuesto en el artículo 28, fracciones I y II de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos vigente en 1991. Que las Cámaras de Comercio y de Industria desempeñarán las sindicaturas que les corresponda en los términos de la ley mencionada y atento a sus respectivos estatutos conforme al artículo 29 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. En ese orden de ideas, todos estos elementos, partiendo medularmente de lo dispuesto en la ley fiscal en relación con la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, permite distinguir el Órgano de la Sindicatura que puede recaer en dichas Cámaras de Comercio o en la de la Industria o Sociedad Nacional de Crédito, de los delegados designados por la Sindicatura, designados únicamente con facultades de representación y ejecución con las limitaciones precisadas en el instrumento que confiera la Delegación. En consecuencia, la persona física designada como delegado derivado de dicha designación, no puede asumir como propia la responsabilidad solidaria otorgada por el Legislador Federal al Órgano de la Sindicatura y no a la persona física designada para actuar en representación de dicho Órgano, que se insiste designa únicamente como gestor de la sindicatura en interés de la quiebra, pero no para sustituir al síndico ni a las sindicaturas respecto de su responsabilidad fiscal. (16)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6097/05-17-05-8/653/05-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 21 de febrero de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.

(Tesis aprobada en sesión de 8 de abril de 2008)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

SÉPTIMO.- Esta Segunda Sección a continuación entra al estudio de los conceptos de impugnación expresados por la actora atendiendo al principio de mayor beneficio, por el cual se permite el análisis de los agravios que de ser fundados otorgue al actor un mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que aunque resulten fundados no mejoren lo ya alcanzado por el actor, ello atendiendo al prudente arbitrio del juzgador y a las consecuencias que para el actor tuviera el que se declararán fundados.

Así, si en la especie el presente asunto tiene como antecedentes diversos juicios precisados en el considerando quinto que antecede y la pretensión de la demanda que nos ocupa radica medularmente en la búsqueda de la declaratoria de ilegalidad de la resolución impugnada por lo que hace a la determinación de la autoridad de la responsabilidad solidaria a cargo de la persona física ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, hoy actor respecto del crédito fiscal de la contribuyente visitada quebrada, es que resulta necesario para hacer efectiva la garantía prevista en el artículo 17 Constitucional, entrar al estudio de los diversos agravios que versan sobre dicha responsabilidad solidaria.

Al respecto resulta aplicable por analogía la jurisprudencia P./J. 3/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de Febrero 2005, página 5, que a continuación se cita:

“Novena Época
“Instancia: Pleno
“Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
“XXI, Febrero de 2005
“Página 5

"Tesis: P/J. 3/2005
"Jurisprudencia
"Materia (s): Común

"**CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.-** De acuerdo con la técnica para resolver los juicio de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional.

"Contradicción de tesis 37/2003-PL.- Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 31 de agosto de 2004. Unanimidad de diez votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías."

De igual forma, resulta aplicable por analogía la tesis aislada número I.4o.A.74 K emitida por el Cuarto Tribunal Colegido en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Marzo de 2007, página 1651, que a continuación se cita:

"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXV, Marzo de 2007
"Página 1651
"Tesis: I.4º.A.74 K
"Tesis Aislada
"Materia (s): Común

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO INDIRECTO, EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE PREFERIR LOS RELACIONADO CON EL FONDO DEL ASUNTO A LOS FORMALES, O BIEN, ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO.- La solución sustancial de los conflictos, en concordancia con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo, contenidos en los artículos 77 y 78 de la ley de la materia, obligan al juzgador a analizar, en primer lugar, los conceptos de violación que puedan determinar la concesión de la protección federal con un efecto más amplio al que pudiese tener una violación formal. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que el estudio de los conceptos de violación que determinen la concesión del amparo directo debe atender al principio de mayor beneficio (tesis P./J.3/2005 visible en la página 5, Tomo XXI, correspondiente al mes de febrero de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE

AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.'). En ese tenor, se estima que en los juicios de amparo indirecto debe analizarse los conceptos de violación relacionados con el fondo del asunto con preferencia a los formales, o bien, estudiarse en primer término los que pudiesen otorgar un mayor beneficio al quejoso, como los relativos a la prescripción o caducidad de las facultades de una autoridad.

"CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
"I.4o.A.74 8 de mayo, 5 de junio y 11 de septiembre de 2000,

"Amparo en revisión 335/2006.- Andrés Martínez Genis.- 25 de octubre de 2006.- Unanimidad de votos.- Ponente: Patricio González Loyola Pérez.- Secretario: Carlos Luís Guillén Núñez."

Lo anterior además, acorde con el principio de prontitud a que se refiere el artículo 17 Constitucional, por virtud del cual la impartición de justicia por parte de los tribunales debe ser de manera pronta, completa e imparcial, previo cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, del debido proceso.

Por todo lo anterior, a continuación esta Segunda Sección entra al estudio de los conceptos de impugnación relativos a la impugnación de la determinación de responsabilidad solidaria a cargo de la persona física ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, derivada de su nombramiento como delegado del síndico del juicio de quiebra de la empresa HOLDING COIN, S.A. DE C.V., con fundamento en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, que de ser fundado llevaría a la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada 126539, por lo que hace a dicha determinación de responsabilidad solidaria.

(...)

Del contenido de las transcripciones anteriores, se desprende que el actor ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, a nombre propio expresó como conceptos de impugnación segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, décimo primero y décimo segundo de su demanda, que la determinación de la responsabilidad solidaria a su cargo que realizó la autoridad en la resolución impugnada contenida en el oficio número 126539 de 18 de noviembre de 2004, no se ajustó a ley, sosteniendo medularmente lo siguiente:

Que la autoridad liquidadora viola lo dispuesto en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 5º del mismo ordenamiento legal y 26 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, porque la determinación que se hace a su cargo como responsable solidario se encuentra indebidamente fundada y motivada al no tener el carácter de síndico Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, de la contribuyente visitada quebrada HOLDING COIN, S.A. DE C.V., sino únicamente el carácter de delegado del síndico, este último que es el único señalado como responsable solidario de los contribuyentes quebrados.

Que el síndico es el único responsable frente a la masa de la quiebra y ante el quebrado incluso respecto de los actos de sus delegados que intervienen únicamente en auxilio de dicho síndico, conforme al artículo 56 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos vigente en 1991.

Que además, el actor ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL fue designado como delegado del síndico Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, de la quiebra de la empresa contribuyente HOLDING COIN, S.A. DE C.V., en octubre de 1991, pero que la determinación del crédito se refiere a hechos anteriores a su nombramiento, esto es, a la omisión del pago de contribuciones correspondientes al ejercicio de 1988.

Que existe cosa juzgada por lo que hace a su responsabilidad solidaria derivada de la sentencia de 13 de octubre de 1988, dictada por la Quinta Sala Regional Metropolitana en el juicio 10595/94, en la cual sostiene el actor que dicha Sala resol-

vió que no era responsable solidario respecto de los créditos fiscales a cargo de HOLDING COIN, S.A. DE C.V.

Que además, la resolución impugnada 126539 constituye una repetición de un acto declarado nulo en la sentencia de 13 de octubre de 1988, mencionada en el párrafo anterior y que ello viola el artículo 239-B, del Código Fiscal de la Federación.

Que el artículo 26 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, debe ser interpretado a la luz del principio de legalidad tributaria que se refiere el artículo 31 fracción IV, de la Constitución Federal.

Por su parte, las autoridades demandadas al formular su contestación a la demanda sostuvieron la validez de la determinación de responsabilidad solidaria a cargo del actor ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, argumentando que tiene el carácter de delegado del síndico de la quiebra de la empresa HOLDING COIN, S.A. DE C.V., con fundamento en el artículo 26 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, manifestando lo siguiente:

Que si durante el transcurso de la visita le fue conferida la designación de delegado del síndico del juicio de quiebra de la contribuyente visitada, estaba obligado desde ese momento a pagar las contribuciones adeudadas anteriormente por la empresa en quiebra y no sólo por las contribuciones cuyo pago debe realizarse dentro del período en que el síndico pose tal carácter.

Que el artículo 26 no sólo se refiere a la responsabilidad de los síndicos respecto de las contribuciones que se causen durante su gestión, sino también incluye dicha responsabilidad por las contribuciones que se debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación.

Que cuando el delegado del síndico aceptó dicho cargo, con ello también aceptó ser responsable solidario de las contribuciones que debieron pagarse a cargo de la sociedad en quiebra, aún antes de su gestión.

Que el delegado del síndico es responsable tanto civil como administrativa y penalmente en los asuntos en la sociedad en quiebra y por ello, también es responsable de sus deudas no solo a partir de su gestión, sino también con anterioridad a la misma, porque desde que fue nombrado delegado conocía que la sociedad en quiebra contaba en ese momento con una visita domiciliaria.

Que incluso durante la visita domiciliaria y la reposición de la misma, origen de la resolución impugnada, alegó que los actos debieron notificarse en su domicilio respecto de las citaciones relativas a la empresa en quiebra, no es dable que al momento de determinar el crédito no se le considere como responsable solidario.

Que si el síndico Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México nombró como delegado a ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, hoy actor con facultades amplias, con fundamento en el artículo 29, primer párrafo, de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, era obvio que resultaba ser responsable solidario por el ejercicio de 1988 de la contribuyente visitada, porque además ese cargo se realizó en el transcurso de la visita en la que se señaló como nuevo domicilio fiscal el domicilio del propio delegado hoy actor.

Que los artículos 46 fracciones I y II y 48 fracciones I, II y III, de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, establecen los derechos y obligaciones del síndico.

Que el artículo 26 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, dispone que los liquidadores y síndicos serán responsables solidarios sin distinción alguna.

Que la designación de delegado por síndico se hizo conforme a los artículos 29 y 46 fracción VIII, de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos.

Que el artículo 46, fracción VII, establece los derechos y obligaciones del síndico de buena conservación y administración ordinaria de los bienes, entre ellos la

de rendir estados de los libros del quebrado y por ello, recae la responsabilidad solidaria en los liquidadores y síndicos.

Que se reconoció como síndico a la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, quien designó como delegado de dicho síndico al hoy actor ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, que por tanto, este resulta responsable solidario como delegado del síndico conforme al artículo 26 fracción III, del Código Fiscal de la Federación.

Que los síndicos son responsables solidarios de los contribuyentes respecto de las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación y que en consecuencia ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL es obligado responsable solidario.

Que si en 1988 empezó la situación de suspensión de pago y posteriormente se declaró la quiebra de la contribuyente y ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL tiene el carácter de delegado de la sindicatura con atribuciones en los términos de los artículos 29 y 46 fracción VIII, de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, este resulta responsable solidario.

Que conforme al oficio de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, en el expediente 41/88 que hizo del conocimiento del Juez Primero de lo Concursal, la designación como delegado de la quiebra a ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, precisando que el mismo gozaba con las más amplías facultades de representación y ejecución, así como con facultades necesarias para el ejercicio de su cargo conforme al artículo 29, primer párrafo, de la ley mencionada.

Que ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, pretende excusarse de sus obligaciones inherente a su cargo de delegado del síndico, porque al asumir la sindicatura de una empresa en quiebra queda conminado a cumplir con todas aquellas obligaciones que tenga a cargo de la empresa quebrada, más aún cuando forma parte de la

Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, sin que con las pruebas exhibidas quede eximido de sus obligaciones.

Que al ser el síndico de la quiebra un ente abstracto sus derechos y obligaciones deben ser ejercidas por conducto de sus delegados que para tal efecto se designe.

Que por tanto al existir omisiones en el cumplimiento de obligaciones fiscales de la empresa cuya sindicatura es ejercida por conducto de su delegado este sí es responsable solidario y no puede excusarse de su cumplimiento en razón de lo previsto en el artículo 56 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos.

Esta Segunda Sección considera oportuno precisar que la LITIS en el presente considerando radica en determinar si la determinación de responsabilidad solidaria a cargo de la persona física de ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL se ajustó o no a ley, derivado del nombramiento de delegado efectuado en octubre 1991 que realizó el apoderado de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, con motivo de la declaratoria de quiebra decretada el 11 de octubre de 1991, por el Juez Primero de lo Concursal del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, Cámara designada como síndico de la quiebra de la contribuyente HOLDING COIN, S.A. DE C.V., ello respecto de la determinación de diversos créditos fiscales correspondientes al ejercicio de 1988, descubiertos con motivo de la visita domiciliaria iniciada en marzo de 1991, a cargo de dicha empresa contribuyente.

A fin de ubicarnos en la materia de que se trata resulta oportuno precisar cuál es la naturaleza de un síndico en la declaratoria de quiebra de una empresa y cuál la función del delegado que puede designar dicho síndico, ello atendiendo a la Ley aplicable en el momento de la declaratoria de quiebra de la contribuyente visitada, esto es, conforme a la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos vigente en 1991:

1.- Que una vez que se ha decretado la quiebra de una empresa se designará síndico, este último que tendrá la naturaleza de auxiliar de la Administración de Justicia conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, ello para la buena conservación y administración ordinarias de los bienes de la quiebra.

2.- Que el nombramiento de síndico puede recaer en la Cámara de Comercio a la que pertenezca el fallido, entre otras, salvo que se trate de una Entidad Paraestatal, conforme al artículo 28 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. Que en la especie el nombramiento de síndico de la contribuyente visitada HOLDING COIN, S.A. DE C.V., recayó en la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, a la cual pertenecía dicha empresa fallida, como se desprende de la resolución impugnada.

3.- Que corresponde al síndico el cumplimiento de diversas obligaciones para mantener la buena conservación y administración ordinarias de los bienes de la quiebra, mencionándose, entre otras, el tomar posesión de la empresa y de los demás bienes del quebrado; redactar el inventario de la empresa y de los demás bienes del mismo; formar el balance y rectificarlo, recibir y examinar libros, papeles y documentos de la empresa y asentar la nota de visado; depositar el dinero recogido en la empresa o con ocasión de pagos al quebrado salvo en los casos que la ley lo excluya; no demorar en el cumplimiento de sus obligaciones; obligar al síndico al pago de intereses que la masa hubiere debido percibir, rendir el informe ante la Junta de acreedores, establecer la lista provisional de los acreedores privilegiados y de los ordinarios; hacer del conocimiento del Juez los nombramientos de delegados, mandatarios y en general del personal que haya designado en interés de la quiebra; llevar la contabilidad de la quiebra con los requisitos que establece el Código de Comercio; presentar a la Junta de acreedores proposiciones de convenio; ejercitar y continuar todos los derechos y acciones que corresponden al deudor con relación a sus bienes y a la masa de acreedores contra el deudor, contra terceros y contra determinados acreedores de aquella, proponer al Juez la continuación de la empresa del quebrado, su venta o la de algunos de sus elementos o de los otros bienes de la quiebra, así

como las medidas extraordinarias aconsejadas en bien de la masa de la quiebra; el síndico será responsable ante la masa y ante el quebrado por la gestión de sus delegados, mandatarios y en general del personal que haya designado en interés de la quiebra, respecto a los daños y perjuicios que cause en el desempeño de sus funciones, por el incumplimiento de sus obligaciones o por negligencia al no proceder como un comerciante diligencia en negocio propio.

Lo anterior, en los términos de los artículos 28, 29, 44, 46, 48, 49, 56 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos aplicable vigente en 1991, que a continuación se citan:

LEY DE QUIEBRAS Y SUSPENSIÓN DE PAGOS VIGENTE EN 1991

"**Artículo 28**.- El nombramiento del síndico podrá recaer:
"I.- En la Cámara de Comercio o en la de Industria, a la cual pertenezca el fallido, salvo que se trate de una entidad paraestatal; y
"II.- En la sociedad nacional de crédito que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cualquier otro caso; la cual otorgará la preferencia prevista por el artículo 447 de la presente ley, si se trata de una empresa asegurada.
"El juez, al recibir la demanda de declaración de quiebra, deberá notificarla a la Cámara de Comercio o de Industria correspondiente y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para hacer la designación de síndico en la sentencia que la declare, en su caso."

"**Artículo 29.-** Las Cámaras de Comercio y de Industria desempeñarán las sindicaturas que les corresponda, en los términos establecidos en la presente ley, y en los que al efecto señalan los respectivos estatutos que las rigen. Podrán, para el desempeño de las sindicaturas que les corresponden, designar uno o varios delegados para cada caso, quienes gozarán dentro de la órbita de sus atribuciones, de las más amplias facultades de representación y ejecución.

"Las limitaciones a las facultades de los delegados deberán constar expresamente en el instrumento en que se les confiera la delegación.
"Las sociedades nacionales de crédito desempañarán la sindicatura del modo previsto para las funciones fiduciarias."

"**Artículo 44**.- El síndico tendrá el carácter de auxiliar de la administración de justicia."

"**Artículo 46**.- Serán derechos y obligaciones del síndico los exigidos por la buena conservación y administración ordinarias de los bienes de la quiebra, y entre ellos los siguientes:
"I.- Tomar posesión de la empresa y de los demás bienes del quebrado;
"II.- Redactar el inventario de la empresa y de los demás bienes del mismo;
"III.- Formar el balance, si el quebrado no lo hubiere presentado y en caso contrario, rectificarlo si procediere, o darle su visto bueno;
"IV.- Recibir y examinar los libros, papeles y documentos de la empresa y asentar en los primeros la correspondiente nota de visado;
"V.- Depositar el dinero recogido en la empresa o con ocasión de pagos al quebrado, salvo en los casos que la ley excluya de modo expreso.
"Cuando la ley no determine un plazo para el cumplimiento de las obligaciones que incumben al síndico, el juez fijará el término dentro del cual deberá ejecutarlas.
"La demora en el cumplimiento de este precepto, además de obligar al síndico el pago de los intereses que la masa hubiere debido percibir, será causa de remoción.
"VI.- Rendir al juez, antes de que se celebre la junta de acreedores a que se refiere la fracción VI del artículo 15, un detallado informe, vista la oportuna memoria del quebrado si se hubiere presentado, acerca de las causas que hubieren dado lugar a la quiebra, circunstancias particulares del funcionamiento de la empresa, estados de sus libros, época a la que se retrotrae la quiebra, gastos personales y familiares del quebrado, responsabilidad de éste, así como cuantos datos juzgue oportunos;

"VII.- Establecer la lista provisional de los acreedores privilegiados, así como de los ordinarios que se fueren presentando;
"**VIII.- Hacer del conocimiento del juez los nombramientos de delegados, mandatarios y en general del personal que haya designado en interés de la quiebra**.
"Cuando la ley no determine un plazo para el cumplimiento de las obligaciones que incumben al síndico, éste deberá ejecutarlas con la diligencia debida.
"IX.- Llevar la contabilidad de la quiebra, con los requisitos que establece el Código de Comercio."

"**Artículo 48**.- Corresponde también al síndico:
"I.- Presentar a la junta de acreedores proposiciones de convenio, previa aprobación judicial;
"II.- Ejercitar y continuar todos los derechos y acciones que corresponden al deudor, con relación a sus bienes, y a la masa de acreedores contra el deudor, contra terceros y contra determinados acreedores de aquélla;
"III.- Proponer al juez la continuación de la empresa del quebrado, su venta, o la de algunos de sus elementos, o de los otros bienes de la quiebra, en las circunstancias y con los efectos que en la ley se determinan, así como todas las demás medidas extraordinarias aconsejadas en bien de la masa de la quiebra."

"**Artículo 49**.- Contra los actos u omisiones del síndico podrán reclamar el quebrado, la intervención, cualquier acreedor y el agente del Ministerio Público, ante el juez, quien resolverá dentro de tres días. Contra la decisión de éste procede la apelación en el efecto devolutivo."

"**Artículo 56**.- El síndico será responsable ante la masa y ante el quebrado, por la gestión de sus delegados, mandatarios y en general del personal que haya designado en interés de la quiebra, respecto a los daños y perjuicios que cause en el desempeño de sus funciones, por incumplimiento de sus obliga-

ciones o por negligencia al no proceder como un comerciante diligente en negocio propio."

De lo anterior, se desprende que conforme a la Ley mencionada el síndico es el responsable de la buena conservación y administración ordinarias de los bienes de la quiebra, quien toma posesión de la empresa y de los demás bienes del quebrado, quien incluso debe pagar los intereses que la masa hubiere debido percibir, quien realizará la lista personal de los acreedores privilegiados y ejercerá todos los derechos y acciones que corresponden al deudor en relación con sus bienes y a la masa de acreedores y que será responsable ante la masa y ante el quebrado por la gestión de sus delegados, mandatarios y en general del personal que hubiere designado en interés de la quiebra, respecto de los daños y perjuicios que causen en el desempeño de sus funciones, ello en relación con la posibilidad que tiene para el desempeño de las sindicaturas de designar uno o varios delegados para cada caso, quienes gozarán dentro de la órbita de sus atribuciones de las más altas facultades de representación y ejecución con las limitaciones que consten en el instrumento que les confiriera dicha delegación a que se refieren los artículos 29 y 46 fracción VIII, en relación con el artículo 56, todos de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos vigente en 1991.

Por tanto, en la especie la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México es el síndico designado como auxiliar de la Administración de Justicia, a quien correspondía el cumplimiento de las obligaciones propias de dicho carácter de síndico para la buena conservación y administración ordinaria de los bienes de la quiebra, incluso conforme a la ley de la materia dicha Cámara sería la obligada al pago de los intereses que la masa de la quiebra hubiere debido percibir, así como ejercitar y continuar con todos los derechos y acciones que corresponden al deudor y responder ante la masa y ante el quebrado por la gestión de sus delegados que hubiere designado en interés de la quiebra.

4.- Por tanto, el delegado designado por el síndico Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México sólo actúa como gestor del mismo con amplias facultades de representación y ejecución y con las limitaciones que expresamente se

indiquen en el instrumento que confiera la delegación, pero el responsable de la buena conservación y administración de los bienes de la quiebra lo será el síndico, quien incluso responderá por el actuar de los delegados que hubiere designado en interés de la quiebra.

Por lo cual, si bien la persona física ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL fue designado por el síndico de la quiebra de la empresa HOLDING COIN, S.A. DE C.V., como delegado; también lo es, que el cargo de síndico de la quiebra lo tiene la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, y no su delegado conforme a la sentencia de declaratoria de quiebra de 11 de octubre de 1991, en la cual el Juez Primero de lo Concursal del Tribunal Superior de Justicia reconoció tal carácter de síndico a la Cámara mencionada; sentencia referida en la resolución impugnada.

5.- Ahora bien, en materia fiscal se ha establecido la figura de la responsabilidad solidaria respecto de los contribuyentes. Así es que en el artículo 26, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, establece con toda nitidez que son los liquidadores y síndicos responsables solidarios con los contribuyentes, por las contribuciones siguientes:

A) Las que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra;

B) Las que se causaron durante su gestión.

Lo anterior, como se aprecia del contenido de la parte conducente del artículo 26 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, que a continuación se cita:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

"Artículo 26.- Son responsables solidarios con los contribuyentes:
"(...)
"**III. LOS LIQUIDADORES Y <u>SÍNDICOS</u> POR LAS CONTRIBUCIONES QUE DEBIERON PAGAR A CARGO DE LA SOCIEDAD EN**

LIQUIDACIÓN O QUIEBRA, ASÍ COMO DE AQUÉLLAS QUE SE CAUSARON DURANTE SU GESTIÓN.

"No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la sociedad en liquidación cumpla con las obligaciones de presentar los avisos y de proporcionar los informes a que se refiere este Código y su Reglamento.

"La persona o personas cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general, o la administración única de las personas morales, serán responsables solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas por dichas personas morales durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la persona moral que dirigen, cuando dicha persona moral incurra en cualquiera de los siguientes supuestos:

"a) No solicite su inscripción en el registro federal de contribuyentes.

"b) Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos del Reglamento de este Código, siempre que dicho cambio se efectúe después de que se le hubiera notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este Código y antes de que se haya notificado la resolución que se dicte con motivo de dicho ejercicio, o cuando el cambio se realice después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya cubierto o hubiera quedado sin efectos.

"c) No lleve contabilidad, la oculte o la destruya.

"(...)"

Por lo cual, si en la especie se trata de un contribuyente que fue declarado en quiebra en octubre de 1991; y en igual fecha el Juez respectivo reconoció como síndico de la quiebra a la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, en los términos del artículo 26 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, será responsable solidario con la contribuyente visitada HOLDING COIN, S.A. DE C.V., la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, y no el delegado designado por dicha Cámara, pues este únicamente tendrá el carácter de gestor respecto de

los intereses de la quiebra, pero no tiene el carácter de síndico auxiliar de la Administración de Justicia a que se refiere el legislador federal.

6.- Sin que lo anterior sea óbice para considerar al C. ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, como delegado designado por la Cámara mencionada para actuar en representación de los intereses de la quiebra, al que se dirige la autoridad tanto en la reposición de la visita como en la notificación de la resolución impugnada en virtud de que fue la propia Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México como síndico de la quiebra de la empresa HOLDING COIN, S.A. DE C.V., quien lo designó como delegado a través de su apoderado para actuar en el caso que nos ocupa con facultades de representación y ejecución de dicho síndico.

7.- Es decir, que si bien le asiste la razón a la persona física ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, en el sentido de que no tiene el carácter de responsable solidario con la contribuyente visitada HOLDING COIN, S.A. DE C.V., del crédito determinado por la autoridad fiscal; también lo es, que ello no le resta el carácter de delegado de la Cámara mencionada porque en el presente juicio no existe prueba alguna que acredite que hubiere sido revocado dicho carácter y por ello, la determinación de la resolución impugnada que le fue notificada surte efectos de notificación practicada al síndico de la quiebra de la empresa contribuyente. Por lo cual, la responsabilidad solidaria del síndico Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México no queda desvirtuada, aun cuando la misma se determinó en los términos del artículo 26 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, y correspondía al delegado de dicho síndico la defensa correspondiente, que en ese sentido permite considerar que la resolución impugnada no ha sido desvirtuada por lo que hace a la responsabilidad solidaria atribuida a la sindicatura mencionada, en virtud de que en el presente juicio únicamente se trata la responsabilidad solidaria atribuida a la persona física ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL.

8.- Por todo lo anterior, a juicio de esta Segunda Sección se estima que la determinación del crédito fiscal que se hace a cargo de ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, como delegado del síndico del juicio de quiebra resulta contraria a lo

dispuesto en el artículo 26 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, toda vez que dicha persona física no tiene el carácter de síndico, sino únicamente de gestor de este último que si bien actúa con las facultades amplias de representación en cuanto a los intereses de la quiebra, también lo es que la fracción mencionada del artículo 26 no determina que pueda ser considerado responsable solidario por tener el cargo de delegado, dado que el artículo mencionado únicamente se refiere al síndico que en la especie lo es la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México.

Por tanto, la determinación de dicha responsabilidad solidaria a la persona física ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, resulta ilegal, tal y como se constata a continuación del contenido de la parte conducente de la resolución impugnada de 18 de noviembre de 2004, en la que se aprecia que, como se ha indicado, se fincó la responsabilidad solidaria a dicha persona física, aun cuando se aclare que la misma deriva de su carácter de delegado del síndico, dado que no existe precepto legal alguno que establezca que un delegado de un síndico también pueda ser responsable solidario de los créditos fiscales determinados a cargo de los contribuyentes que sean declarados en quiebra. Resolución que a continuación se cita:

RESOLUCIÓN IMPUGNADA 126539
DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2004

"(...)
"C. ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL
"Delegado del síndico del juicio de quiebra
"(CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO) de la contribuyente
"HOLDING COIN, S.A. DE C.V.
"NUEVA YORK No. 290,
"COL. NÁPOLES,
"DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ,
"C.P. 03810, MÉXICO, D.F.

"Esta Administración Local de Auditoría Fiscal del Sur del Distrito Federal, con sede en el Distrito Federal, en el Distrito Federal (Sic), del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en los Artículo 7°, fracciones VII, XII y XVIII; Tercero y Cuarto Transitorio (sic), de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto, publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003, 2°, primero y tercer párrafos; 25, primer párrafo, fracción II; tercero y último párrafos; en relación con el artículo 23, fracciones XIX y XXVII; y 39 primer párrafo, Apartado A, Cuarto Transitorio del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de marzo de 2001, reformado por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 17 de junio de 2003 y Artículo Segundo, segundo párrafo del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo de 2002, modificado por Acuerdos publicados en el propio Diario Oficial de la Federación del 24 de septiembre y 30 de octubre de 2002; así como en los artículos 3, último párrafo, 26, fracción III, 38, 42 primer párrafo, 50 y 63 del Código Fiscal de la Federación, y atendiendo a que el último domicilio fiscal manifestado por el C. ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL delegado del síndico del juicio de quiebra, (CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO) de la contribuyente HOLDING COIN, S.A. DE C.V., está ubicado dentro de la circunscripción territorial de esta Administración Local de Auditoría Fiscal del Sur del Distrito Federal, con sede en el Distrito Federal, en el Distrito Federal (Sic), domiciliada en Avenida San Lorenzo No. 252, Colonia Bosque Residencial del Sur, Delegación Xochimilco, C.P. 16010, México, D.F., **le comunica que esta Autoridad es la competente para proceder a fincar la responsabilidad solidaria al C. ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL en su carácter de delegado del síndico del juicio de quiebra, (CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO) de la contribuyente HOLDING COIN, S.A. DE C.V., de los créditos fiscales** en

materia del impuesto sobre la renta de las sociedades mercantiles, impuesto sobre la renta de las personas físicas responsabilidad solidaria, de los ingresos por honorarios y en general por la prestación de un servicio personal independiente y los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por sociedades mercantiles, por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 1988 derivado de la visita practicada al amparo de la orden de auditoría número A.D. 0021/91 contenida en el oficio número 102-A-13-II-11250 de fecha 26 de marzo de 1991, conforme a lo siguiente:

"'En virtud de que la contribuyente visitada HOLDING COIN, S.A. DE C.V. se declaró en suspensión de pagos según expediente No. 41-88 abierto en el Juzgado Primero de lo Concursal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y por sentencia interlocutoria del 11 de octubre de 1991 el Juzgado antes mencionado declaró en estado de quiebra a HOLDING COIN, S.A. DE C.V., y reconoció como síndico de la misma a la CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, aceptando y protestando el cargo el C. AGUSTÍN RODRÍGUEZ CEDILLO, apoderado de la CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Ahora bien durante el transcurso de la visita domiciliaria, con escrito de fecha 21 de octubre de 1991, dirigido al C. Juez Primero de lo Concursal de esta Ciudad, el Lic. AGUSTÍN RODRÍGUEZ CEDILLO, en su carácter de Apoderado de la CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, designa como delegado del síndico del juicio de quiebra de la sociedad mercantil HOLDING COIN, S.A. DE C.V., **al C. ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, a quien con fundamento en el artículo 26, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente, se le determina la responsabilidad solidaria, en su carácter de delegado del síndico del juicio de quiebra, (CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO) de la contribuyente HOLDING COIN, S.A DE C.V**.'

"(...)

"**Ahora bien, en virtud de que la contribuyente revisada HOLDING COIN, S.A. DE C.V., no efectuó el pago de estas contribuciones federales; y atendiendo a que el C. ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, funge como delegado del síndico del juicio de quiebra, (CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO) de la contribuyente HOLDING COIN, S.A. DE C.V., según quedó asentado en la hoja número 2 de esta resolución; con fundamento en el artículo 26, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, se le hace responsable del adeudo total expresado en pesos actuales en cantidad de $2,200'479,830.37 (DOS MIL DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 37/100 M.N.), integrado por las siguientes contribuciones $312'209,547.60 del impuesto sobre la renta de las sociedades mercantiles, $169,001.07 del impuesto sobre la renta.- responsabilidad solidaria de los ingresos por honorarios y en general por la prestación de un servicio personal independiente $511,107,679.37 del impuesto sobre la renta.- responsabilidad solidaria de los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por sociedades mercantiles, de $1,376'993,602.33 de recargos**.

"(...)"

Por todas las consideraciones anteriores, esta Segunda Sección de la Sala Superior concluye lo siguiente:

1.- Que resultan FUNDADOS los conceptos de impugnación primero y segundo del escrito de demanda porque, como lo sostiene el actor, la resolución impugnada es violatoria del artículo 38 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 26 fracción III, del mismo ordenamiento legal, en virtud de que la misma se encuentra indebidamente fundada y motivada al no preverse en la fracción III, de dicho artículo 26, la responsabilidad solidaria a cargo de un delegado de un síndico, sino únicamente se dispuso por el Legislador Federal, la responsabilidad solidaria del síndico de la quiebra de la contribuyente respectiva.

Por tanto, la determinación de responsabilidad solidaria que realizó la autoridad liquidadora sustentada en el carácter de delegado del síndico del juicio de quiebra, carece de fundamento legal.

2.- No obstante lo anterior, esta Segunda Sección aclara que en relación con el agravio tercero del concepto de impugnación, no corresponde en el presente juicio determinar si existe violación a lo dispuesto en el artículo 239-B, del Código Fiscal de la Federación, en el sentido manifestado por el actor, de que con la resolución impugnada se dio la repetición de una resolución que ya había sido declarada nula lisa y llana en el juicio 10595/94; que mediante sentencia de 13 de octubre de 1988, la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal consideró fundado un diverso agravio señalando que la omisión en el pago de las contribuciones detectadas por la autoridad a través de las visitas practicadas a la sociedad fallida se propició antes de que ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, asumiera el cargo de delegado de la sindicatura y que por ello, no podía imputársele responsabilidad del pago de dichas contribuciones.

Lo anterior, porque a juicio de esta Segunda Sección el pronunciamiento en cuanto a si un acto administrativo constituye la repetición de una resolución ya declarada nula es propia de la instancia de queja a que se refiere el artículo 239-B, del Código Fiscal de la Federación, y en la especie el motivo del presente juicio y fallo lo es una demanda de juicio contencioso administrativo interpuesto por la persona física ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, quien a nombre propio controvierte la resolución impugnada contenida en el oficio 126539, por lo cual el estudio de la legalidad o ilegalidad de dicha resolución sólo puede ser por vicios propios.

Máxime, que si bien queda acreditado como antecedentes en el considerando quinto de este fallo bajo el número 19, que el 13 de octubre de 1998, la Quinta Sala Regional Metropolitana dictó una tercera sentencia en el juicio 10595/94 que declaraba en cumplimiento a una ejecutoria de un Tribunal Colegiado, la nulidad de las resoluciones 6456 y 34719 la primera derivada de la visita domiciliaria origen también de la resolución impugnada en el presente juicio que determinaba un crédito fiscal

como responsable solidario al C. ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, como delegado del síndico del juicio; también lo es, que en cumplimiento a dicha nulidad es que la misma se deja sin efecto y se repuso por primera ocasión la visita domiciliaria a partir del momento de la violación relativa a la falta de notificación mediante acta parcial de determinación presuntiva. Lo que evidencia que se trata de una resolución diversa de la impugnada en el presente juicio aun cuando su origen sea la misma orden de visita.

Lo anterior, se sustenta del contenido de dicha primer resolución 6456 emitida con motivo de la orden de auditoría 0021/91 de 27 de marzo de 1991, de la sentencia de 13 de octubre de 1998, emitida por la Quinta Sala Regional Metropolitana que declaró la nulidad de dicha resolución y que se precisan en los antecedentes expresados en el considerando quinto de este fallo bajo los números 9 y 19, a los cuales remitimos.

3.- Por lo cual, no puede considerarse como cosa juzgada la ilegalidad de la determinación de responsabilidad solidaria a cargo de ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, como delegado de la sindicatura de la quiebra, dado que la sentencia de 13 de octubre de 1998, dictada por la Quinta Sala Regional Metropolitana en el juicio 10595/94 se refiere a lo fundado del agravio únicamente por lo que hace a la diversa resolución impugnada 34719 emitida con motivo de una diversa orden de auditoría AD 0008/91 correspondiente al período comprendido del 1º de enero de 1989 al 30 de enero de 1991 y en la especie la resolución impugnada en el presente juicio se refiere a la orden de auditoría AD 0021/91 correspondiente al ejercicio de 1988.

Así, por lo que hace a esa resolución 34719 dicha Quinta Sala consideró que la omisión en el pago de las contribuciones detectadas se propició antes de que ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, asumiera el cargo de delegado de la sindicatura y que por ello no podía imputársele la responsabilidad del pago de dichas contribuciones a menos que hubiera acreditado una omisión culposa del cumplimiento a sus obligaciones contraídas con motivo de su encargo.

Lo anterior, como se constata del contenido de dicha resolución 34719 y de la sentencia de 13 de octubre de 1988 referidas como antecedentes en el considerando quinto de este fallo bajo los números 10 y 19, a los cuales remitimos.

Por ello, no existe violación alguna a los artículos 354, 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en cuanto a la existencia de la cosa juzgada.

4.- En cuanto al cuarto concepto de impugnación expresado por el actor esta Segunda Sección estima que el mismo es FUNDADO pues se reitera que de autos ha quedado demostrado que la persona física ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, actúa con motivo de la quiebra de la empresa contribuyente visitada HOLDING COIN, S.A. DE C.V., como delegado del síndico Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, y que nunca se ha desempeñado como síndico, pues este último cargo se reconoció en la declaratoria de quiebra de 11 de octubre de 1991 a la Cámara mencionada, tal y como se precisó en el antecedente del considerando quinto de este fallo relativo a la suspensión de pagos y quiebra de la empresa, bajo el número 2 al cual remitimos.

Por lo cual, no existe fundamento alguno que prevea que el delegado del síndico puede ser responsable solidario del contribuyente y el artículo 26 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en ese sentido sólo se refiere al síndico de la quiebra no a su delegado.

5.- En cuanto al quinto concepto de impugnación expresado por el actor esta Segunda Sección estima que el mismo de igual forma es FUNDADO reiterándose que la resolución impugnada se encuentra indebidamente fundada y motivada porque no es suficiente que ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL funja como delegado de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, esta última señalada como síndico en el juicio de quiebra de la contribuyente HOLDING COIN, S.A. DE C.V., para estimar a dicha persona física responsable solidaria de dicho contribuyente, pues se insiste que la fracción III, del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación,

sólo se refiere a los liquidadores y síndicos del contribuyente, no a los delegados de un síndico. Lo cual, da lugar a la declaratoria de nulidad de la resolución impugnada por indebida fundamentación y motivación **únicamente por lo que hace a la determinación del crédito a cargo de la persona física ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, no así por lo que hace a la determinación del mismo crédito a cargo de la contribuyente HOLDING COIN, S.A. DE C.V., que es representada por el síndico Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, por conducto de su delegado, en virtud de que el presente juicio únicamente se promovió respecto de la determinación a cargo de la persona física ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, como lo reconoce el propio actor**.

6.- En relación con el sexto concepto de impugnación expresado por el actor, se considera por esta Segunda Sección que el mismo resulta FUNDADO por las consideraciones antes expresadas que se tienen por reproducidas, en cuanto a la indebida aplicación del artículo 26 fracción III, del Código Fiscal de la Federación.

Máxime, que como lo indica el actor la aplicación de los preceptos que determinan la responsabilidad solidaria como lo es el artículo 26 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, por tratarse de una disposición relativa al sujeto responsable solidario del contribuyente es de aplicación "estricta" en los términos del artículo 5º del Código Fiscal de la Federación, y por ello al disponerse en el primero de los artículos mencionados a los liquidadores y síndicos como responsables solidarios, no puede interpretarse extensivamente dicho precepto para incluir también a los delegados designados por los síndicos en auxilio como gestores y representantes de este último.

Además, que como lo indica el actor del contenido de la resolución impugnada no se desprende que se hubiere precisado por la autoridad liquidadora en qué hipótesis de responsabilidad solidaria de la fracción II, del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, se encontraba dicho actor, esto es, si dicha responsabilidad derivaba de:

A) Por las contribuciones que el síndico debió pagar a cargo de la sociedad en quiebra; o

B) De las contribuciones que se causaron durante la gestión del síndico.

Por lo cual, en principio dado que la persona física ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, no tiene el carácter de síndico sino únicamente de gestor o representante del mismo, no puede ser responsable solidario, pues dicha responsabilidad corresponde a la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, señalada como síndico del juicio de quiebra conforme a la declaratoria de quiebra emitida por el Juez Primero de lo Concursal.

Además, que como lo apunta el propio actor el carácter de delegado de la sindicatura Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, para gestionar y representar a nombre de la sindicatura los intereses de la quiebra de la contribuyente, se obtuvo el 21 de octubre de 1991, tal y como se hizo constar en los antecedentes del considerando quinto de este fallo bajo el punto número 4, en el cual consta que con esa fecha fue designado como delegado en los términos de los artículos 29 y 46 fracción VIII, de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos vigente en 1991. Que la determinación del crédito controvertido en el presente juicio se refiere al ejercicio de 1988, esto es con anterioridad a la designación de delegado.

Lo anterior, porque del contenido de la resolución impugnada, se desprende que aun cuando se señala como responsable solidario a la persona física ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, derivado de su designación como delegado del síndico Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, también lo es que a lo largo de la determinación que realizó la autoridad se desprende de manera concreta que se refiere la determinación del crédito a las irregularidades cometidas por el contribuyente visitado HOLDING COIN, S.A. DE C.V.

Irregularidades señaladas por la autoridad consistentes en las siguientes: que la contribuyente visitada HOLDING COIN, S.A. DE C.V., se encontraba obligada a

presentar declaración anual respecto del ejercicio de 1988 a más tardar el 31 de marzo de 1989, que se le encontró ingresos por depósitos bancarios no engranados en la contabilidad respecto del mismo ejercicio de 1988, que por ello se colocaba en el supuesto del artículo 59 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, al ser considerados ingresos que deben pagar contribuciones; que efectuó el pago de honorarios de los cuales retuvo el 10% sobre honorarios sin enterar dicha retención conforme a recibos de honorarios y pólizas de cheque del ejercicio de 1988; que se omitió declarar ingresos propios para efectos del impuesto sobre la renta por otros depósitos bancarios no engranados en contabilidad por concepto de dividendos y en general por las ganancias distribuidas por sociedades mercantiles por el ejercicio de 1988, en relación a préstamos de HOLDING COIN, S.A. DE C.V., a Francisco Padua Sayeg, accionista de la contribuyente, determinando ingresos omitidos por depósitos bancarios no engranados en contabilidad y que por dicho impuesto de las sociedades mercantiles se determinó un saldo no liquidado de la cuenta de deudores diversos, subcuenta Francisco Padua Sayeg, resultando a cargo de la contribuyente visitada por las ganancias distribuidas de las que era responsable solidaria conforme al artículo 26 fracción I, del Código Fiscal de la Federación. Determinando diversos créditos el primero por concepto de impuesto sobre la renta de las sociedades mercantiles en cantidad de $312’209,547.60; por ingresos por honorarios y en general por la prestación de un servicio personal independiente como responsable solidario, un impuesto a cargo de $169,001.07; y por concepto de ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por sociedades mercantiles responsabilidad solidaria, un impuesto actualizado en cantidad de $511’107,679.37, así como recargos que hacen la cantidad total de $2,200’479,830.37. Lo anterior como se prueba del contenido de la resolución impugnada 126539 que obra a fojas 56 a 79 del expediente que nos ocupa 6097/05.

7.- El actor en el mismo concepto de impugnación sexto, se refiere a la exclusión que realiza el mismo artículo 26 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a que no será aplicable la responsabilidad solidaria a liquidadores y síndicos cuando la sociedad en liquidación cumpla con las obligaciones de presentar avisos y proporcionar los informes a que se refiere el Código y su Reglamento y que

la autoridad en la liquidación no consideró dicha exclusión, al respecto esta Segunda Sección estima que en virtud de que como lo sostiene el actor dicha exclusión de la responsabilidad solidaria no fue señalada como fundamento de la resolución impugnada y dado que al resultar suficiente que la persona física ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, por tener el carácter de delegado del síndico no puede ser considerado como responsable solidario en los términos de la fracción III, del artículo 26 multicitado, resulta innecesario el estudio de la excepción que señala dicha fracción. Máxime, que se insiste que no existe fundamento legal que establezca vínculo alguno de responsabilidad solidario entre un delegado de un síndico y un contribuyente declarado en quiebra.

8.- En relación con el décimo primer concepto de impugnación expresado por el actor, se reitera lo expresado en párrafos anteriores en el sentido de que conforme al artículo 26 fracción III, del Código Fiscal de la Federación interpretado como disposición fiscal que establece cargas a un particular y las excepciones a la misma a que se refiere el artículo 5º del mismo Código, sólo dispone como responsables solidarios al liquidador y al síndico pero no al delegado del síndico.

Por tanto, debe estarse a la ley especial de la materia que en la especie lo es el Código Fiscal de la Federación, que regula quiénes pueden tener el carácter de responsables solidarios con el contribuyente y que de manera específica en su artículo 26 fracción III, únicamente menciona al síndico designado para velar los intereses de la quiebra de una contribuyente.

Máxime, que como lo sostiene el actor incluso el artículo 56 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, es claro al determinar que el síndico será responsable ante la masa y ante el quebrado por la gestión de sus delegados, mandatarios y en general del personal que haya designado en interés de la quiebra, respecto de los daños y perjuicios que causen en el desempeño de sus funciones por incumplimiento de sus obligaciones o por negligencia al no proceder como comerciante diligente en negocio propio. Artículo que a continuación se cita:

LEY DE QUIEBRAS Y SUSPENSIÓN DE PAGOS

"**Artículo 56.-** El síndico será responsable ante la masa y ante el quebrado, por la gestión de sus delegados, mandatarios y en general del personal que haya designado en interés de la quiebra, respecto a los daños y perjuicios que cause en el desempeño de sus funciones, por incumplimiento de sus obligaciones o por negligencia al no proceder como un comerciante diligente en negocio propio."

Artículo 56 mencionado, que a juicio de esta Segunda Sección corrobora el alcance de la intervención de dicho síndico como responsable de la masa de la quiebra y ante el quebrado incluso respecto de los actos de sus delegados y que por su parte el artículo 26 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, considera a dicho síndico como responsable solidario del contribuyente quebrado.

9.- El actor expresa en el mismo décimo primer concepto de impugnación que la interpretación del artículo 26 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, debe hacerse a la luz del "**principio de legalidad tributaria contemplado en el artículo 31 fracción IV, de la Constitución Federal**" a lo cual esta Segunda Sección considera INOPERANTE dicha argumentación porque no corresponde a este Tribunal pronunciarse en cuanto al artículo 31 Constitucional, pues ello compete al Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, en ese sentido resulta inoperante la manifestación del actor que invoca dicho artículo Constitucional.

10.- En relación con el agravio décimo segundo expresado por el actor resulta FUNDADO pues se insiste que ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, al tener el carácter de delegado del síndico Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, no puede ser considerado por ese solo hecho como responsable solidario de la contribuyente quebrada HOLDING COIN, S.A. DE C.V., y porque además al momento en que se omitió el pago de las contribuciones no había asumido el cargo de delegado, el mismo resulta fundado por todas las consideraciones antes expresadas que se tienen por reproducidas.

11.- Sin que sea óbice para lo considerado en párrafos anteriores, las argumentaciones expresadas por la autoridad al formular su contestación a la demanda en virtud de que esta Juzgadora con fundamento en el artículo 215, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que establece *"en la contestación de la demanda no podrán cambiarse los fundamentos de derecho de la resolución impugnada"* sólo puede valorar la resolución impugnada atendiendo a los fundamentos y motivos expresados en el cuerpo de dicha resolución, sin que sea válido para la autoridad que al formular su contestación a la demanda pretenda mejorar dichos fundamentos y motivos expresando consideraciones, razonamientos y fundamentos que no expuso en la resolución impugnada, como lo pretende al formular su contestación a la demanda.

En consecuencia, si del contenido de la resolución impugnada se desprende que la autoridad liquidadora se limitó, al determinar la responsabilidad solidaria a cargo de la persona física ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, a motivar su acto únicamente precisando que tenía el carácter de delegado del síndico de la quiebra (Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México), de la contribuyente HOLDING COIN, S.A. DE C.V., que la contribuyente visitada se declaró en suspensión de pagos según expediente número 41/88 en el Juzgado Primero de lo Concursal; que por sentencia de 11 de octubre de 1991, dicho Juzgado declaró en estado de quiebra a la contribuyente y reconoció como síndico a la Cámara mencionada; que aceptó y protestó dicho cargo el apoderado de la Cámara Agustín Rodríguez Cedillo; que durante el transcurso de la visita el 21 de octubre de 1991, dicho apoderado designó como delegado del síndico al C. ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL; que por ello en el artículo 26 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, se le determinaba a dicho delegado la responsabilidad solidaria; dicha motivación y fundamentación de la resolución impugnada es la que puede considerar esta Segunda Sección de la Sala Superior. Que como se ha considerado en párrafos anteriores a juicio de esta Segunda Sección ha resultado indebida dicha fundamentación y motivación por los razonamientos antes expuestos que se tienen por reproducidos.

Hecha la aclaración anterior, procederemos al estudio de las consideraciones expresadas por la autoridad al formular su contestación a la demanda:

A) Si bien como lo indica la autoridad en su contestación y en la resolución impugnada, durante el transcurso de la visita le fue conferida a la persona física ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, el carácter de delegado del síndico Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, del juicio de quiebra de la contribuyente visitada HOLDING COIN, S.A. DE C.V., también lo es que ello no es suficiente para considerar que por tal hecho la persona física por tener el cargo de delegado del síndico estaba obligado desde ese momento a pagar las contribuciones adeudadas anteriormente por la contribuyente en quiebra, así como las relativas al periodo en que el síndico poseía tal carácter.

Lo anterior porque, como se ha distinguido a lo largo del presente considerando la figura del síndico es distinta del delegado del síndico, el primero señalado como el ente jurídico auxiliar de la Administración Pública para mantener los intereses de la masa de la quiebra y del quebrado, responsable único ante dicha masa y quebrado del ejercicio de su función, el segundo como gestor del síndico que actúa para auxiliar la función del síndico, pero que no es el responsable directo frente a la masa de la quiebra y el quebrado aun cuando tenga facultades amplias de representación y ejecución del síndico, porque en los términos de la ley de la materia en su artículo 56, se dispone con nitidez que el único responsable de la función de la sindicatura lo será el síndico que en la especie lo fue la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México.

Por tanto, resulta irrelevante que la autoridad argumente que la responsabilidad solidaria de la fracción III, del artículo 26, del Código Fiscal de la Federación, se refiere tanto a contribuciones adeudadas anteriormente por la empresa en quiebra, como a las contribuciones cuyo pago debía realizarse dentro del periodo en que el síndico posee tal carácter, pues se insiste que en los términos del artículo y fracción mencionados en el Código Fiscal de la Federación, sólo se prevé como responsable

solidario al síndico no a sus delegados, aun cuando dicho síndico tenga la facultad de designar delegados para el ejercicio de su función.

B) Por otra parte, es de señalar que si bien el artículo 26 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, se refiere a la responsabilidad solidaria de los síndicos en dos hipótesis:

- Respecto de las contribuciones que se causen durante su gestión y;

- Respecto de la contribuciones anteriores que debieron pagarse a cargo de la sociedad en liquidación.

Ello no es suficiente para hacer extensiva la responsabilidad solidaria al delegado del síndico, atribuida por la ley solo al síndico de la quiebra, en virtud de que dicho delegado sólo tiene una función de gestor con facultades amplias de representación, pero que, por disposición de la ley de la materia en su artículo 56, no llegan al grado de una responsabilidad frente a la masa de la quiebra o frente al quebrado, pues ello corresponde únicamente al síndico que, a su vez, responde por los actos de sus delegados o mandatarios.

C).- Si bien es cierto, como lo indica la autoridad y quedó asentado en el cuerpo de la resolución impugnada, que ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, aceptó el cargo de delegado que le confirió el apoderado de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, esta última que tenía el carácter de síndico de la empresa quebrada HOLDING COIN, S.A. DE C.V., al referirse al escrito de dicho apoderado de la Cámara de fecha 21 de octubre de 1991; también lo es, que ese hecho no se traduce en la aceptación de responsabilidad solidaria de contribuciones que debieran pagarse a cargo de la sociedad en quiebra aun antes de su gestión, en virtud de que la responsabilidad solidaria de las contribuciones solo puede derivar de lo dispuesto en la ley fiscal, en virtud de que se trata del sujeto que a juicio del Legislador debe pagar las contribuciones del sujeto pasivo de la relación tributaria, esto es, del contribuyente conforme al artículo 5º del Código Fiscal de la Federación.

Por tanto, si el artículo 26, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, únicamente se refiere al síndico de la quiebra del contribuyente y no al delegado que como gestor y representante hubiere nombrado el síndico, la autoridad no puede determinar la responsabilidad solidaria de la empresa visitada quebrada a cargo de dicho delegado.

D) Si bien el delegado en el ejercicio de su función como gestor y representante del síndico tiene responsabilidad frente a dicho síndico del ejercicio de su actividad, también lo es que en los términos del artículo 56, de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos vigente en 1991, el Legislador Federal estableció que solo el síndico es responsable directo frente a la masa de la quiebra y al quebrado incluso por los actos de sus delegados y mandatarios y por su parte la ley fiscal sólo reconoce la responsabilidad solidaria en el síndico, pero no en su delegado y por ello, debe estarse a la ley fiscal que es la que regula los sujetos obligados al pago de las contribuciones con independencia de la responsabilidad que dicho delegado pudiera tener en diversas materias distintas a la fiscal.

F) Si bien es cierto que el delegado del síndico durante la visita domiciliaria y su reposición alegó que los actos debieron notificarse en su domicilio respecto de las citaciones dirigidas a la empresa en quiebra, ello como se constata por esta Juzgadora porque incluso con motivo del segundo juicio contencioso administrativo relativo al mismo crédito fiscal determinado, en el juicio 13822/99-11-08-01/472/00-S2-08-04, se argumentó por el actor como violación de carácter procesal que la reposición de la visita se notificó por estrados al argumentarse el desconocimiento fiscal y que correspondía realizar dicha reposición en el domicilio para efectos de la quiebra el ubicado en Nueva York, 290; también lo es, que esa situación no puede servir como fundamento para fundar la responsabilidad solidaria del delegado, pues se insiste que los sujetos obligados al pago de las contribuciones solo pueden estar previstas en las leyes fiscales, pero no derivan de hechos o circunstancias de aceptación de un cargo o solicitud de notificación en un domicilio.

G) En cuanto a la argumentación de la autoridad en el sentido de que la designación de delegado que hizo el apoderado de la Cámara como síndico de la quiebra se sustentó en el artículo 29, primer párrafo, de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, ello no es suficiente para considerar que ello daba lugar a la responsabilidad solidaria del delegado, porque como se ha precisado al inicio del presente considerando es atribución de los síndicos designar uno o varios delegados para cada caso, quienes conforme al mismo numeral mencionado gozan dentro de la órbita de sus atribuciones de las más amplias facultades de representación y ejecución y que las limitaciones a las facultades de los delegados deben constar en el instrumento que les confiera la delegación, ello constata que dicha representación amplia solo es dentro de la órbita de sus atribuciones que en relación con el artículo 56, sólo el síndico responderá ante la masa y ante el quebrado por la gestión de sus delegados, mandatarios y personal designado en interés de la quiebra, lo que constituye el límite a la órbita de atribuciones del delegado.

H) En relación con la manifestación de la autoridad en el sentido de que los artículos 46 fracciones I y II y 48 fracciones I, II y III, de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, establece los derechos y obligaciones del síndico, que el artículo 26 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, dispone que los liquidadores y síndicos serán responsables solidarios sin distinción alguna; que la designación del delegado por el síndico se hizo conforme a los artículos 29 y 46 fracción VIII, de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, y que conforme al artículo 46 fracción VII, de la misma Ley al establecerse la obligación del síndico de la buena conservación y administración ordinaria de los bienes, de rendir estados de los libros del quebrado, recae por tanto la responsabilidad solidaria del síndico y liquidadores, esta Segunda Sección considera lo siguiente:

Que como se ha señalado en párrafos anteriores resulta insuficiente lo dispuesto en los artículos 29, 46 fracciones I, II, VII y VIII y 48 fracciones I, II y III de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, para considerar al delegado de un síndico como responsable solidario de la determinación de un crédito fiscal a cargo de un contribuyente visitado quebrado porque:

a) El artículo 29 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, no dispone dicha responsabilidad solidaria de los créditos fiscales de un contribuyente quebrado, sino que las cámaras de comercio y de industria desempeñarán las sindicaturas que les correspondan en los términos de la Ley mencionada y conforme a los estatutos que las rigen, que tales sindicaturas pueden designar uno o varios delegados para cada caso y que éstos gozarán dentro de la órbita de sus atribuciones de las más amplias facultades de representación y ejecución. Representación que no puede ir más allá hasta el grado de considerarse al delegado responsable solidario de un crédito fiscal de un quebrado, por no haberse dispuesto en ese sentido en la ley mencionada y además porque la ley aplicable en la materia fiscal en cuanto a la figura del responsable solidario, esto es el artículo 26 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, únicamente se refiere con tal carácter a los liquidadores y síndicos, no así a sus delegados.

b) En el mismo sentido que el párrafo anterior, es de señalar que el artículo 46, en sus fracciones I, II, VII y VIII de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos no es suficiente para determinar que el delegado del síndico es responsable solidario del crédito fiscal determinado a un contribuyente quebrado, en virtud de que dicho numeral se refiere a los derechos y obligaciones del síndico no del delegado y además dichos derechos y obligaciones se refieren a la buena conservación y administración ordinarias de los bienes de la quiebra, a la toma de posesión de la empresa y de los bienes del quebrado, a la obligación de redactar el inventario de la empresa y de los demás bienes del mismo a la obligación de establecer la lista provisional de los acreedores privilegiados así como de los ordinarios y a hacer del conocimiento del Juez los nombramientos de delegados, mandatarios y en general del personal que haya designado en interés de la quiebra, sin que se establezca la responsabilidad solidaria del delegado.

Máxime, que la designación como delegado en interés de la quiebra que realiza un síndico sólo dentro de la órbita de sus atribuciones goza de amplias facultades de representación y ejecución en los términos concedidos por el síndico, pero ello no llega al grado de considerarlo responsable solidario de un crédito fiscal. Porque

además, dicho carácter de sujeto pasivo como responsable solidario obligado al pago de una contribución sólo puede derivar de la ley fiscal y específicamente del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, que en su fracción III, para los casos de quiebra de manera concreta menciona como único responsable solidario tratándose de una liquidación al liquidador y tratándose de una quiebra del contribuyente al síndico designado, no al delegado.

c) En cuanto a lo dispuesto en el artículo 48, fracciones I, II y III, de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, es de señalar que dicho numeral tampoco establece la responsabilidad solidaria del delegado respecto de un contribuyente quebrado, sino que por el contrario resalta la responsabilidad del síndico como auxiliar de la Administración de Justicia precisando otras obligaciones a su cargo de dicho síndico, entre ellas presentar a la junta de acreedores proposiciones de convenio, previa aprobación judicial; ejercitar y continuar todos los derechos y acciones que corresponden al deudor con relación a sus bienes y a la masa de acreedores, contra el deudor, contra terceros y contra determinados acreedores; así como proponer al Juez la continuación de la empresa del quebrado, su venta o la de alguno de sus elementos o de los otros bienes de la quiebra, sin que ello se refiera al delegado del síndico.

Por todo lo anterior, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 5º del Código Fiscal de la Federación, respecto de la quiebra de la empresa HOLDING COIN, S.A. DE C.V., solo puede tenerse como responsable solidario al síndico, esto es, a la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, y no al delegado designado por dicho síndico, pues dicha designación se hizo para la representación y ejecución de los intereses de la quiebra, pero no para que el delegado respondiera frente al fisco federal como responsable solidario de las contribuciones adeudadas por el contribuyente quebrado relativas al ejercicio de 1988.

d) Por tanto, si bien se reconoció a la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, como síndico y dicha Cámara designó en octubre de 1991, como delegado a la persona física ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, en los

términos de los artículos 29 y 46 fracción VIII, de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos vigente en 1991, para que lo representara en interés de la quiebra de la empresa HOLDING COIN, S.A. DE C.V., hechos que no se controvierten, sino que las partes están contestes al respecto y de autos se desprende que así ocurrió; también lo es que ello no es suficiente para que el delegado como representante y mandatario designado por el apoderado del síndico adquiera el carácter de responsable solidario, pues ello contraviene lo dispuesto en el artículo 26 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, que establece que en el caso de quiebra únicamente el síndico será el responsable solidario frente al fisco federal por las contribuciones de la empresa quebrada en los términos que la misma fracción III precisa.

e) Tampoco le asiste la razón a la autoridad demandada cuando manifiesta que en 1988 inició la suspensión de pagos, que con posterioridad se declaró la quiebra de la contribuyente HOLDING COIN, S.A. DE C.V., y que en 1991, la persona física ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, fue designado delegado por la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México; pues es de señalar que tales hechos no se encuentran en discusión dado que las partes están contestes de los mismos, sino que a juicio de esta Segunda Sección tales hechos no pueden por sí mismos otorgar la responsabilidad solidaria frente al fisco federal del delegado de un síndico respecto de créditos fiscales del contribuyente visitado, porque el artículo 26, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, no lo establece y las contribuciones otorgadas a los delegados conforme a los artículos 29 y 46 fracción III, de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, está limitada dentro de la órbita de contribuciones únicamente a las amplias facultades de representación y ejecución en los términos que se hubiere concedido la delegación y que la misma ley de la materia en su artículo 56, precisa que es el síndico el responsable ante la masa y ante el quebrado por la gestión de sus delegados lo que reitera que sólo el síndico puede responder frente al fisco federal por la responsabilidad solidaria del crédito fiscal del contribuyente quebrado a que se refiere el artículo 26 fracción III, del Código Fiscal de la Federación.

f) Sin que le asista la razón a la autoridad demandada en cuanto a que la persona física ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, pretende excusarse de sus obli-

gaciones inherentes al cargo de delegado del síndico, toda vez que esta Segunda Sección estima que la autoridad parte de una premisa equivocada al señalar que al aceptarse el cargo de delegado del síndico con ello a su juicio asumió la sindicatura de la empresa quebrada, pues se insiste que el delegado únicamente tiene el carácter de representante del síndico, pero no es el síndico, sino que es un auxiliar del síndico con facultades amplias de representación y ejecución que se limitan en cuanto a la responsabilidad ante la masa de la quiebra y ante el quebrado, porque la misma ley de la materia precisa que sólo el síndico y no el delegado responderá frente a estas últimas por las gestiones de dichos delegados, mandatarios y en general del personal designado en interés de la quiebra, tal y como se ha precisado en párrafos anteriores conforme al artículo 56 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos.

Por lo cual, el delegado del síndico no tiene entre sus obligaciones inherentes a su cargo como mandatario el de responder solidariamente frente al fisco federal del crédito fiscal determinado a cargo del contribuyente quebrado.

g) Sin que sea óbice para lo anterior, el argumento de la autoridad en el sentido de que el síndico de la quiebra es un ente abstracto y por ello, sus derechos y obligaciones deben ser ejercidas por conducto de sus delegados, pues si bien dicho ente abstracto referido por la autoridad actúa a través de su apoderado legal, que por su parte conforme al artículo 29 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, puede designar a una persona física como delegado o delegados para cada caso, así como mandatarios y en general personal que haya designado en interés de la quiebra, ello en virtud de que el carácter de síndico lo pueden ejercer tanto las cámaras de comercio como las cámaras de industria, que al ser entes jurídicos y no personas físicas por su naturaleza pueden actuar a través del mandatario designado para tales efectos. Sin que ello reste o libere de responsabilidad en todos los aspectos del ejercicio de dicha sindicatura pues como ente jurídico también es sujeto de derechos y obligaciones que adquiere cuando acepta la sindicatura.

Por tanto, si el apoderado de la sindicatura de la contribuyente quebrada (Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México), previamente aceptó la sindicatura

y con posterioridad designó a un delegado con atribuciones amplias de representación y ejecución, ello no libera a la sindicatura de sus obligaciones derivadas de la aceptación del cargo de síndico, máxime que el artículo 26 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, con toda nitidez lo señala como responsable solidario, sin mencionar en dicha fracción que los delegados designados por el síndico para su representación, también tengan tal carácter.

h) Por ello, si bien la sindicatura se ejerce por conducto de un delegado las obligaciones derivadas de la función de síndico corresponden únicamente a la sindicatura, esto es a la Cámara, sin que el actor pretenda excusarse del cumplimiento de la responsabilidad solidaria que argumenta la autoridad en razón de lo previsto por el artículo 56 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, porque a juicio de esta Segunda Sección la responsabilidad solidaria de un contribuyente quebrado sólo deriva del artículo 26, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, que es claro al disponer dicha responsabilidad únicamente al síndico de la quiebra no a su delegado.

Por todo lo anterior, es el síndico de la quiebra de la contribuyente el responsable solidario y no su delegado, con fundamento en el artículo 26 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 5º del mismo ordenamiento legal.

En consecuencia, esta Segunda Sección estima que la resolución impugnada está indebidamente fundada y motivada al determinar a cargo de la persona física ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, la responsabilidad solidaria del crédito fiscal determinado a la contribuyente visitada HOLDING COIN, S.A. DE C.V., al señalarse como motivo de dicha determinación el carácter de delegado del síndico Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, de la quiebra de la contribuyente visitada y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26 fracción III, del Código Fiscal de la Federación. Lo cual es contrario a lo dispuesto en el artículo 38 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 26 fracción III, del mismo ordenamiento legal.

Por lo cual, dicha indebida fundamentación y motivación de la resolución impugnada da lugar a la ilegalidad de dicha resolución con fundamento en los artículos 238 fracción IV y 239 fracción II, ambos del Código Fiscal de la Federación, únicamente por lo que hace a la parte de la resolución impugnada 126539 que se refiere a la responsabilidad solidaria de la persona física ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, no así por lo que hace a la determinación del crédito fiscal a cargo de la contribuyente visitada HOLDING COIN, S.A. DE C.V., cuya representación corresponde al síndico Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México.

Cabe precisar, que en consecuencia resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos de impugnación números primero, séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo tercero de este fallo, relativos a la falta de precisión del origen del crédito y su concepto; a la supuesta violación de los artículos 42, 48, 67 y 146 del Código Fiscal de la Federación y a la constitucionalidad del artículo 26 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, por estimarse que viola la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, toda vez que prevalece el estudio de los conceptos de impugnación relativos a la determinación de responsabilidad solidaria atribuida a la persona física ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, los cuales resultaron fundados y suficientes para la declaratoria de nulidad lisa y llana de la resolución impugnada por lo que hace a dicha responsabilidad solidaria.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 23, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, en relación con los artículos 238, fracción IV y 239 fracción II, del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

I.- Es infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento planteada por las autoridades demandadas; en consecuencia;

II.- No se sobresee el presente juicio.

III.- El actor ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL, a nombre propio, acreditó su pretensión; en consecuencia,

IV.- Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada descrita en el resultando 1° de este fallo, **únicamente** en la parte que le determinó la responsabilidad solidaria de la contribuyente visitada HOLDING COIN, S.A. DE C.V., a cargo de la persona física ALEJANDRO SÁYAGO BECERRIL.

V.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada del presente fallo, devuélvanse los autos a la Quinta Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, una vez que haya quedado firme o en su caso se resuelva en definitiva el presente asunto y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 21 de febrero de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor de los Magistrados: Guillermo Domínguez Belloc, Silvia Eugenia Díaz Vega, Luis Malpica y de Lamadrid, Luis Carballo Balvanera y Olga Hernández Espíndola.

Fue Ponente en el presente asunto la Magistrada Silvia Eugenia Díaz Vega, cuya ponencia fue aprobada.

Se elaboró el presente engrose el 4 de marzo de 2008, y con fundamento en lo previsto por los artículos 27, fracción III y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma la Magistrada Olga Hernández Espíndola, Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-51

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. PROCEDE CONCEDERLA EN JUICIO, SI LA AUTORIDAD INICIA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, SIN DAR RESPUESTA EXPRESA A LA SOLICITUD QUE PREVIAMENTE LE HIZO LA PARTE ACTORA.- El primer párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que el demandante podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, cumpliendo determinados requisitos. Lo anterior, no debe interpretarse en el sentido de que sólo se actualiza la procedencia de la suspensión, cuando la parte actora acredite la existencia de una resolución expresa en la que se le niegue la suspensión solicitada o rechazado la garantía ofrecida, ya que si bien es cierto que la autoridad exactora está obligada a resolver de manera expresa tales promociones, también es verdad, que en el supuesto de que no lo haga e inicie el procedimiento administrativo de ejecución, debe considerarse que con ello está negando implícitamente la suspensión solicitada o rechazando la garantía, lo que se justifica, pues de lo contrario, bastaría que la autoridad dejara de contestar las solicitudes que al efecto le formularan los particulares para que no procediera en ningún caso la suspensión solicitada en juicio. (17)

Recurso de Reclamación Núm. 558/07-12-02-8/1227/07-S2-09-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de marzo de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Oscar Elizarrarás Dorantes.
(Tesis aprobada en sesión de 15 de abril de 2008)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

TERCERO.- (...)

En consideración de esta Juzgadora, son **INFUNDADOS** los argumentos de agravio planteados por la autoridad recurrente, porque el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es del tenor siguiente:

"**Artículo 28.-** El demandante, podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, cumpliendo con los siguientes requisitos.
"**I.** Podrá solicitarla en la demanda o en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia, ante la Sala de conocimiento del juicio.
"**II.** Acompañar copias de la promoción en la que solicite la suspensión y de las pruebas documentales que ofrezca, para correr traslado a cada una de las partes y una más para la carpeta de suspensión.
"**III.** Ofrecer, en su caso, las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de garantía, a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora y, si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución, únicas admisibles en la suspensión.
"**IV.** Ofrecer garantía suficiente mediante billete de depósito o póliza de fianza expedida por institución autorizada, para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que pudieran ocasionarse a la demandada o a terceros con la suspensión si no se obtiene sentencia favorable en el juicio contencioso administrativo.
"**V.** Los documentos referidos deberán expedirse a favor de la otra parte o de los terceros que pudieran tener derecho a la reparación del daño o a la indemnización citada.

"**VI. Tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, procederá la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.**

"El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos:

"**a)** Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso, y

"**b)** Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito.

"**VII.** Exponer en el escrito de solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, las razones por las cuáles considera que debe otorgarse la medida y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite.

"**VIII.** La suspensión se tramitará por cuerda separada y con arreglo a las disposiciones previstas en este Capítulo.

"**IX.** El Magistrado Instructor, en el auto que acuerde la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado, podrá decretar la suspensión provisional, siempre y cuando con ésta no se afecte al interés social, se contravenga disposiciones de orden público o quede sin materia el juicio, y se esté en cualquiera de los siguientes supuestos:

"**a)** Que no se trate de actos que se hayan consumado de manera irreparable.

"**b)** Que se le causen al demandante daños mayores de no decretarse la suspensión, y

"**c)** Que sin entrar al análisis del fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto administrativo impugnado.

"**X.** El auto que decrete o niegue la suspensión provisional, podrá ser impugnado por las autoridades demandadas mediante el recurso de reclamación previsto en el artículo 59 de esta Ley, dejando a salvo los derechos del demandante para que lo impugne en la vía que corresponda.

"**XI.** En el caso en que la ley que regule el acto administrativo cuya suspensión se solicite, no prevea la solicitud de suspensión ante la autoridad ejecutora, la suspensión tendrá el alcance que indique el Magistrado Instructor o la Sala y subsistirá en tanto no se modifique o revoque o hasta que exista sentencia firme.

"**XII.** Mientras no se dicte sentencia en el juicio, la Sala podrá modificar o revocar la sentencia interlocutoria que haya decretado o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique.

"**XIII.** Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia firme favorable, la Sala ordenará la cancelación o liberación, según el caso, de la garantía otorgada.

"Asimismo, si la sentencia firme le es desfavorable, a petición de la contraparte o, en su caso, del tercero, y previo acreditamiento que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala, ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante el Tribunal.

"**XIV.** Si la solicitud de suspensión de la ejecución es promovida por la Autoridad demandada por haberse concedido en forma indebida."

De una lectura a la transcripción que antecede, se advierte que en el primer párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se establece que el demandante podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución.

Lo anterior **no debe interpretarse, como lo pretende la autoridad recurrente**, en el sentido de que solo se actualiza la procedencia de la suspensión de la ejecución solicitada en juicio, cuando la parte actora acredite la existencia de una **resolución expresa** en la que la autoridad niegue la suspensión que le fue solicitada o rechace la garantía ofrecida, ya que si bien es cierto que la autoridad está obligada a resolver de manera expresa esas promociones, también es verdad que en el supuesto de que no lo haga e inicie el procedimiento administrativo de ejecución respectivo, con ello está implícitamente negando la suspensión solicitada o rechazando la garantía ofrecida.

En este orden de ideas, los argumentos que esgrime la recurrente son infundados, ya que como se señala en la sentencia recurrida y que se corrobora con el escrito presentado el 1° de febrero de 2007, ante el módulo de atención integral al contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, visible a fojas 573 a 574 del expediente en que se actúa, la empresa actora le solicitó a la Administración Local de Recaudación de Puebla Norte, la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, ofreciendo el embargo en la vía administrativa de su negociación, como garantía del interés fiscal respecto de los créditos que le fueron determinados en la resolución contenida en el oficio 3241-SAT-21-II-D-11948 de 17 de octubre de 2006 y que la autoridad controló con los números H-271488, H-271489, H-271490, H-271491, H-271492, H-271493, **H-271494,** H-271495, H-271496, H-271497, H-271498, H-271499, H-271500 y **H-271501**.

No obstante lo anterior, la Administración Local de Recaudación de Puebla Norte, el **13 de febrero de 2007**, practicó embargo coactivo sobre diversos bienes propiedad de la parte actora para hacer efectivos los créditos fiscales **H-271501 y H-271494,** lo que evidentemente implica que la autoridad ejecutora implícitamente negó la suspensión solicitada y no aceptó la garantía que previamente le fue ofrecida por la hoy actora en su escrito ingresado el **1º de febrero de 2007**, pues sin dar respuesta expresa a dicha promoción, inició el procedimiento administrativo de ejecución, por lo que con tal proceder de la autoridad, hace que se actualice el supuesto de procedencia de la suspensión solicitada en juicio regulada por el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Así, es inconcuso que la falta de respuesta expresa a la solicitud de suspensión y/o al ofrecimiento de garantía, no puede llevar a la improcedencia de la medida cautelar en estudio, pues considerar lo contrario, bastaría que la autoridad dejara de contestar las solicitudes que al efecto se le formularan para que no procediera en ningún caso la suspensión solicitada en juicio, motivo por el que la falta de respuesta expresa a esa clase de promociones y el inicio del citado procedimiento de ejecución, debe considerarse una negativa de suspensión y/o rechazo de la garantía previamente planteada y ofrecida ante la autoridad exactora, por lo que contrario a lo sostenido

por la autoridad recurrente, en la especie sí se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Lo anterior se robustece, si se considera que en la fracción III del artículo 28 en cita, se establece que la demandante debe ofrecer "**en su caso**", las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de garantía, a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora y, "**si la hubiere**", la documentación en que conste la **negativa expresa** de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución, con lo que queda evidenciado que, contrario a lo sostenido por la autoridad, el legislador no estableció como exigencia necesaria que la parte actora presente esta última documentación pues la misma puede no existir como acontece en la especie.

Por otra parte, resulta infundado el argumento de la autoridad recurrente, relativo a que es improcedente la suspensión solicitada por la actora respecto a los créditos fiscales **H-271494 y H-271501**, en virtud de que según su dicho, esta última no acredita haber garantizado el interés fiscal correspondiente a estos créditos.

En efecto, es infundado el argumento de agravio que antecede, porque el artículo 28, fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es contundente en establecer que tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, procederá la suspensión y esta surtirá efectos, **si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora** por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, supuesto jurídico que contrario a lo sostenido por la autoridad recurrente, se actualiza en el caso concreto.

Para corroborar lo anterior, es importante tener presente que los artículos 144 y 151, fracciones I y II del Código Fiscal de la Federación, en su parte conducente establecen lo siguiente:

"**Artículo 144.- No se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales.** Tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que venza el plazo de cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación, o de quince días, tratándose de la determinación de cuotas obrero-patronales o de capitales constitutivos al seguro social. Si a más tardar al vencimiento de los citados plazos se acredita la impugnación que se hubiere intentado **y se garantiza el interés fiscal** satisfaciendo los requisitos legales, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución.
"(...)
"**No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal** o cuando el contribuyente declare bajo protesta de decir verdad que son los únicos que posee. En el caso de que la autoridad compruebe por cualquier medio que esta declaración es falsa podrá exigir garantía adicional, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. En todo caso, se observará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 141 de este Código.
"(...)"

"**Artículo 151.-** Las autoridades fiscales, **para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales,** requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato como sigue:
"**I.- A embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos, a favor del fisco.**
"**II**.- A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales."

(El énfasis es nuestro)

Como se advierte, el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación es claro en disponer que no se ejecutarán los actos administrativos cuando se **garantice el**

interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales, precisando que la autoridad no exigirá garantía adicional **si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar dicho interés**.

Por su parte, el artículo 151, fracción I del aludido Código, establece que la autoridad al hacer efectivo un crédito fiscal, requerirá de pago al deudor y en caso de que éste no acredite haberlo efectuado, procederá a **embargar bienes suficientes** de su propiedad para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos a favor del fisco.

En el caso que nos ocupa, a fojas 581, 584 y 590 a 593 del expediente en que se actúa, se encuentran visibles las actas de requerimiento de pago y embargo diligenciadas el 13 de febrero de 2007, documentales que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 46, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por ser documentos públicos exhibidos por la empresa actora, cuya existencia y autenticidad no fue controvertida por la autoridad recurrente al interponer el recurso de reclamación que nos ocupa.

Las actas de requerimiento de pago y embargo de referencia, son del tenor siguiente:

(N. E. Se omiten imágenes por ser ilegibles)

Del análisis integral realizado a las documentales transcritas, se desprende que el 13 de febrero de 2007, el ejecutor adscrito a la Administración Local de Recaudación de Puebla Norte del Servicio de Administración Tributaria dentro del procedimiento administrativo de ejecución y con fundamento en el artículo 151 del Código Fiscal de la Federación, practicó el embargo sobre diversos bienes propiedad de la empresa actora, mismos que se describen a continuación:

- Máquina recuperadora para asfalto, marca CMI, sin número de serie visible, color amarillo, con un rótulo en la parte trasera, con la leyenda "Roto-Mill Pavement Profiler", tres ruedas de metal, en buen estado de conservación aparente; y

- Bien inmueble consistente en despacho 1 del edificio marcado con el número 417, de la Privada Chiapas, esquina con Boulevard 5 de mayo, Colonia "El Carmen", de la ciudad de Puebla, Puebla; con una superficie construida de 206 metros cuadrados; inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Puebla, bajo el número 356, tomo 536, libro número 1.

Asimismo, se advierte que el embargo de referencia se trabó para hacer efectivos los créditos fiscales **H-271494 y H-271501** que le fueron determinados a la empresa actora en la resolución con número de folio 324-SAT-21-II-D-**11948** de 17 de octubre de 2006, por concepto de actualización y recargos.

De acuerdo con lo anterior, es inconcuso que la parte actora acredita con las pruebas documentales ofrecidas, que previamente a su solicitud de suspensión de la ejecución, se constituyó la garantía del interés fiscal relativo a los créditos fiscales **H-271494 y H-271501**, con el embargo que la autoridad exactora practicó a su entera satisfacción el 13 de febrero de 2007, dentro del procedimiento administrativo de ejecución.

Luego entonces, debe concluirse que en el caso concreto se cumple con el requisito previsto en la fracción VI del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al haberse constituido la garantía del interés fiscal con el embargo coactivo trabado por la Administración Local de Recaudación de Puebla Norte, el cual es un medio permitido por el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, pues, como ya se señaló, este dispositivo legal establece que no se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se

hubieran embargado bienes suficientes propiedad del deudor para garantizar el interés fiscal.

Al respecto, es importante enfatizar que el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación no establece limitativamente las formas por las cuales el interés fiscal puede quedar garantizado ante la autoridad exactora, por lo que con el embargo practicado en el procedimiento administrativo de ejecución, en términos de los artículos 144 y 151 del mismo Código, se acredita que el interés fiscal relativo a los créditos **H-271501 y H-271494,** se encuentra garantizado a satisfacción de la propia autoridad ejecutora.

También deben desestimarse los argumentos de agravio expuestos por la autoridad recurrente, encaminados a sostener que el embargo trabado el 13 de febrero de 2007, sobre diversos bienes propiedad de la empresa actora, es insuficiente para garantizar el interés fiscal relativo a los créditos fiscales **H-271494 y H-271501**, porque debe recordarse que fue la propia autoridad ejecutora la que con fundamento en el artículo 151 del Código Fiscal de la Federación, efectuó el embargo de mérito dentro del procedimiento administrativo de ejecución, por lo que si ahora indica que no es suficiente para satisfacer la totalidad de los créditos **H-271494 y H-271501**, así debió acreditarlo, lo que no hizo en la especie, por lo que debe desestimarse la insuficiencia que invoca, máxime si se considera que el artículo 175, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, dispone a la letra lo siguiente:

> "**Artículo 175.-** La base para enajenación de los bienes inmuebles embargados será el de avalúo y para negociaciones, el avalúo pericial, ambos conforme a las reglas que establezca el reglamento de este Código y en los demás casos, la que fijen de común acuerdo la autoridad y el embargado, en un plazo de seis días contados a partir de la fecha en que se hubiera practicado el embargo. A falta de acuerdo, la autoridad practicará avalúo pericial. **En todos los casos, la autoridad notificará personalmente al embargado el avalúo practicado**.
> "(...)"
>
> (El énfasis es de esta Juzgadora)

Como se advierte, el precepto legal transcrito es claro en señalar que la base para enajenación de los bienes inmuebles embargados será el de avalúo y para negociaciones, el avalúo pericial, puntualizando que en todos los casos la autoridad notificará personalmente al embargado el avalúo practicado.

Es el caso que nos ocupa, la autoridad recurrente no acredita que haya efectuado el avalúo de mérito, del que se demuestre que el valor de los bienes embargados a la parte actora es insuficiente para satisfacer el interés fiscal relativo a los créditos **H-271494 y H-271501**, sin que tal obligación le corresponda a la hoy actora, pues quien tiene interés en que la garantía sea suficiente es la propia autoridad.

En tal virtud, se concluye que el embargo coactivo trabado el 13 de febrero de 2007, por la Administración Local de Puebla Norte del Servicio de Administración Tributaria, sobre bienes propiedad de la empresa actora, resulta idóneo para considerar garantizado el interés fiscal relativo a los créditos **H-271501 y H-271494**; y, por ende, para confirmar la suspensión definitiva otorgada por la Segunda Sala Regional de Oriente.

Sin que sea óbice a la determinación anterior, al argumento de la recurrente en el sentido de que la autoridad exactora practicó el embargo coactivo de 13 de febrero de 2007, con el objeto de hacer efectivos los créditos fiscales **H-271494 y H-271501** al haberse tornado exigibles, no así para garantizar el interés fiscal.

El argumento de agravio que antecede es infundado, ya que es cierto que el embargo coactivo es distinto al embargo en la vía administrativa a que se refiere la fracción V, del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, pues cada uno de dichos embargos tienen naturaleza jurídica, características, requisitos y procedimiento de formalización distintos.

En efecto, el embargo en la vía administrativa previsto en la fracción V del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, constituye una de las formas de

garantizar el interés fiscal ante la autoridad ejecutora cuando se presenta alguno de los supuestos del artículo 142 de dicho ordenamiento legal, y por regla general se lleva a cabo cuando existe un crédito fiscal determinado, ya sea por la autoridad o autodeterminado por el propio contribuyente.

Así, el embargo en comento se lleva a cabo por la autoridad a solicitud expresa del contribuyente y se rige por lo dispuesto en los artículos 141 del Código Fiscal de la Federación y 66 de su Reglamento; siendo su finalidad la de garantizar el interés fiscal.

Por su parte, el embargo en vía de ejecución, previsto en el artículo 151 del Código Fiscal de la Federación, se practica por la autoridad exactora una vez que un crédito fiscal previamente determinado se vuelve exigible en términos de lo que indica el artículo 145, primer párrafo del citado ordenamiento legal.

Este embargo se practica como parte del procedimiento administrativo de ejecución, que en uso de las facultades económico-coactivas pueden llevar a cabo las autoridades fiscales, cuya finalidad es la de hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales y su práctica se debe sujetar a las reglas del procedimiento antes referido, en específico a lo dispuesto por los artículos 151 a 163 del Código Fiscal de la Federación.

Las precisiones que anteceden evidencian que el embargo coactivo practicado por la autoridad fiscal sobre diversos bienes propiedad de la demandante, no puede estimarse como un embargo en la vía administrativa, sin embargo, es criterio sustentado por esta Juzgadora, que a pesar de que ambos embargos resultan ser diferentes, tienen el efecto jurídico de suspender la etapa de ejecución de los créditos fiscales, de ahí que el embargo practicado por la autoridad el 13 de febrero de 2007, sí es apto para garantizar el interés fiscal relativo a los créditos **H-271494 y H-271501**.

En apoyo de lo anterior, se invoca la tesis de jurisprudencia **V-J-2aS-32**, sustentada por esta Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consultable en la Revista editada por el propio Tribunal,

Quinta Época, Año VII, número 82, correspondiente al mes de octubre de 2007, página 36, que es del tenor literal siguiente:

"**EMBARGO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN Y EMBARGO EN LA VÍA ADMINISTRATIVA, SON MEDIDAS CAUTELARES CON DIFERENTES CARACTERÍSTICAS PERO IGUALES EN CUANTO A SU EFECTO PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS FISCALES.-** Conforme lo dispuesto por los artículos 65, 145, 151 y 152 del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones que las autoridades determinen deberán pagarse y garantizarse dentro del término de 45 días, siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación y dichas autoridades exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubiesen sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos legales, mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Para asegurar el interés fiscal, la autoridad podrá efectuar el embargo de manera coactiva a través del procedimiento administrativo de ejecución, el que se inicia directamente con el afectado mediante el requerimiento de pago y embargo de bienes del deudor; a través de este procedimiento el fisco se asegura de los adeudos principales y accesorios que los particulares tienen, resultando ser una forma para garantizar el crédito de manera forzosa en contra del destinatario. El embargo en la vía administrativa, lo previene el artículo 141, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, como una forma para garantizar el interés fiscal, lo cual supone que el crédito se ha determinado por la autoridad, pero aún no es exigible, por lo que puede ser garantizado, a propuesta del interesado, entre otros medios, por embargo en la vía administrativa. Por su parte, el primer párrafo del artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, establece que si a más tardar al vencimiento de los plazos, se acredita la impugnación que se hubiere intentado y se garantiza el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales, conforme al artículo 141 citado, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución. Por lo que, si bien el embargo en el citado procedimiento administrativo de ejecución, así como el embargo en la vía adminis-

trativa resultan ser diferentes, ambos tienen el efecto jurídico de suspender la etapa de ejecución de los créditos fiscales. (8)

"(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/11/2007)

"**PRECEDENTES:**

"**V-P-2aS-635**
"Recurso de Reclamación Núm. 4760/06-12-01-1/819/06-S2-09-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de febrero de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
"(Tesis aprobada en sesión de 6 de marzo de 2007)
"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 76. Abril 2007. p. 163

"**V-P-2aS-636**
"Recurso de Reclamación Núm. 6197/06-12-03-6/43/07-S2-10-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas.
"(Tesis aprobada en sesión de 13 de marzo de 2007)
"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 76. Abril 2007. p. 163

"**V-P-2aS-637**
"Recurso de Reclamación No. 4005/06-12-01-6/204/07-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de abril de 2007, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
"(Tesis aprobada en sesión de 12 de abril de 2007)
"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 76. Abril 2007. p. 163

"**V-P-2aS-699**
"Recurso de Reclamación Núm. 1224/06-08-01-9/283/07-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de mayo de 2007, por unanimidad de 4 votos.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Francisco Javier Marín Sarabia.
"(Tesis aprobada en sesión de 8 de mayo de 2007)
"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 77. Mayo 2007. p. 527

"**V-P-2aS-721**
"Recurso de Reclamación Núm. 5558/06-12-01-4/344/07-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de mayo de 2007, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Francisco Javier Marín Sarabia.
"(Tesis aprobada en sesión de 15 de mayo de 2007)
"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 78. Junio 2007. p. 305

"Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el martes dieciocho de septiembre de dos mil siete.- Firman para constancia, el Magistrado Luis Carballo Balvanera, Presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe."

Cabe referir que es cierto como lo manifiesta la autoridad recurrente que, conforme al artículo 4 del Código Fiscal de la Federación, las cantidades legalmente determinadas constituyen créditos fiscales que tiene derecho a percibir el Estado, sin embargo, contrariamente a su dicho, en la especie sí se encuentra garantizado el interés fiscal relativo a los créditos **H-271494 y H-271501**; y por lo tanto, con el

otorgamiento de la suspensión de su ejecución no se ocasiona un daño al patrimonio de la Federación.

En este orden de ideas, es inconcuso que en la especie se cumplen los requisitos que prevé la fracción VI, del artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que se encuentra acreditado en autos que la autoridad exactora practicó embargo coactivo para hacer efectivos los créditos fiscales **H-271494 y H-271501**, por lo que resulta válido que la Sala Regional de origen haya concedido la suspensión de su ejecución, al haberse constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora, por uno de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, específicamente por el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación.

Debe precisarse, que la fracción VI, del artículo 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es bastante clara al establecer que la suspensión concedida respecto de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, lo que evidencia que el dispositivo legal en comento se refiere en forma genérica a los **medios de garantía que permitan las leyes fiscales**, sin referirse limitativamente a las formas de garantía que regula el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, como infundadamente lo pretende la autoridad recurrente.

En tal virtud, se concluye que en los casos como el que nos ocupa, debe aceptarse válidamente que el interés fiscal puede garantizarse ante la autoridad ejecutora, por cualquier medio previsto en las leyes fiscales y no solo mediante alguna de las formas que establece el citado artículo 141.

En apoyo de todo lo expuesto, se invocan las tesis de jurisprudencia **V-J-2aS-33, V-J-2aS-34 y V-J-2aS-35**, sustentadas por esta Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consultables en la

Revista editada por el propio Tribunal, Quinta Época, Año II, número 82, correspondiente al mes de octubre de 2007, páginas 39 y 45, mismas que son del tenor siguiente:

"**SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO IMPUGNADO EN JUICIO.- PROCEDE CONCEDERLA CUANDO EXISTE CONSTANCIA DE QUE EL CRÉDITO FISCAL ESTÁ GARANTIZADO MEDIANTE EL EMBARGO EJERCIDO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.-** De una interpretación armónica a lo dispuesto por los artículos 65, 144, 145, 151 y 152 del Código Fiscal de la Federación, se desprende que las contribuciones que las autoridades determinen deberán pagarse o garantizarse dentro del término de cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación; que una vez vencido, sin la realización de cualquiera de dichos actos, el crédito fiscal se convierte en exigible y la autoridad tiene expedito el procedimiento administrativo de ejecución para hacerlo efectivo, el cual se inicia con el requerimiento de pago, seguido en su caso del embargo de bienes suficientes del deudor. De ello se sigue que si el promovente en el juicio contencioso administrativo solicita ante este Tribunal la suspensión de la ejecución, acreditando la existencia del embargo realizado por la autoridad en el citado procedimiento administrativo de ejecución, procederá concederla sin mayores requisitos, con fundamento en el artículo 28, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"**PRECEDENTES:**

"**V-P-2aS-599**

"Recurso de Reclamación Núm. 4760/06-12-01-1/819/06-S2-09-05.- Actor: GASOIL, S.A. DE C.V.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de febrero

de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
"(Tesis aprobada en sesión de 15 de febrero de 2007)
"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 75. Marzo 2007. p. 125

"**V-P-2aS-662**
"Recurso de Reclamación Núm. 4005/06-12-01-6/204/07-S2-08-05.- Actor: COPIFAX DE PUEBLA, S.A. DE C.V.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de abril de 2007, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
"(Tesis aprobada en sesión de 12 de abril de 2007)
"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 76. Abril 2007. p. 391

"**V-P-2aS-714**
"Recurso de Reclamación Núm. 9812/06-11-02-1/300/07-S2-09-05.- Actor: TODO EN LÁCTEOS, S.A. DE C.V.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de mayo de 2007, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
"(Tesis aprobada en sesión de 3 de mayo de 2007)
"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 78. Junio 2007. p. 254

"**V-P-2aS-713**
"Recurso de Reclamación Núm. 5475/06-11-01-3/439/07/S2-06-05.- Actor: ECOLOGÍA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 5 de junio de 2007, por unanimidad de 5 votos a favor.-

Magistrado Ponente: Francisco Cuevas Godínez.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez.
(Tesis aprobada en sesión de 5 de junio de 2007)
"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 78. Junio 2007. p. 253
"Fe de Erratas R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 79. Julio 2007. p. 485

"**V-P-2aS-742**
"Recurso de Reclamación Núm. 9572/06-11-02-3/413/07-S2-09-05.- Actor: LABORATORIOS BIOCOSMÉTICA, S.A. DE C.V.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 5 de junio de 2007, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 5 de junio de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 79. Julio 2007. p. 177"

"**SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- PROCEDE OTORGARLA CUANDO SE GARANTIZA A TRAVÉS DEL EMBARGO PRACTICADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.-** El artículo 28, fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que el demandante podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución cumpliendo los requisitos que ahí se establecen, y la referida fracción establece que tratándose de la solicitud de la suspensión de la ejecución, en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, procederá la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Por su parte, el artículo 144, séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación establece que no se exigirá garantía adicional si en el procedimiento adminis-

trativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal. Por lo que, si un particular en un juicio contencioso administrativo solicita ante la Sala respectiva la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, señalando que se encuentra garantizado el interés fiscal a través del embargo coactivo practicado por la autoridad en el citado procedimiento de ejecución, que además constituye una de las resoluciones impugnadas en el juicio, sin que la autoridad acredite que los bienes trabados en el embargo sean insuficientes, es evidente que procede otorgar la suspensión aludida, pues se acredita que el interés fiscal está garantizado a través del embargo practicado por la autoridad.

"**PRECEDENTES:**

"**V-P-2aS-640**
"Recurso de Reclamación Núm. 4760/06-12-01-1/819/06-S2-09-05.- Actor: GASOIL, S.A. DE C.V.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de febrero de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
"(Tesis aprobada en sesión de 6 de marzo de 2007)
"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 76. Abril 2007. p. 166

"**V-P-2aS-641**
"Recurso de Reclamación Núm. 6197/06-12-03-6/43/07-S2-10-05.- Actor: GABRIELA ZARATE APARICIO.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas.
"(Tesis aprobada en sesión de 13 de marzo de 2007)
"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 76. Abril 2007. p. 166

"**V-P-2aS-642**
"Recurso de Reclamación No. 4005/06-12-01-6/204/07-S2-08-05.- Actor: COPIFAX DE PUEBLA, S.A. DE C.V.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de abril de 2007, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
"(Tesis aprobada en sesión de 12 de abril de 2007)
"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 76. Abril 2007. p. 166

"**V-P-2aS-712**
"Recurso de Reclamación Núm. 9812/06-11-02-1/300/07-S2-09-05.- Actor: TODO EN LÁCTEOS, S.A. DE C.V.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de mayo de 2007, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
"(Tesis aprobada en sesión de 3 de mayo de 2007)
"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 78. Junio 2007. p. 251

"**V-P-2aS-749**
"Recurso de Reclamación Núm. 3838/06-11-01-8/411/07-S2-07-05.- Actor: SUPER SERVICIO LAS ÁGUILAS, S.A. DE C.V.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de junio de 2007, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
"(Tesis aprobada en sesión de 12 de junio de 2007).
"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 79. Julio 2007. p. 267."

"**EMBARGO PRACTICADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.- LA PRUEBA DE QUE LA GARANTÍA NO ES SUFICIENTE CORRESPONDE A LA AUTORIDAD.-** El artí-

culo 175, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, dispone que la base para enajenación de los bienes inmuebles embargados será el de avalúo y para negociaciones, el avalúo pericial, ambos conforme a las reglas que establezca el Reglamento de este Código y en la que fijen de común acuerdo la autoridad y el embargado, en un plazo de seis días contados a partir de la fecha en que se hubiera practicado el embargo. A falta de acuerdo, la autoridad practicará el avalúo pericial. En todos los casos, la autoridad notificará personalmente al embargado el avalúo practicado. De tal manera que, cuando la autoridad en el procedimiento administrativo de ejecución embarga bienes del particular, es evidente que tiene conocimiento del valor de estos bienes a través del avalúo que practica. Por su parte, el séptimo párrafo del artículo 144 del citado Código precisa que no se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal. Por lo que, si la autoridad al verificar el valor de los bienes embargados no exige garantía adicional, es evidente que considera que, con tales bienes, ya se encuentra debidamente garantizado dicho interés fiscal, por lo tanto, en un juicio, si la autoridad considera que el embargo practicado en el procedimiento administrativo de ejecución no es garantía suficiente para garantizar el interés fiscal y que por ello no se debe otorgar la suspensión, deberá acreditar que el valor de los bienes embargados en dicho procedimiento no es suficiente y que por ello se requiere la exigencia de una garantía adicional.

“**PRECEDENTES:**

“**V-P-2aS-638**

“Recurso de Reclamación Núm. 4760/06-12-01-1/819/06-S2-09-05.- Actor: GASOIL, S.A. DE C.V.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de febrero

de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
"(Tesis aprobada en sesión de 6 de marzo de 2007).
"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 76. Abril 2007. p. 165

"**V-P-2aS-639**
"Recurso de Reclamación Núm. 6197/06-12-03-6/43/07-S2-10-05.- Actor: GABRIELA ZARATE APARICIO.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas.
"(Tesis aprobada en sesión de 13 de marzo de 2007)
"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 76. Abril 2007. p. 165

"**V-P-2aS-711**
"Recurso de Reclamación Núm. 9812/06-11-02-1/300/07-S2-09-05.- Actor: TODO EN LÁCTEOS, S.A. DE C.V.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de mayo de 2007, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
"(Tesis aprobada en sesión de 3 de mayo de 2007)
"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 78. Junio 2007. p. 250

"**V-P-2aS-747**
"Recurso de Reclamación Núm. 3838/06-11-01-8/411/07-S2-07-05.- Actor: SUPER SERVICIO LAS ÁGUILAS, S.A. DE C.V.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de junio de 2007, por mayoría de 4 votos a favor y 1

voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
"(Tesis aprobada en sesión de 12 de junio de 2007)
"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 79. Julio 2007. p. 265"

"**V-P-2aS-748**
"Recurso de Reclamación Núm. 19283/06-17-02-1/421/07-S2-07-05.- Actor: ANUNCIOS Y MONTAJES LAGUNA, S.A. DE C.V.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de junio de 2007, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
"(Tesis aprobada en sesión de 12 de junio de 2007)
"R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 79. Julio 2007. p. 265"

También sirve de apoyo la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, correspondiente al mes de septiembre de 1991, página 203, que es del tenor siguiente:

"**SUSPENSIÓN EN MATERIA FISCAL. EMBARGO PRACTICADO COACTIVAMENTE POR LAS RESPONSABLES. ES GARANTÍA SUFICIENTE PARA QUE SURTA EFECTOS LA MEDIDA, QUEDANDO EN TODO CASO A CARGO DE LAS AUTORIDADES LA PRUEBA DE LO CONTRARIO.-** El embargo, por excelencia, es un medio de aseguramiento del interés fiscal, que tienen a su disposición las autoridades, pudiendo realizarlo de manera coactiva. En efecto, la esencia de estas diligencias de embargo se reduce en principio a asegurar los adeudos tanto principales como accesorios, que los particulares tuvieran respecto del fisco, resultando una forma de garantía inclusive coactiva, pues la autoridad puede practicarla aun en contra de la voluntad del destinatario. Así, si no es punto controvertido la práctica de un embargo por las responsables sobre bienes de la quejo-

sa, toda vez que desde la demanda de garantías así se afirmó, documento con el que se les corrió traslado a todas las autoridades que en ningún momento negaron o controvirtieron la existencia del aludido acto de aseguramiento, **en los términos descritos el juez a quo actuó correctamente al considerar que el interés fiscal se encontraba garantizado ante la autoridad exactora, pues fue esta quien coactivamente y a su satisfacción practicó la citada diligencia sobre los bienes de la agraviada, y si estimaba que la garantía resultaba insuficiente, debió hacerlo saber al juez de primera instancia, acreditando su dicho, para que el funcionario judicial estuviera en aptitud de exigir garantía a la quejosa de aquella parte del crédito y sus accesorios que no se consideraba asegurada, pues quien afirma debe probar, y resulta incorrecto que la revisionista pretenda revertir la carga de la prueba de la suficiencia o insuficiencia de la garantía del interés fiscal en la demanda de amparo, especialmente en estos casos en los cuales ya se ha practicado embargo por las autoridades en los bienes de la quejosa**.

"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

"Incidente en revisión 1593/91. Grupo Gráfica Nacional, S.A. de C.V. 19 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jesús García Vilchis."

(El énfasis es de esta Juzgadora)

Igualmente, debe desestimarse por infundado el argumento de la autoridad recurrente relativo a que los bienes embargados coactivamente el 13 de febrero de 2007 no cumplen con los requisitos previstos en los artículos 141 del Código Fiscal de la Federación y 62 de su Reglamento.

Lo anterior es así, porque se reitera, el embargo practicado el 13 de febrero de 2007, dentro del procedimiento administrativo de ejecución, constituye otra forma de garantizar el interés fiscal distinta de las previstas en el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación; por lo que su existencia es suficiente para garantizar el monto de los créditos fiscales **H-271501 y H-271494**, sin que haya sido necesario que para ello se cumplieran con las exigencias previstas en el citado artículo 141 y 66 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, ya que tales exigencias son aplicables al embargo en la vía administrativa, no así al embargo coactivo practicado dentro del aludido procedimiento de ejecución.

También deben desestimarse los argumentos de agravio de la autoridad recurrente, encaminados a pretender que esta Juzgadora aplique por analogía o equiparación lo establecido en el artículo 135 de la Ley de Amparo, ya que los requisitos de procedencia y eficacia de la suspensión del acto reclamado en el juicio contencioso administrativo, se encuentran contemplados en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no así en el citado artículo 135, mismo que es aplicable únicamente dentro del **juicio de garantías**.

Por último, es importante señalar que la autoridad recurrente no ofreció ni exhibió elemento de prueba alguno con el que demostrara que los créditos fiscales H-271501 y H-271494 son de tal magnitud que de no ser recaudados con motivo de la concesión de la medida cautelar, se afectaría la marcha normal de la Administración Pública Federal, o bien, la realización de obras públicas en beneficio de la sociedad, por lo que deben desestimarse los argumentos que manifestó a este respecto, pues no existe razón para negar la suspensión solicitada, al haberse asegurado el interés fiscal relativo a los aludidos créditos como lo exige el artículo 28, fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis de **jurisprudencia I.7o.A. J/27,** sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

Novena Época, Tomo XXII, correspondiente al mes de julio de 2005, página 1299, que es del tenor literal siguiente:

"**SUSPENSIÓN. DEBE SER CONCEDIDA POR REGLA GENERAL CONTRA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES.-** Para que se considere que la concesión de la medida cautelar afecta el interés social en contravención de lo previsto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo no basta con que la autoridad responsable demuestre que el requerimiento de pago de impuestos formulado a un contribuyente deriva de la aplicación de una ley de orden público, pues estrictamente hablando de la observancia de cualquier disposición jurídica constituye una cuestión de orden público. La autoridad debe acreditar adicionalmente que con el otorgamiento de la medida cautelar efectivamente se ocasionarían perjuicios capaces de afectar la organización y funcionamiento de la funciones prestadas por el Estado. En esa tesitura, si no fueron aportados elementos que demuestren que el crédito fiscal exigido es de tal magnitud que de no ser pagado con motivo de la concesión de la medida cautelar se afectaría como consecuencia la marcha normal de las funciones públicas, no existe razón en principio para negar el otorgamiento de la misma. La conclusión anterior se robustece por la sola existencia del artículo 135 de la Ley de Amparo, en virtud de que dicho dispositivo regula la manera de establecer la garantía suspensional precisamente en los casos de cobro de contribuciones. Por tanto, con la salvedad apuntada, debe concluirse que por regla general debe ser concedida la suspensión cuando el quejoso reclama en el juicio constitucional el cobro de contribuciones.

"SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

"Incidente de suspensión (revisión) 1147/2002. Automotores Soni, S.A. de C.V. 15 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José Alberto Tamayo Valenzuela.

"Incidente de suspensión (revisión) 70/2005. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 31 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.

"Incidente de suspensión (revisión) 77/2005. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 31 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.

"Incidente de suspensión (revisión) 79/2005. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 31 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.

"Incidente de suspensión (revisión) 176/2005. Odesa, S.A. de C.V. 18 de mayo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez Salazar. Secretaria: Alma Abigaíl León Aranda."

Por último, es importante señalar que la Sala Regional de origen en la sentencia recurrida consideró que con los formularios múltiples de pago aportados como prueba por la promovente, se acredita el pago de los créditos fiscales H-271491, H-271492, y H-271496, por lo que resolvió que respecto de estos también resultaba procedente conceder la suspensión definitiva de su ejecución, al encontrarse garantizado el interés fiscal con el depósito en dinero de los mismos.

La determinación que antecede no fue controvertida por la autoridad demandada en el recurso de reclamación que nos ocupa, por lo que esta Juzgadora considera que al encontrarse intocada tal determinación, debe seguir rigiendo el sentido y legalidad de la resolución recurrida, de tal suerte que la suspensión decretada respecto a los créditos fiscales H-271491, H-271492, y H-271496, debe continuar surtiendo plenos efectos jurídicos.

Cabe referir, que las constancias que obran en autos no demuestran que la parte actora haya controvertido la negativa de suspensión de la ejecución por lo que

hace al crédito fiscal H-271490, por lo que esta Juzgadora considera que también esta determinación de la Segunda Sala Regional de Oriente, debe considerarse intocada y, por lo tanto, seguir surtiendo plenos efectos legales.

Toda vez que han resultado ineficaces los argumentos de agravio expuestos en el recurso de reclamación que nos ocupa, resulta procedente confirmar la sentencia interlocutoria recurrida de 6 de agosto de 2007.

En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 23, fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007 y en vigor a partir del día siguiente de su publicación; 28, fracción VI y 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:

I. Es procedente pero infundado el recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada, en consecuencia;

II. Se confirma la sentencia interlocutoria recurrida de 6 de agosto de 2007, a través de la cual, la Segunda Sala Regional de Oriente concedió la suspensión de la ejecución de los créditos fiscales **H-271491, H-271492, H-271494, H-271496 y H-271501**, que le fueron determinados a la parte actora en la resolución impugnada; y negó dicha medida cautelar por lo que hace al crédito fiscal H-271490;

III. Agréguese al expediente del recurso de reclamación el presente fallo y mediante oficio que se gire a la Segunda Sala Regional de Oriente, remítase copia certificada del mismo para que sea agregado a la carpeta de suspensión correspondiente.

IV. NOTIFÍQUESE. Con copia autorizada del presente fallo a las partes y una vez que haya quedado firme, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del once de marzo de dos mil ocho, por unanimidad de cinco votos a favor de los Magistrados Guillermo Domínguez Belloc, Silvia Eugenia Díaz Vega, Luis Malpica y de Lamadrid, Luis Carballo Balvanera y Olga Hernández Espíndola.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Luis Carballo Balvanera, cuya ponencia se aprobó.

Se elaboró el presente engrose el día uno de abril de dos mil ocho y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma la Magistrada Olga Hernández Espíndola, Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Lic. Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-P-2aS-52

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 1º, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PERMITE AL DEMANDANTE ESGRIMIR CONCEPTOS DE ANULACIÓN NOVEDOSOS O REITERATIVOS REFERIDOS A LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, LOS CUALES DEBERÁN SER ESTUDIADOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 1º, segundo párrafo, y 50, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de diciembre del 2005, en vigor a partir del 1º de enero del 2006, en el juicio contencioso administrativo se atiende a un principio de "litis abierta", conforme al cual, en la sentencia que dicte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuando se impugne la resolución recaída a un recurso administrativo, se deben resolver, no sólo los agravios encaminados a controvertir la legalidad de la resolución impugnada, sino que además se deberán resolver los que controviertan la recurrida, debiéndose analizar los nuevos argumentos planteados, que pueden incluir los razonamientos que se refieran a la resolución recurrida, y los dirigidos a impugnar la nueva resolución; así como aquellas razones o motivos que reproduzcan agravios esgrimidos en el recurso administrativo en contra de la resolución originaria. Por tanto, todos estos argumentos, ya sean novedosos o reiterativos de la instancia administrativa, constituyen los conceptos de anulación propios de la demanda fiscal, lo cual implica que con ellos se combaten tanto la resolución impugnada como la recurrida en la parte que afecte el interés jurídico del actor, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está obligado a estudiarlos. (18)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1759/07-07-03-9/170/08-S2-08-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1 de abril de 2008, por unanimidad de 5 votos.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 1 de abril de 2008)

PRECEDENTES:

V-P-2aS-622
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2096/06-06-02-6/865/06-S2-08-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1° de marzo de 2007, por unanimidad de 4 votos.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretario: Lic. Francisco Javier Marín Sarabia.
(Tesis aprobada en sesión de 1° de marzo de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 75. Marzo 2007. p. 254

V-P-2aS-769
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 172/06-18-01-8/82/07-S2-06-03[09].- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de julio de 2007, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Salvador Jesús Mena Castañeda.
(Tesis aprobada en sesión de 3 de julio de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 81. Septiembre 2007. p. 65

V-P-2aS-818
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5739/06-06-02-4/484/07-S2-08-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de diciembre de 2007, por unanimidad de 5 votos a

favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 4 de diciembre de 2007)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 84. Diciembre 2007. p. 143

VI-P-2aS-2
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 930/07-14-01-2/1319/07-S2-08-05.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 24 de enero de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Olga Hernández Espíndola.- Secretaria: Lic. Claudia Lucía Cervera Valeé.
(Tesis aprobada en sesión de 24 de enero de 2008)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 2. Febrero 2008. p. 186

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

VI-P-2aS-53

JEFE DE SECCIÓN. SÓLO PUEDE SUPLIR AL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA EN LA SECCIÓN ADUANERA CORRESPONDIENTE.- El artículo 8º, quinto párrafo del Reglamento del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2005 y reformado mediante Decretos publicados en el mismo órgano de difusión oficial el 12 de mayo y 28 de noviembre de 2006, dispone que los Administradores de las Aduanas y los Subadministradores de las mismas, serán suplidos indistintamente por los Jefes de Departamento adscritos a ellas; y que en las salas de atención a pasajeros y en las secciones aduaneras, serán suplidos por los Jefes de las Salas y los Jefes de Sección, respectivamente. Ahora bien, si se considera que la suplencia administrativa obedece a la necesidad de que las funciones de los órganos gubernamentales no se vean afectadas por la ausencia o impedimento temporal del funcionario a quien la ley le otorga la facultad; resulta válido concluir, que la disposición reglamentaria en comento debe interpretarse en el sentido de que tratándose de un área distinta a las salas de atención a pasajeros y secciones aduaneras, la suplencia del Administrador de la Aduana recae única y exclusivamente en los Jefes de Departamento, no pudiendo actuar válidamente en dicha área y en suplencia del Administrador, el Jefe de Sección, pues amén de que no puede haber dos o más titulares actuando al mismo tiempo, la actuación de este último se circunscribe a la sección aduanera correspondiente, de tal suerte que la facultad que se le otorga para sustituir al Administrador, está sujeta a que se ejerza en la sección aduanera y no en un lugar distinto a esta. (19)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1290/07-03-01-5/133/08-S2-09-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de abril de 2008, por unanimidad de 5 votos a favor.-

Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretario: Lic. Oscar Elizarrarás Dorantes.
(Tesis aprobada en sesión de 10 de abril de 2008)

C O N S I D E R A N D O :

(...)

CUARTO.- ESTUDIO OFICIOSO DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE EXPIDIÓ LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ORIGEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Esta Juzgadora procede al estudio oficioso de la competencia de la autoridad que expidió la orden de visita origen de la resolución impugnada, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es del tenor siguiente:

> "**Artículo 51.-** Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:
> "(...)
> "El Tribunal podrá **hacer valer de oficio**, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada o **para ordenar** o tramitar **el procedimiento del que derive** y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución.
> "(...)"
>
> (El énfasis es de esta Juzgadora)

Como se advierte, el precepto legal transcrito autoriza a este Tribunal para hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada; o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive esta, por lo que en ejercicio de dicha facultad, se procede a estudiar la compe-

tencia de la autoridad que expidió la orden de visita contenida en el oficio 326-SAT-25-874-VII-357 de 20 de diciembre de 2006, misma que constituye el origen de la resolución impugnada.

Cabe referir, que la decisión de esta Juzgadora de analizar de oficio la competencia de la autoridad que expidió la orden de visita domiciliaria origen de la resolución impugnada, también encuentra apoyo en las tesis de **jurisprudencia que a continuación se transcriben,** mismas que son de aplicación obligatoria para este Órgano Jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo.

"Registro No. 170827
"Localización:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXVI, Diciembre de 2007
"Página: 154
"**Tesis: 2a./J. 218/2007**
"Jurisprudencia
"Materia(s): Administrativa

"**COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- El artículo 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación** y su correlativo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que ese Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada. Al respecto debe decirse que ese estudio implica todo lo relacionado con la competencia de la autoridad, supuesto en el

cual se **incluye tanto la ausencia de fundamentación de la competencia**, **como la indebida o insuficiente fundamentación de la misma,** en virtud de que al tratarse de una facultad oficiosa, las Salas fiscales de cualquier modo entrarán al examen de las facultades de la autoridad para emitir el acto de molestia; lo anterior con independencia de que exista o no agravio del afectado, o bien, de que invoque incompetencia o simplemente argumente una indebida, insuficiente o deficiente fundamentación de la competencia. Cabe agregar que en el caso de que las Salas fiscales estimen que la autoridad administrativa es incompetente, **su pronunciamiento en ese sentido será indispensable, porque ello constituirá causa de nulidad de la resolución impugnada**; sin embargo, si considera que la autoridad es competente, esto no quiere decir que dicha autoridad jurisdiccional necesariamente deba pronunciarse al respecto en los fallos que emita, pues el no pronunciamiento expreso, simplemente es indicativo de que estimó que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad.

"Contradicción de tesis 148/2007-SS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2007. Cinco votos; el Ministro Genaro David Góngora Pimentel votó con salvedades. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez.

"Tesis de jurisprudencia 218/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de noviembre de dos mil siete."

"Registro No. 170835
"Localización:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXVI, Diciembre de 2007
"Página: 151
"**Tesis: 2a./J. 219/2007**
"Jurisprudencia
"Materia(s): Administrativa

"**COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ESTUDIO CONFORME AL ARTÍCULO 238, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, COINCIDENTE CON EL MISMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL JUICIO DE NULIDAD Y EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO.**- Conforme a los citados preceptos, en el juicio contencioso administrativo las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrán analizar la competencia de la autoridad en los siguientes casos: 1) cuando el actor plantee en los conceptos de anulación de su demanda argumentos por los que considere que la autoridad carece de competencia para emitir el acto impugnado; y, 2) cuando la Sala advierta oficiosamente de las constancias de autos que la autoridad emisora del acto impugnado es incompetente. En el primer supuesto, la Sala analizará el problema planteado y si estima fundado el concepto de anulación procederá a declarar la nulidad del acto impugnado. Respecto del segundo punto, la Sala realizará el estudio oficioso de la competencia de la autoridad, porque a ello la obligan los artículos citados en el rubro. Si la Sala estima oficiosamente que la autoridad administrativa es incompetente, su pronunciamiento en ese sentido será indispensable, porque ello constituirá la causa de nulidad de la resolución impugnada. Si considera que la autoridad es competente, no existe obligación de pronunciamiento expreso, pues la falta de éste indica que la Sala estimó que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad; tan es así, que continuó con el análisis de procedencia del juicio y en su caso, entró al estudio de fondo de la cuestión

planteada. La decisión del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que establezca la nulidad de la resolución por incompetencia de la autoridad será lisa y llana. En el juicio de amparo directo el Tribunal Colegiado de Circuito sólo estará obligado al análisis del concepto de violación aducido respecto de la incompetencia de la autoridad demandada en el juicio de nulidad o de la omisión de su estudio, cuando este argumento haya sido aducido como concepto de nulidad en el juicio contencioso administrativo; o bien, haya sido motivo de pronunciamiento oficioso por parte de la Sala correspondiente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues de lo contrario el estudio del concepto de violación será inoperante, toda vez que el quejoso no puede obtener en el juicio de amparo un pronunciamiento respecto de un argumento que no formó parte de la litis en el juicio de nulidad, bien porque no lo hizo valer o porque la autoridad responsable al estimar que la demandada es competente, no formuló pronunciamiento al respecto.

"Contradicción de tesis 4/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Primero, ambos en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 10 de octubre de 2007. Cinco votos; el Ministro Genaro David Góngora Pimentel votó con salvedades. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Ma. de la Luz Pineda Pineda.

"Tesis de jurisprudencia 219/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de noviembre de dos mil siete."

"Registro No. 179528
"Localización:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXI, Enero de 2005
"Página: 543
"**Tesis: 2a./J. 201/2004**

"Jurisprudencia
"Materia(s): Administrativa

"**NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁN FACULTADAS PARA ANALIZAR DE OFICIO NO SÓLO LA INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, SINO TAMBIÉN LA DE QUIEN ORDENÓ O TRAMITÓ EL PROCEDIMIENTO DEL CUAL DERIVÓ ÉSTA.-** De la interpretación armónica y relacionada del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, se concluye que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa están facultadas para analizar oficiosamente la incompetencia tanto de la autoridad que emitió la resolución impugnada en juicio, **como de la que ordenó o tramitó el procedimiento relativo del cual deriva aquélla**. Ello es así, porque la competencia de las autoridades es una cuestión de orden público, como lo establece el penúltimo párrafo del referido precepto, por lo cual no sería factible que de una interpretación estricta y literal se sostuviera que los mencionados órganos sólo están facultados para analizar de oficio la incompetencia de la autoridad emisora de la resolución impugnada, pues en el supuesto de carecer de competencia legal el funcionario que ordenó o tramitó el procedimiento relativo del cual derivó la resolución definitiva, ésta estaría afectada desde su origen y, por ende, sería ilegal, al incidir el vicio de incompetencia directamente en la resolución emanada de un procedimiento seguido por autoridad incompetente. Esto es, admitir una postura contraria y sostener que las mencionadas Salas sólo están facultadas para analizar oficiosamente la incompetencia de la autoridad emisora, propiciaría la subsistencia de resoluciones que derivan de un procedimiento viciado en virtud de haberlo iniciado o instruido una autoridad sin competencia legal.

"Contradicción de tesis 184/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Tercer

Circuito. 1o. de diciembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Marcia Nava Aguilar.

"Tesis de jurisprudencia 201/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de diciembre de dos mil cuatro."

Precisado lo anterior, esta Juzgadora considera que en el caso concreto la **orden de visita domiciliaria contenida en el oficio 326-SAT-25-874-VII-357 de 20 de diciembre de 2006,** origen de la resolución impugnada, fue expedida por una autoridad incompetente, por los siguientes motivos:

De conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, todos los actos administrativos que deban notificarse deben ser expedidos por autoridad competente y estar debidamente fundados y motivados; exigencias que constituyen un reflejo de la garantía individual de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, conforme a la cual, las autoridades solo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos que la misma determina.

Cabe referir, que la competencia del órgano como conjunto de facultades establecidas en disposiciones generales para realizar la actividad del Estado, se encuentra íntimamente ligada a la garantía de fundamentación y motivación, que reviste dos aspectos: el formal que exige a la autoridad la invocación de los preceptos en que funde su competencia al emitir el acto y el material que exige que los hechos encuadren en las hipótesis previstas en las normas.

En este sentido, como la competencia de la autoridad es un requisito esencial para la validez jurídica del acto, si éste es emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis previstas en las normas que fundaron su decisión, es claro que no puede producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos individuos contra quienes se dicte, quedando la situación como si el acto nunca hubiera existido.

Sobre este tema de la competencia, es criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis de **jurisprudencia P./J. 10/94**, que de la interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que todo acto de molestia debe ser emitido por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado, **expresándose como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación**, ya que de lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, pues al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emite, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo.

La jurisprudencia en comento, se encuentra visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo LXXVII, correspondiente al mes de mayo de 1994, página 12 y es del tenor siguiente:

> "**COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.-** Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, **como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión**, **ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo**,

y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria.

"Contradicción de tesis 29/90. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tribunal (en la actualidad Primero) Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 17 de junio de 1992. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Jorge D. Guzmán González."

(El énfasis es nuestro)

Cabe señalar, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al realizar un análisis de la jurisprudencia transcrita con antelación, puntualizó que la garantía de la debida fundamentación lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, por lo que concluyó que para estimar satisfecha esa garantía de fundamentación, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia, es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se **precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos**, **en que apoya su actuación**; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, ya que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de **materia, grado y territorio** y, por ende, si está o no ajustado a derecho.

El criterio anterior, se encuentra contenido en la **jurisprudencia 2a./J. 57/2001**, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,

Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre de 2001, página 31, que es del tenor siguiente:

"**COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.-** De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J.10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, de rubro: 'COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.' así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se desprende que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial

respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica.

"Contradicción de tesis 94/2000-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito. 26 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia."

Por último, es importante destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia **2a./J. 115/2005,** reiteró su criterio consistente en que para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de **materia, grado o territorio**, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida; y puntualizó, que en caso de que el ordenamiento legal no contenga apartados, fracciones, incisos o subincisos, si se trata de una **norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente**, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden a la autoridad.

La citada tesis de jurisprudencia **2a./J. 115/2005**, se encuentra visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, correspondiente al mes de septiembre de 2005, página 310, cuyo texto y rubro es el siguiente:

"**COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MO-**

LESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.- De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J.10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: 'COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.', así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, **si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente,**

con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si **tiene competencia por grado, materia y territorio** para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la **específicamente aplicable a la actuación** del órgano del que emana, por razón de materia, grado y **territorio**.

"Contradicción de tesis 114/2005-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 2 de septiembre de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro."

(El énfasis es nuestro)

En el caso que nos ocupa, a fojas 10 a 37 del expediente principal en que se actúa, se encuentra visible la **liquidación impugnada** contenida en el oficio 326-SAT-25-874-IV-859 de 13 de marzo de 2007, misma que fue transcrita por esta Juzgadora en el considerando tercero del presente fallo y de cuya lectura se advierte que, a través de ella, el Administrador de la Aduana de Mazatlán del Servicio de Administración Tributaria, le determinó al actor un crédito fiscal en cantidad total de $19,427.00, por concepto de impuesto general de importación; impuesto al valor agregado, cuotas compensatorias, derecho de trámite aduanero; actualización, multas y recargos.

Asimismo, se advierte que la liquidación impugnada tiene su origen en la visita domiciliaria que le fue practicada al actor al amparo de la **orden de visita contenida en el oficio 326-SAT-25-874-IV-859 de 13 de marzo de 2007**, documental a la

que esta Juzgadora le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 46, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; en relación con los diversos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por ser un documento público exhibido por el actor como prueba de su parte y plenamente reconocido por el representante de la autoridad demandada al formular su contestación a la demanda.

La orden de visita domiciliaria de referencia es del tenor literal siguiente:

"**Servicio de Administración Tributaria**
"**Administración General de Aduanas**
"**Aduana de Mazatlán**
"**326-SAT-25-874-VII-357**
"**Núm. Orden: VM-18306014**

"2006, Año del bicentenario del Natalicio del
Benemérito de las Américas Don Benito Juárez García.

"Los Mochis, Sinaloa 20 de diciembre de 2006.

"GIL PERAZA FRANCISCO JAVIER Y/O REPRESENTANTE LEGAL
"R.F.C. GIPF971210HX4
"ZARAGOZA 302 SUR, INT. LA,
"COL. CENTRO C.P. 81200,
"LOS MOCHIS, SINALOA.

"Esta Aduana de Mazatlán, con sede en Mazatlán, Sinaloa, de la Administración General de Aduanas, del Servicio de Administración Tributaria, emite la presente orden de visita domiciliaria que se practicará al contribuyente citado al rubro en el domicilio señalado, con fundamento en las disposiciones que se señalan a continuación:

"**Fundamentación**

"Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 26, 31 fracciones XI, XII, y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1°, 2°, 7°, fracciones VII, XIII y XVIII de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto, publicado en el propio Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2003; 33, último párrafo, 38, 42 fracciones II, III, V y VI, 43, 44, 45, 46 y 46-A del Código Fiscal de la Federación; 1°, 18, 36, 51, 52, 53, 56, 59, 60, 64, 79, 80, 83, 90, 91, 144 fracciones II, III, IX, X, XIV, XV, XVI y XXX, 146, 151 y 155, de la Ley Aduanera; 1° y 2° de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación; 1° fracción IV, 24, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 1° de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, 1° de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 49 y 50 de la Ley Federal de Derechos.

"Artículos 1°, 2°, primer y segundo párrafos, de las Unidades Administrativas Regionales, 9 último párrafo; 10, antepenúltimo y último párrafo del listado, 12, fracción II y último párrafo, en relación con el artículo 10, fracciones IX, XII, XIII, XVI, XXII, XXIII, XXXIV, XLIV, XLVIII, y párrafo siguiente a la fracción XC y 37, primer párrafo, apartado C, fracción XXXI del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2005 y reformado mediante Decretos publicados en el mismo órgano oficial de difusión el 12 de mayo de 2006 y 28 de Noviembre de 2006, y Artículos Tercero, Segundo Párrafo, Fracción XXXI y Cuarto, del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de noviembre de 2005 y modificado mediante Acuerdo publicado en el mismo órgano oficial el 24 de mayo de 2006.

"**Objeto o Propósito y Periodo**

"El objeto o propósito de la visita domiciliaria consiste en comprobar la legal importación, tenencia o estancia de las mercancías de procedencia extranjera en el país que se encuentren en el domicilio que se señala para la práctica de la presente visita, así como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras en materia de impuestos al comercio exterior, impuesto al valor agregado y, en su caso, derechos y aprovechamientos, inclusive cuotas compensatorias, restricciones y regulaciones no arancelarias y normas oficiales mexicanas que correspondan al periodo comprendido del 1° de enero de 2006 al 08 de diciembre 2006.

"**Visitadores**

"Para la práctica de la misma se designa y autoriza a los CC. Francisco Javier Álvarez Díaz, Ernesto Peinado Nieto, Laura del Carmen Camacho Carrillo, Eusebio Román Rosas, Ana María Moreno Delgado, Eduardo Silva Ontiveros, Alfredo Javier López de la Paz, Héctor Ignacio Guereña Estrada, Marco Antonio Muñiz Rodríguez, Liliana Margarita Campuzano Vega, Jesús Ernesto Castillo Lizárraga, David Antonio López Vega, Rocío Flores Lizárraga, Dulce María Espinoza Valenzuela, Gustavo Aguilar Ortega, Leonardo Aguirre Bahena, Oscar Lara Pizaña, Juan Carlos Lazcano Montes, Radames Nepomuceno Castro, Alfonso Rodríguez Pérez, José Santiago Gaspar, a fin de verificar el cumplimiento del objeto o propósito señalado en la presente orden.

"**Obligaciones**

"Para tal efecto, se servirá permitir a los visitadores y demás personal autorizado, el acceso al lugar o lugares objeto de la orden de visita, así como mantener a su disposición toda la documentación y cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos mediante los cuales acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales a su cargo en materia de comercio exterior y demás

obligaciones en materia aduanera. Asimismo, deberá mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras, de los cuales los visitadores podrán sacar copias para que previo cotejo con sus originales se certifiquen, asimismo permitir la verificación de bienes y mercancías.

"En adición a lo anterior, pondrá a disposición del personal autorizado, en su caso, el equipo de cómputo y sus operadores cuando la contabilidad se lleve con sistema de registro electrónico, permitirá la verificación de documentos, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados y en general proporcionará la demás documentación o información que se le requiera por el personal comisionado en la presente orden. Asimismo, se encuentra sujeto a cumplir con todas las obligaciones establecidas en las disposiciones fiscales y aduaneras aplicables.

"En caso de que se encuentren irregularidades a las disposiciones y ordenamientos aplicables en materia de comercio exterior, o se den los supuestos de los artículos 45 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y IX del Código Fiscal de la Federación, los visitadores podrán obtener copias de la contabilidad y demás papeles para que previo cotejo con los originales se certifiquen. Asimismo, podrán indistintamente, sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes o muebles, archiveros u oficinas, donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de depósito al visitado o a la persona con quien se entiende la diligencia, previo inventario que al efecto formulen.

"Si durante la práctica de la visita domiciliaria se encuentra mercancía extranjera cuya legal estancia en el país no se acredite, los visitadores podrán efectuar el embargo precautorio conforme a lo previsto en el artículo 151 de la Ley Aduanera y sujeto al cumplimiento de las formalidades a que se refiere el artículo 150 de la citada ley.

"Se le apercibe de que en caso de no permitir al personal facultado la práctica de esta visita domiciliaria se utilizarán los medios de apremio y se aplicarán las sanciones correspondientes, de conformidad con los artículos 40, 85, fracción I y 86, fracción I del Código Fiscal de la Federación

"Atentamente
"El Administrador de la Aduana de Mazatlán

"Por suplencia en ausencia del C. José Alfredo López Arregui, Administrador de la Aduana de Mazatlán, Sinaloa, con fundamento en los artículos 2, 8 quinto párrafo, 12 último párrafo y 37 apartado C, fracción 183, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, Oficial de la Federación el 06 de Junio de 2005 y reformado el 12 de mayo de 2006, firme (sic) el Jefe de Sección.

"(Firma autógrafa)
"C.P. Eduardo Silva Ontiveros

"C.P. José Alfredo López Arregui."

De una lectura integral a la transcripción que antecede, se advierte que el "**Jefe de Sección**" en suplencia por ausencia del Administrador de la Aduana de Mazatlán del Servicio de Administración Tributaria, ordenó la práctica de una visita domiciliaria al hoy actor **FRANCISCO JAVIER GIL PERAZA,** con el objeto de comprobar la legal importación, tenencia o estancia de las mercancías de procedencia extranjera en el país que se encuentren en el domicilio ubicado en cito: "ZARAGOZA 302 SUR, INT. LA, COL. CENTRO C.P. 81200, LOS MOCHIS, SINALOA"; así como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras en materia de impuestos al comercio exterior, impuesto al valor agregado y, en su caso, derechos y aprovechamientos, inclusive cuotas compensatorias, restricciones y regulaciones no arancelarias y normas oficiales mexicanas que correspondan al periodo comprendido del 1º de enero de 2006 al 8 de diciembre de 2006.

Asimismo, se advierte que el "**Jefe de Sección**" al emitir la orden de visita de referencia, en suplencia del Administrador de la Aduana de Mazatlán, citó como fundamentos para justificar su actuación -entre otros- los preceptos legales que a continuación se transcriben:

Ley del Servicio de Administración Tributaria

(Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995 y modificada mediante Decreto publicado en el mismo órgano informativo el 12 de junio de 2003).

"**Artículo 7º.-** El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes:
"(...)
"**VII.** Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones;
"(...)
"**XVIII.** Las demás que sean necesarias para llevar a cabo las previstas en esta Ley, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables.
"(...)"

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2005 y reformado por Decretos publicados en el mismo órgano de difusión oficial el 12 de mayo y 28 de noviembre de 2006).

"**Artículo 1.-** El Servicio de Administración Tributaria, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley del Servicio de Administración Tributaria y los distintos ordenamientos legales aplicables, así como los reglamentos, decretos, acuer-

dos y órdenes del Presidente de la República y los programas especiales y asuntos que el Secretario de Hacienda y Crédito Público le encomiende ejecutar y coordinar en las materias de su competencia"

"**Artículo 2.-** Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Servicio de Administración Tributaria contará con las siguientes unidades administrativas:
"(...)
"**Unidades Administrativas Regionales.**
"**Administraciones Locales y Aduanas.**
"(...)"

"**Artículo 8.-** (...)
"(...)
"Los Administradores de las Aduanas y los Subadministradores de las mismas, serán suplidos indistintamente por los Jefes de Departamento adscritos a ellas. **En las salas de atención a pasajeros y en las secciones aduaneras, los citados Administradores y Subadministradores serán suplidos por los Jefes de las Salas y los Jefes de Sección, respectivamente**.
"(...)"

"**Artículo 9.-** Los Administradores Generales y el titular de la Unidad de Plan Estratégico y Mejora Continua, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:
"(...)
"**Las unidades administrativas regionales tendrán la sede que se establezca en el artículo 37 de este Reglamento y ejercerán su competencia dentro de la circunscripción territorial que al efecto se determine en acuerdo correspondiente**, **con excepción de la facultad de notificar, la cual podrán ejercer en todo el territorio nacional**. Asimismo, dichas unidades podrán solicitar a otras unidades con circunscripción territorial distinta, iniciar, continuar o concluir cualquier procedimiento y, en su caso, realizar los actos jurídicos correspondientes."

"**Artículo 10.- Compete a la Administración General de Aduanas:**
"(...)
"**XXII.-** Ordenar y practicar visitas domiciliarias, verificaciones de origen, auditorías, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones y los demás actos que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras, acuerdos, convenios o tratados de los que México sea parte, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de impuestos, incluyendo los que se causen por la entrada al territorio nacional o salida del mismo de mercancías y medios de transporte, derechos, aprovechamientos, estímulos fiscales, franquicias y accesorios de carácter federal; solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, datos, informes o documentos para planear y programar actos de fiscalización y, en materia de determinación de la base de los impuestos generales de importación o exportación, verificar y determinar la clasificación arancelaria de las mercancías de procedencia extranjera, así como comprobar, de conformidad con los acuerdos, convenios o tratados en materia fiscal o aduanera de los que México sea parte, el cumplimiento de obligaciones a cargo de contribuyentes, importadores, exportadores, productores, responsables solidarios y demás obligados en materia de impuestos, inclusive en materia de origen; verificar el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias en las mercancías de comercio exterior, inclusive las normas oficiales mexicanas; declarar que las mercancías, vehículos, embarcaciones o aeronaves pasan a propiedad del Fisco Federal; prorrogar los plazos en que se deban concluir las visitas domiciliarias o revisiones que se efectúen en las oficinas de las propias autoridades; inspeccionar y vigilar los recintos fiscales y fiscalizados y, en este último caso, vigilar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la concesión o autorización otorgada para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, así como declarar el abandono de las mercancías que se encuentren en los patios y recintos fiscales o bajo su responsabilidad o en los recintos fiscalizados; verificar el domicilio que los contribuyentes declaren en el pedimento, así como comprobar que los contribuyentes se localicen en el domicilio declarado; ordenar y practicar la verifica-

ción de aeronaves y embarcaciones para comprobar su legal estancia en el país; imponer multas por el incumplimiento o cumplimiento extemporáneo a los requerimientos que formule en los términos de esta fracción.
"(...)
"La Administración General de Aduanas, sus unidades administrativas centrales y las Aduanas ejercerán las facultades señaladas en el presente Reglamento respecto de todos los contribuyentes, inclusive aquéllos que son competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes.
"(...)
"Las unidades administrativas de las que sean titulares los servidores públicos que a continuación se indican estarán adscritas a la Administración General de Aduanas.
"Administrador Central de Operación Aduanera:
"Administrador de Autorizaciones.
"Administrador de Regulación del Despacho Aduanero.
"Administrador de Proyectos.
"Administrador de Atención a Usuarios.
"Administrador de Asuntos Legales.
"Administrador de Operación Aduanera.
"Administrador de Normatividad.
"Administrador de Procedimientos Legales.
"Administrador de Agentes, Apoderados y Dictaminadores Aduanales.
"Administrador Central de Laboratorio y Servicios Científicos:
"Administrador Técnico.
"Administrador de Producción.
"Administrador de Servicios Científicos.
"Administrador de Servicios de Apoyo.
"Administrador Central de Investigación Aduanera:
"Administrador de Investigación Aduanera.
"Administrador de Combate al Fraude Aduanero.
"Administrador de Valor.
"Administrador de Cuarto de Control.

“Administrador de Análisis.
“Administrador de Inteligencia Aduanera.
“Administrador Central de Contabilidad y Glosa:
“Administrador de Glosa.
“Administrador de Padrón de Importadores.
“Administrador de Padrón de Sectores ‘1’.
“Administrador de Padrón de Sectores ‘2’.
“Administrador de Contabilidad y Bancos.
“Administrador Central de Planeación Aduanera:
“Administrador de Política, Infraestructura y Control Aduanero.
“Administrador de Asuntos Aduaneros Internacionales.
“Administrador de Modernización Tecnológica.
“Administrador de Asuntos Legales de Planeación Aduanera.
“Administrador de Información.
“Administrador Central de Visitaduría:
“Administrador de Programación y Control.
“Administrador de Supervisión Aduanera ‘1’.
“Administrador de Supervisión Aduanera ‘2’.
“Administrador de Supervisión Aduanera ‘3’.
“Administrador de Supervisión Aduanera ‘4’.
“Administrador de Supervisión Aduanera ‘5’.
“Administrador de Supervisión Aduanera ‘6’.
“Administrador de Control de Operativos.
“Administrador Central de Seguimiento y Evaluación Aduanera:
“Administrador de Seguimiento.
“Administrador de Servicio Estratégico.
“Administrador de Evaluación de la Operación.
“Administrador de Evaluación de Procedimientos.
“Administrador de Profesionalización y Desarrollo Aduanero.
“Administrador de Análisis Económico y Estadístico.
“Administrador Central para la Inspección Fiscal y Aduanera:
“Administrador de Operaciones y Logística.

"Administrador de Prevención de Delitos Fiscales.
"Administrador de Asuntos Internos.
"Administrador de Apoyo Operacional.
"Administrador Central de Fiscalización Aduanera:
"Coordinador de Fiscalización Aduanera '1'.
"Coordinador de Fiscalización Aduanera '2'.
"Coordinador de Fiscalización Aduanera '3'.
"Coordinador de Fiscalización Aduanera '4'.
"Coordinador de Fiscalización Aduanera '5'.
"Administrador Central de Destino de Bienes:
"Administrador de Transferencia y Destino de Bienes.
"Administrador Jurídico.
"Administrador de Donaciones y Destrucciones.
"Administradores para el Destino de Bienes.
"**Administradores de las Aduanas.**
"(...)"

"**Artículo 12.-** Compete a las Administraciones y Subadministraciones de las Aduanas, dentro de la circunscripción territorial que les corresponda, ejercer las facultades que a continuación se precisan:
"(...)
"**II.-** Las señaladas en las fracciones IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XXI, **XXII,** XXIII, XXVI, XXVII, XXXII, XXXIV, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LXIII, LXVI, LXXII, LXXIII, LXXVIII, LXXXVII, LXXXIX y XC del artículo 10 de este Reglamento.
"(...)
"Cada Aduana estará a cargo de un Administrador del que dependerán los Subadministradores, Jefes de Sala, Jefes de Departamento, **Jefes de Sección**, Verificadores, Notificadores, Visitadores, el personal al servicio de la Adminis-

tración Central para la Inspección Fiscal y Aduanera y el personal que las necesidades del servicio requiera.
"(...)"

"**Artículo 37.-** El nombre y sede de las unidades administrativas regionales será el que le corresponda conforme a las fracciones de los apartados que a continuación se señalan. Cada una de ellas tendrá la circunscripción territorial que se determine mediante acuerdo del Jefe del Servicio de Administración Tributaria.
"(...)
"**C. Aduanas:**
"(...)
"**XXXI.- Aduana de Mazatlán, con sede en Mazatlán, Sinaloa.**
"(...)"

"**ACUERDO por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria**. (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de noviembre de 2005 y reformado mediante acuerdo publicado en el mismo órgano de difusión oficial el 24 de mayo de 2006)
"(...)

"**Artículo Tercero**. La Administración General de Aduanas y sus unidades centrales, tendrá su sede en la Ciudad de México, Distrito Federal y ejercerá sus facultades en todo el territorio nacional.
"La circunscripción territorial en donde se ejercerán sus facultades las Aduanas, Secciones Aduaneras y Aeropuertos Internacionales, será la que corresponda conforme a las siguientes fracciones:
"(...)
"**XXXI. ADUANA DE MAZATLÁN**. Con sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, cuya circunscripción territorial comprenderá el Estado de Sinaloa.
"**Dependen de esta Aduana, las Secciones Aduaneras** de **Topolobampo, Municipio de Ahome**, **y de Culiacán ubicada en el Aeropuerto Interna-**

cional denominado Culiacán, Municipio del mismo nombre y los Aeropuertos Internacionales denominados General Rafael Buelna, en la ciudad de Mazatlán, Culiacán, en la ciudad del mismo nombre y Del Valle del Fuerte, Municipio de Ahome, en el Estado de Sinaloa.
"(...)

"**Artículo Cuarto.** La circunscripción territorial de las Aduanas marítimas del país, tienen jurisdicción en las playas marítimas y en la Zona Federal Marítima Terrestre, así como en las aguas interiores, mar territorial y zona económica exclusiva, situada frente al litoral, incluyendo las islas adyacentes al mismo.
"Dependen de las Aduanas fronterizas, interiores y de tráfico aéreo y marítimo, las Secciones Aduaneras, aeropuertos internacionales, terminales ferroviarias y de autobuses, y demás puntos de revisión que se encuentren en los municipios que conforman su circunscripción territorial.
"Las secciones aduaneras tendrán su circunscripción territorial dentro de la señalada para la Aduana de la que dependan.
"(...)"

Código Fiscal de la Federación

"**Artículo 42**.- Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:
"(...)
"**III.- Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías.**
"(...)"

(El énfasis es nuestro)

De una aplicación armónica y congruente de lo establecido en los artículos 42, fracción III del Código Fiscal de la Federación; 7, fracciones VII y XVIII de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 1, 2, 9, último párrafo, 10, fracciones XXII, 12, fracción II y último párrafo; y 37, primer párrafo, apartado C, fracción XXXI del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, se desprende que la Aduana de Mazatlán del Servicio de Administración Tributaria, tiene dentro de la circunscripción territorial que le corresponde, la facultad para ordenar y practicar visitas domiciliarias, verificaciones de origen, auditorías, inspecciones, actos de vigilancia, verificaciones y los demás actos que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras, acuerdos, convenios o tratados de los que México sea parte, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de impuestos, incluyendo los que se causen por la entrada al territorio nacional o salida del mismo de mercancías y medios de transporte, derechos, aprovechamientos y accesorios de carácter federal.

Asimismo, tiene la facultad para comprobar, de conformidad con los acuerdos, convenios o tratados en materia fiscal o aduanera de los que México sea parte, el cumplimiento de obligaciones a cargo de contribuyentes, importadores, exportadores, productores, responsables solidarios y demás obligados en materia de impuestos, inclusive en materia de origen; y verificar el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias en las mercancías de comercio exterior, inclusive las normas oficiales mexicanas; verificar el domicilio que los contribuyentes declaren en el pedimento.

También, se advierte que la citada **Aduana de Mazatlán** estará a cargo de un Administrador del que dependerán los **Jefes de Sección**, quienes podrán suplir sus ausencias, como lo dispone el artículo 8º, quinto párrafo del citado Reglamento, **única y exclusivamente en las secciones aduaneras**.

Por otra parte, del **artículo tercero, segundo párrafo, fracción XXXI** del Acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, se desprende la competencia terri-

torial de la Aduana de Mazatlán, pues al efecto dispone que la misma tiene su sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y que la circunscripción territorial en donde válidamente puede ejercer sus facultades comprenderá el Estado de Sinaloa.

Por último, del artículo tercero, segundo párrafo, fracción XXXI del citado Acuerdo; se advierte que dependen de la Aduana de Mazatlán, las secciones aduaneras de Topolobampo, Municipio de Ahome, y de Culiacán ubicada en el Aeropuerto Internacional Culiacán, Municipio del mismo nombre.

Las precisiones que anteceden, evidencian que en el caso concreto la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio 326-SAT-25-874-IV-859 de 13 de marzo de 2007, origen de la resolución impugnada **fue expedida por una autoridad incompetente**.

Lo anterior es así, porque es cierto que en la orden de visita de mérito, el "**Jefe de Sección**" citó como fundamentos de su actuación, los preceptos transcritos con antelación, los cuales prevén la existencia jurídica de la **Aduana de Mazatlán**, de su Titular el Administrador, la facultad de éste para ordenar y practicar visitas domiciliarias como la que nos ocupa, la circunscripción territorial en la que válidamente puede ser ejercida dicha facultad, así como la existencia jurídica del Jefe de Sección como dependiente del Administrador de la Aduana y la facultad que tiene aquél para suplir las ausencias de este último.

Sin embargo, no debe pasar desapercibido que el **Jefe de Sección actúo en suplencia del Administrador de la Aduana de Mazatlán**, por lo que en términos de lo dispuesto en el **artículo 8º, quinto párrafo** del Reglamento del Servicio de Administración Tributaria, la suplencia ejercida era procedente únicamente **en la sección aduanera correspondiente, lo cual no aconteció en la especie**.

En efecto, debe recordarse que el artículo 8º, quinto párrafo del Reglamento del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2005 y reformado mediante Decretos publicados en el mismo

órgano de difusión oficial el 12 de mayo y 28 de noviembre de 2006, dispone lo siguiente:

> "Los Administradores de las Aduanas y los Subadministradores de las mismas, serán suplidos indistintamente por los Jefes de Departamento adscritos a ellas. **En las salas de atención a pasajeros y en las secciones aduaneras, los citados Administradores y Subadministradores serán suplidos por los Jefes de las Salas y los Jefes de Sección, respectivamente**."
>
> (El énfasis es nuestro)

Como se advierte, el precepto transcrito es claro en establecer que los Administradores de las Aduanas y los Subadministradores de las mismas, serán suplidos indistintamente por los Jefes de Departamento adscritos a ellas; y que en las salas de atención a pasajeros y en las secciones aduaneras, los citados Administradores y Subadministradores serán suplidos por los Jefes de las Salas y los Jefes de Sección, respectivamente.

Ahora bien, si se considera que la suplencia administrativa obedece a la necesidad de que las funciones de los órganos gubernamentales no se vean afectadas por la ausencia o impedimento temporal del funcionario a quien la ley le otorga la facultad; resulta válido concluir, que la disposición reglamentaria en comento debe interpretarse en el sentido de que tratándose de **una área distinta a las salas de atención a pasajeros y secciones aduaneras**, la suplencia del Administrador de la Aduana recae única y exclusivamente en los Jefes de Departamento adscritos a ella, no pudiendo actuar válidamente en dicha área y en suplencia del Administrador, **el Jefe de Sección**, pues amén de que no puede haber dos o más titulares actuando al mismo tiempo, la actuación de este último **se circunscribe a la sección aduanera correspondiente**, de tal suerte que la facultad que se le otorga para sustituir al Administrador, está sujeta a que se ejerza en la sección aduanera y no en algún lugar distinto a ésta.

Sirve de apoyo a lo anterior, a ***contrario sensu***, la tesis de **jurisprudencia 2a./J. 130/2005,** sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, correspondiente al mes de noviembre de 2005, página 47, que es del tenor literal siguiente:

"**ADMINISTRADOR DE ADUANAS. SU SUPLENCIA EN LAS SALAS DE ATENCIÓN A PASAJEROS Y SECCIONES ADUANERAS (REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA VIGENTE HASTA EL 6 DE JUNIO DE 2005).**- El penúltimo párrafo del artículo 10 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, vigente hasta el seis de junio de dos mil cinco, establecía que los Administradores de Aduanas serían suplidos, indistintamente, por los Subadministradores o por los Jefes de Departamento que de ellos dependan, y que en las salas de atención a pasajeros por los Jefes de Sala y en las secciones aduaneras, por los Jefes de Sección; disposición reglamentaria que, atendiendo a que la suplencia administrativa tiene como fin esencial conciliar dos aspectos: la no interrupción de las funciones de los órganos de la Administración Pública y la previsión de la falta en que por motivo de ausencia o impedimento puedan incurrir los titulares sustituidos, debe ser interpretada en el sentido de que tratándose de las Salas de Atención a Pasajeros y Secciones Aduaneras, la sustitución del Administrador de Aduanas recae única y exclusivamente sobre los Jefes de Sala y Jefes de Sección, no pudiendo actuar válidamente en dichas áreas y en suplencia del Administrador de Aduanas el Subadministrador, pues no puede haber dos o más titulares actuando al mismo tiempo.

"Contradicción de tesis 125/2005-SS. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito. 7 de octubre de 2005. Mayoría de tres votos. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y

Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez.

"Tesis de jurisprudencia 130/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de octubre de dos mil cinco."

En el caso que nos ocupa, de la simple lectura que se realice a la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio 326-SAT-25-874-IV-859 de 13 de marzo de 2007, transcrita por esta Juzgadora con antelación, se advierte que la misma fue expedida por el C.P. Eduardo Silva Ontiveros, en su carácter de "**Jefe de Sección**", en suplencia por ausencia del Administrador de la Aduana de Mazatlán del Servicio de Administración Tributaria, sin que se advierta en el documento que se analiza, algún elemento o dato del que se desprenda plenamente que dicho documento haya sido expedido en la **Sección Aduanera de Topolobampo**, Municipio de Ahome, o bien, en la **Sección Aduanera de Culiacán**, ubicada en el Aeropuerto Internacional Culiacán, Municipio del mismo nombre, que son las únicas dos secciones aduaneras dependientes de la Aduana de Mazatlán.

Luego entonces, si la orden de visita **no fue expedida por el Jefe de Sección dentro de las instalaciones correspondientes a la Sección Aduanera correspondiente**, resulta válido concluir que la misma es ilegal, al haber sido emitida por una autoridad incompetente para ello, ya que se reitera, tratándose de una área distinta a las **salas de atención a pasajeros y secciones aduaneras**, como aconteció en la especie, la suplencia del Administrador recae exclusivamente en los Jefes de Departamento, no así en los jefes de sección.

Lo anterior se robustece, si se considera que en la orden de visita contenida en el oficio 326-SAT-25-874-IV-859 de 13 de marzo de 2007, no se citó algún precepto del que se desprenda la existencia jurídica de una Sección Aduanera con sede en la ciudad de **Los Mochis, Sinaloa**, lugar en que fue expedida dicha orden de visita.

Al haberse acreditado la ilegalidad de la orden de visita domiciliaria contenida en el **oficio 326-SAT-25-874-IV-859 de 13 de marzo de 2007**, origina ineludiblemente la ilegalidad de todos los actos posteriores a la misma y de la propia resolución impugnada, al ser actos que encuentran apoyo en aquélla, por lo que constituyen frutos de un acto viciado de origen.

Apoya la determinación anterior, la tesis de jurisprudencia 565, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Tomo VI, Parte TCC, Apéndice de 1995, página 376, que es del tenor literal siguiente:

> "**ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.-** Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal."

En atención a la determinación alcanzada, lo procedente es declarar la nulidad lisa y llana de la liquidación impugnada, con fundamento en los artículos 51, fracción I y penúltimo párrafo y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al encontrarse acreditada la incompetencia de la autoridad que expidió la orden de visita origen de dicha resolución.

Esta Juzgadora se abstiene de entrar al análisis y resolución de los conceptos de impugnación expuestos por la parte actora en su demanda, ya que la incompetencia de la autoridad que expidió la orden de visita domiciliaria, incidió directamente sobre la validez de dicho acto de molestia, así como de la propia liquidación impugnada y, por ende, sobre los efectos que esta última puede producir en la esfera jurídica del gobernado, por lo que es inconcuso que esa omisión impide a esta

Juzgadora pronunciarse sobre los efectos o consecuencias de dicha resolución y la obliga a declarar la nulidad de ésta en su integridad.

Además, al haberse declarado la nulidad lisa y llana de la liquidación impugnada, esta Juzgadora estima innecesario entrar al análisis y resolución de los conceptos de impugnación que expresa la actora en su demanda, ya que cualquiera que fuera su resultado no variaría el sentido del presente fallo.

(...)

En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 49, 50, 51, fracción I y penúltimo párrafo; 52, fracción II y 4º Transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 14, fracciones I y X y 23, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, y en vigor a partir del día siguiente al de su publicación, se resuelve:

I.- Se analizó de oficio la competencia de la autoridad que ordenó el procedimiento de fiscalización, origen de la resolución impugnada, en consecuencia;

II.- SE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, precisada en el resultando primero de esta sentencia, por los motivos señalados en el último de sus considerandos.

III.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada del presente fallo a las partes, devuélvanse los autos a la Sala Regional del Noroeste III de este Tribunal, una vez que haya quedado firme la sentencia; y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de diez de abril de dos mil ocho, por unanimidad de cinco votos a favor de los Magistrados Guillermo Domínguez Belloc,

Silvia Eugenia Díaz Vega, Luis Malpica y de Lamadrid, Luis Carballo Balvanera y Olga Hernández Espíndola.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Luis Carballo Balvanera, cuya ponencia se aprobó.

Se elaboró el presente engrose el día dieciséis de abril de dos mil ocho y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, y 48, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma la Magistrada Olga Hernández Espíndola, Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante el Lic. Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

TERCERA PARTE

CRITERIOS AISLADOS DE SALA SUPERIOR Y DE SALAS REGIONALES

SALA SUPERIOR

PRIMERA SECCIÓN

LEY ADUANERA

VI-TA-1aS-3

PRINCIPIO DE INMEDIATEZ CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ADUANERA. SUS IMPLICACIONES Y ALCANCES.- El artículo 43 de la Ley Aduanera establece que cuando con motivo de la activación del mecanismo de selección automatizado éste imponga la práctica del reconocimiento aduanero de las mercancías presentadas, la autoridad aduanera está obligada a efectuarlo ante la persona que las presente en el recinto fiscal, lo cual implica se realice en el momento mismo en que esto suceda; es decir, en forma inmediata, ya que es precisamente en ese momento cuando se tiene la oportunidad de advertir la existencia de alguna irregularidad, por tanto, cuando se debe levantar el acta circunstanciada a que se refiere el artículo 46 de la misma ley, para dar a conocer al interesado los hechos u omisiones detectados, a fin de que éste, dentro del plazo que la propia ley señala, manifieste lo que a su interés convenga, pues el hecho de que la ley sea omisa en precisar el momento en el que se debe levantar el acta de referencia, no debe llevar a la conclusión de que tal proceder no afecta al gobernado, en virtud de que si la autoridad aduanera no actúa de esa forma no existiría la certeza de que lo asentado en dicha acta corresponda a lo sucedido en el momento en el que se presentó físicamente la mercancía para su despacho, ante la persona que presentó la mercancía en el recinto fiscal, lo que indudablemente dejaría en estado de inseguridad jurídica al gobernado. (1)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4671/06-07-02-6/402/08-S1-01-01.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de abril de 2008, por mayoría de 3 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez.- Secretario: Lic. Andrés López Lara.

(Tesis aprobada en sesión de 22 de abril de 2008)

SEGUNDA SECCIÓN

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TA-2aS-2

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EN RAZÓN DEL TERRITORIO.- COMPETE CONOCER A LAS SECCIONES DE LA SALA SUPERIOR.- En los términos del artículo 23 fracción VII, de la Ley Orgánica de este Tribunal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007 en vigor el 7 siguiente del mismo mes y año, se dispone que compete conocer a las Secciones de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las Salas Regionales. En esa perspectiva, si una de las partes plantea el incidente de incompetencia en razón del territorio con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica mencionada, ello no obsta para que al momento de resolver dicho incidente, éste se resuelva por el órgano competente para ello que a partir de la vigencia de la Ley Orgánica multicitada, lo serán las Secciones de la Sala Superior y no el Pleno de dicha Sala Superior. (2)

Incidente de Incompetencia Núm. 182/07-18-01-7/673/07-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de marzo de 2008, por mayoría de 3 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de abril de 2008)

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TA-2aS-3

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EN RAZÓN DEL TERRITORIO. "CONSULTA NUMÉRICA DE PATRONES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL," NO ES DOCUMENTO IDÓNEO PARA ACREDITAR LA INCOMPETENCIA DE UNA SALA REGIONAL SI EL MISMO NO PRECISA LA AUTORIDAD EMISORA DE LOS CRÉDITOS FISCALES IMPUGNADOS.- En los términos del artículo 30 último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, corresponderá a las partes incidentistas demostrar la incompetencia de la Sala Regional que esté conociendo de algún juicio que sea de la competencia de otra. Por tanto, si la autoridad incidentista pretende demostrar la incompetencia en razón del territorio de la Sala que esté conociendo de algún juicio mediante la exhibición del documento denominado "Consulta Numérica de Patrones del Instituto Mexicano del Seguro Social", pero del contenido del mismo únicamente se alude a un registro patronal, al nombre del actor, un domicilio y diversas claves de la Delegación de Control, del Municipio, sin precisar la referencia de los documentos determinantes del crédito combatido, ni el período de emisión y mucho menos la autoridad emisora de ellos, el documento así exhibido no resulta suficiente para demostrar que otra autoridad del Instituto hubiere emitido los actos combatidos. En consecuencia, al no demostrarse que se trata de una sede diversa de la correspondiente a la jurisdicción de la Sala, que esté conociendo del juicio, el incidente de incompetencia en razón del territorio resultará infundado. (3)

Incidente de Incompetencia Núm. 182/07-18-01-7/673/07-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de marzo de 2008, por mayoría de 3 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de abril de 2008)

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TA-2aS-4

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EN RAZÓN DEL TERRITORIO. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD INCIDENTISTA ACREDITAR SUS AFIRMACIONES EN EL SENTIDO DE QUE OTRA SALA REGIONAL DEBA CONOCER DEL ASUNTO.- En los términos del artículo 30 último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando una Sala esté conociendo de algún juicio que sea de la competencia de otra, cualquiera de las partes podrá acudir ante el Presidente del Tribunal para que se someta el asunto al conocimiento del Órgano competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En ese orden de ideas, corresponderá a la incidentista la carga de la prueba para demostrar los hechos en que sustente la incompetencia argumentada, en relación con el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en virtud de que la incidentista debe probar su pretensión, aun cuando niegue un hecho si éste se sustenta en la afirmación de otro hecho. En consecuencia, si la autoridad incidentista niega tener el carácter de autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo, argumentando que no emitió la determinación de los créditos fiscales combatidos que la actora dice desconocer y para sustentar dicha argumentación afirma que es otra Sala la competente porque a su juicio el crédito fiscal controvertido debe ser atribuido a una diversa autoridad, con sede en una jurisdicción diversa, corresponderá a la incidentista probar esta última afirmación. (4)

Incidente de Incompetencia Núm. 182/07-18-01-7/673/07-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de marzo de 2008, por mayoría de 3 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de abril de 2008)

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TA-2aS-5

INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EN RAZÓN DEL TERRITORIO.- QUEDA ÚNICAMENTE EN LAS PARTES LA POSIBILIDAD DE PLANTEAR DICHO INCIDENTE CUANDO LA SALA REGIONAL HA ACEPTADO LA COMPETENCIA TERRITORIAL.- En los términos del artículo 30, último párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando una Sala esté conociendo de algún juicio que sea de la competencia de otra, cualquiera de las partes podrá acudir ante el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, exhibiendo copia certificada de la demanda y de las constancias que se estimen pertinentes, a fin de que se someta el asunto al conocimiento de las Secciones de dicho Tribunal, ello en relación con lo dispuesto en el artículo 23, fracción VII, de la Ley Orgánica de este Tribunal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007 y en vigor el 7 siguiente del mismo mes y año. En ese orden de ideas, si una Sala Regional aceptó la competencia de un juicio y emplazó a la autoridad señalada como demandada, ésta última puede plantear el incidente de incompetencia en razón del territorio si estima que la Sala que esté conociendo de dicho juicio es incompetente porque a su juicio sea de la competencia de otra. (5)

Incidente de Incompetencia Núm. 182/07-18-01-7/673/07-S2-07-06.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 13 de marzo de 2008, por mayoría de 3 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de abril de 2008)

SALAS REGIONALES

QUINTA SALA REGIONAL METROPOLITANA

LEY DE RADIO Y TELEVISIÓN

VI-TASR-V-1

FACULTADES DE VIGILANCIA EN MATERIA DE TRANSMISIONES DEL ESTADO.- NO PUEDEN SER LIMITADAS POR LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL TÍTULO DE CONCESIÓN RESPECTIVO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Radio y Televisión, la Secretaría de Gobernación tiene, entre otras atribuciones, la de vigilar la eficacia de las transmisiones a que se refiere el artículo 59 de dicha ley, precepto que establece la obligación de las estaciones de radio y televisión, para que efectúen transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social. Por lo que tratándose de concesiones otorgadas para la explotación de estaciones radiodifusoras, no es posible limitar esa facultad de vigilancia, bajo argumentos sustentados en las condiciones del título de concesión respectivo, como lo es, el que se pactara la obligación de la estación radiodifusora de conservar las grabaciones de su programación únicamente por 30 días, y que trascurrido ese plazo no tiene la obligación de exhibir los respaldos de programación para acreditar que ha cumplido con la transmisión de los mensajes de tiempo de Estado en los horarios previamente establecidos, ya que lo anterior implicaría hacer nugatoria la facultad de vigilancia de esa Dependencia, considerando además que en términos del artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la facultad de las autoridades administrativas para imponer sanciones prescribe en cinco años. (1)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 33159/05-17-05-2.- Resuelto por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 13 de febrero de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Celestino Herrera Gutiérrez.- Secretario: Lic. Noé Vázquez López.

LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR

VI-TASR-V-2

NOMBRES ARTÍSTICOS.- NO SON MATERIA DE RESERVA DE DERECHOS A FAVOR DE LAS EMPRESAS TELEVISORAS, AQUELLOS QUE SE DERIVEN DEL NOMBRE DE LA PERSONA QUE DIO ORIGEN AL NOMBRE ARTÍSTICO SALVO QUE MEDIE CONSENTIMIENTO DE ÉSTA.- De la interpretación armónica de los artículos 188, fracciones I, incisos e) y f), y VII de la Ley Federal de Derechos de Autor y 75 del Reglamento de dicha ley, se llega a la conclusión que no son materia de reserva de derechos los nombres que sean solicitados para la protección de nombres artísticos, cuando sean iguales o semejantes en grado de confusión con otro que el Instituto estime notoriamente conocido en México, salvo que el solicitante sea el titular del derecho notoriamente conocido o por consentimiento expreso del interesado. En consecuencia, para que una empresa televisora obtenga la reserva de derechos de un nombre artístico, por la difusión, uso o explotación que le ha dado de manera habitual e ininterrumpida en el territorio nacional o en el extranjero, en los casos en que el nombre artístico haya surgido de manera parcial o total del nombre y/o apellidos de la persona interesada (artista), debe mediar forzosamente el consentimiento de esa persona, ya que en la especie, es en virtud de la existencia de la persona y su nombre, como es posible crear el nombre artístico. (2)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 19497/05-17-05-2.- Resuelto por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,

el 15 de febrero de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Celestino Herrera Gutiérrez.- Secretario: Lic. Noé Vázquez López.

LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

VI-TASR-V-3

COMPETENCIA MATERIAL.- LA COMISIÓN NACIONAL DE AHORRO PARA EL RETIRO, NO PUEDE INFERIR QUE ESTÁ FACULTADA PARA ESTABLECER CRITERIOS RESTRICTIVOS O LIMITATIVOS RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES DE POSTULACIÓN DE AGENTES PROMOTORES DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO.- En un régimen legal de facultades expresas y limitadas de toda autoridad, y conforme al principio de legalidad jurídica, que señala que las autoridades únicamente pueden hacer lo que la ley expresamente les faculta, la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, carece de facultad para establecer criterios restrictivos o limitativos respecto de la aplicación de los exámenes de Postulación a los agentes promotores de Administradoras de Fondos para el Retiro. Los artículos 1º, 2º, 5º y 36, último párrafo de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 11, fracciones V y VIII, 15 fracciones XV y XVI, y 24, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, y las Reglas Segunda, Décima Primera, Décima Sexta y Décima Séptima de la Circular CONSAR 05-7 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2006, facultan a la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro para regular y supervisar de manera genérica a los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, para llevar un registro de los agentes promotores de las administradoras, para dar seguimiento al registro de los agentes promotores de las Administradoras y supervisar que ajusten el desempeño de sus actividades a las disposiciones aplicables, así como para definir los mecanismos de evaluación y aplicar los exámenes, directamente o a través de terceros, a los agentes promotores, para aplicar y supervisar los exámenes de postulación, revalidación y/o actualización, pero acorde con lo dispuesto por el artículo 38, fracción IV

del Código Fiscal de la Federación, en relación con el diverso 16 Constitucional, no se puede inferir que tiene facultad para establecer criterios restrictivos o limitativos respecto de la aplicación de los exámenes de Postulación a los agentes promotores de Administradoras de Fondos para el Retiro, sin que sea impedimento a lo anterior que la Regla Décima Séptima de la Circular aludida señale que la presentación de los exámenes se sujetará a los calendarios y procedimientos que determine la Comisión, ya que ambas cuestiones son distintas y éstas no implican necesariamente establecer los criterios restrictivos o limitativos de referencia. (3)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 23442/07-17-05-2.- Resuelto por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 7 de marzo de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: José Celestino Herrera Gutiérrez.- Secretario: Lic. Noé Vázquez López.

SALA REGIONAL DEL NORTE-CENTRO I

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XXX-5

COSA JUZGADA.- EXISTE CUANDO YA HAY UN PRONUNCIAMIENTO EXPRESO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- Ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito se traduce, en materia administrativa, en la imposibilidad de incoar un procedimiento administrativo tendiente a la emisión de una resolución de la autoridad, respecto de situaciones que ya hayan sido objeto de un procedimiento de la misma naturaleza; salvo, por supuesto, que el nuevo procedimiento se inicie en cumplimiento a lo ordenado en una sentencia dictada en un procedimiento jurisdiccional, de tal manera, que si la parte demandante acredita en el juicio contencioso administrativo que el procedimiento administrativo en materia aduanera incoado en contra de un vehículo de su propiedad, ha sido ya objeto de sentencia pronunciada por este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la cual se determinó que acreditó la legal estancia y tenencia del bien mueble en el país, misma sentencia que quedo firme, resulta procedente declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado, en tanto que la cosa juzgada, constituye la verdad legal, así como el fin que las partes persiguen con el proceso de obtener del juez una declaración que decida definitivamente una cuestión litigiosa, de manera que no se pueda discutir de nuevo en el mismo proceso, ni en ningún otro en el futuro; por lo tanto, si en el presente caso, el demandante acreditó que su situación fiscal ya había sido objeto de una sentencia anterior, la cual resultó favorable, resulta inconcuso que el acto impugnado resulta ilegal, ya que fue emitido respecto de una situación que ya ha sido objeto de un procedimiento de la misma naturaleza. (4)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1933/07-04-01-4.- Resuelto por la Sala Regional del Norte-Centro I, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de enero de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor por Ministerio de Ley: Lic. Ernesto Alonso García Rodríguez.- Secretaria: Lic. Afrodita María de Jesús Perales Torres.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

VI-TASR-XXX-6

AVISO DE INSCRIPCIÓN EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- ES IMPROCEDENTE SU RECHAZO, CUANDO CONTIENE ERRORES SUSCEPTIBLES DE SUBSANARSE.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 150, fracción XXIII del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y 50 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, es atribución de dicho Instituto rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las solicitudes, avisos o cédulas de determinación presentados por los patrones, para lo cual podrá requerirles la presentación de la documentación que proceda y recibir los avisos de inscripción de los trabajadores que presenten los patrones o sus representantes, comprobando, en su caso, la veracidad de los datos, por los medios que estime pertinentes y de proceder, rectificar la información; por tanto, si un aviso de inscripción contiene un error en el nombre del trabajador, es improcedente su rechazo, si la propia autoridad señala expresamente la diferencia existente entre el nombre proporcionado al momento de la afiliación y el registrado en su sistema, pues en este caso debe rectificar ese dato o, en su defecto, requerir al patrón la información que considere conveniente. (5)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2590/07-04-01-2.- Resuelto por la Sala Regional del Norte-Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de febrero de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Pablo Chávez Holguín.- Secretario: Lic. Juan Carlos Rivera Pérez.

LEY GENERAL DE SALUD

VI-TASR-XXX-7

COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN CHIHUAHUA, A FIN DE FUNDAMENTAR SU COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS POR INFRACCIÓN A NORMAS FEDERALES, DEBE CITAR EL ARTÍCULO, FRACCIÓN O INCISO DE LA

NORMATIVIDAD EN QUE SE ESTABLEZCA LA FACULTAD EJERCIDA.- Conforme a las jurisprudencias 2a./J. 57/2001 y 2a./J. 115/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XIV, noviembre de 2001, página 31 y XXII, septiembre de 2005, página 310, respectivamente, la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En consecuencia, si el Acuerdo Específico de Coordinación para el ejercicio de facultades en Materia de Control y Fomento Sanitarios, celebrado por la Secretaría de Salud y el Estado de Chihuahua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil seis, es el ordenamiento que establece las facultades de la Secretaría de Salud, que puede ejercer el Gobierno del Estado de Chihuahua, por conducto de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a fin de fundamentar debidamente su competencia, la autoridad demandada debe invocar las cláusulas aplicables y la parte específica del anexo correspondiente, que le otorgan la facultad ejercida, pues de no hacerlo, no se colma la garantía de fundamentación de la competencia de la autoridad. (6)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2089/07-04-01-2.- Resuelto por la Sala Regional del Norte-Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 22 de febrero de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Pablo Chávez Holguín.- Secretario: Lic. Juan Carlos Rivera Pérez.

LEY ADUANERA

VI-TASR-XXX-8

PROCEDIMIENTO ADUANERO. EL PLAZO DE CUATRO MESES PARA EMITIR LA RESOLUCIÓN EN CUMPLIMIENTO, CORRE A PARTIR DE

LA FECHA EN QUE LA RESOLUCIÓN QUE ASÍ LO ORDENE SE NOTIFIQUE A LA AUTORIDAD RESPECTIVA.- Conforme al artículo 152 de la Ley Aduanera vigente en el año de 2002, las autoridades cuentan con un plazo de cuatro meses contados a partir de que se levante el escrito de hechos u omisiones para emitir la resolución que determine la situación fiscal del contribuyente, de no hacerlo el procedimiento se declarará nulo. Ahora bien, para el caso de las resoluciones que se dicten en cumplimiento de una resolución administrativa o de una sentencia dentro de un juicio de nulidad, las autoridades se encuentran compelidas a emitir la nueva resolución dentro del mismo plazo de cuatro meses previsto en el artículo 152 de la Ley Aduanera, pero contados a partir de la fecha en que la resolución que así lo ordene se notifique a la autoridad respectiva, ya que resulta cronológica y jurídicamente imposible que la nueva resolución se emita dentro del plazo de cuatro meses contados a partir de que se levante el escrito de hechos u omisiones, tal y como lo pretende el demandante, pues ante la emisión de la nueva resolución dicho plazo feneció desde el dictado de la primera resolución que se declaró nula por el medio de defensa interpuesto. Lo anterior atendiendo a los razonamientos expuestos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la Jurisprudencia que lleva por rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DEBE EMITIR LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN EL PLAZO DE 4 MESES, CONFORME AL ARTÍCULO 153, DE LA LEY ADUANERA, INCLUSO CUANDO SE ORDENÓ SU REPOSICIÓN". (7)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 985/07-04-01-4.- Resuelto por la Sala Regional del Norte-Centro I, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 28 de febrero de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor por Ministerio de Ley: Lic. Ernesto Alonso García Rodríguez.- Secretaria: Lic. Afrodita María de Jesús Perales Torres.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXX-9

VISITA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES. LA CARGA DE LA PRUEBA PARA DEMOSTRAR QUE

SE LLEVÓ EN UNA HORA EN QUE EL ESTABLECIMIENTO NO SE ENCONTRABA ABIERTO AL PÚBLICO EN GENERAL, CORRE A CARGO DEL VISITADO.- De conformidad con el artículo 49, fracción I del Código Fiscal de la Federación, se prevé la obligación de que tratándose de visitas para verificar la expedición de comprobantes fiscales, la autoridad que las practique, debe de hacerlo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos y semifijos en la vía pública, de los contribuyentes, siempre que se encuentren abiertos al público en general. De lo transcrito, se aprecia que el dispositivo de trato, contiene una facultad reglada, que constriñe a la autoridad a practicar la verificación, dentro del horario en el que la negociación permanezca abierta al público en general. Por ello, si en el juicio de nulidad, el actor argumenta que el negocio visitado, tiene un determinado horario de labores, y que la visita, ocurrió en una hora fuera del referido horario, corresponde al promovente, acreditar tal circunstancia, con los medios de convicción idóneos, en apego a la máxima jurídica, de que aquel que afirma, esta obligado a probar. (8)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2815/07-04-01-7.- Resuelto por la Sala Regional del Norte-Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 29 de febrero de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor por Ministerio de Ley: Lic. Ernesto Alonso García Rodríguez.- Secretario: Lic. Gerardo Alfonso Chávez Chaparro.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XXX-10

ACTO IMPUGNADO DESCONOCIDO POR EL PROMOVENTE DEL JUICIO DE NULIDAD. SI LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA NIEGA SU EXISTENCIA Y DICHA NEGATIVA NO ES DESVIRTUADA, PROCEDE SOBRESEER EL JUICIO.- Si el promovente del juicio de nulidad, al interponer la demanda, niega lisa y llanamente conocer el acto que pretende impugnar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así lo expresará en su demanda, se-

ñalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución y al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda. Sin embargo, si la autoridad al contestar, manifiesta que el acto desconocido por el promovente, no existe, dicha autoridad queda relevada de la obligación procesal que le fue impuesta, y si la referida negativa, no es desvirtuada, se actualizará la causal de improcedencia, prevista en el artículo 8, fracción XI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que prevé la improcedencia del juicio, cuando de las constancias de los autos, apareciere claramente que no existe la resolución o acto impugnado, procediendo en consecuencia a sobreseer el juicio, con base en lo dispuesto por el artículo 9, fracción II, del mismo ordenamiento legal. (9)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3471/07-04-01-7.- Resuelto por la Sala Regional del Norte-Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de marzo de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor por Ministerio de Ley: Lic. Ernesto Alonso García Rodríguez.- Secretario: Lic. Gerardo Alfonso Chávez Chaparro.

EN EL MISMO SENTIDO:

VI-TASR-XXX-11

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 7/08-04-01-7.- Resuelto por la Sala Regional del Norte-Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 31 de marzo de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor por Ministerio de Ley: Lic. Ernesto Alonso García Rodríguez.- Secretario: Lic. Gerardo Alfonso Chávez Chaparro.

TERCERA SALA REGIONAL DEL NORTE-CENTRO II

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXXVII-4

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- PARA CUMPLIR CON ESTOS REQUISITOS AL IMPONER UNA MULTA ACTUALIZADA, ES NECESARIO SEÑALAR LA FECHA DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, QUE LA AUTORIDAD APLICA EN SU RESOLUCIÓN.- El artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, prevé que todos los actos de autoridad deben de estar fundados y motivados, ello en cumplimiento a las formalidades establecidas en su similar 16 Constitucional, por lo que resulta ilegal que la autoridad fiscal al emitir el acto combatido, establezca que se actualizó la multa mínima prevista por el artículo 86, fracción I del Código Fiscal de la Federación, aplicando el factor de actualización que resultó al utilizar el procedimiento que para tal efecto prevé el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, que establece que el factor de actualización aplicable, se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo, pero limitándose a indicar los diversos Índices Nacionales de Precios al Consumidor utilizados para determinar dicho factor de actualización, y omitiendo señalar la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de tales Índices, pues para dar cumplimiento con la obligación de fundar y motivar el acto administrativo, es necesario la precisión de los referidos Índices y su fecha de publicación, para con ello dar certeza al contribuyente de que los mismos, son precisamente los calculados y publicados por el Banco de México, conforme lo dispone el artículo 20 del referido Código Tributario. (10)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5728/07-05-03-3.- Resuelto por la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 14 de marzo de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Adolfo Rosales Puga.- Secretaria: Lic. María Teresa Sujo Nava.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXXVII-5

NOTIFICACIÓN POR INSTRUCTIVO.- SUPUESTOS PARA SU PROCEDENCIA.- Si bien conforme al artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, se permite la notificación por medio de *instructivo,* ello solo aplica cuando a quien se pretenda notificar no se encuentre, y el que se encuentre o un vecino se nieguen a recibirla, por lo tanto, para acreditarse lo anterior es necesario que se hayan dado tales supuestos, de ahí que, si en la constancia de notificación, no se asienta que se requirió a la persona a quien se trataba notificar, y tampoco se menciona si en el lugar se encontraba persona alguna con quien llevar a cabo la diligencia, o que ésta se haya negado a recibirla, o un vecino; no se justifica el haberse llevado a cabo la notificación por instructivo, por lo que la misma deviene ilegal, ya que solo ante la debida circunstanciación del acta de notificación que se entregue al particular, se estará en la posibilidad de determinar si la notificación por instructivo se ajustó a derecho, al darse los supuestos de su procedencia contemplados en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior es así, ya que la notificación por su importancia no puede partir de inferencias, esto es, por lógica jurídica no se podrá inferir que una notificación practicada con un tercero es legal por la simple razón de que existe un citatorio previo, ya que en todo caso deberá actualizarse alguno de los supuestos de procedencia de la notificación por instructivo mencionados. (11)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3364/07-05-03-8.- Resuelto por la Tercera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de marzo de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Rubén Rocha Rivera.- Secretaria: Lic. Aurora Mayela Galindo Escandón.

PRIMERA SALA REGIONAL DEL GOLFO

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VI-TASR-XXVII-1

INAPLICABILIDAD DE LOS ARTÍCULOS 70, CUARTO PÁRRAFO Y 75, FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SI LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN ÚNICAMENTE ACTÚA COMO AUTORIDAD NOTIFICADORA DE UNA MULTA IMPUESTA POR EL TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- Los artículos 70 cuarto párrafo y 75, fracción VI del Código Fiscal de la Federación prevén la reducción de las multas impuestas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, incluyendo las relacionadas con las contribuciones al comercio exterior; así, cuando la Administración Local de Recaudación, únicamente proceda a la notificación de multa impuesta por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad, es evidente que en su acta de notificación no deberá citar los artículos en comento porque éstos no resultan aplicables al tratarse de una multa por la infracción de leyes diversas a las fiscales. (12)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 550/07-13-01-7.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 16 de enero de 2008, por mayoría de 2 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Instructor: Héctor Francisco Fernández Cruz.- Secretaria: Lic. Isela Pérez Silva.

LEY DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN

VI-TASR-XXVII-2

PEDIMENTO DE IMPORTACIÓN.- SI SE PRESENTA AL MOMENTO EN QUE ESTABA VIGENTE LA LEY DEL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN, ÉSTE ES EL ORDENAMIENTO LEGAL APLICABLE EN LA DETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS.- Si las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran y las mismas se determinan conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación; es evidente que si el pedimento de importación se presentó cuando se encontraba vigente la Ley del Impuesto General de Importación, aunque la resolución que determinó la situación fiscal del importador se emitió una vez que se encontraba en vigor la Ley General de Importación y Exportación, el ordenamiento legal aplicable para la determinación de las contribuciones omitidas es la Ley del Impuesto General de Importación por ser ésta la vigente en el momento en que se causó la contribución. (13)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2188/07-13-01-7.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 25 de enero de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Héctor Francisco Fernández Cruz.- Secretaria: Lic. Isela Pérez Silva.

SALA REGIONAL DEL PACÍFICO CENTRO

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

VI-TASR-XLI-1

INFRACCIÓN INSTANTÁNEA. TIENE TAL CARÁCTER LA AUTORIZACIÓN DE UNA LÍNEA DE CRÉDITO CONTRA LA NORMATIVIDAD APLICABLE.- Atendiendo el precedente sustentado por el Pleno de la Sala Superior -vinculativo en principio para esta Juzgadora- con Número V-P-SS-108, en sesión de fecha 28 de marzo de 2001, por unanimidad de 9 votos, que se publicó por su Revista, en la Quinta Época. Año I. No. 11. Noviembre 2001, Página: 50, cuyo rubro es el siguiente: "PRESCRIPCIÓN EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.- PARA DETERMINAR SI UNA INFRACCIÓN ES CONTINÚA, DEBE ESTARSE A LA CONSUMACIÓN DE LA MISMA Y NO A LOS EFECTOS O CONSECUENCIAS QUE PUDIERA GENERAR.", tratándose de la imputación que haga el Órgano Interno de Control del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, consistente en la posible autorización de una línea de crédito, sin reunir los requisitos previstos por la normatividad aplicable, la conducta infractora sin duda es de carácter instantáneo, ya que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7°, del Código Penal Federal, aplicable supletoriamente a la materia, en términos de lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la conducta reprochada se realiza a partir de la fecha en que se suscribió tal autorización, y por ende es a partir de tal fecha cuando inicia el cómputo del plazo de prescripción previsto por el artículo 78, fracción II de la precitada ley, sin que por las consecuencias de la autorización, como por ejemplo, el dictamen favorable y el pago de garantías a favor de la Banca, pueda considerarse que se trata de una infracción continua, pues éstos trámites derivan de la autorización del crédito emitida en un principio. (14)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3213/06-21-01-3.- Resuelto por la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 11 de febrero de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Juan Manuel Terán Contreras.- Secretario: Lic. Raúl Tovar Gutiérrez.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-TASR-XLI-2

COMPETENCIA TEMPORAL. EL LÍMITE DE CUATRO MESES QUE PRESCRIBE EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PARA CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE ESTE TRIBUNAL, ES APLICABLE A LAS RESOLUCIONES QUE CUMPLIMENTAN SENTENCIAS EMITIDAS BAJO LA VIGENCIA DEL TÍTULO VI DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- La resolución administrativa determinante de un crédito fiscal, emitida en cumplimiento de una sentencia de este Tribunal, fuera del plazo de cuatro meses que establece el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es nula si se emite bajo la vigencia de dicha ley, en cuanto se emite después de "precluido el derecho de la autoridad" para hacerlo, o sea después del plazo de caducidad especial establecido en el precepto cuyo sentido es limitar la competencia temporal de la autoridad para actuar. Ello es así, no obstante que la sentencia en cuyo cumplimiento se emite la resolución se haya pronunciado bajo la vigencia del Título VI del Código Fiscal de la Federación, puesto que el artículo Cuarto Transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que prescribe la aplicabilidad de las disposiciones que abroga a los juicios en trámite a la entrada en vigor de la referida ley, no es aplicable a los actos administrativos de la Administración Pública, esto es, de la esfera administrativa, puesto que se circunscribe a los actos del ámbito jurisdiccional. (15)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1045/07-21-01-3.- Resuelto por la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 29 de febrero de 2008, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Juan Manuel Terán Contreras.- Secretario: Lic. Raúl Tovar Gutiérrez.

CUARTA PARTE

CRITERIOS AISLADOS DE SALAS REGIONALES APROBADOS DURANTE LA QUINTA ÉPOCA

SALA REGIONAL DEL NOROESTE III

LEY DE AGUAS NACIONALES

CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA EVITAR SU CADUCIDAD.- El permiso obtenido para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales, sólo podrá terminar por caducidad conforme lo dispuesto en el artículo 27, fracción III de la Ley de Aguas Nacionales vigente hasta el 28 de abril de 2004; sin embargo, a fin de evitar la actualización de tal figura respecto del volumen que no hubiera sido aprovechado el concesionario antes del vencimiento del plazo de tres años podrá disponer o transmitir en forma temporal o definitiva los volúmenes de agua no utilizados; o bien, cumplir con los requisitos previstos en el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, para lo cual deberá dar aviso a la Comisión Nacional del Agua dentro de los treinta días siguientes a aquél en que se presente alguno de los supuestos previstos en el citado numeral para que la comisión compruebe la existencia del supuesto y emita la constancia respectiva. (16)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1218/06-03-01-3.- Resuelto por la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 13 de abril de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor por Ministerio de Ley: Lic. Jorge Antonio Camarena Ávalos.- Magistrado que elaboró la tesis: José Luis Ochoa Torres.- Secretaria: Lic. Mireya Guadalupe Quintero Sarabia.

SALA REGIONAL DEL NORTE-CENTRO I

LEY ADUANERA

RESARCIMIENTO. EL DERECHO NACE A FAVOR DE QUIEN OBTENGA UNA RESOLUCIÓN FAVORABLE.- Conforme a lo dispuesto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 157 de la Ley Aduanera, el particular que obtenga una resolución administrativa o judicial firme, que declare la nulidad de la resolución que determinó que la mercancía pasó a propiedad del Fisco Federal, podrá solicitar al Servicio de Administración Tributaria la devolución de la mercancía, o en su caso, el pago del valor de la mercancía. Por lo tanto, resulta inconcuso que conforme a lo dispuesto en el artículo relatado, la autoridad aduanera sin mayores requisitos, debe proceder a su devolución o bien optar por los demás procedimientos que el propio artículo señala, pues exigir al demandante que obtuvo sentencia favorable que acredite la propiedad o posesión de la mercancía, resulta fuera de todo contexto legal, en tanto que, al ser declarada nula la resolución administrativa de la autoridad, procede restituir al gobernado en sus derechos violados, esto es, a la entrega material de los bienes que la autoridad ilegalmente le privó. (17)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2203/06-04-01-4.- Resuelto por la Sala Regional del Norte-Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 21 de agosto de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor por Ministerio de Ley: Lic. Ernesto Alonso García Rodríguez.- Secretaria: Lic. Afrodita María de Jesús Perales Torres.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD.- RESULTA INFUNDADO CUANDO DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS SE DESPRENDE QUE NO

EXISTE INEXACTITUD EN EL NOMBRE DE LA PARTE ACTORA.- El artículo 50, tercer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, regula que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, examinarán en su conjunto, los conceptos de impugnación, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación. En ese orden de ideas, las Salas aludidas, se encuentren obligadas al análisis en su conjunto de todas las constancias y argumentos aportados por las partes, y no tomar cada uno de estos elementos en forma aislada, a efecto de dilucidar lo efectivamente planteado. Por consiguiente, si la autoridad demandada sostiene la falta de personalidad del representante de la parte actora, porque en el Instrumento Notarial que exhibió para acreditar su personalidad, se cita el nombre de la persona moral que le otorgó esas facultades, el cual difiere con el nombre de la persona moral citada en el escrito inicial de demanda, pero sin embargo, de las diversas constancias que obran en autos, se desprende, que solo se trata de un error mecanográfico en el escrito inicial de demanda, al señalar el nombre de la persona moral actora, en el cual, se le agregaron incorrectamente dos letras, pero se deduce plenamente, el nombre correcto de la persona moral demandante, por lo tanto, los argumentos deben declararse infundados, al tratarse de la misma empresa, tanto la señalada en el Instrumento Notarial, como la indicada en el escrito inicial de demanda y no de diversas personas morales. (18)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 514/07-04-01-1.- Resuelto por la Sala Regional del Norte-Centro I, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 12 de septiembre de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor por Ministerio de Ley: Lic. Ernesto Alonso García Rodríguez.- Secretario: Lic. Gerardo Alfonso Chávez Chaparro.

PRIMERA SALA REGIONAL DEL GOLFO

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PAGOS EFECTUADOS POR UN TERCERO A CUENTA DEL CONTRIBUYENTE.- SE PUEDEN REALIZAR MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO DEL PROPIO CONTRIBUYENTE O MEDIANTE TRASPASOS DE CUENTAS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO, SIN QUE SEA UN REQUISITO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE TIPO DE OPERACIONES, QUE EL REGISTRO CONTABLE SE REALICE DE MANERA ESPECÍFICA.- El artículo 31, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el diverso 35 del Reglamento de la citada ley, establecen expresamente la posibilidad de que los pagos que se efectúen por un tercero a cuenta del contribuyente, se puedan efectuar mediante cheque nominativo del contribuyente o mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito, sin que sea un requisito para la realización de este tipo de operaciones, que el registro contable se realice de alguna manera específica, ya que no existe disposición alguna que obligue a la contribuyente a registrar en su contabilidad de alguna manera en particular, los movimientos relativos a los pagos que realiza a un tercero que efectuó a su vez pagos a cuenta de la contribuyente; pudiendo destacarse que la ley permite este tipo de movimientos con la única limitación de que se cuente con la documentación comprobatoria que acredite dicho pago, sin que en ningún momento se establezca en la legislación fiscal como un requisito para la procedencia de este tipo de pagos, que se registren contablemente en la cuenta de acreedores y no de deudores; por lo que si la contribuyente acredita haber efectuado el pago al tercero mediante traspasos electrónicos de su cuenta bancaria a la cuenta del tercero, en los términos que establece el artículo 35 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es improcedente su rechazo. (19)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 938/07-13-01-1.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 22

de noviembre de 2007, por mayoría de 2 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Instructor: Héctor Francisco Fernández Cruz.- Secretario: Lic. José Edgardo Rodríguez Sarabia.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA.- SI LA AUTORIDAD QUE LA EMITE LA FUNDA EN EL ARTÍCULO 52-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEBE CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA PAGOS PROVISIONALES O MENSUALES POR LOS CUALES YA SE PRESENTÓ EL DICTAMEN.- De conformidad a lo preceptuado en el último párrafo del artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, tratándose de pagos provisionales o mensuales sólo se aplicará el orden descrito en dicho artículo (relativo a requerir primero al Contador Público Registrado que formuló el dictamen la documentación e información necesaria; y si ésta fuera insuficiente o no se hubiera exhibido, requerir al contribuyente para que la exhiba) respecto de aquellos comprendidos en los periodos por los cuales ya se hubiera presentado el dictamen; por ello, si al emitir la orden de visita domiciliaria el contribuyente ya había presentado su dictamen fiscal por Contador Público Registrado, y tal orden se fundó -entre otros preceptos- en el referido artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, es evidente que la autoridad debe cumplir con el procedimiento que al efecto establece el precepto legal de referencia. (20)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 958/07-13-01-7.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de diciembre de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Héctor Francisco Fernández Cruz.- Secretaria: Lic. Isela Pérez Silva.

REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO FORESTAL

ORDEN EN OPERATIVO DE INSPECCIÓN.- NO ES NECESARIO QUE SE NOTIFIQUE PREVIAMENTE, EN EL CASO DE FLAGRANCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 175 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO FORESTAL.- El artículo 175 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal, establece que cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, detecte la posible comisión de infracciones a la ley o al reglamento en flagrancia y en caso de que el presunto infractor se niegue o no sepa firmar tal acta, se dejará constancia de esa situación. Dicho precepto también señala que por flagrancia se entiende las acciones en que los presuntos infractores sean sorprendidos en ejecución de hechos contrarios a la ley y al reglamento o, cuando después de realizados, sean perseguidos materialmente o alguien los señale como responsables de su comisión, siempre que se encuentren en posesión de los objetos o productos, materia de la infracción. De acuerdo con lo anterior, en el caso de que el presunto infractor sea sorprendido flagrantemente cometiendo una infracción como lo es la tala de árboles, y por no enfrentar a las autoridades se de a la fuga, no es necesario que la autoridad previamente notifique la orden de inspección, pues basta que levante acta circunstanciada de hechos, en términos de lo que dispone el artículo 175 del ordenamiento legal antes citado. Así las cosas, la falta de notificación de la orden no constituye ilegalidad alguna en la actuación de la autoridad, pues lo que se realiza no es una visita domiciliaria, sino un operativo en "flagrancia", mismo que reviste una naturaleza jurídica distinta, porque no se trata de un mandamiento de inspección dirigido específicamente al actor, sino un operativo en el que las autoridades sorprendieron a infractores de la ley o reglamento; máxime que el artículo 1 de la Ley de Desarrollo Forestal, sustentable es el de conservar y fomentar el medio ambiente por ser de orden público e interés general. (21)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2183/07-13-01-4.- Resuelto por la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 6 de diciembre de 2007, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Héctor Francisco Fernández Cruz.- Secretaria: Lic. María Antonieta Rodríguez García.

CRITERIOS AISLADOS DE SALAS REGIONALES PUBLICADOS DURANTE LA SEXTA ÉPOCA

Metropolitanas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Primera (SR-I)	0	2	0	0	0	0							2
Segunda (SR-II)	0	1	0	0	0	0							1
Tercera (SR-III)	0	0	0	0	0	0							0
Cuarta (SR-IV)	0	0	0	0	0	0							0
Quinta (SR-V)	0	0	0	0	0	3							3
Sexta (SR-VI)	0	0	0	1	0	0							1
Séptima (SR-XVIII)	0	0	0	0	0	0							0
Octava (SR-XIX)	0	0	0	0	0	0							0
Novena (SR-XX)	0	0	0	0	0	0							0
Décima (SR-XXI)	0	1	0	1	0	0							2
Décima Primera (SR-XXII)	0	0	0	0	0	0							0
TOTAL	0	4	0	2	0	3							9

CRITERIOS AISLADOS DE SALAS REGIONALES PUBLICADOS DURANTE LA SEXTA ÉPOCA

Foráneas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Noroeste I (Tijuana) (SR-XXV)	0	0	0	0	0	0							0
Noroeste II (Cd. Obregón) (SR-VII)	0	0	0	0	0	0							0
Noroeste III (Culiacán) (SR-XXXI)	0	0	0	3	5	1							9
Norte – Centro I (Chihuahua) (SR-XXX)	0	0	0	17	0	9							26
Primera del Norte – Centro II (Torreón) (SR-VIII)	0	7	0	5	3	0							15
Segunda del Norte – Centro II (SR-XXXII)	0	0	0	12	0	0							12
Tercera del Norte – Centro II (SR-XXXVII)	0	6	3	0	0	2							11
Primera del Noreste (Monterrey) (SR-IX)	0	6	0	0	0	0							6
Segunda del Noreste (Monterrey) (SR-XXIV)	0	0	0	0	0	0							0
Primera de Occidente (Guadalajara) (SR-X)	0	0	0	0	0	0							0
Segunda de Occidente (Guadalajara) (SR-XXVIII)	0	0	0	0	0	0							0
Tercera de Occidente (Guadalajara) (SR-XXXVIII)	0	0	0	0	0	0							0

CRITERIOS AISLADOS DE SALAS REGIONALES PUBLICADOS DURANTE LA SEXTA ÉPOCA
(continuación)

Foráneas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Centro I (Aguascalientes) (SR-XXIX)	0	0	0	0	0	0							0
Centro II (Querétaro) (SR-XXIII)	0	0	0	6	0	0							6
Centro III (Celaya) (SR-XI)	0	0	0	0	0	0							0
Primera Hidalgo – México (Tlalnepantla) (SR-XII-I)	0	0	0	1	0	0							1
Segunda Hidalgo – México (Tlalnepantla) (SR-XII-II)	0	12	0	1	0	0							13
Tercera Hidalgo – México (Tlalnepantla) (SR-XXXIII)	0	0	0	0	0	0							0
Primera de Oriente (Puebla) (SR-XIII)	0	0	0	19	0	0							19
Segunda de Oriente (Puebla) (SR-XXVI)	0	5	0	3	0	0							8
Tercera de Oriente (Puebla) (SR-XXXIX)	0	0	0	0	0	0							0
Primera del Golfo (Jalapa) (SR-XXVII)	0	0	0	13	0	5							18
Segunda del Golfo (Jalapa) (SR-XL)	0	2	0	3	0	0							5
Pacífico (Acapulco) (SR-XVII)	0	0	0	0	0	0							0

CRITERIOS AISLADOS DE SALAS REGIONALES PUBLICADOS DURANTE LA SEXTA ÉPOCA
(continuación)

Foráneas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Sureste (Oaxaca) (SR-XV)	0	0	0	0	0	0							0
Peninsular (Mérida) (SR-XVI)	0	13	0	0	0	0							13
Golfo – Norte (Cd. Victoria) (SR-XXXIV)	0	0	0	2	1	0							3
Chiapas – Tabasco (Tuxtla Gutiérrez) (SR-XXXV)	0	3	0	0	0	0							3
Caribe (Cancún) (SR-XXXVI)	0	9	0	6	0	0							15
Pacífico Centro (Morelia) (SR-XLI)	0	2	0	0	0	2							4
TOTAL	0	65	3	91	9	19							187

QUINTA PARTE

RESOLUCIONES Y VOTOS PARTICULARES

PLENO

VI-TASS-4
ACUERDOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL. PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO EN QUE SE IMPUGNEN, DEBE ATENDERSE A SU DENOMINACIÓN Y CARACTERÍSTICAS.-
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 3. Marzo 2008. p. 291

VI-TASS-5
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SUPUESTOS EN QUE, CONFORME A LA NUEVA LEY DE LA MATERIA, TIENE EL CARÁCTER DE PARTE DEMANDADA EN EL JUICIO, EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA U ORGANISMO DESCONCENTRADO O DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.-
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 3. Marzo 2008. p. 292

VI-TASS-6
REPRESENTACIÓN DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO, TRATÁNDOSE DE UN DECRETO O ACUERDO DE CARÁCTER GENERAL EMITIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.-
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 3. Marzo 2008. p. 293

VI-TASS-7
SUPUESTO DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO SEGUIDO EN CONTRA DE DECRETOS, ACUERDOS, RESOLUCIONES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL.-
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 3. Marzo 2008. p. 294

RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Núm. 438/06-04-01-8/809/07-PL-09-04, relacionado con las tesis aisladas VI-TASS-4, VI-TASS-5, VI-TASS-6, VI-TASS-7, publicadas en la R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 3. Marzo 2008. p. 291

C O N S I D E R A N D O :

(...)

CUARTO.- (...)

Es conveniente precisar, que si bien es cierto, en la doctrina se ha establecido que la litis en el juicio contencioso administrativo se fija con el o los conceptos de impugnación manifestados por la parte actora en su escrito inicial de demanda, y/o en su ampliación de demanda, cuando proceda, así como las causales de improcedencia, sobreseimiento y excepciones, plasmados por la parte demandada en su escrito de contestación de demanda y de contestación a la ampliación a ésta, cuando corresponda, así como las manifestaciones presentadas por la parte tercero interesado, cuando exista, mientras que los alegatos de las partes son sólo manifestaciones que insisten en los argumentos dados en los escritos de fijación de los puntos cuestionados y no tienen la fuerza procesal que la propia ley les reconoce a estos últimos.

Sin embargo, el artículo 8º último párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, señala que la procedencia del juicio será examinada aun de oficio, cuando se planteen argumentos que la cuestionen, por ser la misma de orden público.

Por tanto, aun cuando el Titular de la Secretaría de Estado de que se trata, plantee en su escrito de alegatos dicha causal, su análisis es obligatorio para esta Juzgadora, por lo que es ineludible resolverla.

Cobra aplicación la tesis V-TASS-195, sustentada por el Pleno de esta Sala Superior, consultable en la Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa No. 53, Quinta Época, Año V, Mayo de 2005, página 149, que refiere:

"**ALEGATOS DE LAS PARTES. ES VÁLIDO PLANTEAR EN ELLOS CUESTIONES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO**.- La litis en el jui-

cio contencioso administrativo se fija con el o los conceptos de impugnación manifestados por la parte actora en su escrito inicial de demanda, y/o en su ampliación de demanda, cuando proceda, así como las causales de improcedencia y sobreseimiento y excepciones, plasmados por la parte demandada en su escrito de contestación de demanda, y de contestación a la ampliación de demanda, cuando corresponda, así como las manifestaciones presentadas por la parte tercero interesado, cuando exista, mientras que los alegatos de las partes son manifestaciones que insisten en los argumentos dados en los escritos de referencia, y no tienen la fuerza procesal que la propia ley les reconoce a tales escritos; sin embargo, toda vez que el artículo 202 del Código Fiscal de la Federación, señala que la procedencia del juicio será examinada aun de oficio, cuando se planteen cuestiones relacionadas con la improcedencia del juicio, en el escrito de alegatos, su análisis es obligatorio, al ser la procedencia del juicio una cuestión de orden público que incluso se debe analizar de oficio, cuanto más cuando las partes la proponen. (5)

"Juicio No. 4471/02-17-10-1/531/03-PL-09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 3 de septiembre de 2004, por mayoría de 5 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
"(Tesis aprobada en sesión de 3 de septiembre de 2004)"

Cabe aclarar que si bien el criterio transcrito, hace referencia al artículo 202 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, en el caso es aplicable lo dispuesto en el artículo 8 último párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mismo que establece idéntica situación jurídica tratándose de la procedencia del juicio.

Asimismo, cabe referir que la autoridad en las causales que se analizan cita preceptos legales del Código Fiscal de la Federación, por lo que conviene precisar que el 1º de diciembre de 2005, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el

Decreto por el que se expide la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, disponiendo en los artículos transitorios lo siguiente:

TRANSITORIOS

"**Primero.-** La presente Ley entrará en vigor en toda la República el día 1º de enero del 2006.

"**Segundo.-** A partir de la entrada en vigor de esta Ley se derogan el Título VI del Código Fiscal de la Federación y los artículos que comprenden del 197 al 263 del citado ordenamiento legal, por lo que las leyes que remitan a esos preceptos se entenderán referidos a los correspondientes de esta Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"**Tercero.-** Quedan sin efectos las disposiciones legales, que contravengan o se opongan a lo preceptuado en esta Ley.

"**Cuarto.-** Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al momento de entrar en vigor la presente Ley, se tramitarán hasta su total resolución conforme a las disposiciones legales vigentes en el momento de presentación de la demanda."

(Énfasis añadido)

Como se advierte de la anterior transcripción, a partir del 1º de enero de 2006, fecha en que entró en vigor la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, quedó derogado el Título VI del Código Fiscal de la Federación, que comprende de los artículos 197 al 263 del citado Código y que regulaba el juicio contencioso administrativo.

Sin embargo, en el artículo Cuarto Transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el legislador puntualizó que los juicios que se

encontraran en trámite ante este Tribunal, al momento de entrar en vigor la citada Ley, se tramitarían hasta su total resolución conforme a las disposiciones legales vigentes en el momento de la presentación de la demanda.

En el caso que nos ocupa, como quedó señalado en el resultando primero de esta sentencia, la demanda de nulidad fue recibida el 10 de febrero 2006, en la Sala Regional del Norte Centro I de este Tribunal, hecho que se corrobora con el sello impreso en el escrito de demanda, visible a foja 1 del citado expediente, esto es, en la fecha en que ya se encontraba en vigor la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, razón por la que es incuestionable que esta Juzgadora se encuentra obligada a observar lo previsto en dicha ley.

➢ Precisado lo anterior, esta Juzgadora estima que las causales de improcedencia planteadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, son **parcialmente FUNDADAS**, pero sólo respecto a que no es parte en el juicio por cuanto hace a la impugnación de la resolución contenida en el oficio número BOO.E.22.1./S.U.0327 de fecha 29 de noviembre de 2005.

En efecto, asiste parcialmente la razón al Director General Adjunto de lo Contencioso Administrativo y Judicial, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en cuanto a que el Titular de dicha Secretaría no es parte en el presente juicio, básicamente, porque no emitió la resolución impugnada precisada bajo el oficio número BOO.E.22.1./S.U.0327 de fecha 29 de noviembre de 2005.

Respecto al Acuerdo Presidencial, si bien, tampoco fue emitido por el Titular de la Secretaría citada, existe una razón diversa por la que debe considerarse al mismo como parte, a la cual nos habremos de referir más adelante.

Para entender las conclusiones alcanzadas, se hace necesario precisar en relación con la primera, que si bien es cierto, conforme a lo dispuesto por el artículo 198 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en vigor hasta el 31 de diciembre de 2005, debía considerarse como parte demandada en el juicio contencioso adminis-

trativo tramitado ante este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al titular de la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, de la que dependiera la autoridad emisora de la resolución impugnada, sin embargo, la entrada en vigor el 1º de enero de 2006, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, trajo la innovación de suprimir como parte en el juicio a dicho Titular y sólo conservar con tal carácter en un supuesto excepcional cuando se controviertan resoluciones de autoridades de las entidades federativas coordinadas, emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación, respecto de las materias de la competencia del Tribunal, atento a lo previsto por el artículo 3º fracción II, inciso c), de la Ley en cita.

Lo anterior, se demuestra con el siguiente cuadro comparativo, entre los artículos 198 del Código Fiscal de la Federación y 3º fracción II, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes citados:

Código Fiscal de la Federación	**Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo**
"**Artículo 198**.- Son partes en el juicio contencioso administrativo: "**I**. El demandante. "**II**. Los demandados. Tendrán ese carácter: "a) La autoridad que dictó la resolución impugnada. "b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa. "**III**. **El titular de la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal**, Procuraduría General de la República o Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, **de la que dependa la autoridad mencionada en la fracción anterior**. En	"**Artículo 3º.-** Son partes en el juicio contencioso administrativo: "**I**. El demandante. "**II**. Los demandados. Tendrán ese carácter: "a) La autoridad que dictó la resolución impugnada. "b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa. "**c)** El jefe del Servicio de Administración Tributaria **o el titular de la dependencia** u organismo desconcentrado o descentralizado **que sea parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas, emitidas**

todo caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será parte en los juicios en que se controviertan actos de autoridades federativas coordinadas, emitidos con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación en ingresos federales.

"Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá apersonarse como parte en los juicios en que se controvierta el interés fiscal de la Federación.

"**IV**. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante.

"En cada escrito de demanda sólo podrá aparecer un demandante, salvo en los casos que se trate de la impugnación de resoluciones conexas que afecten los intereses jurídicos de dos o más personas, mismas que podrán promover el juicio de nulidad contra dichas resoluciones en un solo escrito de demanda, siempre que en el escrito designen de entre ellas mismas un representante común, en el caso de no hacer la designación, el magistrado instructor al admitir la demanda hará la designación.

El escrito de demanda en que promuevan dos o más personas en contravención de lo dispuesto en el párrafo anterior, se tendrá por no interpuesto."

con fundamento en convenios o acuerdos en materia **de coordinación, respecto de las materias de la competencia del Tribunal**.

"Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá apersonarse como parte en los juicios en que se controvierta el interés fiscal de la Federación.

"**III**. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante."

De la comparación entre los preceptos legales transcritos y atentos a la evolución del artículo 198 fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en vigor hasta el 31 de diciembre de 2005, precepto legal que hasta esa fecha rigió a la descripción de las partes en el juicio contencioso administrativo federal, se advierte que los cambios importantes adoptados por el artículo 3º, fracción II, inciso c) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, han sido:

1) Eliminar al titular de la "autoridad que dictó la resolución impugnada" (artículo 198, fracción III, del Código Fiscal de la Federación) y:

2) Sólo conservar el carácter, de parte demandada, en el Jefe del Servicio de Administración Tributaria en el Titular de la dependencia u organismos desconcentrados u descentralizado que sea parte en los juicios, en que se controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas, emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación, respecto de las materias de la competencia del Tribunal.

Este último se conforma de la similar redacción empleada en la segunda parte del referido precepto del Código en comento derogado, que limitaba su texto a la materia de coordinación en ingresos federales.

Por tanto, conforme a lo dispuesto por la fracción II, incisos a) y c) del artículo 3º fracción II, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a partir del 1º de enero de 2006, en que entró en vigor la mencionada ley, es parte demandada en este juicio contencioso administrativo, la autoridad que dictó la resolución impugnada, esto es, el Gerente Estatal en Chihuahua, de la Comisión Nacional del Agua y no puede ser parte en el juicio, respecto de la referida resolución individual impugnada, el Titular de la Secretaría de Estado de que se trata, esto es, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Bajo ese contexto, se tiene que uno de los actos impugnados es la resolución emitida por el Gerente Estatal en Chihuahua, de la Comisión Nacional del Agua, a

través de la cual se determina que no procede conceder una nueva concesión y anuencia de perforación de 5 aprovechamientos para uso agrícola, doméstico y pecuario en el predio identificado como San José de Parapetos, ubicado en el Ejido Santa Clara, Municipio de Namiquipa, Chihuahua, por lo que conforme a la naturaleza jurídica de la mencionada Comisión, ésta es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo cual resulta cierto, en términos de lo establecido en el artículo 2, fracción XXXI, inciso a), del Reglamento Interior de la propia Secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2003, que a la letra indica:

> "**Artículo 2.-** Para el estudio, planeación y despacho de sus asuntos, la Secretaría contará con los servidores públicos y unidades administrativas siguientes:
> "(...)
> "**XXXI. Órganos Desconcentrados**:
> "**a. Comisión Nacional del Agua;**
> "(...)"

Así pues, es cierto que la Comisión Nacional del Agua es un Órgano Desconcentrado de la mencionada Secretaría, siguiendo los lineamientos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 17, que prevé la existencia de los órganos desconcentrados y jerárquicamente subordinados a la dependencia, en consecuencia, resulta claro que en la especie, la Comisión Nacional del Agua está jerárquicamente subordinada al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sin embargo, como ya se apuntó en líneas precedentes esta última, por disposición del artículo 3º fracción II, inciso c) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no es parte en este juicio, por lo que se deberá sobreseer por improcedente el mismo, con relación al titular de la mencionada Secretaría, respecto a la resolución impugnada contenida en el oficio BOO.E.2.1/ S.U.0327 de 29 de noviembre de 2005.

➢ Por otra parte, es de precisar que, no obstante que en el inciso A) de este mismo considerando, se sobreseyó el juicio, respecto del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de enero de 1957, con el fin de resolver debidamente todos los planteamientos esgrimidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se procede al análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento vertidas en relación al mismo, en los siguientes términos:

El "Acuerdo que establece el Distrito de Riego de El Carmen en San Buenaventura y Villa Ahumada, Chih., y declara de utilidad pública la construcción de obras que lo formen y la adquisición de terrenos necesarios para alojarlas y operarlas", en el que también "se declara por tiempo indefinido veda para el otorgamiento de concesiones con aguas del Río de El Carmen y de toda su cuenca tributaria, así como con las aguas de la Laguna de los Patos y sus afluentes", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 1957, se precisa de la siguiente forma:

> "Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los nueve días del mes de enero de mil novecientos cincuenta y siete.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, **Adolfo Ruiz Cortines**.- Rúbrica.- El Secretario de Recursos Hidráulicos **Eduardo Chávez**.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura y Ganadería, **Gilberto Flores Muñoz**.- Rúbrica."

De la anterior transcripción, se desprende que el Acuerdo administrativo en comento, fue emitido por el entonces Presidente de la República el 9 de enero de 1957, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de ese mismo mes y año y refrendado en aquel momento, por los Secretarios de Recursos Hidráulicos y de Agricultura y Ganadería.

Ahora bien, para establecer la autoridad que debe ser llamada a juicio, tratándose de la impugnación de Decretos y Acuerdos de carácter general, debe atenderse a lo dispuesto por los artículos 3º fracción II y 5º, párrafo tercero de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que al respecto prevén:

"**Artículo 3º.-** Son partes en el juicio contencioso administrativo:
"**I.** El demandante.
"**II.** Los demandados. Tendrán ese carácter:
"**a) La autoridad que dictó la resolución impugnada.**
"(...)"

"**Artículo 5º.-** (...)
"**La representación de las autoridades corresponderá a las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, según lo disponga el Ejecutivo Federal en su reglamento o decreto respectivo** y en su caso, conforme lo disponga la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Tratándose de autoridades de las Entidades Federativas coordinadas, conforme lo establezcan las disposiciones locales.
"(...)"

(Énfasis añadido)

Ahora bien, aplicando lo dispuesto por el artículo 3º fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el caso que se resuelve, la autoridad que emitió el acuerdo administrativo general impugnado, es el Presidente de la República, quien resulta ser parte demandada en este juicio contencioso administrativo.

Sin embargo, la remisión que hace el párrafo tercero del artículo 5º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debe entenderse a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que debe atenderse a lo previsto por los artículos 2º fracción I, 13, primer párrafo, 14, segundo párrafo 16, primer párrafo, 18 y 32-Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en lo conducente disponen:

"**Artículo 2º.-** En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la

Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada:
"**I.** Secretarías de Estado.
"(...)"

"**Artículo 13.-** Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Presidente de la República deberán, para su validez y observancia constitucionales ir firmados por el secretario de Estado o el jefe del Departamento Administrativo respectivo, cuando se refieran a asuntos de la competencia de dos o más secretarías o departamentos, deberán ser **refrendados** por todos los titulares de los mismos.
"(...)"

"**Artículo 14.-** (...)
"En los juicios de amparo, **el Presidente de la República podrá ser representado por el titular de la dependencia a que corresponde el asunto, según la distribución de competencias**. (...)"

"**Artículo 16.- Corresponde originalmente a los titulares de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos el trámite y resolución de los asuntos de su competencia**, pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar en los funcionarios a que se refieren los artículos 14 y 15, cualesquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares. (...)"

"**Artículo 18.-** En el reglamento interior de cada una de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, que será expedido por el Presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias."

"**Artículo 32 bis.-** A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
"(...)
"**XXI.-** Dirigir los estudios, trabajos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y geohidrológicos, así como el sistema meteorológico nacional, y participar en los convenios internacionales sobre la materia;
"**XXII.-** Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la capacidad de gestión ambiental y el uso sustentable de recursos naturales; estimular que las instituciones de educación superior y los centros de investigación realicen programas de formación de especialistas, proporcionen conocimientos ambientales e impulsen la investigación científica y tecnológica en la materia; promover que los organismos de promoción de la cultura y los medios de comunicación social contribuyan a la formación de actitudes y valores de protección ambiental y de conservación de nuestro patrimonio natural; y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, fortalecer los contenidos ambientales de planes y programas de estudios y los materiales de enseñanza de los diversos niveles y modalidades de educación;
"**XXIII.-** Organizar, dirigir y reglamentar los trabajos de hidrología en cuencas, cauces y álveos de aguas nacionales, tanto superficiales como subterráneos, conforme a la ley de la materia;
"**XXIV.- Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de cuencas hidráulicas, vasos, manantiales y aguas de propiedad nacional, y de las zonas federales correspondientes**, con exclusión de los que se atribuya expresamente a otra dependencia; establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares que deban satisfacer las descargas de aguas residuales, cuando sean de jurisdicción federal; autorizar, en su caso, el vertimiento de aguas residuales en el mar, en coordinación con la Secretaría de Marina, cuando provenga de fuentes móviles o plataformas fijas; en cuencas, cauces y demás depósitos de aguas de propiedad nacional; y promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura y los servicios necesarios para el mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas;

"**XXV.-** Estudiar, proyectar, construir y conservar, con la participación que corresponda a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las obras de riego, desecación, drenaje, defensa y mejoramiento de terrenos y las de pequeña irrigación, de acuerdo con los programas formulados y que competa realizar al Gobierno Federal, por sí o en cooperación con las autoridades estatales y municipales o de particulares;
"**XXVI.-** Regular y vigilar la conservación de las corrientes, lagos y lagunas de jurisdicción federal, en la protección de cuencas alimentadoras y las obras de corrección torrencial;
"**XXVII.-** Manejar el sistema hidrológico del Valle de México;
"**XXVIII.-** Controlar los ríos y demás corrientes y ejecutar las obras de defensa contra inundaciones;
"**XXIX.-** Organizar y manejar la explotación de los sistemas nacionales de riego, con la intervención de los usuarios, en los términos que lo determinen las leyes, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
"**XXX.-** Ejecutar las obras hidráulicas que deriven de tratados internacionales;
"**XXXI.-** Intervenir, en su caso, en la dotación de agua a los centros de población e industrias; fomentar y apoyar técnicamente el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que realicen las autoridades locales; así como programar, proyectar, construir, administrar, operar y conservar por sí, o mediante el otorgamiento de la asignación o concesión que en su caso se requiera, o en los términos del convenio que se celebre, las obras y servicios de captación, potabilización, tratamiento de aguas residuales, conducción y suministro de aguas de jurisdicción federal;
"(...)
"**XXXV.-** Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente;
"(...)

"**XXXIX.- Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, y reconocer derechos, según corresponda, en materia de aguas, forestal, ecológica, explotación de la flora y fauna silvestre, y sobre playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar**;
"**XL.-** Diseñar y operar, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades, la adopción de instrumentos económicos para la protección, restauración y conservación del medio ambiente, y
"**XLI.-** Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos."

Conforme a los preceptos legales transcritos, se tiene que el Ejecutivo Federal, en el ejercicio de sus atribuciones para el despacho de los negocios del orden administrativo, será representado por los titulares de las Secretarías de Estado a que corresponda el asunto, según la distribución de su competencia prevista en el Reglamento interior de cada una de ellas.

De ahí que, en la aplicación de los asuntos administrativos, la competencia material originaria de las Secretarías de Estado, se encuentre atribuida a su Titular.

Por estas razones, en el artículo 14, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece que corresponde a los Secretarios de Estado la representación del Poder Ejecutivo, al ser éstos quienes de conformidad con los diversos artículos 13 y 16, de la misma Ley citada, tienen la facultad material originaria de refrendar los decretos y acuerdos administrativos expedidos por el Presidente de la República para su validez y observancia cuando se refieran a asuntos de su competencia.

Conforme a lo razonado, a consideración de esta Sentenciadora, tratándose del juicio contencioso administrativo tramitado ante este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Ejecutivo Federal, debe ser representado por el Titular de la Secretaría de Estado, que cuente con la competencia material originaria y que en el presente caso, lo es el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Ello considerando que es el propio artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el que prevé que en el Reglamento interior de cada una de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, que será expedido por el Presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas; siendo el caso que, en el Reglamento Interior de la referida Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los artículos 1º, 2º, 5º fracciones III, VI y VII, prevén lo siguiente:

"**Artículo 1.-** La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en lo sucesivo la Secretaría, como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos."

"**Artículo 2.-** Para el estudio, planeación y despacho de sus asuntos, la Secretaría contará con los servidores públicos y unidades administrativas siguientes:
"I. Secretario;
"(...)
"**XXXI. Órganos Desconcentrados:**
"**a. Comisión Nacional del Agua;**
"b. Instituto Nacional de Ecología;
"c. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y
"d. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
"(...)"

"**Artículo 5.- <u>El Secretario tendrá las facultades indelegables siguientes</u>:**
"I. Establecer, dirigir y controlar las políticas ambientales de la Secretaría, incluidos sus órganos desconcentrados y las entidades del Sector, de conformidad con la legislación aplicable y con las políticas nacionales, el Plan Nacional de Desarrollo y demás programas, objetivos y metas que determine el Presidente de la República, así como emitir las disposiciones de carácter ge-

neral, normas, lineamientos y políticas en ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes competan a la dependencia;
"II. Acordar con el Presidente de la República, los asuntos encomendados a la Secretaría y a las entidades del Sector que así lo ameriten, y desempeñar las comisiones y funciones que le confiera, manteniéndolo informado sobre el desarrollo de las mismas;
"**III. Proponer al Presidente de la República, los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, declaratorias, acuerdos y órdenes sobre los asuntos de la competencia de la Secretaría y del Sector;**
"IV. Proponer al Presidente de la República, las políticas y acciones que requiera la instrumentación de los programas sectoriales a su cargo;
"V. Dar cuenta al Congreso de la Unión, una vez abierto el periodo de sesiones ordinarias, del estado que guarda su ramo e informar, además, cuando cualquiera de las Cámaras lo convoque, así como en los casos en que se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a las actividades de la Secretaría y del Sector;
"**VI. Refrendar, para su validez y observancia constitucionales, los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes expedidos por el Presidente de la República, sobre los asuntos de la competencia de la Secretaría;**
"**VII. Representar al Presidente de la República en los juicios constitucionales de amparo, en los términos de los artículos 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 19 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 de la propia Constitución y su ley reglamentaria, en los casos en que lo determine el titular del Ejecutivo Federal;**
"(...)"

De las transcripciones anteriores, se advierte que el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, depende del Poder Ejecutivo Federal, quien tiene a su

cargo el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y además que tiene como facultad indelegable, entre otras:

> ➢ Proponer al Presidente de la República, los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, declaratorias, **acuerdos** y órdenes **sobre asuntos de su competencia**.
>
> ➢ **Refrendar**, para su validez y observancia constitucionales, los reglamentos, decretos, **acuerdos** y órdenes **expedidos por el Presidente de la República, sobre los asuntos de su competencia**.
>
> ➢ **Representar al Presidente de la República** en los juicios constitucionales de amparo, en términos de los artículos 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 19 de la Ley de Amparo, en los casos en que los determine el titular del Ejecutivo Federal.

De conformidad con los preceptos legales en comento, se llega a la conclusión de que la representación del Ejecutivo Federal, ante este Órgano Colegiado, se encuentra a cargo del Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien cuenta con la competencia originaria en materia hidrológica, no sólo para proponer a aquél la emisión de los acuerdos administrativos de carácter general respectivos, sino además, quien tiene la facultad de refrendar éstos, como en el caso se trata del "Acuerdo que establece el Distrito de Riego de El Carmen en San Buenaventura y Villa Ahumada, Chih., y declara de utilidad pública la construcción de obras que lo formen y la adquisición de terrenos necesarios para alojarlas y operarlas", en el que también "se declara por tiempo indefinido veda para el otorgamiento de concesiones con aguas del Río de El Carmen y de toda su cuenca tributaria, así como con las aguas de la Laguna de los Patos y sus afluentes", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 1957.

Lo que se desprende de la lectura integral que se llevó a cabo a: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a Ley de Aguas Nacionales y su Reglamen-

to, así como al Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; sin que la representación mencionada se encuentre conferida a ninguna otra autoridad administrativa de menor jerarquía al Titular de la referida Secretaría de Estado.

Cierto, es de señalar que las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, que son de interés, prevén:

LEY DE AGUAS NACIONALES

"**Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:**
"(...)
"**XII. 'Comisión Nacional del Agua': Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales**, con funciones de Derecho Público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a esta Ley corresponde tanto a ésta como a los órganos de autoridad a que la misma se refiere;
"(...)"

"**Artículo 8.- Son atribuciones del Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales:**
"I. Proponer al Ejecutivo Federal la política hídrica del país;
"**II. Proponer al Ejecutivo Federal los proyectos de ley, reglamentos, decretos y acuerdos relativos al sector;**
"III. Fungir como Presidente del Consejo Técnico de 'la Comisión';
"IV. Suscribir los instrumentos internacionales, que de acuerdo con la Ley sean de su competencia, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, e instrumentar lineamientos y estrategias para el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de aguas;

"V. Expedir las Normas Oficiales Mexicanas en materia hídrica en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a propuesta de 'la Comisión', y
"VI. Las que en materia hídrica le asignen específicamente las disposiciones legales, así como aquellas que le delegue el Titular del Ejecutivo Federal."

"**Capítulo III**
"**Comisión Nacional del Agua**

"**Artículo 9.-** 'La Comisión' es un órgano administrativo desconcentrado de 'la Secretaría', que se regula conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior.
" 'La Comisión' tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico.
"En el ejercicio de sus atribuciones, 'la Comisión' se organizará en dos modalidades:
"a. El Nivel Nacional, y
"b. El Nivel Regional Hidrológico - Administrativo, a través de sus Organismos de Cuenca.
"Las atribuciones, funciones y actividades específicas en materia operativa, ejecutiva, administrativa y jurídica, relativas al ámbito Federal en materia de aguas nacionales y su gestión, se realizarán a través de los Organismos de Cuenca, con las salvedades asentadas en la presente Ley.
"Son atribuciones de 'la Comisión' en su Nivel Nacional, las siguientes:
"I. Fungir como la Autoridad en materia de la cantidad y de la calidad de las aguas y su gestión en el territorio nacional y ejercer en consecuencia aquellas atribuciones que conforme a la presente Ley corresponden a la autoridad en materia hídrica, dentro del ámbito de la competencia federal, con apego a la

descentralización del sector agua, excepto las que debe ejercer directamente el Ejecutivo Federal o 'la Secretaría' y las que estén bajo la responsabilidad de los Gobiernos de los estados, del Distrito Federal o municipios;
"II. Formular la política hídrica nacional y proponerla al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de 'la Secretaría', así como dar seguimiento y evaluar de manera periódica el cumplimiento de dicha política;
"III. Integrar, formular y proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal, el Programa Nacional Hídrico, actualizarlo y vigilar su cumplimiento;
"IV. Elaborar programas especiales de carácter interregional e intercuencas en materia de aguas nacionales;
"V. Proponer los criterios y lineamientos que permitan dar unidad y congruencia a las acciones del Gobierno Federal en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes, y asegurar y vigilar la coherencia entre los respectivos programas y la asignación de recursos para su ejecución;
"VI. Emitir disposiciones de carácter general en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes;
"VII. Atender los asuntos y proyectos estratégicos y de seguridad nacional en materia hídrica;
"VIII. Formular y aplicar lineamientos técnicos y administrativos para jerarquizar inversiones en obras públicas federales de infraestructura hídrica y contribuir cuando le sea solicitado por estados, Distrito Federal y municipios, con lineamientos para la jerarquización de sus inversiones en la materia;
"IX. Programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales directamente o a través de contratos o concesiones con terceros, y realizar acciones que correspondan al ámbito federal para el aprovechamiento integral del agua, su regulación y control y la preservación de su cantidad y calidad, en los casos que correspondan o afecten a dos o más regiones hidrológico - administrativas, o que repercutan en tratados y acuerdos internacionales en cuencas transfronterizas, o cuando así lo disponga el Ejecutivo Federal, así como en los demás casos que establezca esta Ley o sus reglamentos, que queden reservados para la actuación directa de 'la Comisión' en su nivel nacional;

"X. Apoyar, concesionar, contratar, convenir y normar las obras de infraestructura hídrica que se realicen con recursos totales o parciales de la federación o con su aval o garantía, en coordinación con otras dependencias y entidades federales, con el gobierno del Distrito Federal, con gobiernos de los estados que correspondan y, por medio de éstos, con los gobiernos de los municipios beneficiados con dichas obras, en los casos establecidos en la fracción anterior;

"XI. Operar, conservar y mantener obras y servicios hidráulicos rurales y urbanos cuando el Titular del Ejecutivo Federal así lo disponga en casos de seguridad nacional o de carácter estratégico de conformidad con las Leyes en la materia;

"XII. Participar en la concertación de créditos y otros mecanismos financieros, incluso sobre la participación de terceros en el financiamiento de obras y servicios, que apoyen la construcción y el desarrollo de las obras y servicios federales hidráulicos; igualmente podrá fomentar y apoyar gestiones de crédito y otros mecanismos financieros en favor de estados, Distrito Federal y municipios conforme a sus atribuciones y a solicitud de parte;

"XIII. Fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación y reúso en el territorio nacional, para lo cual se coordinará en lo conducente con los Gobiernos de los estados, y a través de éstos, con los municipios. Esto no afectará las disposiciones, facultades y responsabilidades municipales y estatales, en la coordinación y prestación de los servicios referidos;

"XIV. Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado; los de saneamiento, tratamiento y reúso de aguas; los de riego o drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones en los casos previstos en la fracción IX del presente Artículo; contratar, concesionar o descentralizar la prestación de los servicios que sean de su competencia o que así convenga con los Gobiernos Estatales y, por conducto de éstos, con los Municipales, o con terceros;

"XV. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal el establecimiento de Distritos de Riego y en su caso, la expropiación de los bienes inmuebles correspondientes;
"XVI. Regular los servicios de riego en distritos y unidades de riego en el territorio nacional, e integrar, con el concurso de sus Organismos de Cuenca, los censos de infraestructura, los volúmenes entregados y aprovechados, así como los padrones de usuarios, el estado que guarda la infraestructura y los servicios. Esto no afectará los procesos de descentralización y desconcentración de atribuciones y actividades del ámbito federal, ni las disposiciones, facultades y responsabilidades estatales y municipales, así como de asociaciones, sociedades y otras organizaciones de usuarios de riego, en la coordinación y prestación de los servicios referidos;
"XVII. Administrar y custodiar las aguas nacionales y los bienes nacionales a que se refiere el Artículo 113 de esta Ley, y preservar y controlar la calidad de las mismas, en el ámbito nacional;
"XVIII. Establecer las prioridades nacionales en lo concerniente a la administración y gestión de las aguas nacionales y de los bienes nacionales inherentes a que se refiere la presente Ley;
"XIX. Acreditar, promover, y apoyar la organización y participación de los usuarios en el ámbito nacional, y apoyarse en lo conducente en los gobiernos estatales, para realizar lo propio en los ámbitos estatal y municipal, para mejorar la gestión del agua, y fomentar su participación amplia, informada y con capacidad de tomar decisiones y asumir compromisos, en términos de Ley;
"XX. Expedir títulos de concesión, asignación o permiso de descarga a que se refiere la presente Ley y sus reglamentos, reconocer derechos y llevar el Registro Público de Derechos de Agua;
"XXI. Conciliar y, en su caso, fungir a petición de los usuarios, como árbitro en la prevención, mitigación y solución de conflictos relacionados con el agua y su gestión, en los términos de los reglamentos de esta Ley;
"XXII. Analizar y resolver con el concurso de las partes que correspondan, los problemas y conflictos derivados de la explotación, uso, aprovechamiento

o conservación de las aguas nacionales entre los usos y usuarios, en los casos establecidos en la fracción IX del presente Artículo;
"XXIII. Celebrar convenios con entidades o instituciones extranjeras y organismos afines para la asistencia y cooperación técnica, intercambio de información relacionada con el cumplimiento de sus objetivos y funciones, e intercambio y capacitación de recursos humanos especializados, bajo los principios de reciprocidad y beneficios comunes, en el marco de los convenios y acuerdos que suscriban la Secretaría de Relaciones Exteriores, y 'la Secretaría', en su caso, con otros países con el propósito de fomentar la cooperación técnica, científica y administrativa en materia de recursos hídricos y su gestión integrada;
"XXIV. Concertar con los interesados, en el ámbito nacional, las medidas que correspondan, con apego a esta Ley y sus reglamentos, así como las demás disposiciones aplicables, cuando la adopción de acciones necesarias pudieren afectar los derechos de concesionarios y asignatarios de aguas nacionales;
"XXV. Celebrar convenios de coordinación con la Federación, el Distrito Federal, estados, y a través de éstos, con los municipios y sus respectivas administraciones públicas, así como de concertación con el sector social y privado, y favorecer, en el ámbito de su competencia, en forma sistemática y con medidas específicas, la descentralización de la gestión de los recursos hídricos en términos de Ley;
"XXVI. Promover en el ámbito nacional el uso eficiente del agua y su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico, e impulsar el desarrollo de una cultura del agua que considere a este elemento como recurso vital, escaso y de alto valor económico, social y ambiental, y que contribuya a lograr la gestión integrada de los recursos hídricos;
"XXVII. Realizar periódicamente en el ámbito nacional los estudios sobre la valoración económica y financiera del agua por fuente de suministro, localidad y tipo de uso, conforme a las disposiciones que dicte la Autoridad en la materia;
"XXVIII. Estudiar, con el concurso de los Consejos de Cuenca y Organismos de Cuenca, los montos recomendables para el cobro de derechos de agua y

tarifas de cuenca, incluyendo el cobro por extracción de aguas nacionales, descarga de aguas residuales y servicios ambientales vinculados con el agua y su gestión, para ponerlos a consideración de las Autoridades correspondientes en términos de Ley;

"XXIX. Ejercer las atribuciones fiscales en materia de administración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones y aprovechamientos que se le destinen o en los casos que señalen las leyes respectivas, conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación;

"XXX. Promover y propiciar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos, así como difundir conocimientos en materia de gestión de los recursos hídricos, con el propósito de fortalecer sus acciones y mejorar la calidad de sus servicios, para lo cual se coordinará en lo conducente con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua;

"XXXI. Proponer a la 'Secretaría' las Normas Oficiales Mexicanas en materia hídrica;

"XXXII. Emitir disposiciones sobre la expedición de títulos de concesión, asignación o permiso de descarga, así como de permisos de diversa índole a que se refiere la presente Ley;

"XXXIII. Emitir la normatividad a que deberán apegarse los Organismos de Cuenca en el ejercicio de sus funciones, en congruencia con las disposiciones contenidas en la presente Ley, incluyendo la administración de los recursos que se les destinen y verificar su cumplimiento;

"XXXIV. Emitir disposiciones sobre la estructuración y operación del Registro Público de Derechos de Agua a nivel nacional, apoyarlo financieramente y coordinarlo; particularmente, 'la Comisión' realizará las gestiones necesarias conforme a la Ley para operar regionalmente dicho Registro y sus funciones, a través de los Organismos de Cuenca;

"XXXV. Realizar toda clase de actos jurídicos que sean necesarios para cumplir con sus atribuciones, así como aquellos que fueren necesarios para la administración de los recursos y bienes a su cargo;

"XXXVI. Vigilar el cumplimiento y aplicación de la presente Ley, interpretarla para efectos administrativos, aplicar las sanciones y ejercer los actos de autoridad en la materia que no estén reservados al Ejecutivo Federal;
"XXXVII. Actuar con autonomía técnica, administrativa, presupuestal y ejecutiva en el manejo de los recursos que se le destinen y de los bienes que tenga en los términos de esta Ley, así como con autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto y de los objetivos y metas señaladas en sus programas y presupuesto;
"XXXVIII. Expedir en cada caso, respecto de los bienes de propiedad nacional a que se refiere esta Ley, la declaratoria correspondiente, que se publicará en el Diario Oficial de la Federación;
"XXXIX. Expedir las declaratorias de clasificación de los cuerpos de agua nacionales a que se refiere la presente Ley;
"XL. Participar en el sistema nacional de protección civil y apoyar en la aplicación de los planes y programas de carácter federal para prevenir y atender situaciones de emergencia, causadas por fenómenos hidrometeorológicos extremos;
"XLI. Definir los lineamientos técnicos en materia de gestión de aguas nacionales, cuencas, obras y servicios, para considerarlos en la elaboración de programas, reglamentaciones y decretos de vedas y reserva;
"**XLII. <u>Proponer</u> al Titular del Poder Ejecutivo Federal la expedición de Decretos para el establecimiento, modificación o extinción de Zonas de Veda y de Zonas Reglamentadas para la Extracción y Distribución de Aguas Nacionales y para su explotación, uso o aprovechamiento, así como Declaratorias de Reserva de Aguas Nacionales y de zonas de desastre;**
"XLIII. Realizar las declaratorias de clasificación de zonas de alto riesgo por inundación y elaborar los atlas de riesgos conducentes;
"XLIV. Coordinar el servicio meteorológico nacional y ejercer las funciones en dicha materia;
"XLV. Mantener actualizado y hacer público periódicamente el inventario de las aguas nacionales, y de sus bienes públicos inherentes y de la infraestructura

hidráulica federal; clasificar las aguas de acuerdo con los usos, y elaborar balances en cantidad y calidad del agua por regiones hidrológicas y cuencas hidrológicas;

"XLVI. Mejorar y difundir permanentemente en el ámbito nacional el conocimiento sobre la ocurrencia del agua en el ciclo hidrológico, la oferta y demanda de agua, los inventarios de agua, suelo, usos y usuarios y de información pertinente vinculada con el agua y su gestión, con el apoyo que considere necesario, por parte de otras instancias del orden federal, de gobiernos estatales y municipales, así como de usuarios del agua, de organizaciones de la sociedad y de particulares;

"XLVII. Integrar el Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del agua, con la participación de los Organismos de Cuenca, en coordinación con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal y con los Consejos de Cuenca, y en concordancia con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

"XLVIII. Resolver de manera expedita las solicitudes de prórroga de concesión, asignación y permisos de descarga, así como permisos provisionales para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales que le sean presentadas en los plazos establecidos en la presente Ley, conforme a los casos establecidos en la fracción IX del presente Artículo;

"XLIX. Presentar las denuncias que correspondan ante autoridades competentes cuando, como resultado del ejercicio de sus atribuciones, tenga conocimiento de actos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación administrativa en materia de aguas o a las leyes penales;

"L. En situaciones de emergencia, escasez extrema, o sobreexplotación, tomar las medidas necesarias, normalmente de carácter transitorio, las cuales cesarán en su aplicación cuando 'la Comisión' así lo determine, para garantizar el abastecimiento del uso doméstico y público urbano, a través de la expedición de acuerdos de carácter general; cuando estas acciones pudieren afectar los derechos de concesionarios y asignatarios de aguas nacionales, concertar con los interesados las medidas que correspondan, con apego a esta Ley y sus reglamentos;

"LI. Otorgar los apoyos técnicos que le sean solicitados por 'la Procuraduría' en el ejercicio de sus facultades en materia de reparación del daño a los recursos hídricos y su medio, a ecosistemas vitales y al ambiente;
"LII. Regular la transmisión de derechos;
"LIII. Adquirir los bienes necesarios para los fines que le son propios, y
"LIV. Realizar las demás que señalen las disposiciones legales o reglamentarias."

Conforme a los artículos transcritos, se desprende que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es el superior jerárquico de la Comisión Nacional del Agua, quien tiene el carácter de un órgano desconcentrado de aquélla.

Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 9 de la citada Ley, dentro de las atribuciones de la Comisión Nacional del Agua, si bien, se encuentra la de proponer al titular del Poder Ejecutivo Federal la expedición de Decretos para el establecimiento, modificación o extinción de zonas de veda, tal como se precisó anteriormente, no se advierte que tenga la facultad de representar al Titular del Ejecutivo Federal, como tampoco para refrendar, entre otros, los acuerdos que emita éste, ya que ello es facultad del Titular de la Secretaría de Estado en los asuntos de su competencia.

Lo anterior, se ve reforzado atendiendo a que es la propia Unidad Jurídica de la Gerencia Estatal en Chihuahua, de la Comisión Nacional del Agua, al producir la contestación en representación de la autoridad demandada, en términos del artículo 52 fracciones I, VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien solicitó se regularizara el procedimiento del presente juicio, para que fuera emplazada al mismo el Titular de la mencionada Secretaría, en defensa del Acuerdo administrativo de carácter general impugnado.

Por lo tanto, se puede concluir que se encuentra debidamente emplazado a juicio el Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por los fundamentos y motivos antes expuestos, lo cual se confirma con la tesis jurisprudencial P./J. 109/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XIV, Septiembre de 2001, página 1104, que al respecto refiere:

> "**SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL DECRETO IMPUGNADO.-** Este Alto Tribunal ha sustentado el criterio de que los 'órganos de gobierno derivados', es decir, aquellos que no tienen delimitada su esfera de competencia en la Constitución Federal, sino en una ley, no pueden tener legitimación activa en las controversias constitucionales ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jurídica del medio de control constitucional, pero que en cuanto a la legitimación pasiva, no se requiere, necesariamente, ser un órgano originario del Estado, por lo que, en cada caso particular debe analizarse la legitimación atendiendo al principio de supremacía constitucional, a la finalidad perseguida con este instrumento procesal y al espectro de su tutela jurídica. Por tanto, si conforme a los artículos 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el refrendo de los decretos y reglamentos del jefe del Ejecutivo, a cargo de los secretarios de Estado reviste autonomía, por constituir un medio de control del ejercicio del Poder Ejecutivo Federal, es de concluirse que los referidos funcionarios cuentan con legitimación pasiva en la controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 10, fracción II y 11, segundo párrafo, de la ley reglamentaria de la materia.
>
> "Controversia constitucional 5/2001. Jefe del Gobierno del Distrito Federal. 4 de septiembre de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y César de Jesús Molina Suárez."
>
> (El subrayado es de origen)

Es de advertir que, se llega a la determinación de que fue debidamente emplazado a juicio el Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, atendiendo, además de todo lo fundado y motivado anteriormente, a la evolución histórica que tuvieron las extintas Secretarias de Recursos Hidráulicos y de Agricultura y Ganadería, que si bien, fueron las que refrendaron en su oportunidad el multicitado Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 1957, lo cierto es que la facultad que para tal efecto éstas tenían, actualmente se encuentra conferida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como a continuación se acredita:

La Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, creó el **1 de enero de 1947**, **la Secretaría de Recursos Hidráulicos**, encomendándole las facultades de la Comisión Nacional de Irrigación, a excepción de lo relacionado con los distritos de riego y con la conservación de suelos, los cuales por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del **31 de diciembre de 1946**, pasaron a depender de **la Secretaría de Agricultura y Ganadería**.

Por su parte, **la Secretaría de Agricultura y Ganadería** estaba organizada en forma subsectorial representativa de la especialización de funciones agrícolas, pecuarias y forestales; en el nivel foráneo existían 32 agencias generales, las cuales reflejaban a las direcciones generales del nivel central.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del **22 de diciembre de 1976**, da origen a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, confiriéndole las atribuciones que correspondían a las extintas Secretarías de Agricultura y Ganadería, por una parte, y a la de Recursos Hidráulicos, por otra.

Con la publicación del Reglamento Interior de la misma Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el Diario Oficial de la Federación del **12 de agosto de 1977**, quedan formalizadas las responsabilidades asignadas a las diversas unidades administrativas que la conformaron durante este año.

En 1983, con la emisión del Plan Nacional de Desarrollo, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos asume la coordinación del Programa de Desarrollo Rural, y por lo tanto la responsabilidad de procurar la convergencia de acciones para dar integralidad al desarrollo del campo mexicano.

En 1985, se dio la integración en el nivel central de las Subsecretarías de Agricultura, Ganadería y Forestal, que vino a significar en las Delegaciones el agrupamiento de las áreas que desarrollaban estas funciones.

En este marco, el **16 de julio de 1987**, aparece publicado el Acuerdo mediante el cual se establecen los Distritos de Desarrollo Rural, y el **28 de enero de 1988**, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Distritos de Desarrollo Rural, como un esfuerzo más del estado mexicano para establecerlos como instancias para armonizar y dar congruencia a las acciones desarrolladas en las áreas de riego y de temporal, así como equilibrar la canalización de recursos de forma tal que, gradualmente se disminuya el desarrollo polarizado del País.

Las nuevas responsabilidades asignadas a la Secretaría en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, así como en el Programa de Desarrollo Rural Integral 1985-1988, referidas a la coordinación de las acciones del Estado para desarrollar de manera integral al campo mexicano, hicieron imperativa la redefinición de estructuras a nivel Central y a nivel Delegacional.

En 1989, se reordenó la función y la estructura en las delegaciones, donde se consideró que éstas asumieran las facultades rectoras de fomento, sanidad, liderazgo y concertación en el agro; así mismo, las actividades de ejecución de obras y servicios de apoyo a la producción agropecuaria y forestal, fueran realizadas por los órganos desconcentrados y las entidades sectorizadas de la dependencia.

En su nivel desconcentrado se transformó constituyendo a la "Subsecretaría 1a. Infraestructura Hidráulica" en **Comisión Nacional del Agua como órgano ad-**

ministrativo desconcentrado, con facultades para atender y resolver lo relativo al recurso hidráulico nacional, recreando en su seno a los Distritos de Riego.

Las modificaciones a la Estructura Orgánica y funcional de la Secretaría en **1993** fueron resultado, entre otros de:

- Las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial del **25 de mayo de 1992**.

Fue así como el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del **28 de diciembre de 1994**, modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, asignando a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, atribuciones que en materia forestal, y de administración del agua venían cumpliendo la Secretaría de Recursos Hidráulicos y la Comisión Nacional del Agua respectivamente, así mismo determina el nombre de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y sus nuevas atribuciones.

Posteriormente, **en 1995** la Secretaría cambiaría su denominación por la de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ya que **los asuntos relacionados con los recursos hidráulicos, pasó a ser competencia de la recién creada Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca**.

Secretarías de Estado, que más tarde con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el **30 de noviembre de 2000 y 25 de febrero de 2003**, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se les denomina, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, respectivamente.

Conforme a los antecedentes históricos antes precisados, es evidente que si a partir de 1995, los asuntos relacionados con los recursos hidráulicos, pasaron a ser competencia de la actual Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a juicio de esta Sentenciadora, la defensa del "Acuerdo que establece el Distrito de

Riego de El Carmen en San Buenaventura y Villa Ahumada, Chih., y declara de utilidad pública la construcción de obras que lo formen y la adquisición de terrenos necesarios para alojarlas y operarlas", en el que también "se declara por tiempo indefinido veda para el otorgamiento de concesiones con aguas del Río de El Carmen y de toda su cuenca tributaria, así como con las aguas de la Laguna de los Patos y sus afluentes", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 1957, cuya legalidad se controvierte en este juicio, corresponde a dicha Secretaría.

En ese orden de ideas, resulta evidente que por cuanto hace a la impugnación del "Acuerdo que establece el Distrito de Riego de El Carmen en San Buenaventura y Villa Ahumada, Chih., y declara de utilidad pública la construcción de obras que lo formen y la adquisición de terrenos necesarios para alojarlas y operarlas", en el que también "se declara por tiempo indefinido veda para el otorgamiento de concesiones con aguas del Río de El Carmen y de toda su cuenca tributaria, así como con las aguas de la Laguna de los Patos y sus afluentes", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 1957, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue debidamente llamada a juicio.

Tampoco se actualiza en el caso lo dispuesto por la fracción XI, del artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el que se establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe la resolución o acto impugnados, pues contrariamente a su afirmación, existe la impugnación del Acuerdo de carácter General, como quedó establecido en el resultando 1º de este fallo; sin embargo, el juicio con respecto a la impugnación de éste fue sobreseído, en los términos apuntados en este mismo considerando cuarto, en su inciso A).

Por último, tampoco resulta cierta la afirmación de la referida Secretaría en el sentido de que hay omisión de conceptos de impugnación en la demanda, en contra del mencionado acuerdo administrativo de carácter general, ya que basta con remitirse al escrito inicial de ésta para percatarse de que en la misma se plantean diversos argumentos tendientes a controvertir su legalidad, por lo que no se actualizaría lo dispuesto por la fracción X del artículo 8, de la Ley Federal de Procedimiento Con-

tencioso Administrativo, en virtud de que en esa hipótesis normativa se prevé la omisión total de conceptos de impugnación y no como lo pretende la demandada, que no se impute un agravio directo a determinada autoridad, no obstante ello es de insistir que, el mismo fue sobreseído.

En esa tesitura, resulta claro que las causales de improcedencia en estudio son parcialmente fundadas, únicamente por cuanto a tener como autoridad demandada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, respecto a la impugnación de la resolución contenida en el oficio número BOO.E.22.1./S.U.0327 de 29 de noviembre de 2005, en los términos que se precisan en el artículo 3º fracción II, inciso c) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pero no sería así, por cuanto a la impugnación del "Acuerdo que establece el Distrito de Riego de El Carmen en San Buenaventura y Villa Ahumada, Chih., y declara de utilidad pública la construcción de obras que lo formen y la adquisición de terrenos necesarios para alojarlas y operarlas", en el que también "se declara por tiempo indefinido veda para el otorgamiento de concesiones con aguas del Río de El Carmen y de toda su cuenca tributaria, así como con las aguas de la Laguna de los Patos y sus afluentes", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 1957.

Sin embargo, no obstante que no procede el sobreseimento del juicio respecto a tener como autoridad demandada a la Secretaría de Estado tantas veces citada, respecto a la impugnación del Acuerdo administrativo de carácter general, lo cierto es que sí procede su sobreseimiento, en los términos previstos por los artículos 8º fracción IV y 9º fracción II y último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo al quedar plenamente demostrado en el inciso A) de este cuarto considerando, que el acto concreto e individualizado que se controvierte, es decir, el oficio número BOO.E.22.1/S.U.0327, de fecha 29 de noviembre de 2005, no constituye el primer acto de aplicación, del Acuerdo administrativo mencionado, siendo tal circunstancia suficiente para sobreseer el juicio, respecto a la impugnación de este último, con fundamento en los preceptos legales aquí citados.

(...)

Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 fracciones IV, XI y XVI y 9º fracción II y último párrafo, 49, 50 y 52 fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 48 fracción I, incisos a) y b) de la misma Ley y 16 fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se resuelve:

I.- Las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, resultaron parcialmente fundadas, en consecuencia;

II.- Se sobresee el presente juicio, respecto a tener como autoridad demandada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conforme a los razonamientos y fundamentos precisados en el considerando cuarto, inciso B) de esta sentencia, únicamente por cuanto a la resolución contenida en el oficio número BOO.E.22.1/S.U.-0327, de fecha 29 de noviembre de 2005.

III.- Se sobresee el juicio, únicamente por cuanto a la impugnación que del Acuerdo o Regla Administrativa de Carácter General publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 1957, señalado en el resultando 1º de este fallo, por los fundamentos y motivos planteados en el considerando cuarto, inciso A), del mismo.

IV.- La parte actora no acreditó su pretensión, por lo tanto;

V.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada contenida en el oficio número BOO.E.22.1/S.U.-0327 de fecha 29 de noviembre de 2005, precisada en el resultando 1º de esta sentencia, por los fundamentos y motivos señalados en el considerando quinto, inciso D.3), puntos C, D, E, F y G, de la misma.

VI.- NOTIFÍQUESE.- Con copia autorizada de la presente resolución, remítase el expediente a la SALA REGIONAL DEL NORTE CENTRO I, de este Tribu-

nal, una vez que se haya resuelto en definitiva y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 11 de febrero de 2008, por mayoría de 5 votos a favor de los CC. Magistrados Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Luis Malpica y de Lamadrid, Luis Carballo Balvanera y Guillermo Domínguez Belloc; 2 votos con los resolutivos de los CC. Magistrados Jorge Alberto García Cáceres y Francisco Cuevas Godínez y 4 votos en contra de los CC. Magistrados María del Consuelo Villalobos Ortíz, Alejandro Sánchez Hernández, Silvia Eugenia Díaz Vega y Olga Hernández Espíndola. Se reservaron su derecho para formular voto particular los CC. Magistrados Olga Hernández Espíndola y Alejandro Sánchez Hernández.

Fue Ponente en el presente asunto el Magistrado Luis Carballo Balvanera, cuya ponencia se aprobó.

Se formuló el presente engrose el 28 de febrero de 2008 y con fundamento en los artículos 30, fracción V y 47, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, firma el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA C. MAGISTRADA OLGA HERNÁNDEZ ESPÍNDOLA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 438/06-04-01-8/809/07-PL-09-04, relacionado con las tesis aisladas VI-TASS-4, VI-TASS-5, VI-TASS-6, VI-TASS-7, publicadas en la R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 3. Marzo 2008. p. 291

No comparto el método y conceptos del estudio vertido en la sentencia pronunciada en el juicio 438/06-04-01-8/809/07-PL-09-04 en el que se pronuncia el sobreseimiento del mismo, -**resolutivo II**- respecto del Acuerdo de carácter general

que establece el Distrito de riego de El Carmen en San Buenaventura y Villa Ahumada, Chih., y se declara de utilidad pública la construcción de obras que lo formen y la adquisición de terrenos necesarios para alojarlas y operarlas declarando por tiempo indefinido veda para el otorgamiento de concesiones con aguas del Río de El Carmen y de su cuenca tributaria, así como también la de Laguna de Los Patos y sus afluentes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 1957.

Lo anterior es así, porque con tal determinación se deja en indefensión al enjuiciante por lo siguiente:

1.- En efecto en el contencioso de que se trata, y bajo la vigencia de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a partir del 1o de enero de 2006, el demandante impugnó el día 10 de febrero de 2006, por un lado el acuerdo ya referido en primer término, y por el otro, la resolución a la que le atribuye el carácter de primer acto de aplicación emitida en el oficio número BOO.E.22.1./S.U.0327 de fecha 29 de noviembre de 2005, emitida por el Gerente Estatal de la Comisión Nacional del Agua, en la que resuelve que es improcedente otorgar nueva concesión de perforación de cinco aprovechamientos de aguas nacionales en el predio de San José de Parapetos, Ejido Santa Clara, Municipio de Naquipa, Chih.

No coincido con el estudio sobre la naturaleza del Acuerdo de carácter general, que invoca el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, especialmente su segundo párrafo, relativo a la **procedencia del juicio contra acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación**.

En el artículo CUARTO del Acuerdo de mérito se determinó que excepto cuando se trate de alumbramiento para usos domésticos a partir de la fecha en que este acuerdo entre en vigor **nadie podrá efectuar: alumbramientos del agua del subsuelo dentro de la zona vedada sin previo permiso por escrito de la Secretaría de Recursos Hidráulicos la que sólo lo expedirá en los casos que de los**

estudios respectivos se deduzca que no se causarán los daños que con el establecimiento de la veda tratan de evitarse. Al efecto, los interesados en alumbrar aguas del subsuelo dentro de la zona vedada, inclusive compañías y contratistas particulares que las realicen, no podrán efectuarlas sin contar previamente con el permiso correspondiente, y de obtenerlo estarán obligados a realizar las obras de conformidad con las especificaciones que en el permiso se fijan por dicha Secretaría.

En la página 24 del fallo, CONSIDERANDO CUARTO, apartado A), se analiza la naturaleza del acto administrativo desde un punto de vista formal y concluye que es una norma de carácter general emitida por el Titular del Ejecutivo Federal y que desde el punto de vista material es un acto de aplicación de las leyes federales en materia de aguas nacionales, que es obligatorio tanto para las Secretarías de Estado que integran la administración pública como para los particulares, su objetivo está acotado a una región determinada y se concluye que es plenamente coincidente con el artículo 2o, segundo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para considerarlo un acuerdo de carácter general, de donde resulta que el interesado puede controvertirlo en unión del primer acto de aplicación, siendo el caso que al surtir plenos efectos a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, "esto es, el 30 de enero de 1957, fecha en que si bien esta Juzgadora no contaba con facultades para conocer de la impugnación de resoluciones de carácter general, no menos lo es que el actor tuvo expedita la vía para impugnarlo ante el órgano de control conducente para esos efectos, y al no hacerlo así, lo consintió".

Con la apreciación del acuerdo como consentido, se concluye que si el actor impugna el acuerdo ya referido en este juicio al aducir que la resolución definitiva contenida en el oficio BOO.E.22.1./S.U.0327 de 29 de noviembre de 2005 es el primer acto de aplicación del mismo, fue emitida por el Gerente Estatal en Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua, y a través de la cual resuelve que es improcedente acceder a su solicitud para nueva concesión y anuencia de perforación de 5 aprovechamientos de aguas nacionales, ubicados en el predio San José de Parapetos, en el

Ejido Santa Clara, Municipio de Namiquipa, Chihuahua, la sentencia de la que disiento parte de una consideración inexacta.

Ello es así, pues se sostiene que dicha resolución no resulta ser el primer acto de aplicación del acuerdo multicitado, ya que el mismo fue aplicado por primera ocasión en el diverso oficio BOO.710.2/1560 de 21 de septiembre de 1992 (caso número 76) por la Gerencia Estatal de Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua; el propio actor en su demanda reconoce que mediante este oficio la autoridad citada le autorizó la perforación de pozos para aguas subterráneas para usos agrícolas, y en éste se aplicó el acuerdo que ahora combate, mismo en el que se declaró por tiempo indefinido veda, de donde el consentimiento por parte del actor en la aplicación del acuerdo que debe entenderse como su voluntad de someterse a sus efectos, **tanto en la parte que le beneficia como en la que le perjudica**, pues basta que haya tenido conocimiento de él, sin haber deducido dentro del término legal la acción procedente, y si aceptó tanto los beneficios como los perjuicios que de aquél se desprendían, entonces se acogió a él una vez más, y debe considerarse que en la especie no se da el supuesto del primer acto de aplicación exigido por el artículo 2 de la ley de la materia.

A este respecto, conviene remarcar que la postura en el sentido de que el acuerdo de mérito es una norma general autoaplicativa, es una concepción inexacta de su naturaleza que conduce a un aserto contradictorio con el resultado del fallo en cuanto a esa norma, pues por una parte se sugiere que el actor desde que conoció el presunto primer acto de aplicación, el día 21 de septiembre de 1992, debió impugnarlo, y por otra parte se admite que al amparo de la ley procesal que nos rige, el propio acuerdo es impugnable en esta vía, no obstante que, el juicio es improcedente contra dicho acto y debe sobreseerse, pues implícitamente cuando ocurrió su primera aplicación no estaba previsto que este Órgano Jurisdiccional conociera de un acto como éste.

De esta suerte es que se admite que en la resolución impugnada, en donde por segunda vez se aplica el Acuerdo multicitado ocurre que la demanda que la controvierte,

fue enderezada contra un acto consentido y que no obstante haberle deparado perjuicio lo admitió sin impugnarlo en la vía correspondiente, cuando ello se insiste, no fue así.

Esta apreciación es cuestionable pues las medidas adoptadas en el Acuerdo materia del juicio, tales como la creación de un distrito de riego y la veda misma, no podían depararle perjuicio al justiciable, pues por su naturaleza ambas medidas no constituyen causa o motivo para rehusar otorgar un nuevo permiso solicitado por la enjuiciante a la autoridad, como se desprende de sus artículos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO.

Dichos preceptos en su conjunto establecen primero el distrito de riego, declarando de utilidad pública la construcción de las obras que lo formen, sus límites y la adquisición de los terrenos para alojarlas y operarlas, la declaración por tiempo indefinido de veda para el otorgamiento de concesiones con agua del Río del Carmen y su cuenca tributaria, así como las aguas de la Laguna de Patos y sus afluentes; determinación de veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de las aguas del subsuelo en la región delimitada, con excepción precisamente de lo que dispone el propio acuerdo y particularmente en el artículo CUARTO.

Excepción cuyo alcance según expresión literal del precepto en cita, permite deducir que la circunstancia de que exista determinada veda por tiempo indefinido de otorgar concesiones o permisos para obtener agua o alumbrarla del subsuelo, no significa que no deban autorizarse, sin previo permiso, pues el ordenamiento admite que la autoridad hechos los estudios respectivos pueda autorizarlos, máxime que dicha disposición expresamente establece que a este efecto los interesados en alumbrar aguas del subsuelo dentro de la zona vedada, inclusive compañías y contratistas particulares que las realicen, no podrán efectuarlas, sin contar previamente con el permiso correspondiente y de obtenerlo estarán obligados a realizar las obras de conformidad con las especificaciones que en el permiso se fijan por dicha Secretaría.

De ahí que no pueda sostenerse que para el actor se derivaban evidentes perjuicios de las disposiciones del acuerdo, que lo obligaban a impugnarlo desde la primera vez de su aplicación, y en consecuencia con la resolución contenida en el oficio BOO.E.22.1./S.U.0327 de 29 de noviembre de 2005 se produjera el segundo acto de aplicación del acuerdo en principio mencionado.

Bajo las circunstancias antes referidas es de remarcarse que previo a la determinación del sobreseimiento del juicio respecto del acuerdo impugnado, debió determinarse su naturaleza como norma general y abstracta autoaplicativa o heteroaplicativa, siendo que a mi juicio es esta última con la cual debió calificarse al mismo y no considerarla autoaplicativa, porque de ello dependía la oportunidad y eficacia con que se produzca el primer acto de aplicación, bajo el régimen de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y desde esta perspectiva la procedencia o improcedencia del juicio en el caso concreto, pues lo alegado en la demanda para controvertirlo, estaba enderezado contra la individualización por primera vez de un perjuicio señalado o atribuido a la zona de veda donde se encuentra el acuífero Santa Clara, sin disponibilidad de agua, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2003, y como causa de la negativa a otorgarle el permiso de explotar cinco aprovechamientos para uso agrícola, doméstico y pecuario y que daba lugar a entrar al estudio de los agravios enderezados contra la norma que nos ocupa y no a sobreseer el juicio en su contra.

En efecto, resulta orientadora a este respecto la tesis de jurisprudencia 2a./J. 73/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XII del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 2000, página 236, que dice:

> "**LEYES HETEROAPLICATIVAS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL QUE ESTABLECEN O MODIFICAN EL MARCO JURÍDICO QUE REGULA UNA ACTIVIDAD SUJETA A UNA CONCESIÓN, PERMISO O AUTORIZACIÓN, EN CUANTO ESTABLECEN LOS REQUISITOS QUE REGIRÁN EN EL FUTURO EL OTORGAMIENTO DE ACTOS DE**

ESA NATURALEZA.- Conforme a la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 'LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.', visible en la página 5 del Tomo VI julio de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, **son heteroaplicativas las disposiciones de observancia general que establecen obligaciones de hacer o de no hacer que no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condiciona su individualización**; al tenor de este criterio jurisprudencial, debe estimarse que son de individualización condicionada **las disposiciones de observancia general que al fijar o modificar el marco jurídico que regula una actividad cuya realización por parte de los gobernados está sujeta a la obtención de una concesión, permiso o autorización, establecen nuevos o diversos requisitos que regirán en el futuro el otorgamiento de los respectivos actos administrativos, pues para que afecten la esfera jurídica de aquéllos se requiere, previamente, que acudan ante la administración a solicitar su emisión; inclusive, tratándose de los sujetos que antes de la entrada en vigor de esas nuevas disposiciones ya se encontraban facultados para realizar la respectiva actividad, la afectación a su esfera jurídica derivada de aquéllas está condicionada a que vuelvan a solicitar la expedición del correspondiente acto administrativo, pues el ejercicio de la actividad relativa constituye un derecho que se incorporó temporalmente en su patrimonio**."

2.- En lo relativo al emplazamiento de las autoridades emisoras de los actos impugnados y en virtud de que sobre este particular se originan causas de improcedencia parcial del juicio y sobreseimiento respecto de partes demandadas en el juicio, *(resolutivo II.- Se sobresee* (...) *Respecto a tener como autoridad demandada a la SEMARNAT, conforme a los razonamientos y fundamentos precisados en el considerando cuarto, inciso B)* a partir de la página 41, con referencia al Acuerdo General

impugnado y que se denomina en el fallo, "Presidencial" se precisa que debe considerarse al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el juicio debidamente emplazado y por ende parte demandada, por razón diversa, y no obstante (página 46) que en el inciso A) de este mismo considerando se sobreseyera el juicio respecto del Acuerdo o Norma General impugnada, pues concluye que este Acuerdo fue emitido por el entonces Presidente de la República el 9 de enero de 1957 y publicado en el Diario Oficial el día 30 de ese mismo mes y año, y refrendado por los Secretarios de Recursos Hidráulicos y de Agricultura y Ganadería.

De ahí que para determinar la autoridad que debe ser llamada a juicio, en estos casos, la sentencia se pronuncia en el sentido de que debe atenderse a lo previsto en el artículo 5º, párrafo tercero de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que al respecto prevé:

> "La representación de las autoridades corresponderá a las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, según lo disponga el Ejecutivo Federal en su Reglamento o Decreto respectivo y en su caso, conforme lo disponga la Ley Federal de Entidades Paraestatales."

En este tenor, la autoridad que emitió el Acuerdo Administrativo General impugnado es el Presidente de la República, "quien resulta ser parte demandada en este juicio", sin embargo, a la luz del artículo 5º de la Ley que rige al procedimiento contencioso administrativo para la remisión que en el mismo se hace, debe atenderse a lo previsto por los artículos 2º, fracción I, 13, primer párrafo, 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 18 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y con ello se concluye que acorde con estas disposiciones el Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus atribuciones en el despacho de los negocios del orden administrativo será representado por las Secretarías de Estado a que corresponda el asunto, y según lo establezca el Reglamento Interior de cada una de ellas.

En esta tesitura es que se asume que el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, depende del Poder Ejecutivo Federal y que tiene como facultad

indelegable, entre otras, proponer proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, declaratorias, acuerdos y ordenes sobre asuntos de su competencia, refrendar éstos y representar al Presidente de la República en **juicio de amparo**, y por ende, su representación ante este Órgano Jurisdiccional, se encuentra a cargo del Titular de dicha dependencia, quien tiene competencia originaria en materia hidrológica, no sólo para proponer a aquél la emisión de los acuerdos administrativos de carácter general, sino también para refrendar éstos, como lo es en el Acuerdo General multicitado.

No es posible más que estar en desacuerdo con esta conclusión, como consecuencia de la consideración de implícitamente justificar no haber emplazado al Presidente de la República que signó el acuerdo de que se trata, ni tampoco al Director General de la Comisión Nacional del Agua.

Mi desacuerdo radica esencialmente en haber sostenido en la sentencia, que no obstante haber admitido que el juicio contencioso administrativo era admisible en contra del Acuerdo General de mérito, puesto que el sobreseimiento solamente se produjo por motivos diversos, ya mencionados previamente, el régimen jurídico administrativo particular que se introdujo con la Ley Federal de Aguas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1972, que entró en vigor quince días después y que abrogó la Ley de Aguas de Propiedad Nacional y su Reglamento, previéndose en la citada Ley que la facultad para dictar acuerdos de veda es exclusiva del Ejecutivo Federal, tal y como se observa del texto de los artículos 7º, 16, fracción IV y 108, que a la letra señalan:

> "ARTÍCULO 7º.- Se declara de interés público el control de la extracción y utilización de las aguas del subsuelo, inclusive de las libremente alumbradas, conforme lo dispongan los reglamentos que al efecto dicte el Ejecutivo Federal."
>
> "ARTÍCULO 16.- Compete al Ejecutivo Federal:
> "(...)

"IV.- Reglamentar las extracciones de las aguas y Decretar zonas de veda a que se refiere el artículo 7o;
"(...)"

"ARTÍCULO 108.- Los decretos de veda de aguas del subsuelo a que se refiere el artículo 7o., contendrán:
"I.- La declaratoria de interés público;
"II.- La ubicación y la delimitación de la zona vedada; y
"III.- Las características de la veda."

Es de destacar que la Ley Federal de Aguas antes citada, fue derogada por la Ley de Aguas Nacionales publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 1º de diciembre de 1992, que a su vez se reformó, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004, y en la misma se incorporaron disposiciones relacionadas con la Comisión Nacional del Agua como órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de suerte que hasta esa fecha no había habido autoridad sustituta para efectos del amparo en materia de aguas, con respecto a la dependencia de la Administración Pública Federal que conocía de la administración en materia hidráulica.

Lo anterior, es consecuencia de que la administración del recurso natural de que se trata, históricamente desde 1917, como lo señala el Maestro Alfonso Nava Negrete,[1] "ha estado bajo la responsabilidad de distintas dependencias del Gobierno Federal, ahora es de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), cada gobierno federal de sexenio sorprende con su cambio. Se previene la competencia de esta Secretaría en el artículo 32 bis de la LOAPF, y que en algunos aspectos intervienen las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Pero la Ley de Aguas Nacio-

[1] *Derecho Administrativo Mexicano,* Nueva Edición corregida y aumentada, Colección Popular, Fondo de Cultura Económica, pág. 430 y sig.

nales posterior a la LOAPF, modifica la administración del recurso, minimiza el papel de la Secretaría que se observa en la práctica, y da primacía directa al Ejecutivo Federal y sobre todo a la Comisión Nacional del Agua, organismo desconcentrado de la Secretaría que domina la administración del recurso con un gran cúmulo de atribuciones en 54 fracciones del artículo 9º de la citada ley, propiciada por la reforma legal de 2004. Fue en el fondo una nueva ley la que se hizo con la amplísima reforma a la ley vigente en abril de 2004".

En suma, sostiene dicho autor, corresponde al Ejecutivo Federal la administración de las aguas nacionales, pero lo hace a través de la Comisión Nacional del Agua, tiene sin embargo atribuciones que sólo él puede ejercitar, por ejemplo: **a) decretar zonas de veda de aguas nacionales**, b) expedir declaratorias de zonas de reserva de aguas nacionales, c) expedir declaratorias de rescate de concesiones de uso o aprovechamiento de aguas nacionales, etc.

De ahí, queda evidenciado que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ningún momento ha tenido, y obviamente no tiene a la fecha del fallo aprobado por la mayoría de los Magistrados integrantes del Pleno, la facultad de emitir Acuerdos de veda para el otorgamiento de permisos o concesiones de agua, y por ello al requerir al actor el C. Magistrado Instructor sobre la autoridad demandada respecto de dicho acuerdo, y que fue objeto de regularización del procedimiento (foja 453 del expediente del juicio), el propio actor, razonando sobre los cambios de autoridades en la materia por reformas legislativas, señaló además de al Titular de esa dependencia, al Director General de la Comisión Nacional del Agua.

Establecido lo anterior, con la intención de determinar cuál es la autoridad que debió ser "llamada" a juicio con el carácter de demandada respecto del Acuerdo que establece el distrito de riego del Carmen en San Buenaventura y Villa Ahumada, Chih., y en el que también se declara por tiempo indefinido veda en aguas del Río de El Carmen y de su cuenca tributaria para el otorgamiento de concesiones de aguas, se estima conveniente transcribir los artículos 1, 3 fracciones I, XII y LXV, 4, 6 fracción II, 9 fracciones XLI y XLII, 38, 39-Bis, 40 y 42 de la Ley de Aguas Nacionales; y los

diversos artículos 73, 77 y 79 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales aplicables; los cuales de entre los citados del ordenamiento legal, son del tenor siguiente:

LEY DE AGUAS NACIONALES

"ARTÍCULO 1.- La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable."

"ARTÍCULO 3.- **Para los efectos de esta Ley se entenderá por:**
"(...)
"I. '**Aguas Nacionales**'**: Son aquellas referidas en el Párrafo Quinto del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;**
"(...)
"XII. '**Comisión Nacional del Agua**'**: Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de Derecho Público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a esta Ley corresponde tanto a ésta como a los órganos de autoridad a que la misma se refiere;**
"(...)
"LXV. '**Zona de veda**'**: Aquellas áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del agua en cantidad o calidad, por la afectación a la**

sustentabilidad hidrológica, o por el daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos, y
"(...)"

"ARTÍCULO 4.- **La autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través de 'la Comisión**'."

"ARTÍCULO 6.- **Compete al Ejecutivo Federal:**
"(...)
"II. **Expedir los decretos para el establecimiento, modificación o supresión de zonas de veda de aguas nacionales, en los términos del Título Quinto de la presente Ley**;
"(...)"

"ARTÍCULO 9.- 'La Comisión' es un órgano administrativo desconcentrado de "la Secretaría", que se regula conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior.
" 'La Comisión' tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico.
"En el ejercicio de sus atribuciones, 'la Comisión' se organizará en dos modalidades:
"a. El Nivel Nacional, y
"b. El Nivel Regional Hidrológico - Administrativo, a través de sus Organismos de Cuenca.
"Las atribuciones, funciones y actividades específicas en materia operativa, ejecutiva, administrativa y jurídica, relativas al ámbito Federal en materia de aguas nacionales y su gestión, se realizarán a través de los Organismos de Cuenca, con las salvedades asentadas en la presente Ley.

"**Son atribuciones de 'la Comisión' en su Nivel Nacional, las siguientes:**
"(...)
"XLI. **Definir los lineamientos técnicos en materia de gestión de aguas nacionales, cuencas, obras y servicios, para considerarlos en la elaboración de programas, reglamentaciones y decretos de vedas y reserva;**
"XLII. **Proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal la expedición de Decretos para el establecimiento, modificación o extinción de Zonas de Veda** y de Zonas Reglamentadas para la Extracción y Distribución de Aguas Nacionales y para su explotación, uso o aprovechamiento, así como Declaratorias de Reserva de Aguas Nacionales y de zonas de desastre;
"(...)"

"ARTÍCULO 38.- **El Ejecutivo Federal**, previos los estudios técnicos que al efecto se elaboren y publiquen, y considerando los programas nacional hídrico y por cuenca hidrológica y las necesidades del ordenamiento territorial nacional, regional y local, así como lo dispuesto en los Artículos 6 y 7 de la presente Ley, **podrá decretar el establecimiento de** zonas reglamentadas, **zonas de veda** o declarar la reserva de aguas.
"(...)"

"ARTÍCULO 39 BIS.- **El Ejecutivo Federal podrá expedir Decretos para el establecimiento de Zonas de Veda para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales**, en casos de sobreexplotación de las aguas nacionales, ya sea superficiales o del subsuelo, sequía o de escasez extrema o situaciones de emergencia o de urgencia, motivadas por contaminación de las aguas o por situaciones derivadas de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, cuando:
"I. No sea posible mantener o incrementar las extracciones de agua superficial o del subsuelo, a partir de un determinado volumen anual fijado por 'la Autoridad del Agua', sin afectar la sustentabilidad del recurso y sin el riesgo de inducir efectos perjudiciales, económicos o ambientales, en las fuentes de agua de la zona en cuestión o en los usuarios del recurso, o

"II. Se requiera prohibir o limitar los usos del agua con objeto de proteger su calidad en las cuencas o acuíferos."

"ARTÍCULO 40.- **Los decretos por los que se establezcan, modifiquen o supriman zonas de veda contendrán la ubicación y delimitación de la misma, así como sus consecuencias o modalidades.**
"(...)"

"ARTÍCULO 42.- **Para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas del subsuelo en las zonas** reglamentadas o **de veda decretadas por el Ejecutivo Federal**, incluso las que hayan sido libremente alumbradas, requerirán de:
"I. Concesión o asignación para su explotación, uso o aprovechamiento;
"II. Un programa integral de manejo por cuenca y acuíferos a explotar, y
"III. Permisos para las obras de perforación, reposición o relocalización de pozos, o demás modificaciones a las condiciones de aprovechamiento, que se realicen a partir del decreto de veda o reglamentación.
"Las concesiones o asignaciones se sujetarán a los requisitos que establecen los Artículos 21 y 21 BIS de esta Ley y se otorgarán de acuerdo con los estudios de disponibilidad respectivos, teniendo en cuenta el volumen de agua usada o aprovechada como promedio en el último año inmediato anterior al decreto respectivo, y que se hubieran inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua.
"A falta de dicha inscripción en el Registro citado, se tomará en cuenta el volumen declarado fiscalmente para efectos del pago del derecho federal por uso o aprovechamiento de agua, en el último ejercicio fiscal.
"En aquellos casos en los que la explotación, uso o aprovechamiento no pueda ser determinado conforme a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, el volumen de agua se determinará conforme a los procedimientos que establezcan los reglamentos respectivos."

De los numerales apenas transcritos, y en específico de las partes que de éstos han sido resaltadas con negritas, se observa que actualmente, si bien, es competencia del Ejecutivo Federal (Presidente de la República), expedir los decretos para el establecimiento, modificación o supresión de zonas de veda de aguas nacionales, también lo es que la Comisión Nacional del Agua es el órgano desconcentrado técnico a través del cual, se realiza la administración de las aguas nacionales y de sus bienes públicos y que previamente a la expedición de los decretos que establecen, modifican o suprimen zonas de veda de aguas nacionales, como autoridad en materia hídrica define lineamientos técnicos en materia de gestión de aguas nacionales, cuencas, obras y servicios, a fin de considerarlos en la elaboración de programas, reglamentaciones y decretos de vedas y reserva y finalmente propone al Poder Ejecutivo Federal la expedición de los decretos correspondientes.

De ahí que en este juicio, al omitir considerar como autoridad demandada y parte del juicio, a la Comisión Nacional del Agua, se produce una violación al procedimiento desde la instrucción del juicio que se consuma con el sobreseimiento parcial del mismo, respecto del Ejecutivo Federal o Presidente de la República, por concluir que su defensa jurídica correspondía a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, prevista en los artículos 26 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,[2] cuando por otro lado, la defensa mencionada, en el caso del Presidente de la República, estaba desde el año de dos mil tres, e incluso, según el Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación de 17 de noviembre de 2005, conforme a su artículo 8 fracción XI, a cargo del Consejero Jurídico de éste, en virtud de que representaba al mismo en los juicios en que éste interviniera con cualquier carácter.

---

[2] Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 1976, modificada por Decretos publicados los días 28 de diciembre de 1994, 19 de diciembre de 1995, el 15 de mayo y 24 de diciembre de 1996, el 4 de diciembre de 1997, por "el Decreto por el que se expide la Ley de la Policía Federal Preventiva y se reforman diversas disposiciones de otros ordenamientos legales, publicado el 4 de enero de 1999 y por Decretos publicados el 18 de mayo de 1999, el 30 de noviembre de 2000 y 13 de marzo de 2002".

Y por lo que se refiere a la Comisión Nacional del Agua y no a la SEMARNAT en cita, de conformidad con el artículo 14, fracción IX del Reglamento Interior de esta Dependencia, publicado en el Diario Oficial del veintiuno de enero de dos mil tres, se hace la salvedad de aquellas facultades de representación legal para expresamente encomendar a las unidades jurídicas de los órganos desconcentrados las propias, de suerte que, tratándose de la Comisión Nacional del Agua, el artículo 52 del propio Reglamento Interior en cita, confería la representación legal del Director General de CONAGUA para comparecer en juicio a la Subdirección General Jurídica.

MAG. OLGA HERNÁNDEZ ESPÍNDOLA

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL C. MAGISTRADO ALEJANDRO SANCHEZ HERNÁNDEZ EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 438/06-04-01-8/809/07-PL-09-04, relacionado con las tesis aisladas VI-TASS-4, VI-TASS-5, VI-TASS-6, VI-TASS-7, publicadas en la R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 3. Marzo 2008. p. 291

El suscrito se aparta del criterio mayoritario que antecede, toda vez que se dejó de analizar oficiosamente la competencia de la autoridad emisora de la resolución impugnada, consistente en el oficio número boo.e.22.1./s.u.0327 de 29 de noviembre de 2005, emitido por el Gerente Estatal en Chihuahua, de la Comisión Nacional del Agua, a través del cual se declara improcedente acceder a la solicitud de nueva concesión y anuencia de perforación de cinco aprovechamientos de aguas nacionales, ubicados en el predio San José de Parapetos, en el ejido Santa Clara, Namiquipa, Chihuahua.

Esto es, el penúltimo párrafo del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece: "*El Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución*".

Conforme a la disposición legal transcrita, este Tribunal está facultado para analizar y resolver de oficio sobre la competencia de la autoridad emisora de la resolución impugnada, cuestión que ha sido calificada por el legislador, como de orden público, pues atañe a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer y llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos.

Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió las jurisprudencias 2a./J. 218/2007 y 2a./J. 219/2007, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Diciembre 2007, páginas 154 y 151, respectivamente, que son del tenor siguiente:

"**COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.-** El artículo 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y su correlativo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que ese Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada. Al respecto debe decirse que **ese estudio implica todo lo relacionado con la competencia de la autoridad, supuesto en el cual se incluye tanto la ausencia de fundamentación de la competencia, como la indebida o insuficiente fundamentación de la misma, en virtud de que al tratarse de una facultad oficiosa, las Salas fiscales de cualquier modo entrarán al examen de las facultades de la autoridad para emitir el acto de molestia**; lo anterior con independencia de que exista o no agravio del afectado, o bien, de que invoque incompetencia o simplemente argumente una indebida, insuficiente o deficiente fundamentación de la competencia. Cabe agregar que en el caso de que **las Salas fiscales estimen que la autoridad administrativa es incompetente, su pronunciamiento en ese sentido será indispensable, porque ello constituirá causa de nulidad de la resolución impugnada**; sin embargo, si considera que la autoridad es competente, esto

no quiere decir que dicha autoridad jurisdiccional necesariamente deba pronunciarse al respecto en los fallos que emita, pues el no pronunciamiento expreso, simplemente es indicativo de que estimó que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad."

"**COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ESTUDIO CONFORME AL ARTÍCULO 238, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, COINCIDENTE CON EL MISMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL JUICIO DE NULIDAD Y EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO.-** Conforme a los citados preceptos, en el juicio contencioso administrativo las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa **podrán analizar la competencia de la autoridad** en los siguientes casos: 1) cuando el actor plantee en los conceptos de anulación de su demanda argumentos por los que considere que la autoridad carece de competencia para emitir el acto impugnado; y, 2) **cuando la Sala advierta oficiosamente de las constancias de autos que la autoridad emisora del acto impugnado es incompetente**. En el primer supuesto, la Sala analizará el problema planteado y si estima fundado el concepto de anulación procederá a declarar la nulidad del acto impugnado. Respecto del segundo punto, **la Sala realizará el estudio oficioso de la competencia de la autoridad, porque a ello la obligan los artículos citados en el rubro. Si la Sala estima oficiosamente que la autoridad administrativa es incompetente, su pronunciamiento en ese sentido será indispensable, porque ello constituirá la causa de nulidad de la resolución impugnada**. Si considera que la autoridad es competente, no existe obligación de pronunciamiento expreso, pues la falta de éste indica que la Sala estimó que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad; tan es así, que continuó con el análisis de procedencia del juicio y en su caso, entró

al estudio de fondo de la cuestión planteada. **La decisión del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que establezca la nulidad de la resolución por incompetencia de la autoridad será lisa y llana**. En el juicio de amparo directo el Tribunal Colegiado de Circuito sólo estará obligado al análisis del concepto de violación aducido respecto de la incompetencia de la autoridad demandada en el juicio de nulidad o de la omisión de su estudio, cuando este argumento haya sido aducido como concepto de nulidad en el juicio contencioso administrativo; o bien, haya sido motivo de pronunciamiento oficioso por parte de la Sala correspondiente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues de lo contrario el estudio del concepto de violación será inoperante, toda vez que el quejoso no puede obtener en el juicio de amparo un pronunciamiento respecto de un argumento que no formó parte de la litis en el juicio de nulidad, bien porque no lo hizo valer o porque la autoridad responsable al estimar que la demandada es competente, no formuló pronunciamiento al respecto."
(El remarcado es nuestro)

De las jurisprudencias transcritas se aprecia que el estudio oficioso de la competencia de la autoridad emisora del acto impugnado, comprenderá tanto la ausencia de fundamentación de la competencia, como la indebida o insuficiente fundamentación de la misma.

Dicho análisis, deberá hacerse en todos los casos, pero sólo dará lugar a pronunciamiento en el fallo, cuando se determine que la autoridad: es incompetente, omitió fundar su competencia o lo hizo de manera indebida o deficiente, porque serían éstas las causas que darían lugar a declarar la nulidad de la resolución impugnada.

En la especie, se observa de la resolución impugnada (páginas 10 a 13 del fallo), que el Gerente Estatal de la Comisión Nacional del Agua en Chihuahua, fundó su competencia en los artículos 1°, 2°, fracción XXXI, inciso a), 47 y 107 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado

en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2003; sin embargo, tal fundamentación es insuficiente, pues no le hizo saber al enjuiciante cuáles fueron las fracciones de los artículos 47 y 107 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que lo legitimaban para pronunciarse sobre la solicitud de nueva concesión y anuencia de perforación de cinco aprovechamientos de aguas nacionales formulada por el demandante.

En ese tenor, es inconcuso que la resolución impugnada contraviene lo establecido por los artículos 16 constitucional y 3, fracciones I y V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que obligan a las autoridades a fundar su competencia en el mismo texto del acto de molestia, precisando el apartado, fracción, inciso o subinciso del precepto legal que les otorgue la atribución ejercida, a efecto de que el gobernado pueda verificar si la autoridad efectivamente goza de legitimación para emitir el acto.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 115/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 310, de rubro y texto siguientes:

> "**COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.-** De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: 'COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.', así como de las

consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, **es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden**, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio.”

(El remarcado es nuestro)

Es también aplicable la jurisprudencia número 10 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 2366, del tenor siguiente:

"**FUNDAMENTACIÓN DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES INSUFICIENTE SI NO SE SEÑALA CON EXACTITUD Y PRECISIÓN O, EN SU CASO, SE TRANSCRIBE LA PORCIÓN NORMATIVA QUE SUSTENTE SU COMPETENCIA TERRITORIAL.-** De la tesis de jurisprudencia 2a./J. 115/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 310, de rubro: 'COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.', se advierte que las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen el alcance de exigir que en todo acto de autoridad se señalen con exactitud y precisión el o los dispositivos que facultan a quien lo emita y definan el carácter con que éste actúa, ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular correspondiente o por delegación de facultades y, en caso de que esas normas incluyan diversos supuestos, precisar el apartado, fracción o fracciones, incisos o subincisos en que apoya su actuación, y de no contenerlos, si se trata de una norma compleja, transcribir la parte correspondiente, atento a la exigencia constitucional de certeza y seguridad jurídica del particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico. En ese sentido, si la autoridad administrativa, al fundar su competencia cita los preceptos que la facultan para emitir el acto,

pero omite señalar la porción normativa exacta y precisa que delimita su competencia territorial, es evidente que el acto impugnado está insuficientemente fundado, ya que, para satisfacer dicho principio constitucional, en todo acto de molestia deben constar los apartados, fracciones, incisos, subincisos o párrafos o, en su caso, transcribirse la parte correspondiente, tanto de los que facultan a la autoridad para emitir el acto, como los que prevén su competencia territorial."

En ese contexto, toda vez que la demandada fundó insuficientemente su competencia, debió declararse la nulidad de la resolución impugnada, de conformidad con lo establecido por los artículos 51, fracción II y 52, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para el efecto de que la autoridad que resultara competente emitiera una nueva resolución fundada y motivada, sobre la petición del accionante.

Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 52/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Noviembre de 2001, página 32, que establece:

"**COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.-** Si la ausencia de fundamentación de la competencia de la autoridad administrativa que emite el acto o resolución materia del juicio de nulidad correspondiente, incide directamente sobre la validez del acto impugnado y, por ende, sobre los efectos que éste puede producir en la esfera jurídica del gobernado, es inconcuso que esa omisión impide al juzgador pronunciarse sobre los efectos o consecuencias del acto o resolución impugnados y lo obliga a declarar la nulidad de éstos en su integridad, puesto que al darle efectos a esa nulidad, desconociéndose si la autoridad demandada tiene

o no facultades para modificar la situación jurídica existente, afectando la esfera del particular, podría obligarse a un órgano incompetente a dictar un nuevo acto o resolución que el gobernado tendría que combatir nuevamente, lo que provocaría un retraso en la impartición de justicia. No obsta a lo anterior el hecho de que si la autoridad está efectivamente facultada para dictar o emitir el acto de que se trate, pueda subsanar su omisión; además, en aquellos casos en los que la resolución impugnada se haya emitido en respuesta a una petición formulada por el particular, o bien, se haya dictado para resolver una instancia o recurso, la sentencia de nulidad deberá ordenar el dictado de una nueva, aunque dicho efecto sólo tuviera como consecuencia el que la autoridad demandada se declare incompetente, pues de otra manera se dejarían sin resolver dichas peticiones, instancias o recursos, lo que contravendría el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

MAG. ALEJANDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

SEXTA PARTE

ACUERDOS GENERALES

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/22/2008

COMISIÓN TEMPORAL DEL MAGISTRADO HÉCTOR CARRILLO MAYNEZ

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, cuarto párrafo, y 18, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, atendiendo a las necesidades del servicio, a fin de garantizar a los gobernados la impartición de justicia, pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno tiene a bien acordar, por ser de interés para el Tribunal:

Primero.- La **comisión temporal** del **Magistrado Héctor Carrillo Maynez**, adscrito a la Segunda Sala Regional del Norte-Centro II, en la Primera Ponencia, para que las funciones que le corresponden en su calidad de Magistrado de Sala Regional las realice en la misma Sala, pero **comisionado temporalmente** en la Segunda Ponencia, a partir del próximo día veintiséis de marzo de dos mil ocho y hasta por un mes si fuere necesario; en tal virtud, en el primer acuerdo que el Magistrado Héctor Carrillo Maynez dicte en cada uno de los asuntos competencia de este Tribunal, en que intervenga como titular de la Segunda Ponencia de la referida Sala Regional, deberá hacer del conocimiento de las partes el presente acuerdo.

Segundo.- En este tenor, también el mismo día veintiséis de marzo de dos mil ocho, el **primer Secretario de Acuerdos** del mencionado Magistrado que se comisiona temporalmente a otra Ponencia, entrará en funciones como Magistrado por Ministerio de Ley, para suplir, por el tiempo que corresponda, dicha **falta temporal** en la Primera Ponencia de la referida Sala Regional.

Tercero.- Vencido el plazo de un mes a que se hace referencia en el punto Primero de este Acuerdo, o bien, a partir de la fecha de que, en su caso, sea adscrito

un Magistrado a la Segunda Sala Regional del Norte-Centro II, Segunda Ponencia, el **Magistrado Héctor Carrillo Maynez**, que se comisiona temporalmente, **regresará a la Primera Ponencia**, de la propia Sala Regional, en que se encuentra originalmente adscrito, por lo que el **primer Secretario de Acuerdos** que lo suplió, también **concluirá sus funciones** como Magistrado por Ministerio de Ley a partir de ese momento.

Cuarto.- En razón de lo anterior, la Oficialía Mayor del Tribunal, otorgará todas las facilidades para el cumplimiento del presente Acuerdo.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día doce de marzo de dos mil ocho, ordenándose su publicación en el Diario Oficial de la Federación.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/23/2008

COMISIÓN TEMPORAL DEL MAGISTRADO MANUEL CASTELLANOS TORTOLERO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, cuarto párrafo, y 18, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, atendiendo a las necesidades del servicio, a fin de garantizar a los gobernados la impartición de justicia, pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno tiene a bien acordar, por ser de interés para el Tribunal:

Primero.- La **comisión temporal** del **Magistrado Manuel Castellanos** Tortolero, adscrito a la Sala Regional del Centro III, en la Segunda Ponencia, para que las funciones que le corresponden en su calidad de Magistrado de Sala Regional las realice en la misma Sala, pero **comisionado temporalmente** en la Primera Ponencia, a partir del próximo día veintiséis de marzo de dos mil ocho y hasta por un mes si fuere necesario; en tal virtud, en el primer acuerdo que el Magistrado Manuel Castellanos Tortolero dicte en cada uno de los asuntos competencia de este Tribunal, en que intervenga como titular de la Primera Ponencia de la referida Sala Regional, deberá hacer del conocimiento de las partes el presente acuerdo.

Segundo.- En este tenor, también el mismo día veintiséis de marzo de dos mil ocho, el **primer Secretario de Acuerdos** del mencionado Magistrado que se comisiona temporalmente a otra Ponencia, entrará en funciones como Magistrado por Ministerio de Ley, para **suplir**, por el tiempo que corresponda, dicha **falta temporal** en la Segunda Ponencia de la referida Sala Regional.

Tercero.- Vencido el plazo de un mes a que se hace referencia en el punto Primero de este Acuerdo, o bien, a partir de la fecha de que, en su caso, sea adscrito

un Magistrado a la Sala Regional del Centro III, Primera Ponencia, el **Magistrado Manuel Castellanos Tortolero**, que se comisiona temporalmente, **regresará a la Segunda Ponencia**, de la propia Sala Regional, en que se encuentra originalmente adscrito, por lo que el **primer Secretario de Acuerdos** que lo suplió, también **concluirá sus funciones** como Magistrado por Ministerio de Ley a partir de ese momento.

Cuarto.- En razón de lo anterior, la Oficialía Mayor del Tribunal, otorgará todas las facilidades para el cumplimiento del presente Acuerdo.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día doce de marzo de dos mil ocho, ordenándose su publicación en el Diario Oficial de la Federación.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/25/2008

COMISIÓN TEMPORAL DE LA MAGISTRADA ROSA ANGÉLICA NIETO SAMANIEGO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, cuarto párrafo, y 18, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, atendiendo a las necesidades del servicio, a fin de garantizar a los gobernados la impartición de justicia, pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno tiene a bien acordar, por ser de interés para el Tribunal:

Primero.- La **comisión temporal** de la **Magistrada Rosa Angélica Nieto Samaniego**, adscrita a la Sala Regional del Golfo-Norte, en la Primera Ponencia, para que las funciones que le corresponden en su calidad de Magistrada de Sala Regional las realice en la misma Sala, pero **comisionada temporalmente** en la Tercera Ponencia, a partir del próximo día tres de abril de dos mil ocho y hasta por un mes si fuere necesario; en tal virtud, en el primer acuerdo que la Magistrada Rosa Angélica Nieto Samaniego dicte en cada uno de los asuntos competencia de este Tribunal, en que intervenga como titular de la Tercera Ponencia de la referida Sala Regional, deberá hacer del conocimiento de las partes el presente acuerdo.

Segundo.- En este tenor, también el mismo día tres de abril de dos mil ocho, el **primer Secretario de Acuerdos** de la mencionada Magistrada que se comisiona temporalmente a otra Ponencia, entrará en funciones como Magistrado por Ministerio de Ley, para **suplir**, por el tiempo que corresponda, dicha **falta temporal** en la Primera Ponencia de la referida Sala Regional.

Tercero.- Vencido el plazo de un mes a que se hace referencia en el punto Primero de este Acuerdo, o bien, a partir de la fecha de que, en su caso, sea adscrito

un Magistrado a la Sala Regional del Golfo-Norte, Tercera Ponencia, la **Magistrada Rosa Angélica Nieto Samaniego**, que se comisiona temporalmente, **regresará a la Primera Ponencia**, de la propia Sala Regional, en que se encuentra originalmente adscrita, por lo que el **primer Secretario de Acuerdos** que la suplió, también concluirá sus funciones como Magistrado por Ministerio de Ley a partir de ese momento.

Cuarto.- En razón de lo anterior, la Oficialía Mayor del Tribunal, otorgará todas las facilidades para el cumplimiento del presente Acuerdo.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día treinta y uno de marzo de dos mil ocho, ordenándose su publicación en el Diario Oficial de la Federación.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/26/2008

COMISIÓN TEMPORAL DEL MAGISTRADO JORGE LUIS ROSAS SIERRA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, cuarto párrafo, y 18, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, atendiendo a las necesidades del servicio, a fin de garantizar a los gobernados la impartición de justicia, pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno tiene a bien acordar, por ser de interés para el Tribunal:

Primero.- La **comisión temporal** del **Magistrado Jorge Luis Rosas Sierra**, adscrito a la Segunda Sala Regional del Noreste, en la Segunda Ponencia, para que las funciones que le corresponden en su calidad de Magistrado de Sala Regional las realice en la Sala Regional del Golfo-Norte **comisionado temporalmente** en la Segunda Ponencia de la misma, a partir del próximo día tres de abril de dos mil ocho y hasta por un mes si fuere necesario; en tal virtud, en el primer acuerdo que el Magistrado Jorge Luis Rosas Sierra dicte en cada uno de los asuntos competencia de este Tribunal, en que intervenga como titular de la Segunda Ponencia de la referida Sala Regional del Golfo-Norte, deberá hacer del conocimiento de las partes el presente acuerdo.

Segundo.- En este tenor, también el mismo día tres de abril de dos mil ocho, el **primer Secretario de Acuerdos** del mencionado Magistrado que se comisiona temporalmente a la Sala Regional del Golfo-Norte, entrará en funciones como Magistrado por Ministerio de Ley, para **suplir**, por el tiempo que corresponda, dicha **falta temporal** en la Segunda Ponencia de la Segunda Sala Regional del Noreste.

Tercero.- Vencido el plazo de un mes a que se hace referencia en el punto Primero de este Acuerdo, o bien, a partir de la fecha de que, en su caso, sea adscrito un Magistrado a la Sala Regional del Golfo-Norte, Segunda Ponencia, el **Magistrado Jorge Luis Rosas Sierra**, que se comisiona temporalmente, **regresará a la Segunda Ponencia**, de la Segunda Sala Regional del Noreste, en que se encuentra originalmente adscrito, por lo que el **primer Secretario de Acuerdos** que lo suplió, también **concluirá sus funciones** como Magistrado por Ministerio de Ley a partir de ese momento.

Cuarto.- En razón de lo anterior, la Oficialía Mayor del Tribunal, otorgará todas las facilidades para el cumplimiento del presente Acuerdo.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día treinta y uno de marzo de dos mil ocho, ordenándose su publicación en el Diario Oficial de la Federación.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/27/2008

DESIGNACIÓN DE CONTRALOR INTERNO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18, fracción VII, y 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Pleno de la Sala Superior acordó designar como Contralor Interno de este Tribunal al Licenciado Mario Escárcega Leos, a partir del 16 de abril de 2008.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día nueve de abril de dos mil ocho.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/28/2008

COMISIÓN TEMPORAL DEL MAGISTRADO HÉCTOR CARRILLO MAYNEZ

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, cuarto párrafo, y 18, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, atendiendo a las necesidades del servicio, a fin de garantizar a los gobernados la impartición de justicia, pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno tiene a bien acordar, por ser de interés para el Tribunal:

Primero.- La **comisión temporal** del **Magistrado Héctor Carrillo Maynez**, adscrito a la Segunda Sala Regional del Norte-Centro II, en la Primera Ponencia, para que las funciones que le corresponden en su calidad de Magistrado de Sala Regional las realice en la misma Sala, pero **comisionado temporalmente** en la Segunda Ponencia, a partir del próximo día veintiocho de abril de dos mil ocho y hasta por un mes si fuere necesario; en tal virtud, en el primer acuerdo que el Magistrado Héctor Carrillo Maynez dicte en cada uno de los asuntos competencia de este Tribunal, en que intervenga como titular de la Segunda Ponencia de la referida Sala Regional, deberá hacer del conocimiento de las partes el presente acuerdo.

Segundo.- En este tenor, también el mismo día veintiocho de abril de dos mil ocho, el **primer Secretario de Acuerdos** del mencionado Magistrado que se comisiona temporalmente a otra Ponencia, entrará en funciones como Magistrado por Ministerio de Ley, para **suplir**, por el tiempo que corresponda, dicha **falta temporal** en la Primera Ponencia de la referida Sala Regional.

Tercero.- Vencido el plazo de un mes a que se hace referencia en el punto Primero de este Acuerdo, o bien, a partir de la fecha de que, en su caso, sea adscrito

un Magistrado a la Segunda Sala Regional del Norte-Centro II, Segunda Ponencia, el **Magistrado Héctor Carrillo Maynez**, que se comisiona temporalmente, **regresará a la Primera Ponencia**, de la propia Sala Regional, en que se encuentra originalmente adscrito, por lo que el **primer Secretario de Acuerdos** que lo suplió, también concluirá sus funciones como Magistrado por Ministerio de Ley a partir de ese momento.

Cuarto.- En razón de lo anterior, la Oficialía Mayor del Tribunal, otorgará todas las facilidades para el cumplimiento del presente Acuerdo.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día veintiuno de abril de dos mil ocho, ordenándose su publicación en el Diario Oficial de la Federación.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/29/2008

COMISIÓN TEMPORAL DEL MAGISTRADO MANUEL CASTELLANOS TORTOLERO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, cuarto párrafo, y 18, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, atendiendo a las necesidades del servicio, a fin de garantizar a los gobernados la impartición de justicia, pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno tiene a bien acordar, por ser de interés para el Tribunal:

Primero.- La **comisión temporal** del **Magistrado Manuel Castellanos Tortolero**, adscrito a la Sala Regional del Centro III, en la Segunda Ponencia, para que las funciones que le corresponden en su calidad de Magistrado de Sala Regional las realice en la misma Sala, pero **comisionado temporalmente** en la Primera Ponencia, a partir del próximo día veintiocho de abril de dos mil ocho y hasta por un mes si fuere necesario; en tal virtud, en el primer acuerdo que el Magistrado Manuel Castellanos Tortolero dicte en cada uno de los asuntos competencia de este Tribunal, en que intervenga como titular de la Primera Ponencia de la referida Sala Regional, deberá hacer del conocimiento de las partes el presente acuerdo.

Segundo.- En este tenor, también el mismo día veintiocho de abril de dos mil ocho, el **primer Secretario de Acuerdos** del mencionado Magistrado que se comisiona temporalmente a otra Ponencia, entrará en funciones como Magistrado por Ministerio de Ley, para **suplir**, por el tiempo que corresponda, dicha **falta temporal** en la Segunda Ponencia de la referida Sala Regional.

Tercero.- Vencido el plazo de un mes a que se hace referencia en el punto Primero de este Acuerdo, o bien, a partir de la fecha de que, en su caso, sea adscrito

un Magistrado a la Sala Regional del Centro III, Primera Ponencia, el **Magistrado Manuel Castellanos Tortolero**, que se comisiona temporalmente, **regresará a la Segunda Ponencia**, de la propia Sala Regional, en que se encuentra originalmente adscrito, por lo que el **primer Secretario de Acuerdos** que lo suplió, también **concluirá sus funciones** como Magistrado por Ministerio de Ley a partir de ese momento.

Cuarto.- En razón de lo anterior, la Oficialía Mayor del Tribunal, otorgará todas las facilidades para el cumplimiento del presente Acuerdo.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día veintiuno de abril de dos mil ocho, ordenándose su publicación en el Diario Oficial de la Federación.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/31/2008

SE DECLARA INHÁBIL EL DÍA DOS DE MAYO DE DOS MIL OCHO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20 y 55, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se suspenderán las labores generales del Tribunal, el viernes dos de mayo del año en curso, por lo que el mismo se declara día inhábil y en éste no correrán los términos procesales.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día veintiocho de abril de dos mil ocho, ordenándose su publicación en el Diario Oficial de la Federación.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/32/2008

COMISIÓN TEMPORAL DE LA MAGISTRADA ROSA ANGÉLICA NIETO SAMANIEGO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, cuarto párrafo, y 18, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, atendiendo a las necesidades del servicio, a fin de garantizar a los gobernados la impartición de justicia, pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno tiene a bien acordar, por ser de interés para el Tribunal:

Primero.- La **comisión temporal** de la **Magistrada Rosa Angélica Nieto Samaniego**, adscrita a la Sala Regional del Golfo-Norte, en la Primera Ponencia, para que las funciones que le corresponden en su calidad de Magistrada de Sala Regional las realice en la misma Sala, pero **comisionada temporalmente** en la Tercera Ponencia, a partir del próximo día seis de mayo de dos mil ocho y hasta por un mes si fuere necesario; en tal virtud, en el primer acuerdo que la Magistrada Rosa Angélica Nieto Samaniego dicte en cada uno de los asuntos competencia de este Tribunal, en que intervenga como titular de la Tercera Ponencia de la referida Sala Regional, deberá hacer del conocimiento de las partes el presente acuerdo.

Segundo.- En este tenor, también el mismo día seis de mayo de dos mil ocho, el **primer Secretario de Acuerdos** de la mencionada Magistrada que se comisiona temporalmente a otra Ponencia, entrará en funciones como Magistrado por Ministerio de Ley, para **suplir**, por el tiempo que corresponda, dicha **falta temporal** en la Primera Ponencia de la referida Sala Regional.

Tercero.- Vencido el plazo de un mes a que se hace referencia en el punto Primero de este Acuerdo, o bien, a partir de la fecha de que, en su caso, sea adscrito

un Magistrado a la Sala Regional del Golfo-Norte, Tercera Ponencia, la **Magistrada Rosa Angélica Nieto Samaniego**, que se comisiona temporalmente, **regresará a la Primera Ponencia**, de la propia Sala Regional, en que se encuentra originalmente adscrita, por lo que el **primer Secretario de Acuerdos** que la suplió, también **concluirá sus funciones** como Magistrado por Ministerio de Ley a partir de ese momento.

Cuarto.- En razón de lo anterior, la Oficialía Mayor del Tribunal, otorgará todas las facilidades para el cumplimiento del presente Acuerdo.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día treinta de abril de dos mil ocho, ordenándose su publicación en el Diario Oficial de la Federación.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/33/2008

COMISIÓN TEMPORAL DEL MAGISTRADO JORGE LUIS ROSAS SIERRA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, cuarto párrafo, y 18, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, atendiendo a las necesidades del servicio, a fin de garantizar a los gobernados la impartición de justicia, pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno tiene a bien acordar, por ser de interés para el Tribunal:

Primero.- La **comisión temporal** del **Magistrado Jorge Luis Rosas Sierra**, adscrito a la Segunda Sala Regional del Noreste, en la Segunda Ponencia, para que las funciones que le corresponden en su calidad de Magistrado de Sala Regional las realice en la Sala Regional del Golfo-Norte **comisionado temporalmente** en la Segunda Ponencia de la misma, a partir del próximo día seis de mayo de dos mil ocho y hasta por un mes si fuere necesario; en tal virtud, en el primer acuerdo que el Magistrado Jorge Luis Rosas Sierra dicte en cada uno de los asuntos competencia de este Tribunal, en que intervenga como titular de la Segunda Ponencia de la referida Sala Regional del Golfo-Norte, deberá hacer del conocimiento de las partes el presente acuerdo.

Segundo.- En este tenor, también el mismo día seis de mayo de dos mil ocho, el **primer Secretario de Acuerdos** del mencionado Magistrado que se comisiona temporalmente a la Sala Regional del Golfo-Norte, entrará en funciones como Magistrado por Ministerio de Ley, para **suplir**, por el tiempo que corresponda, dicha **falta temporal** en la Segunda Ponencia de la Segunda Sala Regional del Noreste.

Tercero.- Vencido el plazo de un mes a que se hace referencia en el punto Primero de este Acuerdo, o bien, a partir de la fecha de que, en su caso, sea adscrito un Magistrado a la Sala Regional del Golfo-Norte, Segunda Ponencia, el **Magistrado Jorge Luis Rosas Sierra**, que se comisiona temporalmente, **regresará a la Segunda Ponencia**, de la Segunda Sala Regional del Noreste, en que se encuentra originalmente adscrito, por lo que el **primer Secretario de Acuerdos** que lo suplió, también **concluirá sus funciones** como Magistrado por Ministerio de Ley a partir de ese momento.

Cuarto.- En razón de lo anterior, la Oficialía Mayor del Tribunal, otorgará todas las facilidades para el cumplimiento del presente Acuerdo.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día treinta de abril de dos mil ocho, ordenándose su publicación en el Diario Oficial de la Federación.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/34/2008

COMISIÓN TEMPORAL DEL MAGISTRADO HÉCTOR CARRILLO MAYNEZ

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, cuarto párrafo, y 18, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, atendiendo a las necesidades del servicio, a fin de garantizar a los gobernados la impartición de justicia, pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno tiene a bien acordar, por ser de interés para el Tribunal:

Primero.- La **comisión temporal** del **Magistrado Héctor Carrillo Maynez,** adscrito a la Segunda Sala Regional del Norte-Centro II, en la Primera Ponencia, para que las funciones que le corresponden en su calidad de Magistrado de Sala Regional las realice en la misma Sala, pero **comisionado temporalmente** en la Segunda Ponencia, a partir del próximo día veintinueve de mayo de dos mil ocho y hasta por un mes si fuere necesario; en tal virtud, en el primer acuerdo que el Magistrado Héctor Carrillo Maynez dicte en cada uno de los asuntos competencia de este Tribunal, en que intervenga como titular de la Segunda Ponencia de la referida Sala Regional, deberá hacer del conocimiento de las partes el presente acuerdo.

Segundo.- En este tenor, también el mismo día veintinueve de mayo de dos mil ocho, el **primer Secretario de Acuerdos** del mencionado Magistrado que se comisiona temporalmente a otra Ponencia, entrará en funciones como Magistrado por Ministerio de Ley, para **suplir**, por el tiempo que corresponda, dicha **falta temporal** en la Primera Ponencia de la referida Sala Regional.

Tercero.- Vencido el plazo de un mes a que se hace referencia en el punto Primero de este Acuerdo, o bien, a partir de la fecha de que, en su caso, sea adscrito

un Magistrado a la Segunda Sala Regional del Norte-Centro II, Segunda Ponencia, el **Magistrado Héctor Carrillo Maynez**, que se comisiona temporalmente, **regresará a la Primera Ponencia**, de la propia Sala Regional, en que se encuentra originalmente adscrito, por lo que el **primer Secretario de Acuerdos** que lo suplió, también **concluirá sus funciones** como Magistrado por Ministerio de Ley a partir de ese momento.

Cuarto.- En razón de lo anterior, la Oficialía Mayor del Tribunal, otorgará todas las facilidades para el cumplimiento del presente Acuerdo.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día veintiocho de mayo de dos mil ocho, ordenándose su publicación en el Diario Oficial de la Federación.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/35/2008

COMISIÓN TEMPORAL DEL MAGISTRADO MANUEL CASTELLANOS TORTOLERO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, cuarto párrafo, y 18, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, atendiendo a las necesidades del servicio, a fin de garantizar a los gobernados la impartición de justicia, pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno tiene a bien acordar, por ser de interés para el Tribunal:

Primero.- La **comisión temporal** del **Magistrado Manuel Castellanos Tortolero**, adscrito a la Sala Regional del Centro III, en la Segunda Ponencia, para que las funciones que le corresponden en su calidad de Magistrado de Sala Regional las realice en la misma Sala, pero **comisionado temporalmente** en la Primera Ponencia, a partir del próximo día veintinueve de mayo de dos mil ocho y hasta por un mes si fuere necesario; en tal virtud, en el primer acuerdo que el Magistrado Manuel Castellanos Tortolero dicte en cada uno de los asuntos competencia de este Tribunal, en que intervenga como titular de la Primera Ponencia de la referida Sala Regional, deberá hacer del conocimiento de las partes el presente acuerdo.

Segundo.- En este tenor, también el mismo día veintinueve de mayo de dos mil ocho, el **primer Secretario de Acuerdos** del mencionado Magistrado que se comisiona temporalmente a otra Ponencia, entrará en funciones como Magistrado por Ministerio de Ley, para suplir, por el tiempo que corresponda, dicha falta temporal en la Segunda Ponencia de la referida Sala Regional.

Tercero.- Vencido el plazo de un mes a que se hace referencia en el punto Primero de este Acuerdo, o bien, a partir de la fecha de que, en su caso, sea adscrito

un Magistrado a la Sala Regional del Centro III, Primera Ponencia, el **Magistrado Manuel Castellanos Tortolero**, que se comisiona temporalmente, **regresará a la Segunda Ponencia**, de la propia Sala Regional, en que se encuentra originalmente adscrito, por lo que el **primer Secretario de Acuerdos** que lo suplió, también **concluirá sus funciones** como Magistrado por Ministerio de Ley a partir de ese momento.

Cuarto.- En razón de lo anterior, la Oficialía Mayor del Tribunal, otorgará todas las facilidades para el cumplimiento del presente Acuerdo.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día veintiocho de mayo de dos mil ocho, ordenándose su publicación en el Diario Oficial de la Federación.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/36/2008

COMISIÓN TEMPORAL DE LA MAGISTRADA ROSA ANGÉLICA NIETO SAMANIEGO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, cuarto párrafo, y 18, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, atendiendo a las necesidades del servicio, a fin de garantizar a los gobernados la impartición de justicia, pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno tiene a bien acordar, por ser de interés para el Tribunal:

Primero.- La **comisión tempora**l de la **Magistrada Rosa Angélica Nieto Samaniego**, adscrita a la Sala Regional del Golfo-Norte, en la Primera Ponencia, para que las funciones que le corresponden en su calidad de Magistrada de Sala Regional las realice en la misma Sala, pero **comisionada temporalmente** en la Tercera Ponencia, a partir del próximo día nueve de junio de dos mil ocho y hasta por un mes si fuere necesario; en tal virtud, en el primer acuerdo que la Magistrada Rosa Angélica Nieto Samaniego dicte en cada uno de los asuntos competencia de este Tribunal, en que intervenga como titular de la Tercera Ponencia de la referida Sala Regional, deberá hacer del conocimiento de las partes el presente acuerdo.

Segundo.- En este tenor, también el mismo día nueve de junio de dos mil ocho, el **primer Secretario de Acuerdos** de la mencionada Magistrada que se comisiona temporalmente a otra Ponencia, entrará en funciones como Magistrado por Ministerio de Ley, para **suplir**, por el tiempo que corresponda, dicha **falta temporal** en la Primera Ponencia de la referida Sala Regional.

Tercero.- Vencido el plazo de un mes a que se hace referencia en el punto Primero de este Acuerdo, o bien, a partir de la fecha de que, en su caso, sea adscrito

un Magistrado a la Sala Regional del Golfo-Norte, Tercera Ponencia, la **Magistrada Rosa Angélica Nieto Samaniego**, que se comisiona temporalmente, **regresará a la Primera Ponencia**, de la propia Sala Regional, en que se encuentra originalmente adscrita, por lo que el **primer Secretario de Acuerdos** que la suplió, también **concluirá sus funciones** como Magistrado por Ministerio de Ley a partir de ese momento.

Cuarto.- En razón de lo anterior, la Oficialía Mayor del Tribunal, otorgará todas las facilidades para el cumplimiento del presente Acuerdo.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día cuatro de junio de dos mil ocho, ordenándose su publicación en el Diario Oficial de la Federación.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/37/2008

COMISIÓN TEMPORAL DEL MAGISTRADO JORGE LUIS ROSAS SIERRA

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, cuarto párrafo, y 18, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, atendiendo a las necesidades del servicio, a fin de garantizar a los gobernados la impartición de justicia, pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno tiene a bien acordar, por ser de interés para el Tribunal:

Primero.- La **comisión temporal** del **Magistrado Jorge Luis Rosas Sierra**, adscrito a la Segunda Sala Regional del Noreste, en la Segunda Ponencia, para que las funciones que le corresponden en su calidad de Magistrado de Sala Regional las realice en la Sala Regional del Golfo-Norte **comisionado temporalmente** en la Segunda Ponencia de la misma, a partir del próximo día nueve de junio de dos mil ocho y hasta por un mes si fuere necesario; en tal virtud, en el primer acuerdo que el Magistrado Jorge Luis Rosas Sierra dicte en cada uno de los asuntos competencia de este Tribunal, en que intervenga como titular de la Segunda Ponencia de la referida Sala Regional del Golfo-Norte, deberá hacer del conocimiento de las partes el presente acuerdo.

Segundo.- En este tenor, también el mismo día nueve de junio de dos mil ocho, el **primer Secretario de Acuerdos** del mencionado Magistrado que se comisiona temporalmente a la Sala Regional del Golfo-Norte, entrará en funciones como Magistrado por Ministerio de Ley, para **suplir**, por el tiempo que corresponda, dicha **falta temporal** en la Segunda Ponencia de la Segunda Sala Regional del Noreste.

Tercero.- Vencido el plazo de un mes a que se hace referencia en el punto Primero de este Acuerdo, o bien, a partir de la fecha de que, en su caso, sea adscrito un Magistrado a la Sala Regional del Golfo-Norte, Segunda Ponencia, el **Magistrado Jorge Luis Rosas Sierra**, que se comisiona temporalmente, **regresará a la Segunda Ponencia**, de la Segunda Sala Regional del Noreste, en que se encuentra originalmente adscrito, por lo que el **primer Secretario de Acuerdos** que lo suplió, también **concluirá sus funciones** como Magistrado por Ministerio de Ley a partir de ese momento.

Cuarto.- En razón de lo anterior, la Oficialía Mayor del Tribunal, otorgará todas las facilidades para el cumplimiento del presente Acuerdo.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del día cuatro de junio de dos mil ocho, ordenándose su publicación en el Diario Oficial de la Federación.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/38/2008

INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 18, fracción IV, 40 y Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Pleno de la Sala Superior acuerda que la Junta de Gobierno y Administración, quede integrada por los siguientes Magistrados:

Mag. Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal y de la Junta de Gobierno y Administración.
Mag. de la Sala Superior Luis Carballo Balvanera, por el periodo que culmina el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve.
Mag. de la Sala superior María del Consuelo Villalobos Ortíz, por el periodo que culmina el treinta y uno de diciembre de dos mil diez.
Mag. de la Sala Regional Juan Manuel Terán y Contreras, por el periodo que culmina el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve.
Mag. de Sala Regional Juan Ángel Chávez Ramírez, por el periodo que culmina el treinta y uno de diciembre de dos mil diez.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada extraordinaria celebrada el día seis de junio de dos mil ocho.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/39/2008

ADSCRIPCIÓN DE LA MAGISTRADA NORA ELIZABETH URBY GENEL

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 5, 16, 18, fracción VI, y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y toda vez que el Presidente de la República tuvo a bien nombrar como Magistrada de Sala Superior de este Tribunal a la Doctora Nora Elizabeth Urby Genel, nombramiento que fue aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión en sesión de cuatro de junio de dos mil ocho, se acuerda que a partir de esta fecha quede adscrita en la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada extraordinaria celebrada el día seis de junio de dos mil ocho.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
PLENO DE LA SALA SUPERIOR
ACUERDO G/40/2008

ADSCRIPCIÓN DEL MAGISTRADO JUAN MANUEL JIMÉNEZ ILLESCAS

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 5, 16, 18, fracción VI, y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y toda vez que el Presidente de la República tuvo a bien nombrar como Magistrado de Sala Superior de este Tribunal al Licenciado Juan Manuel Jiménez Illescas, nombramiento que fue aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión en sesión de cuatro de junio de dos mil ocho, se acuerda que a partir de esta fecha quede adscrita en la Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal.

Así lo acordó el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada extraordinaria celebrada el día seis de junio de dos mil ocho.- Firman el Magistrado Francisco Cuevas Godínez, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Rosana Edith de la Peña Adame, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
SALA SUPERIOR.- PRIMERA SECCIÓN
ACUERDO **G/S1-2/2008**

SE FIJA LA JURISPRUDENCIA VI-J-1aS-1

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75 y 76 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 23, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y toda vez que se han resuelto en el mismo sentido cinco juicios contenciosos administrativos, se fija la jurisprudencia N° VI-J-1aS-1 de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa bajo el siguiente rubro y texto:

FACULTAD ESTABLECIDA EN LA REGLA 27 DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA, DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995. NO ES POTESTATIVA, SINO OBLIGATORIA.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en la tesis 2a. LXXXVI/97, que: "En el ámbito legislativo el verbo 'poder' no necesariamente tiene el significado de discrecionalidad, sino que en ocasiones se utiliza en el sentido de 'obligatoriedad', (...), por lo que para descubrir la verdadera intención del creador de la ley, los principios filosóficos de derecho y de la hermenéutica jurídica aconsejan que es necesario armonizar o concordar todos los artículos relativos a la cuestión que se trate de resolver, (...) para llegar a la conclusión de que la disposición normativa en que se halla inserto, otorga una facultad potestativa o discrecional a la autoridad administrativa". Ahora bien, partiendo del hecho de que una de las finalidades del Tratado de Libre Comercio de América del Norte consiste, de acuerdo a lo dispuesto por su artículo 102 (1) (a) y (e), en la eliminación de obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de las Partes, así como

crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del Tratado, para su administración conjunta, y para la solución de controversias; y que conforme al artículo 502 (1) (c) del citado Tratado, el importador sólo está obligado a proporcionar una copia del certificado, cuando se lo solicite la autoridad aduanera; a juicio de esta Juzgadora, el hecho de que en la regla 27 de la Resolución por la que se establecen las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 1995, se establezca que "para los efectos de lo dispuesto en el artículo 502 (1) (c) del Tratado, y la fracción IV de la regla 25 de la presente Resolución, cuando el certificado de origen presentado sea ilegible, defectuoso, o no se haya llenado de conformidad con lo dispuesto en la Sección II de este Título, la autoridad podrá requerir al importador a fin de que en un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, presente una copia del certificado de origen en que se subsanen las irregularidades mencionadas", no debe interpretarse como una facultad discrecional por la utilización del verbo poder, sino obligatoria, en virtud de que la regla señala los requisitos para su aplicación (cuando el certificado de origen se presente ilegible, defectuoso, o no se haya llenado de conformidad con lo dispuesto en la Sección II del Título III de la citada Resolución), por lo que tal situación obliga a la autoridad a dar la oportunidad al importador de presentar un certificado de origen corregido. Interpretar lo contrario equivaldría a dejar al arbitrio de la autoridad el otorgar o no la oportunidad a los importadores de demostrar el origen de las mercancías, creando con ello una desigualdad procedimental al otorgar a unos y no a otros dicha oportunidad; más aún carecería de sentido la regla en cuestión, si su trámite dependiera únicamente de la voluntad de la autoridad.

PRECEDENTES:

V-P-1aS-94
Juicio No. 470/00-07-03-4/184/01-S1-04-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de octubre de 2001, por unanimidad de cuatro votos a favor.- Magistrado Ponente: Jorge Alberto García Cáceres.- Secretario: Lic. César Edgar Sánchez Vázquez.
(Tesis aprobada en sesión de 29 de enero de 2002)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año II. No. 20. Agosto 2002. p. 105

V-P-1aS-229
Juicio No. 1088/03-06-01-9/55/04-S1-05-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 4 de mayo de 2004, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: Lic. María Esther Méndez Serrato.
(Tesis aprobada en sesión de 4 de mayo de 2004)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 45. Septiembre 2004. p. 203

V-P-1aS-297
Juicio No. 828/05-06-02-2/642/05-S1-03-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 14 de febrero de 2005, por unanimidad de 5 votos.- Magistrada Ponente: Alma Gianina Isabel Peralta De Gregorio.- Secretario: Lic. Porfirio Alarcón Islas.
(Tesis aprobada en sesión de 14 de febrero de 2006)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VI. No. 66. Junio 2006. p. 118

V-P-1aS-298
Juicio No. 30821/04-17-08-6/652/05-S1-05-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en

sesión de 14 de febrero de 2005, por unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretario: Lic. Andrés E. Sánchez y Albuerne.
(Tesis aprobada en sesión de 14 de febrero de 2006)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VI. No. 66. Junio 2006. p. 118

V-P-1aS-304
Juicio No. 29175/04-17-09-1/694/05-S1-02-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 18 de abril de 2006, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: María del Consuelo Villalobos Ortíz.- Secretaria: Lic. Esmeralda Reyes Durán.
(Tesis aprobada en sesión de 18 de abril de 2006)
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VI. No. 68. Agosto 2006. p. 17

Así lo acordó la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión celebrada el veintidós de abril de dos mil ocho.- Firman el Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, Presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Licenciada Virginia Pétriz Herrera, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe.

SÉPTIMA PARTE

JURISPRUDENCIAS Y TESIS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL

JURISPRUDENCIAS

SEGUNDA SALA

COMPROBANTES FISCALES. EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN SE EXPIDEN NO ESTÁ OBLIGADO A VERIFICAR QUE CONTENGAN EL SEÑALAMIENTO RELATIVO A SI EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN O EN PARCIALIDADES. (2a./J. 35/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 2a. Sala, marzo 2008, p. 150

LITIS ABIERTA EN EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO OPERA CUANDO EL RECURSO HECHO VALER EN CONTRA DE UNA RESOLUCIÓN PRIMIGENIA FUE DESECHADO Y NO SE DEMUESTRA LA ILEGALIDAD DE SU PRONUNCIAMIENTO.- El artículo 197 del Código Fiscal de la Federación previene lo que se ha calificado como "litis abierta" la cual significa, esencialmente, resolver un juicio en contra de una resolución recaída a un recurso confirmatorio de la impugnada, en el que se deberán estudiar no sólo las argumentaciones hechas valer en el recurso sino también todas las novedosas introducidas en contra de la resolución primigenia; sin embargo, esa regla sólo operará cuando proceda entrar al examen de fondo de ambas resoluciones, pero no cuando el recurso fue desechado por improcedente, pues técnicamente deberá examinarse en primer lugar la legalidad de ese desechamiento, de tal modo que sólo cuando se concluya su ilegalidad se podrá pasar, conforme al principio de "litis abierta", al estudio de fondo del asunto, si es que existen elementos jurídicos para decidir. Lógicamente, si en contra del pronunciamiento de improcedencia no se expresan conceptos de invalidez tendrá que reconocerse su validez sin ser jurídicamente posible pasar al examen de fondo. (2a./J. 27/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 2a. Sala, marzo 2008, p.152

RECONSIDERACIÓN. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, NO ES IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.- El citado artículo otorga a los afectados por las resoluciones dictadas por la Comisión Federal de Competencia la facultad de impugnarlas ante la propia Comisión, a través del recurso de reconsideración; asimismo, dispone el plazo para la interposición de éste, las formalidades de su tramitación, el otorgamiento de la suspensión y el propósito de dicho medio de defensa (revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada). Como se observa, el recurso de reconsideración es, en sí, un medio ordinario de defensa, previsto en ley, que procede en contra de las determinaciones de la Comisión Federal de Competencia, dictadas con apoyo en la ley de la materia. Por otro lado, el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que el juicio contencioso administrativo federal procede, entre otros actos, en contra de las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora bien, ni en la fracción XV del artículo 11 de la citada Ley Orgánica vigente hasta el 6 de diciembre de 2007, ni en la fracción XV de su correlativo artículo 14 de la vigente, se establece expresamente dentro de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la resolución dictada en el recurso de reconsideración previsto en el artículo 39 de la Ley Federal de Competencia Económica. De lo anterior se concluye, que la resolución dictada dentro del recurso no es impugnable a través de medio ordinario de defensa alguno, por lo que sólo puede combatirse a través del juicio de amparo indirecto, en términos del numeral 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2a./J. 30/2008)

S.J.F. IX Época. T. XXVII. 2a. Sala, marzo 2008, p.174

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO

BOLETAS DE INFRACCIÓN EMITIDAS POR VIOLACIÓN AL REGLAMENTO SOBRE EL PESO, DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE AUTOTRANSPORTE QUE TRANSITAN EN LOS CAMINOS Y PUENTES DE JURISDICCIÓN FEDERAL. SE CONSIDERAN RESOLUCIONES DEFINITIVAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2007).- Conforme a los artículos 11, fracción III y segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente hasta el 6 de diciembre de 2007, y 197 del Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales, el juicio contencioso administrativo procede contra las boletas de infracción que un servidor público designado o comisionado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emite por violación al Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal. Lo anterior es así, porque el segundo de los preceptos mencionados dispone que se entregará al particular el original y una copia de aquéllas, el primero para sustituir temporalmente al documento que hubiere sido recogido en garantía y la segunda como citatorio para que el interesado se presente ante la oficina correspondiente, ya sea para la calificación de la infracción, o para pagar la multa, lo que implica el reconocimiento de que la aludida boleta impone una sanción económica que debe pagarse. Incluso, en la hipótesis de que faltare la calificación de la infracción por parte de otra autoridad, ésta partirá del supuesto de que el hecho atribuido al gobernado es cierto y, por ende, se limitará a individualizar la sanción; ya que la veracidad de éste no depende de la calificación que se realice. Además, el propio artículo 197, cuarto párrafo, destaca que el particular podrá impugnar la infracción y que el plazo para interponer el medio de defensa inicia a partir de que se entrega la referida boleta, con lo que se reconoce que es recurrible y ello la ubica como una resolución definitiva para efectos de la procedencia del juicio de nulidad, porque además de que la interposición de ese medio de defensa es optativa, por la inclusión del vocablo “podrán”, que lleva a la idea de una disposición potesta-

tiva y no obligatoria, para asentar el hecho atribuido al imputado infractor no media un procedimiento concreto, ni requiere de una posterior convalidación para producir esa definitividad. (XVI.1o.A.T. J/5)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 1er. T.C. del 16o. C., marzo 2008, p. 1494

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO

INFORMES DE ASUNTOS NO DILIGENCIADOS. DEBEN REUNIR LOS REQUISITOS SEÑALADOS EXPRESA E IMPLÍCITAMENTE POR EL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR TENER NATURALEZA HOMÓLOGA A LAS NOTIFICACIONES PERSONALES. (XXI.2o.P.A. J/18)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 2o. T.C. del 21er. C., marzo 2008, p. 1656

TESIS AISLADAS

PRIMERA SALA

PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL RESTRINGIR EL DERECHO A RECIBIRLA, VIOLA LA GARANTÍA SOCIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). (1a. XXVIII/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 1a. Sala, marzo 2008, p. 123

RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER QUE EXISTE NOTORIA IMPOSIBILIDAD PRÁCTICA DE COBRO, ENTRE OTROS CASOS, TRATÁNDOSE DE CRÉDITOS CUYA SUERTE PRINCIPAL AL DÍA DE SU VENCIMIENTO NO EXCEDA DE CINCO MIL PESOS NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005). (1a. XXVI/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 1a. Sala, marzo 2008, p. 125

RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER QUE EXISTE NOTORIA IMPOSIBILIDAD PRÁCTICA DE COBRO, ENTRE OTROS CASOS, TRATÁNDOSE DE CRÉDITOS CUYA SUERTE PRINCIPAL AL DÍA DE SU VENCIMIENTO NO EXCEDA DE CINCO MIL PESOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005). (1a. XXIV/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 1a. Sala, marzo 2008, p. 126

RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL INCLUIR LA EXPRESIÓN "NOTORIA IMPOSIBILIDAD PRÁCTICA DE COBRO", NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005).
(1a. XXIII/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 1a. Sala, marzo 2008, p. 126

RENTA. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN VIII, EN RELACIÓN CON EL 31, FRACCIÓN XVI, Y 53 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO PERMITIR LA DEDUCCIÓN DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS PARA RIESGOS CREDITICIOS A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005). (1a. XXV/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 1a. Sala, marzo 2008, p. 127

SEGUNDA SALA

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. EL ARTÍCULO 60, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.
(2a. XXXIV/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 2a. Sala, marzo 2008, p. 277

AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. LA DEVOLUCIÓN COMPRENDE LAS CANTIDADES ENTERADAS DESDE EL ACTO DE APLICACIÓN QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO Y LOS PAGOS SUBSECUENTES HASTA QUE LA SENTENCIA CAUSE EJECUTORIA.
(2a. XXXII/2008)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 2a. Sala, marzo 2008, p. 277

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

CERTIFICADO DE ORIGEN DE MERCANCÍAS IMPORTADAS BAJO TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL CONFORME AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. ASENTAR EN ÉL UNA FRACCIÓN ARANCELARIA QUE NO CORRESPONDE A AQUÉLLAS NO CONSTITUYE UN DEFECTO, SINO UN DATO FALSO O INCORRECTO QUE REPRESENTA UNA INFRACCIÓN EN MATERIA ADUANERA. (I.4o.A.636 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 4o. T.C. del 1er. C., marzo 2008, p. 1742

INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL ARTÍCULO 143, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PARA QUE UNA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LO ACREDITE DEBE DEMOSTRAR QUE INTERPUSO MEDIOS DE DEFENSA RESPECTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO QUE SE LE FORMULARON Y QUE NO OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE EN ELLOS. (I.4o.A.618 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 4o. T.C. del 1er. C., marzo 2008, p. 1762

MANUALES DE ORGANIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. REQUISITOS PARA QUE SE CONSIDEREN NORMAS OBLIGATORIAS SUSCEPTIBLES DE DETERMINAR UNA CAUSA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. (I.4o.A.635 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 4o. T.C. del 1er. C., marzo 2008, p. 1781

MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. SU CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA. (I.4o.A.630 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 4o. T.C. del 1er. C., marzo 2008, p. 1781

MERCANCÍAS EMBARGADAS QUE FUERON ENAJENADAS. LA PERSONA RECONOCIDA COMO SU POSEEDOR AL LEVANTAR EL ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE SOLICITAR EL PAGO DE SU VALOR, SI ACREDITA SER QUIEN SUFRIÓ UN MENOSCABO EN SU ESFERA JURÍDICA. (I.4o.A.641 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 4o. T.C. del 1er. C., marzo 2008, p. 1783

NORMA AUTOAPLICATIVA COMPLEJA O COMPUESTA. EL ARTÍCULO 143, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TIENE ESA NATURALEZA. (I.4o.A.617 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 4o. T.C. del 1er. C., marzo 2008, p. 1787

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CONFORME AL ARTÍCULO 38, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY RELATIVA, EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS PARA QUE UNA EMPRESA PARTICIPE EN UNA LICITACIÓN PÚBLICA, PUEDE SOSLAYAR LOS REQUISITOS INCUMPLIDOS QUE, POR SÍ MISMOS, NO AFECTEN LA SOLVENCIA DE AQUÉLLAS. (I.4o.A.616 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 4o. T.C. del 1er. C., marzo 2008, p. 1789

RENTA. REGLAS PARA QUE LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS QUE TRIBUTAN BAJO EL RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL ACREDITEN EL IMPUESTO RELATIVO PAGADO EN EL EXTRANJERO POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA FUERA DE MÉXICO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2002).
(I.4o.A.631 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 4o. T.C. del 1er. C., marzo 2008, p. 1808

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

PRECLUSIÓN DE LA FACULTAD DE LAS AUTORIDADES PARA EMITIR UNA NUEVA RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE SUS ACTOS. ES INAPLICABLE EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE LA PREVÉ, RESPECTO DE LOS JUICIOS DE NULIDAD QUE SE INICIARON, SUSTANCIARON Y FALLARON CON FUNDAMENTO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005. (I.7o.A.555 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 7o. T.C. del 1er. C., marzo 2008, p. 1793

PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. LA OPOSICIÓN DE LA EXCEPCIÓN RELATIVA POR PARTE DE LAS AFIANZADORAS, NO EXCLUYE LAS HIPÓTESIS DE INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO PARA QUE SE ACTUALICE AQUELLA FIGURA JURÍDICA. (I.7o.A.560 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 7o. T.C. del 1er. C., marzo 2008, p. 1796

PRIMA DEL SEGURO POR RIESGO DE TRABAJO. EL ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN MATERIA DE AFILIACIÓN, CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN, AL ESTABLECER LA FACULTAD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA RECTIFICARLA O DETERMINARLA, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA. (I.7o.A.559 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 7o. T.C. del 1er. C., marzo 2008, p. 1798

RECONOCIMIENTO ADUANERO DE MERCANCÍAS. EL ACTA DE MUESTREO LEVANTADA CUANDO AQUÉLLAS SEAN DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN NO ES UN ACTO DE MOLESTIA Y, POR TANTO, NO ES EXIGIBLE QUE CUMPLA CON LAS GARANTÍAS DE FUNDAMENTA-

CIÓN Y MOTIVACIÓN CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (I.7o.A.557 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 7o. T.C. del 1er. C., marzo 2008, p. 1807

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA CONFIGURACIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO ESTÁ SUPEDITADA A QUE EL ACTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR SE NOTIFIQUE A TERCEROS. (I.7o.A.558 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 7o. T.C. del 1er. C., marzo 2008, p. 1815

SUSPENSIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA NO CONFIGURA LA NEGATIVA FICTA RESPECTO DE SU OTORGAMIENTO. (I.7o.A.553 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 7o. T.C. del 1er. C., marzo 2008, p. 1824

VALOR EN ADUANA DE MERCANCÍAS IMPORTADAS. CUANDO SE DETERMINA CONFORME AL MÉTODO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY ADUANERA, LA AUTORIDAD ESTÁ OBLIGADA A EXPRESAR CON TODA PRECISIÓN LAS RAZONES DE HECHO QUE SUSTENTAN SU CONCLUSIÓN. (I.7o.A.552 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII.7o. T.C. del 1er. C., marzo 2008, p. 1833

VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 46, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONDICIONA A LA EMISIÓN DE UNA NUEVA ORDEN, LA CONCLUSIÓN DE LA YA INICIADA (TEXTO VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE ENERO DE DOS MIL SIETE). (I.7o.A.556 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII.7o. T.C. del 1er. C., marzo 2008, p. 1834

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE NULIDAD. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU DESECHAMIENTO. (I.15o.A.89 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 15o. T.C. del 1er. C., marzo 2008, p. 1729

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIÓN EN LA FASE ADMINISTRATIVA ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA INDIRECTA.- Del análisis del proceso que culminó con la expedición de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, publicada el 31 de diciembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, así como de la interpretación teleológica y sistemática de sus artículos 17, 18, 19 y 24, se desprende que la reclamación de la indemnización por responsabilidad patrimonial derivada de la actividad administrativa irregular del Estado, debe enderezarse a través de un procedimiento del que conoce el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el que en funciones de autoridad administrativa se encarga de resolver si existió o no la actividad irregular que afecte a quienes no tienen la obligación jurídica de soportarla, así como de fijar las indemnizaciones que correspondan al afectado para la reparación integral del daño y, en su caso, por el daño personal y moral, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la ley de la materia; procedimiento que debe ajustarse también a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la cual, conforme a su artículo 1o., se aplica a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada y sus organismos descentralizados respecto a sus actos de autoridad, y es extensiva al mencionado tribunal porque, no obstante ser un tribunal autónomo, al resolver sobre esas reclamaciones no actúa como órgano jurisdiccional, sino con el carácter de autoridad administrativa, surtiéndose a su favor una competencia ampliada en términos de lo previsto en el artículo 11, fracción XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia

Fiscal y Administrativa en vigor hasta el 6 de diciembre de 2007 (coincidente con lo dispuesto en el artículo 14, fracciones VIII y XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor). Además, de lo establecido en el artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado en relación con el artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se evidencia que la resolución definitiva dictada en ese procedimiento administrativo que niegue la indemnización o que, por su monto, no satisfaga al reclamante, es impugnable en el juicio de nulidad del que también conoce el mencionado tribunal, pero investido en funciones de órgano jurisdiccional y ajustándose en cuanto al procedimiento a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es el ordenamiento instrumental que se aplica en ese juicio. En esos términos, es patente que la reclamación de mérito se deduce inicialmente en un procedimiento administrativo no en un juicio, por lo que las resoluciones que al respecto se emitan, ya sea desechando la pretensión por improcedente o teniéndola por no interpuesta, no pueden calificarse como sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin a un juicio (que son las que lo definen en lo principal o lo dan por concluido); por lo que siendo determinaciones emitidas fuera de juicio, el amparo en el que se reclamen no debe tramitarse en la vía directa establecida en el artículo 158 de la Ley de Amparo como competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, sino en la indirecta de que conoce un Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, y 114, fracción III, de la legislación de la materia. (I.15o.A.93 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 15o. T.C. del 1er. C., marzo 2008, p. 1811

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL PROCEDIMIENTO PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA EN LA FASE ADMINISTRATIVA ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBE OBSERVAR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS DE LA LEGISLACIÓN FEDERAL DE LA MATERIA Y DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, NO ASÍ LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA UNA DEMANDA DE NULIDAD.- El análisis del proceso que culminó con la expedición de la Ley Federal de Responsabili-

dad Patrimonial del Estado, publicada el 31 de diciembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, así como la interpretación teleológica y sistemática de sus artículos 17, 18, 19 y 24, permiten concluir que la reclamación de la indemnización por responsabilidad patrimonial derivada de la actividad administrativa irregular del Estado, debe enderezarse a través de un procedimiento del que conoce el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el que en funciones de autoridad administrativa se encarga de resolver si existió o no la actividad irregular que afecte a quienes no tienen la obligación jurídica de soportarla, así como de fijar las indemnizaciones que correspondan al afectado para la reparación integral del daño y, en su caso, por el daño personal y moral, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la ley de la materia; procedimiento que debe ajustarse también a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la cual, conforme a su artículo 1o., se aplica a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada y sus organismos descentralizados respecto a sus actos de autoridad, y es extensiva al mencionado tribunal porque, no obstante ser un tribunal autónomo, al resolver sobre esas reclamaciones no actúa como órgano jurisdiccional, sino con el carácter de autoridad administrativa, surtiéndose a su favor una competencia ampliada en términos de lo previsto en el artículo 11, fracción XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor hasta el 6 de diciembre de 2007 (coincidente con lo dispuesto en el artículo 14, fracciones VIII y XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en vigor). Ahora bien, según lo establecido en el artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado en relación con el artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la resolución definitiva dictada en ese procedimiento administrativo que niegue la indemnización o que, por su monto, no satisfaga al reclamante, es impugnable en el juicio de nulidad del que también conoce el mencionado tribunal, pero investido en funciones de órgano jurisdiccional y ajustándose en cuanto al procedimiento a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es el ordenamiento instrumental que se aplica en ese juicio. En ese sentido, para la tramitación de una reclamación en la fase administrativa, aun ante el tribunal administrativo, no deben exigirse los requisitos previstos para la procedencia de la vía jurisdiccional, esto es, los establecidos en la Ley Federal de Procedimiento

Contencioso Administrativo, como es la existencia de una resolución definitiva, sino los establecidos en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (I.15o.A.92)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 15o. T.C. del 1er. C., marzo 2008, p. 1813

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LOS PROCESOS LEGISLATIVOS QUE CULMINARON CON LA ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE LA LEY FEDERAL RELATIVA Y LA DEROGACIÓN DE DISPOSICIONES VINCULADAS AL TEMA, EVIDENCIAN LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DE LAS RECLAMACIONES DE INDEMNIZACIÓN EN LA MATERIA MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO REGULADO POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, Y DE LA IMPUGNACIÓN DE LA RESOLUCIÓN FINAL QUE EN ÉL SE DICTE A TRAVÉS DEL JUICIO DE NULIDAD.- El análisis sistemático de los procesos legislativos que culminaron con los decretos mediante los cuales se adicionó un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución General de la República, se expidió la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y se derogaron los artículos 33 y 34, último párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 1927 del Código Civil Federal, revela que la intención primigenia del legislador federal fue que de las reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado conocieran, mediante un procedimiento administrativo, ya sea las dependencias o entidades de la administración pública federal a quienes se imputara la conducta generadora del daño o perjuicio, o, en su caso, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (ahora Secretaría de la Función Pública), y que lo resuelto por estas autoridades fuere revisado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la vía jurisdiccional (juicio de nulidad). Sin embargo, también se evidencia que para evitar la posible parcialidad o discrecionalidad en la que pudieran incurrir las autoridades administrativas en el curso de ese proceso legislativo, se consideró preferible que fuera el men-

cionado tribunal el que conozca inicialmente de esas reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, a través de un procedimiento regulado en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esto es, actuando como autoridad administrativa y no jurisdiccional. Asimismo, se estableció la procedencia de impugnar la resolución de ese procedimiento ante el mismo órgano jurisdiccional, de conformidad con las reglas establecidas en el Código Fiscal de la Federación, que rigió hasta el 31 de diciembre de 2005 (actualmente en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) y en términos de la competencia ampliada de aquél, establecida en el artículo 11, fracción XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente hasta el 6 de diciembre de 2007 (coincidente con las fracciones VIII y XV del artículo 14 de la ley en vigor, publicada el 6 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación). (I.15o.A.91 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 15o. T.C. del 1er. C., marzo 2008, p. 1814

SUSPENSIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL IMPORTE DE LA GARANTÍA QUE DEBE OTORGAR EL INCONFORME PARA QUE SURTA EFECTOS ESA MEDIDA DEBE RESPONDER SÓLO POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN CAUSARSE A TERCEROS, NO ASÍ POR EL MONTO TOTAL DETERMINADO EN EL ACTO IMPUGNADO.(I.15o.A.94 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 15o. T.C. del 1er. C., marzo 2008, p. 1822

SUSPENSIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL TIEMPO DURANTE EL CUAL EL RECURRENTE DEBE GARANTIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CON ESA MEDIDA PRECAUTORIA PUDIERAN CAUSARSE A TERCEROS NO PUEDE EXCEDER DE TRES MESES. (I.15o.A.95 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 15o. T.C. del 1er. C., marzo 2008, p. 1823

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. EL IMPORTADOR PUEDE RESENTIR UNA AFECTACIÓN A SU INTERÉS JURÍDICO QUE LO LEGITIME A IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN QUE DECLARE LA INVALIDEZ DEL CERTIFICADO DE ORIGEN EXPEDIDO POR EL EXPORTADOR O PRODUCTOR. (I.15o.A.96 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII.15o. T.C. del 1er. C., marzo 2008, p. 1830

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO

SENTENCIAS DE AMPARO QUE DECLARAN INCONSTITUCIONALES LAS NORMAS QUE PREVÉN UN IMPUESTO. SU CUMPLIMIENTO SE COLMA CON LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS Y SU ACTUALIZACIÓN, PERO NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES. (III.2o.A.164 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 2o. T.C. del 3er. C., marzo 2008, p. 1820

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TANTO LA DEMANDA INICIAL COMO LAS PROMOCIONES SUBSECUENTES PUEDEN PRESENTARSE POR CORREO, SI EL ACTOR TIENE SU DOMICILIO LEGAL FUERA DE LA SEDE DE LA SALA CORRESPONDIENTE DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. (III.3o.A.65 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 3er. T.C. del 3er. C., marzo 2008, p. 1765

REVISIÓN FISCAL. EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS Y EL DIRECTOR JURÍDICO DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINAN-

ZAS DEL ESTADO DE JALISCO CARECEN DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA INTERPONER EL CITADO RECURSO EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DEL RAMO, CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS EN QUE ÉSTE HAYA INTERVENIDO COMO AUTORIDAD DEMANDADA. (III.3o.A.66 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 3er. T.C. del 3er. C., marzo 2008, p. 1816

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO

PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE, EL CUAL SE INTERRUMPE CON UN REQUERIMIENTO DE PAGO, INICIA NUEVAMENTE DESDE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE LLEVÓ A CABO, Y NO A PARTIR DE QUE SE RESUELVA O QUEDE FIRME LA SENTENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO EN SU CONTRA. (IV.2o.A.213 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 2o. T.C. del 4o. C., marzo 2008, p. 1795

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO

CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO DE NULIDAD. NO CONSTITUYE UN REQUISITO SOLEMNE PARA FINCARLA A LA AUTORIDAD DEMANDADA CUANDO EL ACTOR NIEGA LOS HECHOS QUE MOTIVEN LOS ACTOS O RESOLUCIONES DE AQUÉLLA, QUE AL HACERLO UTILICE LA EXPRESIÓN "LISA Y LLANAMENTE". (V.2o.P.A.12 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 2o. T.C. del 5o. C., marzo 2008, p. 1741

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO

COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA. SI EN UNA PRIMERA SENTENCIA EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO HACE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO EN RELACIÓN CON SU INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN, DEBE ENTENDERSE QUE EL PRONUNCIAMIENTO ES TÁCITO EN EL SENTIDO DE QUE SE CUMPLE TAL REQUISITO, POR TANTO, ES ILEGAL QUE EN UN NUEVO FALLO DICTADO EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, HAGA UNA DECLARATORIA EXPRESA EN RELACIÓN CON AQUEL MOTIVO LEGAL.- De la jurisprudencia 219/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ESTUDIO CONFORME AL ARTÍCULO 238, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, COINCIDENTE CON EL MISMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL JUICIO DE NULIDAD Y EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO.", se desprende que existen dos formas en que las salas fiscales podrán analizar la competencia de la autoridad: 1) cuando expresamente se hace valer por el actor. En este caso, la sala analizará el problema planteado, y podrán acontecer dos supuestos: 1.1 que se estime fundado el concepto de anulación ante la incompetencia de la autoridad administrativa, lo cual conducirá a declarar la nulidad del acto impugnado y, 1.2 que se desestime el concepto de anulación por ser competente la autoridad administrativa. 2) cuando la sala fiscal oficiosamente realiza el estudio de la competencia de la autoridad administrativa; es decir, sin mediar concepto de impugnación expreso del actor relacionado con la competencia de dicha autoridad. En este supuesto, se podrán surtir dos hipótesis: 2.1 que se estime que la autoridad es incompetente, caso en el cual el pronunciamiento de la sala será indispensable, porque ello constituirá la causa de nulidad de la resolución impugnada; 2.2 que se considere que la autoridad es competente. Al efec-

to, la sala podrá: 2.2.1 hacer un pronunciamiento expreso en el sentido de que la autoridad es competente para emitir el acto impugnado, o bien; 2.2.2 omitir tal pronunciamiento expreso, lo cual indica necesariamente que la sala fiscal estimó que la autoridad demandada sí tiene competencia para emitir el acto impugnado. Conforme a lo anterior, debe entenderse que las salas fiscales están obligadas a analizar en todos los casos, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada, así como la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución; sin embargo, esa obligación se encuentra acotada por la propia Segunda Sala del Más Alto Tribunal de la Nación al considerar que cuando dichas salas consideren que la autoridad administrativa es incompetente, su pronunciamiento en ese sentido será indispensable, al tener como consecuencia la nulidad de la resolución, sin embargo, si consideran que la autoridad es competente, no necesariamente deberá existir pronunciamiento expreso, pues ello simplemente es indicativo de que las salas estimaron que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado. Con base en lo anterior, si en la sentencia primigenia que posteriormente fue materia de análisis por un tribunal colegiado, ya sea en un amparo directo o en revisión fiscal, la sala fiscal no expuso consideración alguna de la que se desprendiera la ausencia de competencia de la autoridad, la indebida, la insuficiente o la deficiente fundamentación de la misma, debe considerarse que la *a quo* estimó, ya sea expresa o tácitamente, que la autoridad demandada sí tiene competencia para emitir la resolución o acto impugnado, pues de lo contrario, o sea, de haberse considerado que el acto adolecía de esos requisitos, la sala fiscal estaba obligada a hacer un pronunciamiento expreso en ese sentido. De esta forma, y tomando en cuenta que las salas fiscales están obligadas a ajustarse a los lineamientos que se ordenen en el fallo dictado por un tribunal colegiado, ya sea en un juicio de amparo directo o en recurso de revisión fiscal, pero sin que estén facultadas para modificar aquellos aspectos que no fueron objeto de estudio en la aludida ejecutoria, pues al ser cuestiones no debatidas, éstas se estiman consentidas y por ende, han quedado firmes, se concluye que si en la sentencia primigenia hubo un pronunciamiento tácito o expreso en el sentido de que la autoridad demandada tiene competencia para emitir el acto impugnado, y este tópico no fue materia de litis ante el tribunal colegiado, la sala no está facultada a

realizar un nuevo pronunciamiento relacionado con la competencia de la autoridad o su fundamentación, atento que ha quedado firme. (VI.1o.A.249 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 1er. T.C. del 6o. C., marzo 2008, p. 1744

REVISIÓN FISCAL. REGLAS DEL AMPARO INDIRECTO O DIRECTO, CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ANALICE VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO O AL MOMENTO DE DICTAR LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO DE NULIDAD. (VI.1o.A.246 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 1er. T.C. del 6o. C., marzo 2008, p. 1817

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO

VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES. LA NEGATIVA DEL CONTRIBUYENTE DE DESIGNAR DOS TESTIGOS PARA LA PRÁCTICA DE LA DILIGENCIA, NO EXIME A LA AUTORIDAD DE NOMBRARLOS. (VI.3o.A.307 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 3er. T.C. del 6o. C., marzo 2008, p. 1841

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO

DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LO INDEBIDO. EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO ES UNA NORMA COMPLEJA, POR LO QUE AL EMITIR UN REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS RELACIONADO CON AQUELLA SOLICITUD, LA AUTORIDAD NO ESTÁ OBLIGADA A PRECISAR O TRANSCRIBIR LA PORCIÓN NORMATIVA EN QUE FUNDA SU COMPETENCIA. (VIII.3o.74 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 3er. T.C. del 8o. C., marzo 2008, p. 1753

INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. AL AFECTAR CON SU DESIGNACIÓN EL INTERÉS JURÍDICO DEL CONTRIBUYENTE, PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE NULIDAD. (VIII.3o.73 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 3er. T.C. del 8o. C., marzo 2008, p. 1763

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS ENTES PÚBLICOS FEDERALES. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA CONOCER DE LAS RECLAMACIONES RELATIVAS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2007).- De la interpretación de los artículos 11, fracción XV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente hasta el 6 de diciembre de 2007; 1o. y 17 a 23 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, se advierte que el mencionado tribunal es competente para conocer del procedimiento de responsabilidad patrimonial de los entes públicos federales; lo anterior es así, pues la naturaleza jurídica del aludido procedimiento consiste en analizar la reclamación de una supuesta actividad administrativa irregular del Estado que cause daño en los bienes y derechos de los particulares que no tengan obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate; de ahí que no sea exigible una resolución definitiva, ni mayores requisitos para su procedencia. (XIII.1o.33 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 1er. T.C. del 13er. C., marzo 2008, p. 1811

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO

CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA DETERMINAR CONTRIBUCIONES A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS

COMO RESPONSABLES SOLIDARIOS DE UNA PERSONA MORAL QUE CAMBIÓ DE DOMICILIO SIN DAR EL AVISO CORRESPONDIENTE, INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO. (XIX.1o.A.C.34 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 1er. T.C. del 19o. C., marzo 2008, p. 1740

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO

AYUNTAMIENTOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL QUE SE DECLARÓ LA NULIDAD DEL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL. (XXI.1o.P.A.89 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 1er. T.C. del 21er. C., marzo 2008, p. 1736

VISITA DOMICILIARIA PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES. PARA CONSIDERAR DEBIDAMENTE CIRCUNSTANCIADA EL ACTA RELATIVA, NO ES NECESARIO QUE EN ELLA SE PRECISE LA HORA EN QUE SE DETECTÓ LA OMISIÓN DE EMITIR LOS CITADOS COMPROBANTES.(XXI.1o.P.A.90 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII.1er T.C. del 21er. C., marzo 2008, p. 1840

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO

TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. SI EL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO ES LA DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO Y SU CORRESPONDIENTE COBRO COMO ACTOS PREVIOS A LA EMISIÓN

DEL RECIBO DE PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO, RECONOCIDOS EXPRESAMENTE POR LA RESPONSABLE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE RECABAR OFICIOSAMENTE LA PRUEBA DOCUMENTAL QUE LOS CONTENGA, DE LO CONTRARIO, INFRINGE LAS NORMAS FUNDAMENTALES QUE RIGEN AL JUICIO CONSTITUCIONAL, LO QUE AMERITA QUE SE REPONGA EL PROCEDIMIENTO. (XXI.2o.P.A.69 A)
S.J.F. IX Época. T. XXVII. 2o. T.C. del 21er. C., marzo 2008, p. 1827

OCTAVA PARTE

ÍNDICES GENERALES

ÍNDICE ALFABÉTICO DE JURISPRUDENCIAS DE LA SALA SUPERIOR

FACULTAD establecida en la regla 27 de las Reglas de Carácter General relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 1995. No es potestativa, sino obligatoria. (1) VI-J-1aS-1 7

ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRECEDENTES DE LA SALA SUPERIOR

ALCANCE de la sentencia que declara la nulidad lisa y llana de la resolución que determina créditos fiscales al delegado de la sindicatura de quiebras. No beneficia al órgano de la sindicatura por ser éste el responsable solidario. (13) VI-P-2aS-47 199

CERTIFICADO de origen. Cuando en el juicio es exhibido en idioma extranjero debe reabrirse la instrucción para ordenar su traducción. (2) VI-P-1aS-27 45

COMPETENCIA por razón de territorio de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a su Ley Orgánica vigente a partir del 7 de diciembre de 2007. (5) VI-P-1aS-30 79

CONCEPTOS de impugnación en el juicio contencioso administrativo federal. Su estudio debe atender al principio de mayor beneficio, para lograr la nulidad lisa y llana, pudiéndose omitir el de aquellos que aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el actor. (14) VI-P-2aS-48 200

CONSULTA fiscal.- Es procedente su análisis cuando no se invocan cuestiones de constitucionalidad. (1) VI-P-SS-26 13

DECISIÓN 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea. Forma en la que debe proceder la autoridad aduanera cuando detecta que el certificado de circulación no se llenó debidamente. (10) VI-P-2aS-44 125

INCIDENTE de incompetencia territorial. Cuando es planteado por la autoridad, tiene la carga de la prueba para demostrar la sede de la autoridad emisora de la resolución impugnada. (12) VI-P-2aS-46 197

INCIDENTE de suspensión. No es requisito de procedencia para otorgar la medida cautelar, expresar las razones por las cuales ésta es indispensable, tratándose de la ejecución de créditos fiscales impugnados. (6) VI-P-1aS-31 87

INSTITUCIONES de banca múltiple. No se encuentran obligadas a otorgar garantía del interés fiscal para que surta efectos la suspensión que se les conceda con apoyo en el artículo 28 fracción VI de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. (11) VI-P-2aS-45 159

JEFE de Sección. Sólo puede suplir al administrador de la aduana en la sección aduanera correspondiente. (19) VI-P-2aS-53 278

JUICIO contencioso administrativo. El principio de litis abierta contenido en el artículo 1º, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite al demandante esgrimir conceptos de anulación novedosos o reiterativos referidos a la resolución recurrida, los cuales deberán ser estudiados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (18) VI-P-2aS-52 275

LA suspensión de la ejecución de créditos fiscales comparte la finalidad de las medidas cautelares, por ser una especie de éstas, consecuentemente su otorgamiento debe atender a tal circunstancia. (7) VI-P-1aS-32 89

MEDIDA cautelar de suspensión. Es improcedente la solicitada para que no se publique en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la resolución administrativa mediante la cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial negó la solicitud de registro de una marca. (4) VI-P-1aS-29 77

QUEJA que se considera improcedente y se ordena tramitar como nuevo juicio. Los conceptos de impugnación que se planteen deben encaminarse a atacar aquella resolución que se consideró como nuevo acto y no como repetición de éste. (15) VI-P-2aS-49 201

RECURSO de reclamación en contra de la sentencia interlocutoria recaída al incidente de suspensión de la ejecución del crédito impugnado. Queda sin materia si durante su tramitación se resuelve el juicio contencioso administrativo federal. (3) VI-P-1aS-28 59

RESPONSABILIDAD solidaria del síndico en materia fiscal. La asume el órgano de la sindicatura y no su delegado conforme al artículo 26, fracción III del Código Fiscal de la Federación. (16) VI-P-2aS-50 202

SUSPENSIÓN de la ejecución de créditos fiscales impugnados. Se debe otorgar cuando existe embargo coactivo. (8) VI-P-1aS-33 90

SUSPENSIÓN de la ejecución de créditos fiscales. No procede su negativa con apoyo en los artículos 141 y 142 del Código Fiscal de la Federación. (9) VI-P-1aS-34 122

SUSPENSIÓN de la ejecución del acto impugnado. Procede concederla en juicio, si la autoridad inicia el procedimiento administrativo de ejecución, sin dar respuesta expresa a la solicitud que previamente le hizo la parte actora. (17) VI-P-2aS-51 245

ÍNDICE ALFABÉTICO DE CRITERIOS AISLADOS DE LA SALA SUPERIOR

INCIDENTE de incompetencia en razón del territorio.- Compete conocer a las Secciones de la Sala Superior. (2) VI-TA-2aS-2 317

INCIDENTE de incompetencia en razón del territorio. "Consulta numérica de patrones del Instituto Mexicano del Seguro Social," no es documento idóneo para acreditar la incompetencia de una Sala Regional si el mismo no precisa la autoridad emisora de los créditos fiscales impugnados. (3) VI-TA-2aS-3 318

INCIDENTE de incompetencia en razón del territorio. Corresponde a la autoridad incidentista acreditar sus afirmaciones en el sentido de que otra sala regional deba conocer del asunto. (4) VI-TA-2aS-4 319

INCIDENTE de incompetencia en razón del territorio.- Queda únicamente en las partes la posibilidad de plantear dicho incidente cuando la Sala Regional ha aceptado la competencia territorial. (5) VI-TA-2aS-5 320

PRINCIPIO de inmediatez contemplado en el artículo 43 de la Ley Aduanera. Sus implicaciones y alcances. (1) VI-TA-1aS-3..... 315

ÍNDICE ALFABÉTICO DE CRITERIOS AISLADOS DE SALAS REGIONALES

ACTO impugnado desconocido por el promovente del juicio de nulidad. Si la autoridad al contestar la demanda niega su existencia y dicha negativa no es desvirtuada, procede sobreseer el juicio. (9) VI-TASR-XXX-10 329

AVISO de inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social.- Es improcedente su rechazo, cuando contiene errores susceptibles de subsanarse. (5) VI-TASR-XXX-6 326

COMISIÓN Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Chihuahua, a fin de fundamentar su competencia para imponer multas por infracción a normas federales, debe citar el artículo, fracción o inciso de la normatividad en que se establezca la facultad ejercida. (6) VI-TASR-XXX-7 326

COMPETENCIA material.- La Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, no puede inferir que está facultada para establecer criterios restrictivos o limitativos respecto de la aplicación de los exámenes de postulación de agentes promotores de administradoras de fondos para el retiro. (3) VI-TASR-V-3 323

COMPETENCIA temporal. El límite de cuatro meses que prescribe el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para cumplir con la sentencia de este Tribunal, es aplicable a las resoluciones que cumplimentan sentencias emitidas bajo la vigencia del Título VI del Código Fiscal de la Federación. (15) VI-TASR-XLI-2 336

CONCESIÓN para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.- Requisitos que deben cumplirse para evitar su caducidad. (16) 341

COSA juzgada.- Existe cuando ya hay un pronunciamiento expreso del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (4) VI-TASR-XXX-5 325

FACULTADES de vigilancia en materia de transmisiones del Estado.- No pueden ser limitadas por las condiciones pactadas en el título de concesión respectivo. (1) VI-TASR-V-1 321

FUNDAMENTACIÓN y motivación.- Para cumplir con estos requisitos al imponer una multa actualizada, es necesario señalar la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor, que la autoridad aplica en su resolución. (10) VI-TASR-XXXVII-4 331

INAPLICABILIDAD de los artículos 70, cuarto párrafo y 75, fracción VI del Código Fiscal de la Federación, si la Administración Local de Recaudación únicamente actúa como autoridad notificadora de una multa impuesta por el titular del área de responsabilidades del órgano interno de control en la Comisión Federal de Electricidad. (12) VI-TASR-XXVII-1 333

INCIDENTE de falta de personalidad.- Resulta infundado cuando de las constancias de autos se desprende que no existe inexactitud en el nombre de la parte actora. (18) 342

INFRACCIÓN instantánea. Tiene tal carácter la autorización de una línea de crédito contra la normatividad aplicable. (14) VI-TASR-XLI-1 335

NOMBRES artísticos.- No son materia de reserva de derechos a favor de las empresas televisoras, aquellos que se deriven del nombre de la persona que dio origen al nombre artístico salvo que medie consentimiento de ésta. (2) VI-TASR-V-2 322

NOTIFICACIÓN por instructivo.- Supuestos para su procedencia. (11) VI-TASR-XXXVII-5 332

ORDEN de visita domiciliaria.- Si la autoridad que la emite la funda en el artículo 52-A del Código Fiscal de la Federación, debe cumplir con el procedimiento establecido para pagos provisionales o mensuales por los cuales ya se presentó el dictamen. (20) 345

ORDEN en operativo de inspección.- No es necesario que se notifique previamente, en el caso de flagrancia prevista en el artículo 175 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal. (21) 346

PAGOS efectuados por un tercero a cuenta del contribuyente.- Se pueden realizar mediante cheque nominativo del propio contribuyente o mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito, sin que sea un requisito para la realización de este tipo de operaciones, que el registro contable se realice de manera específica. (19) 344

PEDIMENTO de importación.- Si se presenta al momento en que estaba vigente la Ley del Impuesto General de Importación, éste es el ordenamiento legal aplicable en la determinación de las contribuciones omitidas. (13) VI-TASR-XXVII-2 334

PROCEDIMIENTO aduanero.- El plazo de cuatro meses para emitir la resolución en cumplimiento, corre a partir de la fecha en que la resolución que así lo ordene se notifique a la autoridad respectiva. (7) VI-TASR-XXX-8 327

RESARCIMIENTO. El derecho nace a favor de quien obtenga una resolución favorable. (17) 342

VISITA para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de la expedición de comprobantes fiscales. La carga de la prueba para demostrar que se llevó en una hora en que el establecimiento no se encontraba abierto al público en general, corre a cargo del visitado. (8) VI-TASR-XXX-9 328

ÍNDICE DE RESOLUCIONES Y VOTOS PARTICULARES

RESOLUCIÓN correspondiente al juicio contencioso administrativo Núm. 438/06-04-01-8/809/07-PL-09-04 353

ÍNDICE ALFABÉTICO DE ACUERDOS GENERALES

ADSCRIPCIÓN de la Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel. G/39/2008 .. 442

ADSCRIPCIÓN del Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas. G/40/2008 .. 443

COMISIÓN temporal de la Magistrada Rosa Angélica Nieto Samaniego. G/25/2008 419

COMISIÓN temporal de la Magistrada Rosa Angélica Nieto Samaniego. G/32/2008 429

COMISIÓN temporal de la Magistrada Rosa Angélica Nieto Samaniego. G/36/2008 437

COMISIÓN temporal del Magistrado Héctor Carrillo Maynez. G/22/2008 .. 415

COMISIÓN temporal del Magistrado Héctor Carrillo Maynez. G/28/2008 .. 424

COMISIÓN temporal del Magistrado Héctor Carrillo Maynez. G/34/2008 .. 433

COMISIÓN temporal del Magistrado Jorge Luis Rosas Sierra. G/26/2008 .. 421

COMISIÓN temporal del Magistrado Jorge Luis Rosas Sierra. G/33/2008 .. 431

COMISIÓN temporal del Magistrado Jorge Luis Rosas Sierra. G/37/2008 .. 439

COMISIÓN temporal del Magistrado Manuel Castellanos Tortolero. G/23/2008 417

COMISIÓN temporal del Magistrado Manuel Castellanos Tortolero. G/29/2008 426

COMISIÓN temporal del Magistrado Manuel Castellanos Tortolero. G/35/2008 435

DESIGNACIÓN de Contralor Interno. G/27/2008 423

INTEGRACIÓN de la Junta de Gobierno y Administración. G/38/2008 441

SE declara inhábil el día dos de mayo de dos mil ocho. G/31/2008 428

SE FIJA la jurisprudencia VI-J-1aS-1. G/S1-2/2008 444

ÍNDICE ALFABÉTICO DE JURISPRUDENCIAS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL

BOLETAS de infracción emitidas por violación al reglamento sobre el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal. Se consideran resoluciones definitivas para efectos de la procedencia del juicio de nulidad (Legislación vigente hasta el 6 de diciembre de 2007). (XVI.1o.A.T. J/5)..... 453

LITIS abierta en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. No opera cuando el recurso hecho valer en contra de una resolución primigenia fue desechado y no se demuestra la ilegalidad de su pronunciamiento. (2a./J. 27/2008) 451

RECONSIDERACIÓN. La resolución dictada en el recurso previsto en el artículo 39 de la Ley Federal de Competencia Económica, no es impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (2a./J. 30/2008) . 452

ÍNDICE ALFABÉTICO DE TESIS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL

COMPETENCIA de la autoridad demandada. Si en una primera sentencia el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no hace pronunciamiento expreso en relación con su indebida fundamentación, debe entenderse que el pronunciamiento es tácito en el sentido de que se cumple tal requisito, por tanto, es ilegal que en un nuevo fallo dictado en cumplimiento a una ejecutoria de un Tribunal Colegiado de Circuito, haga una declaratoria expresa en relación con aquel motivo legal. (VI.1o.A.249 A) 468

RESPONSABILIDAD patrimonial de los entes públicos federales. corresponde al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocer de las reclamaciones relativas (Legislación vigente hasta el 6 de diciembre de 2007). (XIII.1o.33 A) 471

RESPONSABILIDAD patrimonial del Estado. El juicio de amparo contra la resolución que desecha la reclamación de indemnización en la fase administrativa ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, debe tramitarse en la vía indirecta. (I.15o.A.93 A) 461

RESPONSABILIDAD patrimonial del Estado. El procedimiento para reclamar la indemnización relativa en la fase administrativa ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debe observar las disposiciones relativas de la legislación federal de la materia y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no así los requisitos previstos para una demanda de nulidad. (I.15o.A.92) 462

RESPONSABILIDAD patrimonial del Estado. Los procesos legislativos que culminaron con la adición de un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Federal, así como la expedición de la Ley Federal relativa y la derogación de disposiciones vinculadas al tema, evidencian la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer de las reclamaciones de indemnización en la materia mediante un procedimiento regulado por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y de la impugnación de la resolución final que en él se dicte a través del juicio de nulidad.
(I.15o.A.91 A)..... 464

DIRECTORIO DE LA REVISTA

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA:
Mag. Francisco Cuevas Godínez

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA:
Lic. Minko Eugenio Arriaga y Mayés

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICACIONES:
Lic. Juan Carlos Ramírez Villena

Compilación, clasificación, ordenación y revisión de tesis, elaboración de índices, corrección tipográfica y vigilancia de la edición:

Lic. Ana Lidia Santoyo Avila
C. Elba Carolina Anguiano Ramos

PUBLICACIÓN OFICIAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Certificado de Licitud de Título No. 3672
Certificado de Licitud de Contenido No. 3104
Número de Reserva al Título en Derechos de Autor: 04-2001-012517410700-102
Distribuidor principal: Fideicomiso para Promover la Investigación del Derecho Fiscal y Administrativo, Insurgentes Sur 881 Torre 'O', Piso 12, Colonia Nápoles, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03810, México , D.F.
Impresión:Talleres Gráficos de México. Secretaría de Gobernación, Av. Canal del Norte No. 80, Col. Felipe Pescador, C.P. 06280, México D.F.
Insurgentes Sur No. 881, Torre 'O', Piso 12, Col. Nápoles, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03810, México, D.F.

Las obras podrán adquirirse en la Dirección General de Publicaciones, en las Librerías Jurídicas Especializadas y en las Salas Regionales Foráneas, o bien, por correo, enviando cheque a nombre del Fideicomiso para Promover la Investigación del Derecho Fiscal y Administrativo, a la siguiente dirección:

DIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICACIONES

Insurgentes Sur No. 881, Torre "O" Piso 12, Col. Nápoles
Deleg. Benito Juárez. C.P. 03810
México, D.F.
Tel. 50-03-70-00 Ext. 3219
Mail: martha.ramirez@mail.tfjfa.gob.mx

LIBRERÍAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS

METROPOLITANAS

SUCURSAL INSURGENTES
INSURGENTES SUR No. 881, MEZANINE
COL. NÁPOLES
DELEG. BENITO JUÁREZ.
C.P. 03810 MÉXICO, D.F.
TEL.(55) 50 03 70 00 Ext. 4144
FAX: 50037402
Mail: libreria.juridica@mail.tfjfa.gob.mx

SUCURSAL TLALNEPANTLA
AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
No. 18 - P.B. COL. CENTRO
C.P. 54000 TLALNEPANTLA ESTADO DE MÉXICO
TEL. (55)53 84 05 44
Mail: libreria.tlalnepantla@mail.tfjfa.gob.mx

LIBRERÍAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS

FORÁNEAS

SUCURSAL TORREÓN
BLVD. DIAGONAL REFORMA
No. 2984
ZONA CENTRO,
C.P. 27000, TORREÓN, COAH.
TEL. (871) 79 38 937
Mail: libreria.torreon@mail.tfjfa.gob.mx

SUCURSAL CELAYA
EJE VIAL MANUEL J. CLOUTHIER
NORPONIENTE No. 508
FRACCIÓN DE LA SEGUNDA
SECCIÓN DE LA HACIENDA
SAN JUANICO
C.P. 38020 CELAYA, GTO.
TEL. (461) 6 14 20 89
Mail: libreria.celaya@mail.tfjfa.gob.mx

SUCURSAL OAXACA
AV. PINO SUÁREZ 700 INTERIOR 16-B
COL. CENTRO
C.P. 68000 OAXACA, OAX.
TEL. (951) 51 37 899
Mail: libreriajuridicaoax@prodigy.net.mx

SUCURSAL CULIACÁN
PASEO NIÑOS HÉROES No. 520
ORIENTE
COL. CENTRO
C.P. 80000, CULIACÁN, SIN.
TEL. (667) 7 12 90 39
Mail: libreria.culiacan@mail.tfjfa.gob.mx

SUCURSAL ACAPULCO
AV. COSTERA MIGUEL ALEMÁN No. 63-2° PISO
LOCALES C-1 Y C-2 FRACC. CLUB DEPORTIVO
INTERIOR DEL CENTRO DE CONGRESOS COPACABANA
C.P. 33690, ACAPULCO, GRO.
TEL. (744) 4 81 36 39
Mail: libreria.acapulco@mail.tfjfa.gob.mx

DIRECTORIO
SALAS REGIONALES FORÁNEAS

PRIMERA SALA REGIONAL DE ORIENTE
PRIVADA 5B-SUR, No. 4302,
ENTRE 43 PTE. Y 7 SUR
COL. HUEXOTITLA,
C.P. 72530
PUEBLA, PUEBLA
TEL. 01 (222) 2 43 34 05

SALA REGIONAL PENINSULAR
CALLE 56-A No. 483B, (PASEO DE MONTEJO)
ESQ. CON CALLE 41, COL. CENTRO
C.P. 97000
MÉRIDA, YUCATÁN
TEL 01 (999) 9 28 04 19

PRIMERA SALA REGIONAL DEL NORESTE
CERRO DE PICACHOS No. 855 SUR
COL. OBISPADO
C.P. 64060
MONTERREY, NUEVO LEÓN
TEL. 01 (818) 1 23 21 53

SALA REGIONAL DEL NOROESTE II
CALLE CHIHUAHUA No. 133 NTE.
ENTRE CALLES HIDALGO Y ALLENDE
COL. CENTRO
C.P. 85000
CD. OBREGÓN, SONORA
TEL. 01 (644) 414 70 05

PRIMERA SALA REGIONAL DEL GOLFO
AV. CIRCUITO CRISTOBAL COLÓN No. 5,
OCTAVO Y DÉCIMO PISOS.
COL. JARDINES DE LAS ÁNIMAS,
SECCIÓN "TORRE ÁNIMAS"
C.P. 91190
JALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ
TEL. 01 (228) 812 56 31

SALA REGIONAL DEL NOROESTE I
AV. PASEO DE LOS HÉROES 9691,
FRACC. DESARROLLO URBANO
DEL RÍO TIJUANA
C.P. 22320
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
TEL. 01 (664) 684 84 61

PRIMERA Y SEGUNDA SALA
REGIONAL DE OCCIDENTE
AV. AMÉRICAS No. 877-2° Y 3er PISO
ENTRE COLOMOS Y FLORENCIA
COL. PROVIDENCIA, SECTOR HIDALGO
C.P. 44620
GUADALAJARA, JALISCO
TEL. 01 (333) 8 17 15 25

SALA REGIONAL DEL NORTE CENTRO I
AV. FRANCISCO ZARCO No. 2656
COL. FRANCISCO ZARCO
C.P. 31020
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL. 01 (614) 418 84 77

SALA REGIONAL DEL CENTRO I
PLAZA KRISTAL, TORRE "A" ÚLTIMO PISO,
AV. LÓPEZ MATEOS, ESQUINA CON HÉROES
DE NACOZARI SUR No. 1001,
COL. SAN LUIS
C.P. 20250
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
TEL. 01 (449) 915 29 12

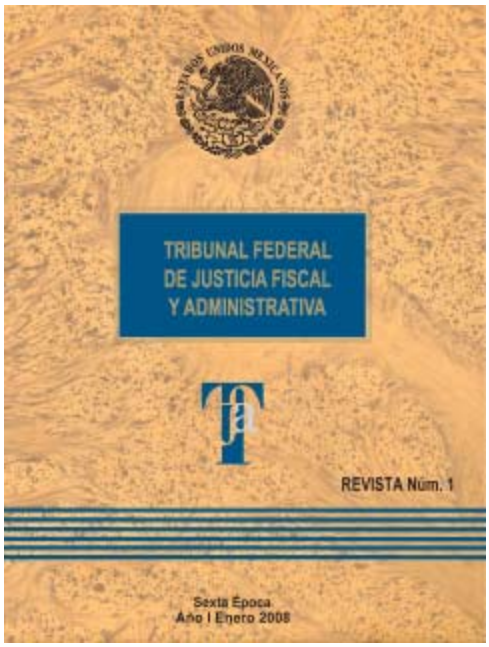
SALA REGIONAL DEL GOLFO-NORTE
CALLE HIDALGO No. 260
ESQ. MIER Y TERÁN
COL. CENTRO
C.P. 87000
CD. VICTORIA, TAMAULIPAS
TEL. 01 (834) 315 59 74

SALA REGIONAL DEL CARIBE
SUPER MANZANA 36, MANZANA 2, LOTE 2
LOCALES B-4, B-8 AL B-21
PLAZA COMERCIAL LAS PALMAS
ENTRE XCARET Y AVENIDA
COBA ESQ. LA COSTA
C.P. 77500
CANCÚN, QUINTANA ROO
TEL. 01 (998) 898 08 93

SALA REGIONAL CHIAPAS-TABASCO
PRIMERA CALLE PONIENTE NORTE No. 152
ESQUINA PRIMERA NORTE
COL. CENTRO
C.P. 29000
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
TEL. 01 (961) 612 07 09

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

REVISTA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA



$320.00* ***Ejemplar suelto**

La Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se publica mensualmente para dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 75 y 78 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 26, fracción XXV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Su objetivo es el difundir los criterios establecidos en las tesis de jurisprudencia, precedentes o criterios aislados que surgen al resolver los juicios planteados ante el propio Tribunal. Además de las tesis y la parte relativa de la sentencia que la motivó, se publica una selección de jurisprudencia y tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia fiscal y administrativa.

La suscripción anual comprende 12 ejemplares que van de enero a diciembre del mismo año. También la puede adquirir por semestre que comprende de enero a junio o de julio a diciembre o por ejemplar suelto.

SUSCRIPCIÓN ANUAL

ENERO A DICIEMBRE 2008	**$ 3,500.00**
ENERO A DICIEMBRE 2007	$ 3,100.00
ENERO A DICIEMBRE 2006	$ 3,100.00
ENERO A DICIEMBRE 2005	$ 2,915.00
ENERO A DICIEMBRE 2001	$ 2,000.00
ENERO A DICIEMBRE 2000	$ 1,650.00

SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL

ENERO A JUNIO 2008	**$ 1,800.00**
JULIO A DICIEMBRE 2008	**$ 1,800.00**
ENERO A JUNIO 2007	$ 1,670.00
ENERO A JUNIO 2006	$ 1,670.00
ENERO A JUNIO 2005	$ 1,574.00
ENERO A JUNIO 2001	$ 1,100.00
ENERO A JUNIO 2000	$ 900.00

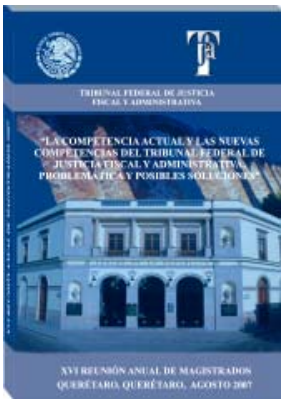
NOVEDADES

"LA COMPETENCIA ACTUAL Y LAS NUEVAS COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PROBLEMÁTICA Y POSIBLES SOLUCIONES"

XVI REUNIÓN ANUAL DE MAGISTRADOS QUERÉTARO, QUERÉTARO, AGOSTO 2007

La Reunión se dividió en dos grandes rubros: en el primero, se trató la competencia del Tribunal, incluyéndose la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; la impugnación de actos administrativos de carácter general diversos a los Reglamentos; medidas cautelares y suspensión de la ejecución del acto impugnado; el recurso de reclamación contra las sentencias interlocutorias que concedan o nieguen la suspensión definitiva; incidencias en el trámite y desahogo de pruebas en el juicio; contenido y estructura de las sentencias del Tribunal; aplicación de la jurisprudencia del Poder Judicial Federal; cumplimiento de las sentencias del Tribunal; notificaciones, inclusive por boletín procesal y medios electrónicos; y el recurso de revisión ante los Tribunales Colegiados de Circuito.

El segundo tema incluyó las reflexiones realizadas en torno a las nuevas competencias del Tribunal, tratándose temas como las implicaciones de la promulgación de su nueva Ley Orgánica; su autonomía presupuestaria; repercusiones de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y las modalidades en la impartición de justicia administrativa.



ISBN 9789689468011

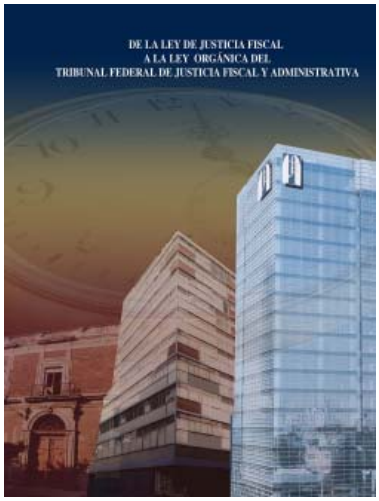
$80.00

PRÓXIMA PUBLICACIÓN

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA



COMPILACIÓN



ISBN 968-7626-48-8

$290.00

DE LA LEY DE JUSTICIA FISCAL A LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Muestra con un sentido histórico la memoria legislativa del Tribunal, las huellas de un largo camino de evolución constante y modernización del Contencioso Administrativo Federal inserto en la realidad nacional.

Temas: Antecedentes Legislativos del modelo Contencioso Administrativo en México, Notas periodísticas relativas al inicio de labores del Tribunal Fiscal de la Federación, Ley de Justicia Fiscal (D.O.F. 31 de agosto de 1936), Código Fiscal de la Federación (D.O.F. 31 de diciembre de 1938), Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación (D.O.F. 19 de enero de 1967), Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación (D.O.F. 2 de febrero de 1978), Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación (D.O.F. 15 de diciembre de 1995), así como las Reformas que se hicieron a estos Ordenamientos.

COMPILACIÓN DE TESIS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y EL PODER JUDICIAL FEDERAL EN MATERIA DE LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, TRATADOS INTERNACIONALES, PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR

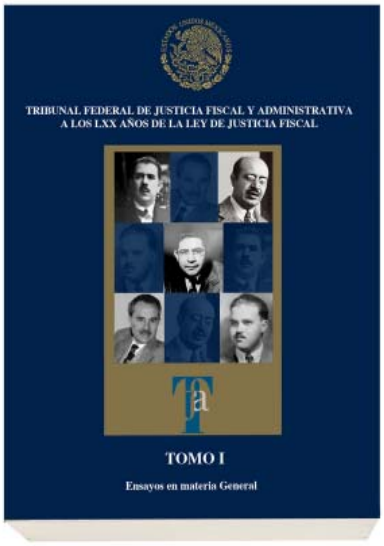
Incluye las tesis publicadas en las Revistas de este Tribunal de enero de 1994 a octubre de 2004 y las publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de enero de 1994 a agosto de 2004.

$350.00



ISBN 968-7626-49-6

OBRAS CONMEMORATIVAS DE LOS ANIVERSARIOS DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE JUSTICIA FISCAL



ISBN 968-7626-57-7

$ 1,350.00

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA A LOS LXX AÑOS DE LA LEY DE JUSTICIA FISCAL EN CINCO TOMOS

En el marco de la conmemoración del LXX aniversario de la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal, fue presentada esta magna obra que constituye el testimonio de lo que actualmente es la justicia fiscal y administrativa, vista por sus propios actores. A partir de la valiosa colaboración de destacados juristas nacionales y extranjeros se desarrollan, en cinco tomos, temas de trascendencia para el contencioso administrativo, tales como: Ensayos en materia General (Tomo I); Cuestiones constitucionales, control de legalidad de los actos de la Administración Pública y nuevas perspectivas para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Tomo II); Recursos administrativos, juicio contencioso administrativo y responsabilidad patrimonial del Estado y de los servidores públicos (Tomo III); Tratados internacionales en materia económica y tributaria; ensayos en materia fiscal, aduanera y comercio exterior (Tomo IV); y Seguridad social, propiedad intelectual, protección al consumidor, aguas nacionales y bioseguridad de organismos genéticamente modificados (Tomo V).



ISBN 968-7626-60-7

$ 150.00

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN) MAGISTRADOS PRESIDENTES DEL TRIBUNAL 1937-2006 TESTIMONIOS Y SEMBLANZAS

En el LXX aniversario de la creación del hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se hace un homenaje a los hombres y mujeres que han tenido a su cargo dirigir los destinos de este Tribunal, a través de esta obra que incluye el testimonio de los licenciados Antonio Carrillo Flores y Guillermo López Velarde, Magistrados Fundadores, quienes en dos artículos relataron las circunstancias en que fue creado este Órgano Jurisdiccional, y sus primeros años de vida; los discursos pronunciados por los Presidentes de la República y por los Presidentes del Tribunal con motivo de diversos aniversarios de la Promulgación de la Ley de Justicia Fiscal; la trayectoria de los Presidentes de este Órgano de impartición de justicia; y un apartado fotográfico.

OBRAS CONMEMORATIVAS DE LOS ANIVERSARIOS DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE JUSTICIA FISCAL



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA A LOS LXV AÑOS DE LA LEY DE JUSTICIA FISCAL 2001 EN SEIS TOMOS

Al cumplir 65 años el Tribunal, se edita una obra que reune a grandes tratadistas nacionales y extranjeros, los ensayos relativos se incluyen en los tres primeros tomos de la obra. También en los tomos IV y V se presenta una compilación de las tesis emitidas por el Tribunal, durante los últimos cinco años, que comprenden en su totalidad la cuarta época de la revista, dichas tesis se clasifican según la instancia emisora, el tipo de tesis y dentro de esta clasificación, en orden alfabético. El tomo VI contiene un índice temático en el que aparecen los rubros de las tesis identificando los preceptos jurídicos que fueron señalados en cada una de ellas, así como la materia correspondiente a dicho precepto y los preceptos de otros ordenamientos jurídicos que se correlacionaron en dicha tesis.

ISBN 968-7626-29-1

$1,200.00



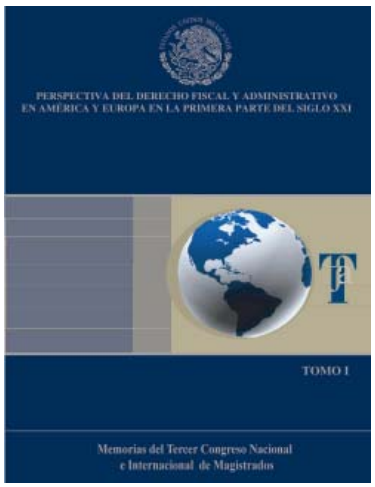
CONGRESO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 1997 LXI ANIVERSARIO DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN DOS TOMOS

En 1997 se conmemora el 61 aniversario de la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal, celebrándose el Congreso de Justicia Administrativa 1997, con la participación nuevamente de algunos de los Presidentes de los Tribunales Fiscales de países de América Latina y España, de los Magistrados del propio Tribunal y de eminentes juristas nacionales y extranjeros. Se tratan temas de gran importancia y trascendencia para nuestro país, tales como: “Cuotas Compensatorias; Alcances de la Declaración de Inconstitucionalidad por el Poder Judicial Federal; y La Suspensión en Materia de Responsabilidades de Servidores Públicos”.

ISBN 968-7626-11-9

$425.00

OBRAS DE LAS REUNIONES



ISBN. 968-7626-61-5

$450.00

MEMORIAS DEL TERCER CONGRESO DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (PERSPECTIVA DEL DERECHO FISCAL Y ADMINISTRATIVO EN AMÉRICA Y EUROPA EN LA PRIMERA PARTE DEL SIGLO XXI EN DOS TOMOS

Universalidad, apertura a las más variadas expresiones jurídicas, reencuentro con el pasado y visión de futuro, fueron las constantes durante el Tercer Congreso Nacional e Internacional de Magistrados, llevado a cabo con motivo del LXX Aniversario de la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal que diera origen al Tribunal Fiscal de la Federación, hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; congreso celebrado en la ciudad de México del 24 al 28 de agosto de 2006. Los temas abordados recorrieron todas las materias del ámbito de competencia del Tribunal, manifestados en la visión de los juristas participantes respecto de las “Perspectivas del Derecho Fiscal y Administrativo en América y Europa en la primera parte del Siglo XXI”.

ANTE LOS RETOS DEL FUTURO, VALORES Y CAPACIDADES DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL XIV REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2005)

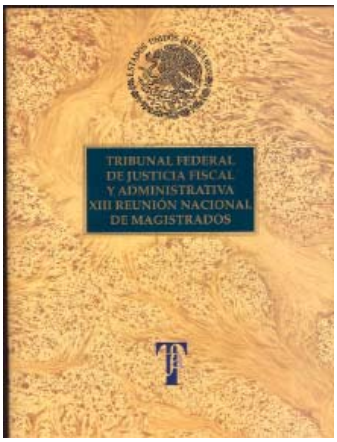
Temas tratados: Ética y Valores, Nuevas formas de controversia del Contencioso Administrativo Federal, responsabilidad patrimonial del Estado, Evolución de la competencia material del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, su proyección hacia el futuro y la búsqueda de nuevas fórmulas de controversia, al encuentro de un sistema renovado del Contencioso Administrativo Federal, La responsabilidad del Estado, Reflexiones en torno al Acceso de la Justicia Administrativa en materia de Responsabilidad Patrimonial del Estado, Interpretación constitucional en materia patrimonial del Estado.



$290.00

ISBN 968-7626-54-2

OBRAS DE LAS REUNIONES



ISBN 968-7626-53-4

$370.00

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA XIII REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2004)

Temas tratados: El Contencioso Administrativo a la luz de un sistema integral y coherente de impartición de justicia en el Estado Mexicano, Aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA XII REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2003)

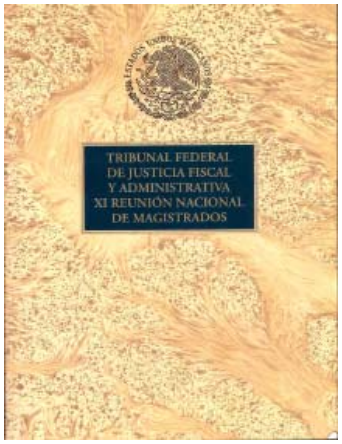
Temas tratados: La Supresión del Contencioso Administrativo en México, Estado actual del Contencioso Administrativo en Europa, en América Latina y el Contencioso Administrativo Federal en México evolución y situación actual, iniciativa de la Ley Federal de Justicia Administrativa en la Función Pública, Nuevo Esquema en Materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

ISBN 968-7626-47-X

$130.00



OBRAS DE LAS REUNIONES



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA XI REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2002)

Temas tratados: Demanda, Suspensión, Pruebas, Alcances de la Sentencia y su Impugnación, Efectividad, Obligatoriedad de la Jurisprudencia, ISR, Aspectos de la Reforma Fiscal, Ley del IMSS, Iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones.

ISBN 968-7626-42-9

$260.00



CONTROL DE LEGALIDAD EN EL MODERNO ESTADO DE DERECHO EN AMÉRICA Y EUROPA X REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2001)

Esta obra contiene los trabajos presentados con motivo del Segundo Congreso Internacional de Justicia Fiscal y Administrativa, celebrado con motivo del 65 aniversario de la expedición de la Ley de Justicia Fiscal, en el que participaron el Vicepresidente del Consejo de Estado de Francia **Sr. Renaud Denoix de Saint Marc**, el Presidente de la Corte de Impuestos de Canadá **Alban Garon**, el Presidente del Consejo de Tribunales Administrativos de Canadá **Lic. Murray Walter Chitra**, y en representación de la Asociación Iberoamericana de Tribunales Fiscales y Administrativos, participaron el **Dr. Manuel Urueta Ayola**, Presidente del Consejo de Estado de Colombia y el **Dr. Luis Rodríguez Picado,** Presidente del Tribunal Fiscal Administrativo de Costa Rica; representantes del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo **Ministro Juan Díaz Romero**, **Senador Fauzi Handam** y el Procurador Fiscal de la Federación **Lic. Gabriel Reyes Orona**; por los Tribunales Administrativos Estatales **Magistrada Teresita Rendón Huerta** presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo de Guanajuato; así como de la Academia Mexicana del Derecho Fiscal y Magistrados de la Sala Superior y Salas Regionales del propio Tribunal.

ISBN 968-7626-37-2

$210.00

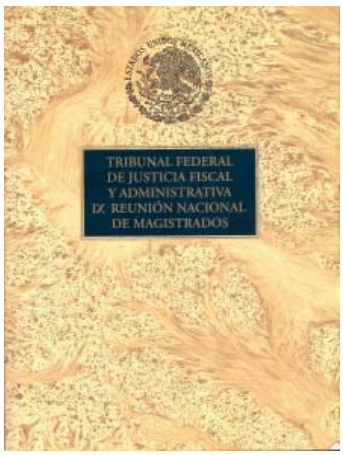
OBRAS DE LAS REUNIONES

TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN IX REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (2000)

Temas tratados: Validez Actual del Contencioso Administrativo en México, Competencia del Tribunal Fiscal de la Federación, Eficacia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Local, Principios Fundamentales del Procedimiento Contencioso Administrativo, Cumplimiento y Ejecución de Sentencias, Análisis de Derecho Comparado, Contencioso Objetivo y Subjetivo de Anulación, El Procedimiento Contencioso Administrativo.

ISBN 968-7626-27-5

$210.00





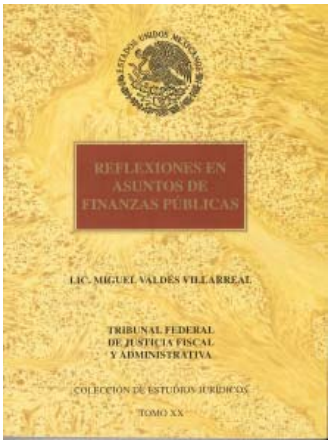
ISBN 968-7626-18-6

$130.00

TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIII REUNIÓN NACIONAL DE MAGISTRADOS (1999)

En 1999 se realiza la VIII Reunión Nacional, con la presentación de trabajos presentados por Magistrados, los cuales se enmarcan en importantes temas de Derecho Procesal Fiscal: Competencia prorrogada o prórroga de competencia y validación de actos de autoridades incompetentes; Problemática de Competencia territorial entre dos Salas con Sede en diferentes Estados; Notificaciones por correo certificado; Improcedencia; Resoluciones que dejan sin efectos los créditos recurridos; Impugnación de actos de ejecución; Idoneidad de la prueba; Problemas en la admisión, desahogo y valoración de la prueba pericial; La prueba de inspección judicial; La prueba confidencial en materia de comercio exterior internacional y precios de transferencia; Los efectos de las sentencias del Tribunal; Las sentencias que se dictan en 24 horas; Formación de jurisprudencia; Regulación de la queja, violación del plazo de cumplimiento de la sentencia; y diversos trabajos sobre el Procedimiento Administrativo y Derecho Sustantivo.

COLECCIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS



ISBN 968-7626-56-9

$280.00

REFLEXIONES EN ASUNTOS DE FINANZAS PÚBLICAS.- TOMO XX.- 2005, LIC. MIGUEL VALDÉS VILLARREAL

Como un homenaje a la trayectoria del Maestro Miguel Valdés Villarreal, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa realiza la compilación de sus trabajos, estructurada en dos capítulos: en el primero se incluyen aquellas reflexiones presentadas por el Maestro en diversos foros, principalmente la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que versan sobre política fiscal, Necesidad de Tribunales Contencioso Administrativos locales, Asentamientos humanos, Amparo contra Leyes, Administración de Justicia, Misión del abogado hacendario, entre otros.

El capítulo segundo comprende los mensajes dados en diversos Congresos anuales del Colegio Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal, así como los trabajos presentados en los mismos, relativos a Coordinación Fiscal, Modernización del Sistema Tributario Mexicano, Reforma Fiscal integral, Estado de Derecho y una visión integral de un Sistema Jurídico de Contribuciones.



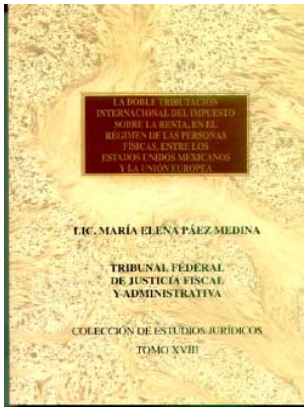
ISBN 968-7626-45-3

$165.00

EFECTOS DEL SILENCIO ANTE UN PAGO DE LO INDEBIDO EN MATERIA TRIBUTARIA FEDERAL, CONFORME AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUCIONALIDAD VS. LEGALIDAD.- TOMO XIX.- 2003, LIC. ANA RUTH HERRERA GÓMEZ

Temas: El pago de lo indebido en Materia Tributaria, Devolución, Plazos para solicitar la Devolución de un pago indebido.

COLECCIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS



ISBN 968-7626-44-5

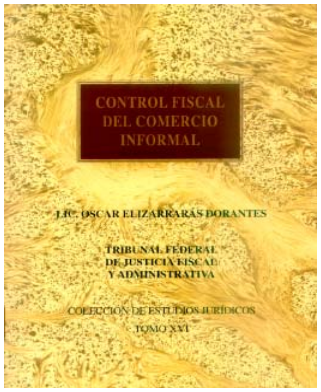
$250.00

LA DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN EL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS, ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA UNIÓN EUROPEA.-TOMO XVIII.- 2003, LIC. MARÍA ELENA PÁEZ MEDINA

Temas: Conceptos, La Unión Europea “Sinopsis acerca de la relación jurídico económica existente entre los estados Unidos Mexicanos y la Unión Europea en el marco de la globalización internacional", “Tratamiento en el Derecho Mexicano a la doble contribución Internacional del Impuesto sobre la Renta”, “Tratados Internacionales celebrados entre los Estados Unidos Mexicanos y los países integrantes de la comunidad Europea, en material de doble tributación”, “Solución de Controversias”

CONTROL FISCAL DEL COMERCIO INFORMAL.- VOL. XVI LIC. OSCAR ELIZARRARÁS DORANTES

Temas: Generalidades del Comercio Informal, Breves Antecedentes de la regulación fiscal del Comercio Informal, Régimen Fiscal del Comercio Informal, Asistencia fiscal especializada para el Comercio Informal.



ISBN 968-7626-39-9

$170.00



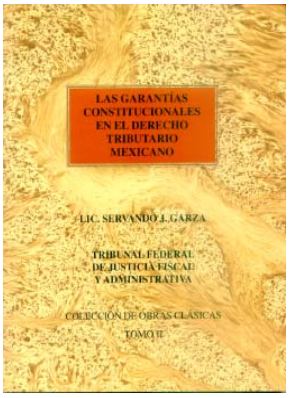
ISBN 968-7626-25-9

$100.00

SISTEMA FISCAL FEDERAL MEXICANO.- SU REVISIÓN ANTE LAS TEORÍAS Y LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS. VOL. XV LIC. LUIS GERARDO DEL VALLE TORRES

SU REVISIÓN ANTE LAS TEORÍAS Y LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS. Esta obra forma parte de la Colección de Estudios Jurídicos, que se encuentra formada en sus últimos tomos por las tesis que resultan premiadas en el Certamen “Revista del Tribunal Fiscal de la Federación”, o Certamen “Premio de Estudios sobre Justicia Administrativa”. Además de ser premiada, el Jurado Calificador determinó que este trabajo reunía la calidad para ser publicado en dicha colección.

COLECCIÓN DE OBRAS CLÁSICAS



ISBN 968-7626-38-0

$100.00

LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL DERECHO TRIBUTARIO MEXICANO. TOMO II. LIC. SERVANDO J. GARZA

Obra escrita por el maestro de la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia,contribuyó notablemente a la construcción de esa Doctrina de la que hoy nos sentimos orgullosos.

Algunos Temas: Derecho y equidad, El Principio de Igualdad del Artículo 13, Proporcionalidad y Equidad, La autentica violación del Principio de Justicia, El Impuesto sobre dividendos, El principio de Irretroactividad, Sanción y Acción, La Sentencia como Norma concreta y El Principio de su Unicidad.

COEDICIONES



ISBN 968-6080-24-4

$160.00

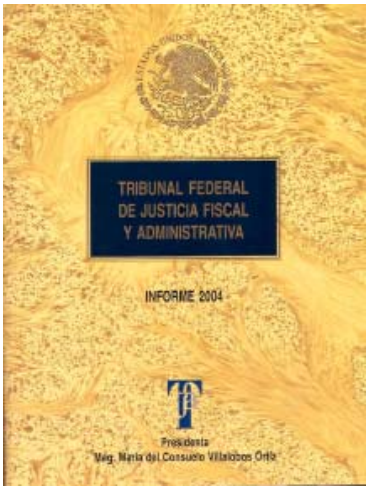
EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MÉXICO-FRANCIA MEMORIA DEL SEMINARIO INTERNACIONAL 1999

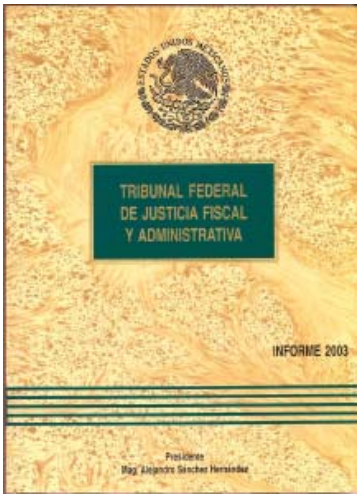
Memorias del Seminario Internacional sobre lo Contencioso Administrativo. Trabajos presentados por Funcionarios del Consejo de Estado Francés y por Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en los que trataron los temas de: La Reforma del Estado y La Jurisdicción en México y Francia; La Organización y Las Competencias de la Jurisdicción Administrativa en México; La eficiencia de las Jurisdicciones Administrativas y La ejecución de las sentencias en Francia y México; La Jurisdicción administrativa. El Derecho Internacional y La Globalización; y La Modernización Tecnológica e Informática en las Jurisdicciones Administrativas en Francia y México.

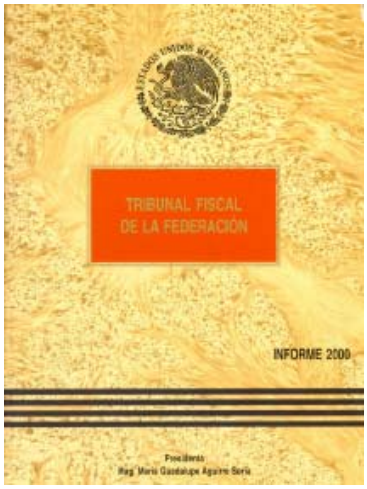
INFORMES ANUALES











INFORME DE LABORES 2006	$300.00	ISBN 968-7626-63-1
INFORME DE LABORES 2005	$292.00	ISBN 968-7626-55-0
INFORME DE LABORES 2004	$275.00	ISBN 968-7626-46-1
INFORME DE LABORES 2003	$250.00	ISBN 968-7626-43-7
INFORME DE LABORES 2002	$200.00	ISBN 968-7626-41-0
INFORME DE LABORES 2001	$190.00	ISBN 968-7626-28-3
INFORME DE LABORES 2000	$155.00	ISBN 968-7626-7

CORREO ELECTRÓNICO: **publicaciones@mail.tfjfa.gob.mx**

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN DE ESTAS PUBLICACIONES COMUNICARSE AL TELÉFONO 53-40-70-00 y 53-40-71-00 EXT. 3219 ó 3227

PRIMERA , SEGUNDA Y TERCERA SALA REGIONAL DE OCCIDENTE



- **PUNTO DE VENTA**

AV. AMÉRICAS No. 877-2° Y 3er PISO
ENTRE COLOMOS Y FLORENCIA
COL. PROVIDENCIA, SECTOR HIDALGO
C.P. 44620 GUADALAJARA, JALISCO
TEL. 01 (333) 8 17 15 25